

Mentiras verdaderas

Ideología, nacionalismo y represión en Argentina (1916-2015)

Tomo I: Investigaciones de la cátedra

Eduardo Sartelli y Marina Kabat (coordinadores)

Autores: Eduardo Sartelli, Marina Kabat, Damián Bil, Rosana López Rodríguez, Rocío Fernández, Blas Costes, Ianina Harari, Julia Egan, Guido Lisandrello, Gonzalo Sanz Cerbino, Jonathan Bastida Bellot, Romina De Luca, Roberto Muñoz, Fabián Harari, Nadia Bustos, Nicolás Grimaldi, Juan Flores, Melina Cazabat y Lucila D'Auria

Mentiras verdaderas

Ideología, nacionalismo y represión en Argentina (1916-2015)

Tomo I: Investigaciones de la cátedra

Mentiras verdaderas

Ideología, nacionalismo y represión
en Argentina (1916-2015)

Tomo I: Investigaciones de la cátedra

Eduardo Sartelli y Marina Kabat (coordinadores)

Autores: Eduardo Sartelli, Marina Kabat, Damián Bil, Rosana López Rodríguez, Rocío Fernández, Blas Costes, Ianina Harari, Julia Egan, Guido Lisandrello, Gonzalo Sanz Cerbino, Jonathan Bastida Bellot, Romina De Luca, Roberto Muñoz, Fabián Harari, Nadia Bustos, Nicolás Grimaldi, Juan Flores, Melina Cazabat y Lucila D'Auria

**Historia Argentina III, cátedra B,
carrera de Historia**



Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Universidad de Buenos Aires

FACULTAD DE FILOSOFÍA Y LETRAS DE LA UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES

Decana
Graciela Morgade

Vicedecano
Américo Cristófolo

Secretario General
Jorge Gugliotta

Secretaria Académica
Sofía Thisted

Secretaria de Hacienda
y Administración
Marcela Lamelza

Secretaria de Extensión
Universitaria y Bienestar
Estudiantil
Ivanna Petz

Secretario de Investigación
Marcelo Campagno

Secretario de Posgrado
Alberto Damiani

Subsecretaria de Bibliotecas
María Rosa Mostaccio

Subsecretario
de Transferencia
y Desarrollo
Alejandro Valitutti

Subsecretaria de Relaciones
Institucionales e
Internacionales
Silvana Campanini

Subsecretario
de Publicaciones
Matias Cordo

Consejo Editor
Virginia Manzano
Flora Hilert
Marcelo Topuzian
María Marta García Negroni
Fernando Rodríguez
Gustavo Daujotas
Hernán Inverso
Raúl Illescas
Matías Verdecchia
Jimena Pautasso
Grisel Azcuy
Silvia Gattafoni
Rosa Gómez
Rosa Graciela Palmas
Sergio Castelo
Aylén Suárez
Directora de imprenta
Rosa Gómez

Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras
Colección Libros de cátedra



Coordinación editorial: Martín Gonzalo Gómez
Maquetación: María de las Mercedes Domínguez Valle

ISBN 978-987-4019-60-8
© Facultad de Filosofía y Letras (UBA) 2017

Subsecretaría de Publicaciones
Puan 480 - Ciudad Autónoma de Buenos Aires - República Argentina
Tel.: 5287-2732 - info.publicaciones@filo.uba.ar
www.filo.uba.ar

Mentiras verdaderas : ideología, nacionalismo y represión en la Argentina
1916-2015. Investigaciones de la cátedra / Rosana López Rodríguez ... [et
al.] ; coordinación general de Eduardo Sartelli ; Marina Kabat. - 1a ed. -
Ciudad Autónoma de Buenos Aires : Editorial de la Facultad de Filosofía y
Letras Universidad de Buenos Aires, 2017.

v.1 ; 316 p. ; 20 x 14 cm. - (Libros de cátedra)

ISBN 978-987-4019-60-8

1. Historia. 2. Historia Argentina. 3. Nacionalismo. I. López Rodríguez, Rosana
II. Sartelli, Eduardo, coord. III. Kabat, Marina, coord.

CDD 982

Índice

Introducción	9
<i>Eduardo Sartelli y Marina Kabat</i>	

Tomo I: Investigaciones de la cátedra

Capítulo 1	
¿Que se vayan todos? Los límites de la democracia burguesa en la crisis revolucionaria: la literatura popular bajo el yrigoyenismo	11
<i>Rosana López Rodríguez</i>	

Capítulo 2	
La resistencia obrera al Golpe de 1955, entre lo imaginado, lo olvidado y lo transfigurado	33
<i>Marina Kabat, Rocío Fernández y Blas Costes</i>	

Capítulo 3	
De la reforma a la reacción. La burocracia sindical durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)	69
<i>Ianina Harari y Julia Egan</i>	

Capítulo 4	
Represión dentro (y fuera) del movimiento peronista (1973-1974)	105
<i>Guido Lissandrello</i>	
Capítulo 5	
<i>Top secret</i> . Los cómplices del Golpe y los aportes de los documentos desclasificados de la embajada norteamericana	129
<i>Gonzalo Sanz Cerbino y Melina Cazabat</i>	
Capítulo 6	
El capital extranjero y el desempeño de la economía argentina en el último cuarto de siglo. Un análisis a partir del caso automotriz	163
<i>Damián Bil y Jonathan Bastida Bellot</i>	
Capítulo 7	
Entre el mito y la realidad. Las transformaciones de las condiciones de trabajo y el impacto en la salud de los docentes entre 1990 y 2015	189
<i>Romina De Luca y Lucila D'Auria</i>	
Capítulo 8	
Entre planes sociales y la represión. La política estatal hacia los llamados "pueblos originarios" en la Argentina actual	219
<i>Roberto Muñoz</i>	
Capítulo 9	
Los números no mienten. La represión estatal y paraestatal contra la clase obrera bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)	239
<i>Fabián Harari, Nadia Bustos, Nicolás Grimaldi y Juan Flores</i>	
Capítulo 10	
El origen del "relato". La ideología bonapartista del kirchnerismo como emergencia de un momento de la vida social argentina	283
<i>Eduardo Sartelli</i>	
Los autores	309

Introducción

Eduardo Sartelli y Marina Kabat

El libro refleja el trabajo colectivo de la cátedra, tanto del cuerpo docente como de los adscriptos y estudiantes de la cátedra. En todos los casos se trata de investigaciones originales, con un fuerte trabajo empírico y que abordan temas centrales para la materia Historia Argentina III, cátedra B.

La obra se articula en torno al contraste entre lo que se dice y lo que se es: entre las promesas con las que la burguesía seduce a la clase obrera y la realidad que le ofrece. Por ello, se concentra en los momentos en los que esta contradicción resulta más marcada, a saber: los períodos de gobiernos democráticos, en especial el yrigoyenismo, el peronismo y el kirchnerismo.

La democracia es la forma de gobierno propia del capitalismo cuando la burguesía ha logrado articular un consenso tal como para ser hegemónica. Pero, este consenso no es espontáneo ni se genera sin elevadas cuotas de represión. Para dar cuenta de este proceso, distintos capítulos analizan los mecanismos de creación de consenso, especialmente en el terreno político-cultural,¹

¹ Cfr. textos de Rosana López Rodríguez, Romina De Luca y Lucila D'auria, y Eduardo Sartelli (tomo 1); y de Ignacio Rosner, y Giselle Vinokur (tomo 2).

mientras que otros examinan aspectos represivos.² A su vez, tanto el texto de Roberto Muñoz como el de Ianina Harari y Julia Egan evalúan cómo se articula la coerción y el consenso, en el primer caso en la política estatal hacia los denominados pueblos originarios, y en el accionar de la burocracia sindical, en el segundo.

El segundo tomo de este libro incluye también un apéndice de fuentes. Se trata de documentos casi desconocidos y de difícil acceso. Por una parte, una selección de documentos desclasificados de la Embajada norteamericana producidos durante la última dictadura militar —traducidos especialmente por la cátedra para esta edición— y una transcripción del expediente tramitado en el Ministerio del Interior a raíz de la detención, tortura y desaparición de Juan Ingallinella bajo el segundo gobierno peronista.

Los autores de esta obra creemos firmemente en una universidad que produzca conocimiento útil para la clase obrera. La cátedra Historia Argentina III B a la que pertenecemos defiende una universidad que forme investigadores desde del grado. La degradación de las carreras de grado, que son vaciadas de contenido mientras se pasa la formación “en serio” a posgrado, implica un gigantesco desperdicio de energía social. ¿De qué sirve que miles de estudiantes pasen seis o más años por las aulas universitarias sin aprender a crear conocimiento porque se les exige que se limiten a reproducir poco críticamente la bibliografía consagrada? Los docentes de la cátedra Historia Argentina III B creemos que otra formación es posible y tratamos de llevarla adelante en el acotado espacio de nuestra materia. Esperamos que este libro —en especial, los trabajos de los estudiantes que publicamos— contribuya a entusiasmar a más personas a recorrer este camino.

2 *Cfr.* textos de Marina Kabat, Rocío Fernández y Blas Costes, Gonzalo Sanz Cerbino y Melina Cazabat, Guido Lisandrello del tomo 1, y de Ezequiel Cismondi, y Ana Costilla, del tomo 2.

Capítulo 1

¿Que se vayan todos?

Los límites de la democracia burguesa en la crisis revolucionaria: la literatura popular bajo el yrigoyenismo

Rosana López Rodríguez

Se eclipsó el malhadado poder que descansa en el privilegio y que está asociado con las mujeres, el champaña y el bridge y reanudó su reinado la democracia, que está asociada con el bridge, las mujeres y el champaña.¹

Introducción

El estudio de la literatura popular de circulación periódica en Argentina cuenta con un texto canónico, *El imperio de los sentimientos*, de Beatriz Sarlo (1985). En su visión, la *novela semanal*² es la forma popular de acercarse a la literatura y satisfacer una necesidad de ficción por parte de una población lectora en el momento en que se crea el mercado literario. En ese marco, la *novela semanal* construye un campo

1 Epigrama de Hilaire Belloc que alude al triunfo electoral liberal en el año 1906, citado en Hobsbawm (1989: 89).

2 Usamos la denominación *novela semanal* para designar la narrativa de circulación periódica. Durante el período que estamos analizando, se editaban varias colecciones de este tipo: publicaciones hebdomadarias de venta en quioscos fijos o ambulantes, un cuadernillo con veinte o veintidós páginas sin numeración en su mayoría. La colección que comenzó esta serie fue *La Novela Semanal*, corpus con el cual estamos realizando este trabajo. Aparecerá abreviado a lo largo del texto como *LNS*.

en el cual domina una temática precisa, el sentimiento, lo que transformaría a este corpus en una expresión de la novela sentimental. Son textos ordenados y previsibles estética e ideológicamente. Por eso no presentan problemas al receptor, sino que por el contrario, le generan la fantasía del “descanso” psicológico a partir de la “economía mágica”: el ascenso social es posible por la vía *arbitraria, no causal* de lo sentimental. El conflicto social no aparece sino bajo la forma de individuos particulares que reciben su premio o su castigo siempre según la forma inmodificable de esas leyes externas. El mundo, entonces, no es el escenario de prácticas sociales que deban ser cambiadas: son textos conformistas.

Sin embargo, los hechos históricos parecen mostrar lo contrario de lo que Sarlo pretende: es difícil pensar que sólo hubiera resignación en la clase obrera entre 1917 y 1922, una coyuntura caracterizada, a nivel mundial, por el fenómeno de la revolución. Por lo tanto, no hay razón por la cual deducir (si no es solamente por lo que el texto dice) que la lectura debe ser consolatoria o complaciente. En el contexto de la Semana Trágica y bajo los efectos sociopolíticos de la Revolución Rusa, diferentes programas se disputaban la conciencia del proletariado y esas acciones políticas y la diversidad ideológica se revelaban en los textos que leían y, probablemente, en la forma en que los leían.

Aun cuando la lucha apareciera clausurada trágicamente en algunos de los textos del corpus (porque los autores pretendían representar con ello los límites que imponía la estabilización de la sociedad burguesa), es posible conjeturar que las lecturas dependieran más de la situación social, de la experiencia real de la clase obrera que de los deseos de los escritores y de sus intérpretes actuales. Cuando se muestra el malestar y las limitaciones, no necesariamente el producto de la recepción es conservador o reaccionario; por el contrario, si tenemos en cuenta las acciones políticas de la clase obrera argentina en ese

período, es muy posible que fueran leídos como un aprendizaje del dolor, como situaciones sociales que no podían permitirse y que debieran ser cambiadas.

Designar a esta literatura como *popular* no indica precisamente la cantidad de lectores de la misma, sino la pertenencia a determinada clase de dichos lectores. Esta literatura para “cocheros y verduleras” (según un comentario crítico tomado por Sarlo del diario *La Razón*), maestras o empleados, deberá representar de una manera muy particular su relación con los procesos que estaban experimentando, pues les mostrará a la vez cómo *leerlos* y cómo conducirse ante ellos. Al hablarles de sus realidades, esta literatura no solo se las muestra mediatizadas sino que también provee explicaciones, razones, causas y propone modos posibles de relacionarse con esos episodios. En tanto ningún texto de ficción es *inocente* como práctica social, el discurso de la *novela semanal* constituye una manifestación estética concomitante con los procesos históricos, políticos y sociales de la época en que fueron escritos, un espacio donde se construyen lecturas acerca de la sociedad y la coyuntura inmediata, inclusive cuando lo sentimental aparece en forma explícita como hegemónico. Puede afirmarse entonces que los conflictos sociales obtienen un escenario popular de privilegio (dado el volumen de las ediciones, de unos 200 hasta 400 mil lectores, según declara *La Novela Semanal*) en estos textos.

Esta lectura canónica de Sarlo ha sido matizada por otros autores que ven la *novela semanal* como una representación en cuyo fondo puede observarse, de tanto en tanto, la “cuestión social”, denominación eufemística de la época (y que se repite ingenuamente) para eludir la expresión “lucha de clases”.³

3 Cfr. Mangone (1989: 78). El autor reconoce, efectivamente, en la *novela semanal* “la presencia larvada del otro tema del período: la *cuestión social*, a veces central y en otras oportunidades un sesgo o telón de fondo de la trama”.

La óptica social para el análisis de la narrativa de circulación periódica aparece también en el trabajo desarrollado por el grupo dirigido por Margarita Pierini en la Universidad Nacional de Quilmes (UNQ). Los primeros textos del grupo aparecerán como introducciones a la coedición de algunas de las novelas por la UNQ y el periódico *Página/12*. En el núm. 1 de la colección, Margarita Pierini describe los ambientes en los que se desarrollan la mayor parte de los textos (predominio de lo urbano; el ambiente rural con connotaciones negativas, de barbarie; la oposición entre el conventillo y el taller y el “gran mundo”), aunque no arriesga ninguna explicación social para esas presencias y oposiciones (Pierini, s/f). Señala, además, que los autores escriben con “absoluta libertad” ideológica, pues en esas publicaciones “conviven los planteos más reaccionarios sobre la “cuestión social” (“La huelga”, de Hugo Wast) con historias que reivindican al obrero anarquista (“La costurera que dio aquel mal paso...”, de Josué Quesada) o manifiestan simpatía por la reciente revolución soviética (“Amor y bolshevikismo”, de Canseway Britos)”. También aparecen propuestas que “presentan el ideal tolstoiano como solución a los conflictos sociales o que plantean la dicha (...) posible para las mujeres trabajadoras, [mientras otras] castigan con la marginación, la enfermedad o la muerte a quienes se atreven a franquear las barreras sociales”; así como se publican textos que muestran a la “clase alta dotada de todos los vicios (“Un casamiento en el gran mundo”, de Elsa Norton)” o que son una apuesta a la unión libre “como forma superadora de las convenciones burguesas...” (“Cuando el amor triunfa”, de Josué Quesada). Con todo lo interesante que pueda parecer esta perspectiva, es puramente descriptiva y no tiene intenciones de explicación.

El autor de la introducción al número 2 de la colección, Armando Minguzzi, escribe acerca de la “cuestión social”.

Expone la situación coyuntural de la época y las diferentes ideologías que lo atravesaban: la presencia de huelgas como método de protesta, el anarquismo, el impacto causado por la Revolución Rusa, la respuesta nacionalista como reacción, la formación del PS y su escisión como producto de la controversia entre bolcheviques y mencheviques, la Semana Trágica (Minguzzi, s/f). En definitiva, afirma, las novelas semanales seleccionadas para este volumen “pueden ser leídas como una escenificación del debate político de una época”. Con toda la importancia que tiene esta afirmación a los efectos de leer políticamente la producción de circulación periódica, el autor no logra despegar, en forma definitiva, su interpretación de la de Beatriz Sarlo, pues sigue considerando el tema sentimental desconectado de la discusión política y además, porque considera que los textos de la reedición son excepciones: “en la mayoría de los relatos de *LNS* no aparece centralmente el tema político; estas historias sirven como contraejemplo. La ficción suele servirnos para leerla en sus silencios. (...) en estos textos aparece una discusión velada” (Minguzzi, s/f: 9).

Pero esta propuesta de lectura, que Mangone adelantaba hace tiempo ya y que la colección UNQ-*Página/12* ha llevado a cabo, resulta a la vez más interesante y más limitada. Más interesante porque ve lo que Sarlo quiere dejar a un lado. Pero limitada en tanto no capta el fondo del problema: las *novelas semanales* no son dramas sentimentales en cuyo trasfondo se adivina la “cuestión social”. Las *novelas semanales* son, directamente, *novelas sociales*. Su tema no son los sentimientos (con aderezos sociales aquí y allá). Su tema *es* la sociedad.

Cuatro novelas *sentimentales*

La primera novela que nos ocupa es de un autor que ha publicado varias en el corpus de *La Novela Semanal*: se trata

de “La voluptuosidad del poder”, de Pedro Sonderéguer. Se cuenta allí cómo las vidas privadas afectan las vidas públicas de los políticos y sus decisiones. El banquero Anthony Silverfield solicitó la concesión de gran parte de la red ferroviaria en nuestro país. Esta propuesta fue presentada en la Cámara de Diputados y allí debía votarse a favor o en contra. Sancho de Luis, jefe de la mayoría parlamentaria y líder del partido reformista, hombre incorruptible, se oponía a la aprobación del proyecto. En tanto, el líder del partido opositor, el Partido Popular, Juvenal Reyser, dispuesto a arruinar la carrera de Sancho para ocupar él mismo un lugar de relevancia en el ámbito político, se entrevistó en privado con Silverfield y ambos elaboraron un plan: lograr que Hugo Silverfield (el hijo del banquero) sedujera a Diana de Luis, la esposa de Sancho, para influir a través de ella en las decisiones que tomara su marido y, además, para ensuciar el nombre del diputado. Una vez consumada la seducción, Sancho de Luis apoyó en la Cámara la concesión a Silverfield debido a las “inteligentes insinuaciones de su mujer y a la resuelta actitud contraria al plan asumida por Juvenal Reyser”. Poco después, de Luis se dio cuenta de que las insinuaciones de su mujer habían sido hechas para favorecer a su amante. Sin embargo, el político ya había hecho pública su posición y no podía modificarla. Juvenal Reyser realizó en la Cámara, a modo de oposición, una apología nacionalista y antiimperialista. Cínico, insinuó que los que acordaban con el proyecto estaban influidos “por motivos ajenos al bien público y contrarios al deber que le imponía su carácter representativo”. Ante semejante ataque, de Luis mocionó que sea retirado su apoyo al proyecto, puesto que “no quería que se afirmara que en su vida política se había dejado llevar por otros intereses que los de su patria”. La voz del narrador señala que la concesión fue negada y que de ese modo “terminó un propósito de incalculables alcances

y que habría sin duda contribuido enormemente al desarrollo material argentino”. Finalmente, de Luis descubrió la infidelidad de su mujer, haciéndole saber que “por su culpa había sufrido la más triste derrota de su vida”. En tanto, Juvenal Reyser fue nombrado ministro y de Luis se retiró de la vida política.

“Carne triunfal”, de Amado Villar, cuenta la historia de Sara Pardo, una muchacha que al comienzo de la historia estaba por casarse con Alfredo. La madre de la chica, Doña Matilde, viuda de Pardo, pertenecía a la buena sociedad, pero estaba pasando algunas dificultades económicas. Sin embargo, madre e hija vivían una vida de derroche gracias a la “desinteresada ayuda de Don Carlos Salterán; ser muy influyente en política, (...) habitué de la casa y pretendido amigo íntimo del difunto coronel Pardo”. Sarita, “por inexplicable capricho de la naturaleza”, era igual a Salterán.

Una vez casados, Alfredo y Sara vivieron en un palacete en la calle Charcas. Tuvieron un hijo, pero la felicidad no llegaba: los problemas económicos seguían y el “creciente afán de lujo torturaba a Sara”. A pesar de la generosidad de Salterán, Alfredo comienza a considerar la posibilidad de dedicarse a la política para triunfar. Don Carlos le brindó todo su apoyo y el atribulado marido ganó las elecciones. Su esposa “triunfó entre la elite del gran mundo, por su belleza fastuosa y por el rumor de su mórbida afición a los paraísos artificiales”. Mientras tanto, se publicó un suelto satírico en un periódico: el periodista “aseguraba que los éxitos de muchos políticos sólo son consecuencias de los ‘éxitos’ de sus mujeres”. “¿Sería él un ‘Monseiur Bovary’ ridículo y vulgar?” se preguntaba Alfredo Leiva. Sus colegas le decían que la infidelidad siempre se dejaba pasar si la ocultaba el dinero y le sugirieron que ese podía ser su caso. Tanta sospecha tuvo su confirmación: Alfredo descubrió a su mujer con su padre, Ramón Leiva. Intentó suicidarse, pero no lo logró,

sino que tuvo un ataque. Quedó postrado e imposibilitado de comunicarse. Sara fue a reponerse de la crisis a la estancia que su suegro tenía en Entre Ríos. Un año después regresó con “una niñita, hija ilegítima de una infeliz sirvienta muerta en el trance”. Irónico, el narrador señala: “¡Ahí es nada la innovación! ¡Criar chicos ajenos en vez de perros o gatos según la costumbre general! La novedad como cosa impuesta por la reina de la moda, obtuvo un éxito clamoroso. Todas las viudas y jóvenes iban a buscar chiquilines al campo. La capital se inundaba de provincianitos...”. Cuando Ramón Leiva murió y dejó parte de su herencia a la niñita de Sara, quedó expuesta la situación. Sara se dedicó a cimentar fama de culta y hacía reuniones de artistas y literatos en su palacete. Aburrida de la vida mundana, la mujer se fue de viaje a Europa con su hija y su madre. También viajaba con ella su amante, ya que Alfredo seguía vivo y la ley argentina no permitía el divorcio. La madre de Alfredo se quedó en Buenos Aires cuidando a su hijo y a su nieto.

“Un gobernador” es otra novela del corpus en la cual se pone en cuestión la política y los políticos. David era un muchacho estudioso e inteligente que estaba enamorado de Cruz. La muchacha tenía dos hermanos, Eusebio y Arturo, ambos muy poco dispuestos al estudio. David reemplazó a Arturo en la secretaría del banco propiedad de los Larquiá. La familia de Cruz creía que David sería diputado y gobernador; de hecho, don Pascual, el padre de la chica, necesitaba un hombre de confianza en su empresa y propuso que fuera David, quien se había recibido de abogado y ya se había casado con Cruz. Ante cada propuesta, David siempre oponía objeciones, pero debido a la insistencia de los que lo rodeaban, acababa “siempre por sacrificarse, como los hombres políticos”. Era abogado del banco y manejaba todo los intereses y negocios de la familia de su mujer. “Así vivía cuando le impusieron el sacrificio patriótico de aceptar una

diputación nacional”. Y se convirtió en diputado. Después le ofrecieron el cargo de gobernador y senador y, dado que él rechazó la oferta, designaron senador a su padre. Dos enigmáticos personajes comenzaron a perseguir a David: pretendían chantajearlo diciéndole que iban a hacer público su pasado pobre, “cuando habitaba la pieza aquella del conventillo, frente a la estación del tranvía a Barracas, sin libros en que estudiar, sin mesa a que comer, sin ropa que vestir... todo eso que la vulgaridad considerará como eternamente bochornoso y degradante”. David debió renunciar a la diputación para hacerse cargo de un ministerio, pues el gobierno estaba en crisis. Finalmente, fue nombrado gobernador. Una vez en su provincia, uno de los hombres que lo había chantajearado, fue acusado de estafa. Cuando declaró, acusó a David: dijo que había sustraído dinero del banco por orden del gobernador. David debió comparecer ante la Legislatura. Un diputado de la oposición, Elías Barté, dijo que la estafa al banco no era todo, sino que también se había defraudado a la provincia en una cifra exorbitante. David negó todas las acusaciones, pero luego de la declaración, se suicidó. En una de las cartas que dejó para explicar su situación dijo que se había visto desesperado, que había especulado en la bolsa y había perdido todo lo que tenía, por eso había ordenado al empleado sustraer el dinero. La carta no se hizo pública y el entierro fue con gran pompa como el de un gran hombre, con duelo oficial. “Fué la última mentira, acaso la más necesaria y piadosa para epilogar una vida así. David Pérez conocía a los hombres...”.

La última historia que vamos a observar es “El escándalo de la Avenida Alvear”, de Elsa Norton. Los Amenábar vivían en un palacio de la Avenida Alvear. El marido, Juan Andrés, se dedicaba a la política y sería candidato a vicepresidente. La esposa, María Cristina de la Fuente, organizaba reuniones en su casa, que los cronistas sociales consignaban como

“festivales de caridad”, pues la señora era presidenta de la Sociedad Protectora de los Desamparados. Sin embargo, en realidad allí en la mansión Amenábar, las fiestas tenían otro tenor: mujeres de la sociedad, esposas de políticos cuyas vidas privadas son bastante poco ordenadas, se reunían para apostar a la ruleta. Los Amenábar tenían una hija, Mercedes, casada con Alberto Montoya. Este matrimonio quería separarse, pues él le pegaba y ella tenía un amante. Sin embargo, ni el padre de Mercedes ni el de Alberto aceptaron el divorcio de sus hijos. Juan Andrés Amenábar dijo a su hija: “... el senador Montoya es mi amigo y correligionario, y con él hablaré del asunto (...). Además, yo tengo una posición política que mantener y no he de renunciar a mis aspiraciones a causa de tus desacuerdos caseros... Sabes bien que mi nombre figura sin discusión en la futura fórmula presidencial para secundar a Montoya. (...) ¡Si yo, a mis años, me rindo a las exigencias del mundo, tú, que recién empiezas a vivir, aprende al menos a disimular!”. No menos elocuentes fueron las razones que expuso Montoya con su hijo: “¿Con qué pensaba vivir el jovencito que había osado levantar la mano a su esposa? ¿No conocía, acaso, la situación difícil por que atravesaba toda su familia a causa de la bendita política? ¿No había llegado a darse cuenta que el doctor Amenábar, presidente del partido en que ambos militaban, respondía con generosidad a las continuas exigencias de los comités? ¿Ignoraba, tal vez, que él mismo, senador nacional y candidato a presidente de la República en el próximo período, era deudor al doctor Amenábar de una suma que sólo podría pagar el día que estuviera en el poder? Y por último, ¿podía suponer posible el jovencito Alberto que el senador Montoya llegara a dirigir los destinos de la República sin el apoyo del doctor Amenábar?”.

Así, el matrimonio se instaló en el palacete de los Amenábar y Alberto se convirtió en “un parásito más, adherido al

bienestar sin zozobras de la familia” de su mujer. Las mujeres de la alta sociedad continuaban organizando sus fiestas. Mercedes comenzó a concurrir a esas “misas negras”, en las que las mujeres se vestían al uso oriental, consumían alcaloides y coqueteaban con relaciones homosexuales. Mientras tanto, Amenábar seguía absorbido por la campaña política. “Los partidos avanzados que se incorporaban a la lucha después de treinta años de ostracismo, habían renovado sus esfuerzos contra los ‘gobiernos de familia’, cuya sola presentación a la lucha constituía —según ellos— un reto a la democracia. Pero don Juan Andrés seguía batallando y entregando parte de su dinero al partido. El propio senador Montoya, ‘hombre pobre, pero honrado’, según lo habían clasificado sus correligionarios, reiteró la solicitud de un nuevo préstamo, que, como el anterior, debía cancelarse poco tiempo después del triunfo”. En una de los juegos de ruleta organizados en el palacete de la Avenida Alvear, se produjo un escándalo de proporciones periodísticas cuando Mercedes descubrió a su marido con una tonadillera y la esposa engañada le disparó a la amante. A sólo ocho días de las elecciones, cuando las acusaciones entre los candidatos de un partido y otro son de clase, pero también personales, y aun cuando la tonadillera se recuperó, ese episodio provocó la ruina política de Amenábar y de Montoya. Las fuerzas nuevas llegaron al poder. Tiempo después, murió María Cristina de sobredosis de morfina y los nuevos gobernantes “quisieron ensañarse con el caído y en lugar de construir y gobernar, debían al pueblo las pruebas de sus anatemas; habían pronunciado la palabra iladrones!, y sacaron a relucir viejos expedientes de concesiones territoriales, de negocios fantásticos, de favores sin cuento... Se batió el parche de la inmoralidad de los ‘caducos conservadores’, y el nombre de Juan Andrés Amenábar fué estampado en las letras de molde de los diarios oficiales. La noticia produjo en el pueblo

impresionista el efecto esperado. Las fuerzas nuevas conocían su alma y estaban seguros de que el pueblo habría de conformarse con la acusación sin reclamar las pruebas; al pueblo le bastaba con que la intangible probidad de los apóstoles dejara caer el índice de su fallo inapelable”.

Aquí y allá...

Ahora bien, este período de crisis política en Argentina, marcado por episodios puntuales como por ejemplo la Semana Trágica, está en consonancia con el clima ideológico mundial, no solamente por los efectos internacionales de la Revolución Rusa, sino por la crisis de conciencia de la burguesía europea que tiene su inicio alrededor de 1871, con la experiencia de la Comuna de París. Este episodio produjo en la burguesía la conciencia de la necesidad de democratización de la política. Tal como lo plantea Hobsbawm en *La era del imperio*:

El período histórico que estudiamos en esta obra comenzó con una crisis de histeria internacional entre los gobernantes europeos y entre las aterrorizadas clases medias, provocada por el efímero episodio de la Comuna de París en 1871, cuya supresión fue seguida de masacres de parisinos que habrían parecido inconcebibles en los Estados civilizados decimonónicos y que resultan impresionantes incluso según los parámetros actuales, cuando nuestras costumbres son mucho más salvajes. Este episodio breve y brutal —y poco habitual para la época— que desencadenó un terror ciego en el sector respetable de la sociedad, reflejaba un problema fundamental de la política de la sociedad burguesa: el de democratización. (Hobsbawm, 1989: 85)

La preocupación por la transparencia del sistema político implicó una preocupación por la moralidad pública, un interés en clarificar las conexiones y los intereses que mueven a la clase dominante, pero en particular a los dirigentes que la representan a negar toda posibilidad de manejo tras bambalinas. El poder debe aparecer como público y ante los ojos de los ciudadanos, pero sigue manejándose en los palacetes (de la Avenida Alvear), durante las fiestas privadas (con o sin alcaloides) o las partidas de caza y otras actividades que realizan los políticos. En Europa, la preocupación por este manejo hipócrita del poder no es demasiado diferente a la que nos ocupaba en Argentina y podría, perfectamente, extraerse de alguna novela semanal:

En lo sucesivo, cuando los hombres que gobernaban querían decir lo que realmente pensaban tenían que hacerlo en la oscuridad de los pasillos del poder, en los clubes, en las reuniones sociales privadas, durante las partidas de caza o durante los fines de semana de las casas de campo donde los miembros de la elite se encontraban o se reunían en una atmósfera muy diferente de la de los falsos enfrentamientos de los debates parlamentarios o los mitines públicos. Así, la era de la democratización se convirtió en la era de la hipocresía política pública, o más bien de la duplicidad y, por tanto, de la sátira política (...). Un observador inteligente no podía pasar por alto el enorme abismo existente entre el discurso público y la realidad política, que supo captar Hilaire Belloc en su epigrama del gran triunfo electoral liberal del año 1906... (Hobsbawm, 1989: 89)⁴

4 El epigrama satírico que cita el historiador es el que aparece como epígrafe de este trabajo.

La corrupción producto de la “relación de dependencia” entre la burguesía y sus representantes políticos es, por lo tanto, un problema también en Europa:

... indudable corrupción de los sistemas políticos que no se apoyaban ya en hombres de riqueza independiente, sino cada vez más en individuos cuya carrera y cuya riqueza dependía del éxito que pudieran alcanzar en el nuevo sistema político. (...) Es cierto que los mismos nombres se repetían una y otra vez en esos equipos de gobierno. (...) En cuanto a la corrupción, no era mayor que a comienzos del siglo XIX (...). Pero aun cuando no ocurriera así, la corrupción era más visible, pues los políticos aprovechaban de una u otra forma, el valor de su apoyo a los hombres de negocios o a otros intereses... (Hobsbawm, 1989: 98)

Hobsbawm, de las varias teorías del Estado que, como marxista, tiene a mano, parece elegir aquella conocida como instrumental (Miliband, 1998). En dicha teoría, el Estado aparece como un simple instrumento en manos de la clase dominante. Una mirada más estructuralista vería en dicha relación un vínculo a la vez más difuso y potente (Poulantzas, 1974). Más difuso porque no implica necesariamente relaciones estrechas, casi familiares, de negocios inmediatos, entre las empresas y los funcionarios estatales. Más potente, porque no requiere de dicha cercanía para presionar adecuadamente a los funcionarios en el sentido en que la clase dominante quiere: hay una determinación general. En la variante instrumental, la corrupción es una necesidad permanente. En la estructuralista, la corrupción no es necesaria: un buen funcionario no necesita ser corrupto para realizar los intereses de la burguesía. La corrupción no es la forma en la cual la burguesía somete al

Estado, sino aquella en la cual este o aquel burgués someten a tal o cual funcionario a sus intereses. La corrupción aparece, entonces, como la ruptura del pacto de caballeros entre burgueses y del pacto de prescindencia entre burguesía y trabajadores. No es necesaria para la dominación general de la burguesía, pero sí para la competencia entre burgueses y el ejercicio pleno de la explotación. Es, también, la forma en la que el personal estatal gana cierta autonomía dentro de esa determinación general (Sartelli, 2008). De allí que no es simplemente la forma en la que la burguesía debió comenzar a comportarse una vez arribada la democracia de masas. Simplemente, con esta, la corrupción se convirtió en objeto de debate público. Es lógico, entonces, que la novela semanal se transforme en un escenario de privilegio en el momento en el que, en Argentina, se llevan adelante las mismas transformaciones sociales y políticas que en Europa un par de décadas antes.

En efecto, la ley Sáenz Peña había venido a subsanar todo aquello que se veía de reprochable en el “régimen oligárquico”, para instalar en su lugar a un gobierno que, diciendo representar a la “Constitución” y la “pureza” del sufragio, rápidamente se dedicó a construir una maquinaria política virtualmente indestructible y que tenía por práctica un clientelismo y una corruptela permanentes, necesarias, sin embargo, para reconstruir socialmente el Estado y afrontar la crisis de hegemonía (Sartelli, 1996). El Payró de *Pago Chico* bien podría haber escrito el epigrama que encabeza este artículo.

Conclusiones: la *novela semanal* como novela política

En las novelas que hemos visto queda claro que el tema no son los sentimientos, sino la sociedad y la forma en que esa sociedad pretende ser manejada, la política. Si bien las

pasiones asoman en todas ellas, más o menos explícitamente, no constituyen su tema. Por el contrario, pueden ser explicadas como una forma de interpretación de la crisis política producto de la agudización de la lucha de clases y de la “democratización” de la política burguesa.

“La voluptuosidad del poder” es una novela de tesis que busca dar una explicación a las dificultades que enfrenta la democracia recientemente conseguida. El poder político es siempre frágil porque los hombres que lo poseen son vulnerables a las pasiones, tienen debilidades y, por lo tanto, la corrupción es una presencia inevitable. Las pasiones privadas afectan las vidas públicas; al contrario del lema de los años setenta, “lo personal es político”, esta novela señala que “lo político siempre está atravesado y afectado por lo personal”. Los políticos antes que tales son personas, y las personas se manejan por deseos e instintos mezquinos: la ambición, el placer sexual. En ese contexto, sobrevive el político cínico, que sabe atar sus negocios a los de la burguesía, en este caso extranjera. Esta burguesía extranjera no se involucra directamente en la actividad política, a diferencia de la burguesía nacional que, como Sancho de Luis, es dueño de ingenios azucareros.

En “Carne triunfal”, Alfredo se dedica a la política como forma de sostener la vida de lujos que pretende su esposa. El ingenuo, el Charles Bovary que se mezcla en los negocios turbios de la política recibe como castigo la infidelidad. De Carlos Salterán a Ramón Leiva, en una gradación perversa que va del caso más común del amigo íntimo al más bizarro del suegro, los representantes de la burguesía son amantes de las mujeres de sus protegidos políticos.

En tanto, “Un gobernador” señala la siguiente tesis: el sistema de la democracia burguesa no se arregla con hombres nuevos, porque está inmerso en una serie de costumbres y condiciones que presionan a cualquier *outsider*. También es una crítica a los arribistas, un modo de mostrar que los

hombres con condiciones no deben dejarse tentar por la política. Es un mundo cargado de snobismo que los juzgará por su origen y no por sus capacidades, y los presionará para cometer los mismos delitos que comete (o cometería) cualquier otro en ese lugar de poder. La novela también critica a los hijos de la burguesía (los hermanos de Cruz) como incapaces para toda tarea intelectual o administrativa; de allí que el padre de la chica haya decidido dejar todos sus asuntos en manos de su yerno David. El cierre de la novela marca que la hipocresía en el terreno de la política es una necesidad, pero también que David no merece que se lo ensucie más aún. David no era ambicioso, por eso, ya tenía bastante con haberse mezclado con esa mentira y no haber salido airoso de la aventura, a pesar de su talento y su sentido común.

Por último, “El escándalo de la Avenida Alvear” es el texto que critica más ampliamente el sistema democrático burgués. Tanto los aristócratas de la política, aquellos que hacen política familiar, la herencia del roquismo, cuyas costumbres son corruptas y relajada su vida moral; como los nuevos políticos, los que hablan de la corrupción moral de los otros y la pobreza y la fuerza del trabajo como un valor (seguramente socialistas o quizá radicales), que ostentan rasgos de snobismo y exhibición (se cambian el apellido una vez que comienzan a tener cierto ascendiente político) caen bajo la lupa censora del narrador de esta historia. Las masas son fácilmente engañadas, pues se conforman con la demagogia discursiva. La vida privada se hace pública porque es un arma para derrotar al opositor; la moral es un problema político y la bandera de lo nuevo. Novedad que no lleva adelante ningún acto de gobierno como no sea criticar al gobierno anterior. Y el pueblo cree que es mejor, y vota...

Si bien tomamos unos pocos ejemplos, podemos afirmar que las novelas del corpus de la narrativa de circulación

periódica permiten una reflexión compleja sobre el problema del poder social y la naturaleza del Estado: ¿la corrupción es accesoria o necesaria?; ¿se resuelve con el simple cambio del personal político o, por el contrario, es sistémica?; ¿cambia algo cuando cambia el método de selección del personal político o todo se mantiene más o menos igual? No son novelas sentimentales sino sociales. Allí donde se habla de amor y pasiones, se discute y se disputa, en realidad, la resolución de la crisis social. Las novelas que tomamos como ejemplo en este texto son extremadamente políticas, pues presentan casos en los cuales las pasiones y los sentimientos funcionan más bien como explicación o motor para la acción política, casos abiertamente explícitos de política; además, como gran parte del corpus, también son textos críticos. Decimos gran parte del corpus porque encontramos allí sátiras, con toda la carga política que el género implica —“El crimen de la calle Brasil” de Alfredo Palacios Mendoza (Sabio, 2002); “Babel” y “Una semana de holgorio”, del más conocido Arturo Cancela—. Hay también un grupo mucho más numeroso de autores que critican a la aristocracia burguesa (el gran mundo), los patrones o los terratenientes: Juan José de Soiza Reilly, Elsa Norton, Josué Quesada o Belisario Roldán.

La literatura popular del período critica a la clase dominante y a los dirigentes burgueses, ya sean de origen aristocrático o plebeyo. Intenta explicar porqué son corruptos los políticos y encuentra al menos, dos explicaciones: una, que las pasiones y los deseos individuales están antes que los colectivos y otra, que no es posible la renovación del sistema de la democracia burguesa por la vía del cambio de nombres. En el primer caso, la corrupción de las costumbres, la decadencia moral de los dirigentes en tanto individuos, explicaría la corrupción del sistema. También, la alta sociedad, el gran mundo es escenario no sólo de las prácticas

más decadentes en términos morales, sino que además, sus miembros son absolutamente ineptos. En el segundo, la crítica es más amplia y, por su misma amplitud, posibilitaría tanto una salida revolucionaria como una fascista.⁵ En esta segunda interpretación, todos los políticos son iguales porque se ven forzados a terminar actuando como el sistema se lo exige. Se acusa en general, a la democracia burguesa de ser una payasada, la política es completamente hipócrita y, como el gran mundo se maneja con esos códigos hipócritas, sus dirigentes se ven obligados a actuar de ese modo. Los políticos son arribistas cínicos o ingenuos en manos de una clase decadente, surjan de conciliábulos nocturnos o del voto popular.

En el corpus no aparecen novelas sentimentales de elogio de la aristocracia burguesa ni de los políticos, a lo sumo de la pequeña burguesía. De allí que ubicar estos textos en el campo de la reacción o del conservadurismo, como pretende Sarlo en su interpretación reproductivista, es, cuando menos, discutible. En el contexto nacional, tensionado entre la Ley de Residencia en sus inicios (1904) y la Ley Sáenz Peña (1912) como formas de reconocer los peligros provenientes de la clase obrera, estas novelas no se recuestan en el lado complaciente y consolatorio, sino en el costado crítico de la vida política.

La forma más avanzada de crítica que se presenta en estos textos es la que muestra al sistema mismo como corrupto y a la corrupción como inherente a la democracia *burguesa*. Una forma primigenia, popular y literaria, del más reciente “que se vayan todos”.

5 En efecto, esta crítica a la democracia burguesa puede ser leída como la necesidad de establecer una democracia real, es decir, social, o como una excusa para abolir toda forma de democracia. El golpe de Uriburu en 1930 es el momento en el cual se busca una salida a la crisis por la segunda vía. Su carácter efímero y limitado se explica, probablemente, por lo efímero y limitado de la primera forma, que se insinuó (y fracasó) durante la Semana Trágica.

Bibliografía

- AA.VV. (2004). *La Novela Semanal (Buenos Aires, 1917-1927). Un proyecto editorial para la ciudad moderna*. Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
- Hobsbawm, E. J. (1989). *La era del imperio*. Barcelona, Labor Universitaria.
- Labeur, P. (s/f). Mujeres que trabajan. En *La Novela Semanal*, "La vendedora de Harrods" de *Josué Quesada y otros relatos*, núm. 4. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes - Página/12.
- Mangone, C. (1989). La República Radical: entre *Crítica y El Mundo*. En AA.VV., *Yrigoyen, entre Borges y Arlt, (1916-1930)*. Buenos Aires, Contrapunto.
- Miliband, R. (1998). *El estado en la sociedad capitalista*. México, Siglo XXI.
- Minguzzi, A. (s/f). La cuestión social en *La Novela Semanal*. En *La Novela Semanal*, "La Venus del arrabal" de *Belisario Roldán y otros relatos*, núm. 2. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes - Página/12.
- Orgambide, P. (s/f). Prólogo. En *La Novela Semanal*, "El chino del Dock Sur" y otros relatos de *Héctor Pedro Blomberg*, núm. 3. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes - Página/12.
- Pierini, M. (s/f). Introducción. En *La Novela Semanal*, "La costurerita que dio aquel mal paso..." de *Josué Quesada y otros relatos*, núm. 1. Buenos Aires, Universidad Nacional de Quilmes - Página/12.
- Poulantzas, N. (1974). *Fascismo y dictadura*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Sabio, M. (2002). El crimen de la calle Brasil. En *Razón y Revolución*, núm. 9.
- Sarlo, B. (1985). *El imperio de los sentimientos*. Buenos Aires, Catálogos.
- Sartelli, E. (1996). Celeste, blanco y rojo. En *Razón y Revolución*, núm. 2.
- _____. (2008). *La cajita infeliz*. Buenos Aires, RyR.

Fuentes

- Norton, E. (1921). El escándalo de la Avenida Alvear. *La Novela Semanal*, núm. 178.

Sonderéguer, P. (1918). La voluptuosidad del poder. *La Novela Semanal*, núm. 20.

Vedia, M. (1920). Un gobernador. *La Novela Semanal*, núm. 132.

Villar, A. (1919). Carne triunfal. *La Novela Semanal*, núm. 82.

Capítulo 2

La resistencia obrera al Golpe de 1955, entre lo imaginado, lo olvidado y lo transfigurado

Marina Kabat, Rocío Fernández y Blas Costes¹

¿Por qué no hubo una resistencia obrera generalizada contra el Golpe de 1955?

Una de las preguntas recurrentes de la historia argentina es por qué, en 1955, los obreros no defendieron a Perón. Se han dado muchas respuestas, en general, poco satisfactorias: una, que los obreros obedecieron los deseos de Perón, cuya renuncia los desmovilizó. En ese sentido opera, por ejemplo, el texto de Godio. Julio Godio por una parte apela a sus recuerdos para indicar que sí había deseos de movilizarse por parte de los obreros y rememora haber visto en La Plata camiones cargados de obreros que se dirigían al centro, pero que luego volvieron tal como habían ido, siguiendo órdenes. Según Godio (1985), los obreros se dirigían espontáneamente a la Confederación General del Trabajo (CGT) y a otros lugares ofreciendo colaboración, pero eran desestimados y desorientados por los militares.

1 Agradecemos a Yésica Kirstein por su colaboración en la búsqueda de fuentes periodísticas en lengua inglesa.

Godio en su libro analiza cómo opera esta desmovilización desde las altas esferas: el toque de queda impuesto por Perón perjudica los intentos de resistencia, la idea de constituir milicias obreras nunca fue una propuesta seria (la CGT hace un ofrecimiento a las fuerzas militares para que ellas decidan sobre su implementación). Sin embargo, Perón, tras ser apresado en 1945, pidió su retiro del Ejército y solo aspiraba a mudarse al sur y casarse con una Eva Duarte que nunca hubiera llegado a transformarse en Evita. Sin la reacción de los gremios que dio lugar al 17 de octubre, ese hubiera sido su destino ¿Por qué un movimiento similar no ocurrió en 1955? Es cierto que en 1945 Perón contaba, además del apoyo de los gremios, con el auxilio de importantes aliados suyos en puestos clave del Gobierno: desde Mercante que sale a agitar el levantamiento hasta el jefe de policía de Buenos Aires que lo permite. Pero en 1955, en distintas provincias la Policía da muestras de no simpatizar con el Golpe, y sin embargo, salvo en Rosario, no hay un levantamiento.

Félix Luna señala el factor desgaste, profundizado desde el frustrado Golpe de junio, sumado a cierta apatía y confusión entre las filas peronistas. Otra respuesta, al gusto de Gino Germani y Milcíades Peña, es que Perón había domesticado tanto al movimiento obrero que éste resultó incapaz de actuar por sí mismo. Este argumento cae cuando se observan las luchas obreras de los últimos años del peronismo, donde la clase obrera manifiesta iniciativa y capacidad para enfrentarse al régimen.

Nuestra tesis es otra: hacia 1955 Perón había perdido el apoyo activo de gran parte de la clase obrera. Su represión a distintos sectores, entre ellos, a los obreros tucumanos que habían tenido un rol importante en octubre de 1945, el retroceso del nivel de vida respecto al alcanzado en los primeros años de su mandato y la ofensiva burguesa contra

las condiciones laborales en sintonía con los objetivos del Segundo Plan Quinquenal, son algunos de los factores que contribuyen a ello. Es cierto que, pese a todo, en las elecciones de 1954 el peronismo mantiene su caudal electoral. Pero, una cosa es votar por alguien y otra muy diferente es salir a defenderlo en la calle frente a un ataque militar. Este tipo de respuesta solo ocurrirá en Rosario y Villa Constitución ante circunstancias más favorables que en otras ciudades.

Perón mismo más de una vez reconoció la falta de entusiasmo entre sus partidarios a la hora de defenderlo del Golpe. Por un lado, ha señalado que contando con el apoyo de una mayoría pasiva él fue derrocado por una minoría militante. Incluso, llegó a recriminar la apatía de sus seguidores:

Nuestro pueblo, que había recibido enormes ventajas y reivindicaciones contra la explotación que había sido víctima hace un siglo, debía haber tenido un mayor entusiasmo por defender lo que se le había dado. Pero no lo defendió porque todos eran “pancistas”... ¡Pensaban con la panza y no con la cabeza y el corazón!... Esta ingratitud me llevó a pensar que darle conquistas y reivindicaciones a un pueblo que no es capaz de defenderlas es perder el tiempo. Si no hubieran existido todas esas cosas que le dan asco a uno, yo hubiera defendido el asunto...y salgo con un regimiento, decido la situación y termina el problema... (Luca de Tena, 1984: 79)

Historiadores filo-peronistas, como Beba Balvé, niegan el problema que hasta Perón reconoció, pues creen que sí hubo una resistencia obrera inmediata a la Revolución Libertadora, y citan como ejemplo el caso de Rosario al tiempo que especulan con la posibilidad de que hechos

similares se hubieran reproducido en otras ciudades del interior. Para Balvé, la movilización de Rosario de 1955 asume características de una insurrección. No sólo eso, sería una insurrección no derrotada. Su narración de los hechos roza lo mitológico: obreros montados a caballo, con el torso desnudo y sus camisas atadas en palos, cual lanzas, se dirigen al centro; llevan bidones de nafta y queman todo a su paso. También relata cómo son reprimidos por tanques y ametralladoras en el Parque Independencia. En un texto indica conocer el hecho por testimonios y por algunos diarios locales, pero en otro reproduce una descripción, sin precisar la fuente y dando la idea de un conocimiento directo. En un tercer artículo Balvé habla de 400 muertos obreros sin precisar la fuente y sostiene que el enfrentamiento dura siete días y se produce inmediatamente tras el inicio del Golpe, el 16 de septiembre (Balvé y Balvé, 2005; Balvé, 2005 y 2009).

Nosotros estudiamos los sucesos de Rosario en forma sistemática, de los que hasta ahora se conocían solo testimonios fragmentarios y algunas noticias publicadas en el extranjero por el *New York Times*, citadas al pasar por el historiador Daniel James. Hemos relevado los diarios locales (*Democracia, La Acción, La Tribuna, La Capital*), así como el *New York Times*, cotejando esta información con los distintos testimonios disponibles. Además, para ver si el caso de Rosario se repite en otros lugares, hemos relevado periódicos nacionales y otros de las principales ciudades del interior. También hemos cotejado esta información con fuentes militares contemporáneas.

Por último, cuando el Gobierno militar de la Revolución Libertadora crea una comisión para investigar al peronismo, tiene especial preocupación por indagar la resistencia civil o militar al Golpe. La defensa del Gobierno frente al Golpe es considerado un delito y como tal es investigado. En numerosos interrogatorios se siguen las pistas de las armas

que podrían haberse entregado a los obreros. Se indaga cuáles eran los planes de defensa proyectados por el peronismo, en qué medida estos se cumplieron o no y por qué razones. También se estudian los casos puntuales de algún conato de resistencia en distintas provincias, con interrogatorios a protagonistas y testigos de los sucesos. En estos expedientes hemos encontrado información que no había sido publicada ni siquiera en los diarios locales. Cabe señalar que aún nos falta acceder a una valiosa fuente documental cuya vista el Ejército Argentino nos ha vetado, a saber: las actuaciones militares respecto a la Revolución Libertadora custodiadas por el Archivo General del Ejército.

El Partido Peronista Femenino y el pulso político de la población

Uno de los puntos más difíciles de conocer es el estado de ánimo de las mismas bases peronistas antes del Golpe y su disposición al combate. Como en otros aspectos, la censura existente en el momento nos priva de muchos de los canales que normalmente podríamos utilizar para conocer este aspecto. Por eso, vamos a trabajar con distintas fuentes alternativas. La primera de ellas resulta especialmente útil en este punto porque se trata de una serie de informes elaborados en forma contemporánea a los sucesos, al parecer, con el mismo objetivo que tenemos nosotros: saber qué pensaba la masa trabajadora de la situación política, cómo procesaba el conflicto con la Iglesia y en qué medida estaría dispuesta a tomar parte activa en la defensa del Gobierno.

Tras el fallido Golpe del 16 de junio y el episodio de la quema de iglesias, el Partido Peronista Femenino (PPF) manda a elaborar a las subdelegadas censistas de cada Unidad Básica (UB) —al menos de la Capital Federal— informes

referentes al clima popular reinante tanto en la calle como entre el núcleo de afiliadas. Además, las subdelegadas censistas debían organizar la vigilancia de las iglesias y los comentarios políticos que allí circulaban. En general, por UB se designan una o dos compañeras de extrema confianza para esta tarea. Estas mujeres tenían la indicación de concurrir a la iglesia, escuchar sin intervenir ni generar ningún incidente y luego reportar a la superioridad qué se decía y quién lo hacía. El hecho de que un número importante de afiliadas desarrollara esta actividad muestra que cierto núcleo de militancia mantuvo un sesgo anticlerical de forma que no tiene problemas de conciencia en realizar esta tarea. Sin embargo, como veremos, algunos informes muestran que el conflicto con la iglesia hace mella en ciertos círculos partidarios.

Por otro lado, la subdelegada censista debía también destacar a otras afiliadas para que concurrieran a las colas de los comercios, transportes públicos y otros espacios de sociabilidad y, allí sí, participar de las charlas con la intención de desvirtuar los rumores. A su vez, las subdelegadas tenían instrucciones de realizar una serie de reuniones con pequeños grupos de las afiliadas de concurrencia más asidua a la UB y “bajarles línea” respecto de los problemas del momento. Es evidente que en el Gobierno existe conciencia de lo delicado de la coyuntura, puesto que se prefiere organizar pequeñas reuniones más manejables que encuentros más amplios, donde pudieran contagiarse las inquietudes reinantes y generarse indeseadas discusiones aun entre las afiliadas.

Dentro de los tópicos de las reuniones figuraba mantener viva la memoria de los sucesos del 16 de junio, inculpar a los comunistas por la quema de iglesias y comentar los últimos discursos de Perón. A su vez, varios ítems apuntaban a levantar la moral y la disciplina. En particular esta es agitada

como un valor femenino. El temario de alguna reunión textualmente decía: en el punto 3, “Disciplina de la mujer peronista” para acatar cambios de gabinete “que disponga nuestro único e indiscutido LIDER”; se llamaba asimismo a evitar comentarios maliciosos sobre los ministros salientes. El punto 9 indicaba “Cada afiliada es un soldado de este movimiento, que debe obedecer ciegamente a su JEFE, el GENERAL PERON”. Por su parte, se comentaba el ejemplo de una madre que al ver el cuerpo de su hijo muerto, un soldado caído en los bombardeos a Plaza de Mayo, habría dicho “si es por Perón, está bien”. Esta anécdota era empleada para reforzar la moral de las militantes y, quizás, para prepararlas para un futuro combate.²

Un primer grupo de informes es elevado entre los últimos días de junio y el primero de julio de 1955. De este grupo se han conservado cuarenta informes remitidos por las subdelegadas censistas de las UB. Algunos de ellos presentan información incompleta (solo refieren lo escuchado en las iglesias o el contenido de las reuniones). El clima predominante en ellos es positivo. En la mayoría de los partes que dan cuenta del clima de la calle, se afirma que este es más tranquilo y que los rumores cesaron o amenguaron y confían en la capacidad de la influencia de sus militantes para desvirtuarlos. Si bien algunos partes parecen pecar de cierto automatismo y obsecuencia que hacen dudar de las conclusiones presentadas, lo que parece claro es que la mayoría de las responsables de escribirlos mantenían esta visión positiva.

Dentro de este cuadro general aparecen, sin embargo, algunas notas discordantes de inquietud. Un informe revela que las afiliadas de una UB de la zona norte de Capital cuestionaban al Gobierno por su conflicto con la Iglesia. Una de

2 AGN AI, FRP, expte. 23763: fs. 74 y 68.

ellas, quien afirmó no ser “chupasirio”, dijo estar segura de que en las escuelas religiosas jamás se atacó a Perón. Esta reunión parece haber escapado al control de sus organizadoras, ya que otras afiliadas también hablaron en defensa de la Iglesia con similares argumentos.³ Algo parecido, aunque en menor grado, ocurre en la UB de la calle Córdoba 2655. Allí, la subdelegada cencista reúne a “afiliadas de comprobada fe” y plantea, tal como estaba previsto, que no solo la oligarquía sino también el clero es responsable por los sucesos del 16 de junio. Ante esto, algunas afiliadas hacen la salvedad de que no todo el clero es responsable, mientras que otras expresan su repudio tanto a los sucesos de la Plaza como a la quema de iglesias, afirmando que quien esto hizo carece de todo respeto religioso.⁴

Otros, sin plegarse a esta opinión, reconocen el impacto que tenía el conflicto con la curia dentro de las filas peronistas. Por ejemplo, un informe relata la conversación con una niña que había dejado de concurrir a la UB por indicación del cura a su familia. La criatura dice que en su casa son peronistas y también van a la iglesia y pide que no le refieran esta conversación a su madre.⁵

En otros informes esbozan quejas porque la quema de las iglesias parece haber opacado el levantamiento del 16 de

3 Informes de los temarios de estas reuniones pueden verse en AGN AI, FRP, Com. 48, caja 11, expte. 23763; Com. 48, caja 11, expte. 23763, fs. 110, 30-6-55, UB de Azcuénaga 762. A la reunión concurren siete afiliadas, quienes también comentaron que el domingo 12 se toparon en Plaza de Mayo con un grupito nacionalista que atacó a la curia diciendo que no dejarían un curita vivo. Una dice que no frecuentaba la Iglesia y que empezó a ir para ver si discutían política y afirma haber comprobado lo contrario. Este informe es el único de la serie que reporta cuestionamientos al régimen por parte de las afiliadas. Si bien corresponde a la zona norte, es significativo que las críticas fueran planteadas por las propias afiliadas y no por gente en la calle, menos comprometida.

4 AGN AI, FRP, expte. 23763: fs. 103.

5 AGN AI, FRP, expte. 23763: fs. 59.

junio y que los curas se presentan como víctimas.⁶ Otros reclaman medidas más severas contra la Iglesia (como que se impida la congregación de gente en los templos quemados donde no se dicta oficio), o recomiendan que se avance en la división del Estado y la Iglesia. La mayoría de estas sugerencias no parecen proceder de personas ateas, sino más bien anticlericales, entendido por esto que se oponen a la injerencia de la Iglesia en asuntos políticos estatales. También hay pedidos de firmeza en el castigo a los sublevados del 16 de junio y consejos a Perón para que se cuide de los traidores. Un informe cuestiona la demora en el nombramiento del nuevo gabinete, lo que podía hacer pensar que no era Perón quien tenía las riendas de la situación; también rechaza que se incorporen más militares al gabinete.⁷

Si bien estos últimos reclamos pueden caracterizarse como más radicales que la postura oficial, de todas formas, se trata de cuestionamientos tibios: en ningún caso se reclama mayor espacio popular en la defensa del Gobierno, mucho menos la formación de milicias obreras o algún cuerpo similar. Por el contrario, uno de los comentarios recogidos en la calle y reportados en tres informes distintos es que se considera responsable a la CGT por la muerte de los obreros en la Plaza de Mayo durante los bombardeos. Así, por ejemplo un comentario recogido es que “la CGT tiene la culpa de todas las víctimas que hubo entre los obreros porque sin

6 Intentan restarle importancia al luctuoso episodio del 16 de junio, “cosa que quizás van consiguiendo en parte”, debido al sentimentalismo propio de nuestro pueblo (*ídem*, fs. 143-144). No se comentan los sucesos del 16 pero sí desmanes a templos y comercios (fs. 146). Por el contrario, los informes de otras dos UB consideran que se siguen comentando los sucesos del 16 y que solo grupos reducidos comentan lo de las iglesias (UB Salta 483), y que lo acaecido había restado concurrentes a los templos y generado más adherentes a la causa (UB Belgrano 482).

7 *Ídem*, fs. 57, 80, 85, 121 y 152. El más firme de estos comentarios plantea que el pueblo quiere una respuesta, pero como se hubiera dado antes del 16 (es decir, rechazan un retroceso), “en concreto: quieren hechos y no palabras” (UB Cochabamba 1075, *ídem* fs. 154). Comentarios similares que piden medidas contra la Iglesia pueden verse a fs. 86, 102 y 105.

consultar para hacerse ver con el General llamaron a los obreros sin consultar”.⁸ El informe de otra UB transcribe un comentario similar: “se critica a la CGT, atribuyéndosele la mayor culpa en los hechos del 16, por haber sido esta, según dicen, quien incitó a los obreros a abandonar sus ocupaciones, para que fueran a Plaza de Mayo, y por lo tanto, que el señor Del Pietro debe renunciar”.⁹ Por último, en zona norte, esta opinión es expresada por una afiliada que concurre a la reunión en la UB de la calle Azcuénaga, quien afirmó que el 16 fue la CGT la que obligó, armas en mano, a los obreros a ir a la plaza. Si bien otra compañera la desmintió, la mayoría de las presentes parecen avalar las críticas al Gobierno.¹⁰

Si el Gobierno peronista estaba empleando estos informes como instrumento de sondeo de la opinión popular, la recurrencia de los comentarios negativos respecto a la movilización de obreros a la Plaza de Mayo por parte de la CGT, debe haberlo hecho dudar de la viabilidad de la formación de las brigadas obreras. Pese el tinte mayoritariamente positivo de estos informes, de los mismos no surge en absoluto la existencia de un clima tan combativo como para dar cuerpo a esa medida. Por el contrario, se trasunta cierto rechazo a la misma.

8 *Ídem*, fs. 121, informe fechado 30-6-55, UB Belgrano 2319. La insistencia con que esto pasó porque la CGT actuó sin consultar desliga responsabilidades a Perón y, por ello, parece un comentario de origen peronista. Relatos de lo sucedido en casa de Gobierno ese día muestran que esta no fue una decisión autónoma de la CGT. Solveyra Casares relata que el 16 de junio se encontraba en casa de Gobierno y lo envían a la CGT. En la CGT ve cómo Di Prieto se comunica con Renner (militar que oficiaba como secretario privado del Presidente) y este le pide a Di Prieto que convoque a los obreros a la CGT, que se coloquen en su frente para que puedan verse desde el edificio de la Marina. Solveyra Casares acompaña a Di Prieto a hacer el llamamiento por radio. Testimonio de Guillermo Solveyra Casares, Ushuaia, el 24-1-56. FNRP, com. 47, caja 3, expte. 22057, fs.106.

9 AGN AI, FRP, expte. 23763, fs. 61.

10 AGN AI, FRP, expte. 23763, fs. 61: fs. 110.

La situación parece deteriorarse en forma acelerada porque menos de un mes después un segundo grupo de informes refleja un clima muy diferente y de un fuerte pesimismo. Si bien este es un grupo mucho menor (solo 7 informes de UB), resulta mucho más homogéneo y contrasta en forma llamativa con el grupo anterior. Mientras que ninguno de los 40 informes del 30 de junio presenta un cuadro preocupante, la totalidad de los nuevos informes producidos entre el 20 y el 21 de julio alertan sobre la confusión y desorientación reinante entre las propias filas peronistas:

... el ambiente en apariencia es tranquilo pero internamente no es así, la gente está desorientada, le falta seguridad, pues el comentario que corre, es que el triunfo es el de la revolución, ese rumor mal intencionado está surtiendo efecto en los espíritus débiles. (AGN AI, FRP, 20-7-55, expte. 23763: fs. 41)

La intranquilidad que reina luego del discurso pronunciado por el General Perón el día 5 del mes en curso, pues la gente pareciera estar a la espera de algo, debido en gran parte a los rumores.¹¹

“Después del último discurso del general Perón dirigido a los Legisladores el confusionismo ha vuelto a circular. El pueblo no está tranquilo, pese a tener plena confianza en el General Perón”.¹² En forma coincidente otro informe plantea que “nuevamente cunde la intranquilidad en el pueblo” debido a que no se entendió el discurso de Perón y que las renunciadas despiertan conjeturas. El pueblo está desorientado y confundido, estado agravado por los rumores de la oposición.¹³

11 AGN AI, FRP, 20-7-55, expte. 23763: fs. 40.

12 AGN AI, FRP, 20-7-55, expte. 23763: fs. 45.

13 AGN AI, FRP, 20-7-55, expte. 23763: fs. 47.

Resulta llamativo que, incluso, se llegue a señalar el efecto negativo del mismo discurso de Perón, cuando lo habitual hubiera sido que, de existir un malestar, este se presentara matizado y se atribuyera a actitudes de figuras del entorno del presidente. Por otra parte, esta vez, solo uno de estos informes esboza una mirada si se quiere más radical. Señala que en general la gente interpretaba las palabras de Perón que indicaban que la etapa revolucionaria había finalizado, como una concesión a los mismos que sostuvieron los sucesos del 16 de junio.¹⁴ Pero, a diferencia de lo que ocurría a fines de junio, no se reclama ninguna medida concreta ni se aconseja un proceder. En ese sentido, aun este informe trasunta cierto clima de resignación.

El 31 de agosto Perón da a conocer una carta en la que ofrece al movimiento peronista su retiro si este facilita el proceso de pacificación. Por supuesto, no era más que una jugada para suscitar el apoyo popular. Desde el día anterior la prensa estaba avisada de estar en guardia (Godio, 1985: 147). La Confederación General Económica (CGE) declaró el paro y convocó a las 10 de la mañana a Plaza de Mayo. A su vez, el acto del 31 de agosto convocado para demostrar su popularidad parece haber evidenciado, en cambio, el desgaste del régimen.

Según Luna, pese a que se activaron todos los resortes de movilización la manifestación tardó en reunir la concurrencia esperada y recién después de las 18 horas habló Perón. Lo que es interpretado como un síntoma de cierta apatía y desgaste (Luna, 2013: 348). El testimonio de Tessaire ante la Libertadora parece corroborar esto, pues señala que para la movilización se trajo gente de la provincia y de Rosario, pues la gente de Capital, así como llegaba a la Plaza se retiraba de la misma. Por eso, para Tessaire el Gobierno

14 AGN AI, FRP, 20-7-55, expte. 23763: fs. 46.

estaba liquidado desde junio.¹⁵ Una vez en el balcón, Perón levanta su ofrecimiento de renuncia, pero a condición de que el pueblo lo acompañe en su tarea represiva:

Y ahora, compañeros, he de decir, por fin, que yo he de retirar la nota que he pasado, pero he de poner al pueblo una condición: que así como antes no me cansé de reclamar prudencia y de aconsejar calma y tranquilidad, ahora les digo que cada uno se prepare de la mejor manera para luchar.

Tenemos para esa lucha el arma más poderosa que es la razón; y tenemos también, para consolidar esa arma poderosa, la ley en nuestras manos. Hemos de imponer calma a cualquier precio, y para eso es que necesito la colaboración del pueblo. Lo ha dicho esta misma tarde el compañero De Pietro: nuestra Nación necesita tranquilidad y paz para el trabajo, porque la economía de la Nación y el trabajo argentino imponen la necesidad de la paz y de la tranquilidad. Y eso lo hemos de conseguir persuadiendo si no, a palos. (Perón, 1955)

Es el famoso discurso del cinco por uno, donde Perón también indica que cualquiera que actúe contra la Constitución o la ley “puede ser muerto por cualquier argentino. Esta conducta que ha de seguir todo peronista no solamente va dirigida contra los que ejecutan, sino también contra los que conspiren o inciten” (Perón, 1955). No es un discurso dicho al calor de los bombardeos de junio: ha pasado más de un mes. Pero los preparativos golpistas continúan y para Perón es claro que ha perdido el control de la marcha

15 Tessaire, FNRP, expte. 103667: fs. 139.

política. La apertura y pacificación anunciada ha dado alas a la oposición. Es necesario un giro drástico. Godio cuestiona el hecho de que Perón continuamente amaga con una defensa popular de su Gobierno y luego se desdice y que esto genera la peor situación política de todas, ya que la oposición, preocupada por las amenazas, acelera los preparativos golpistas. El planteo de Godio es cierto: no se puede amenazar con milicias populares y luego no formarlas. Pero lo que Godio no contempla es que quizás estas contradicciones del Gobierno se debieran a que sus seguidores no terminaban de responder a sus expectativas. Es decir, Godio parece tener la ilusión de que si el Gobierno hubiera sido consecuente en su llamado a los obreros a defenderlo por todos los medios, no le hubiese faltado apoyo.

Fracaso de la resistencia organizada desde arriba: el caso de la Escuela Superior Peronista

Lo ocurrido en la Escuela Superior Peronista (ESP) parece desmentir las especulaciones de Godio. El accionar efectivo de la dirección peronista ante el Golpe es muy confuso y contradictorio. En algunos lados las autoridades realizan serios esfuerzos para evitar cualquier respuesta popular,¹⁶

16 Según declaración de Armando Simón Fressez Tessi, delegado regional del Ministerio de Trabajo y Previsión de San Nicolás, a las 19 horas del 16 de septiembre recibió llamado del subsecretario de dicho departamento Alfredo Sívori, quien le ordenó "que personalmente se encargara de evitar por todos los medios que los sindicatos gremiales bajo la jurisdicción del dicente se lanzaran a un movimiento huelguístico". Según Fressez Tessi, esto era importante porque en los quince partidos de su jurisdicción había 255 sindicatos y 55.000 obreros. Asegura que desplegando una actividad inusitada cumplió la orden logrando que todos los gremios trabajaran. Para ello obtuvo automotores brindados por las compañías Siemens Baunios y Electrodine, lo que facilitó su tarea de recorrido por los distintos lugares de trabajo. También informa que por falta de personal pidió a los sindicatos de empleados y capataces de la construcción que le enviaran un par de personas "responsables" para poder mantener la normalidad. Fueron ocho a diez personas a las que se les

en otros se esperan directivas que nunca llegan. La ESP es el único caso que conocemos donde se comprueba una efectiva preparación de la resistencia por parte de las autoridades peronistas. Pero el intento fracasa por completo debido a la falta de apoyo por parte de los trabajadores de la sede.

La ESP tenía su sede en la calle San Martín 665. Era una especie de escuela de dirigentes peronistas financiada con fondos públicos que, además, editaba la revista *Mundo Peronista*. Desde el 16 de septiembre en la Escuela se intentó organizar desde arriba la defensa frente al Golpe.

La escuela dependía de la Secretaría de Asuntos Técnicos a cargo de Raúl Mendé y su planta estaba compuesta por personal estatal nombrado a tal fin o que había sido trasladado de otras reparticiones (como agricultura o educación). Veintiún empleados declaran que hubo preparativos de defensa que incluyeron guardias en el edificio, de ellos todos menos uno afirman que se distribuyeron armas y se fabricaron bombas molotovs.¹⁷ De las entrevistas surge que la mayoría de los empleados varones tomó parte de las guardias el día 16, pero que, una vez retirados del edificio, no

dieron armas y que colaboraron con la Policía en las rondas realizadas para asegurar el cumplimiento del toque de queda. Al segundo día, enteradas las autoridades militares de estas patrullas armadas, las disolvieron. Al igual de lo que sucede en Rosario, vemos aquí también a miembros de la burocracia sindical comprometidos con mantener el orden ante el Golpe de Estado. El funcionario también relata que un militar de apellido Aguilar se entrevistó el día 20 con dirigentes sindicales que querían hacer huelga, los que desistieron de la medida. FNRP, com. 15, caja 71, expte. 1004085, n. de archivo 380. Testimonio tomado en La Plata, 14 de octubre de 1955.

17 Cfr. FNRP, com. 31, caja 4, expte. 100159, núm. de archivo 35. testimonios a fs. 8, 35, 38, 39, 40, 43, 44, 45, 50, 54, 61, 62, 67, 68, 69, 122, 123, 125, 126, 127 y 141. A fs. 126 figura el testimonio de quien da cuenta de la defensa pero no ha visto las armas. Cabe señalar que ningún empleado entrevistado niega esta defensa, aunque sí hay algunos que no pueden informar al respecto, por no cumplir funciones en dicho edificio. Este es el caso de las ocho mujeres que estaban a cargo de UB (fs. 62; fs. 66, 136 y 137, pág. sin foliar entre fs. 137 y 138-139, 140 y 143), de personal que solo asistía en forma eventual a tareas de maestranza o personal que se encontraba con licencia médica (fs. 135, 144 y 145). Un último empleado (fs. 146) no vio directamente los preparativos, pero se enteró de ellos en el momento.

se reintegraron al mismo a cumplir las guardias previstas durante los días siguientes, pese a ser convocados telefónicamente a tal fin. Solo un empleado afirma haber permanecido en el edificio del día 16 al 23 de septiembre.¹⁸

Dos empleados señalan que el día 19 una persona de apellido Podestá instalado en la puerta del edificio amenazaba de muerte a quienes quisieran salir sin permiso. En un caso no se mencionan estas amenazas, pero sí que se retiraron del edificio solo después de pedir permiso para ello, aunque otros refieren haberse retirado sin encontrar ningún obstáculo.¹⁹ Más allá del grado de coerción existente o no para que los empleados se comprometieran en la defensa del edificio el día 16, lo cierto es que los días posteriores la deserción aumenta. Algunos fragmentos de los testimonios pueden dar cuenta del clima ambiente. Julio G. se retiró el viernes a las 16 porque consideró peligrosa su permanencia y porque tenía un bebe de pocos días. El 19 al regresar y “enterarse de los preparativos decidió volver nuevamente a su casa” (FNRP: fs. 44). Ambrosio B. se retiró el viernes a su domicilio y el lunes siguiente “fue requerido telefónicamente para presentarse para integrar las guardias que se dispusieron pero que al fin no se integraron por deserción del personal” (FNRP: fs. 40). Otro empleado, de nombre Orlando, a quien el día 19 se le solicita defender el edificio “optó por retirarse a su domicilio conjuntamente con otros empleados” porque “faltó fervor para la defensa y no creyó que valía la pena ningún sacrificio” (FNRP: fs. 50).

Si bien el contexto en el cual son tomados estos testimonios, determinado por el Golpe militar y el temor a alguna

18 Llamados telefónicos para retornar al edificio y formar las guardias a fs. 40, 54 y 126. A fs. 141 testimonio de un empleado que dice haber sido requerido en su domicilio por dos agentes de policía para que fuera a formar las guardias, pese a lo cual no fue (fs. 141). Testimonio del empleado que sí permaneció en el edificio a fs. 38.

19 *Ídem* fs. 61 y 62; fs. 69; fs. 44 y 50, respectivamente.

sanción, en especial a perder el empleo, puede determinar el tono de las declaraciones (todos los que participaron en la defensa del edificio dicen haberlo hecho siguiendo órdenes), lo cierto es que aquí tenemos un caso claro en el cual la dirección peronista prepara la defensa ante el Golpe y esta no se produce por falta de voluntad de las bases. Cabe preguntarse hasta qué punto estos sectores que busca movilizar son verdaderas bases peronistas o se trata de empleados públicos solo peronizados en forma superficial. Pero empleados públicos de la misma procedencia estaban a cargo de locales partidarios. En el mismo expediente se toma declaración a ocho empleadas de la Secretaría Técnica que cumplían funciones en distintas UB de Capital Federal, bajo las órdenes de la presidenta del PPF. Varias de ellas eran empleadas en la administración pública desde antes del peronismo y manifiestan ante la comisión investigadora que habían aceptado a disgusto cumplir funciones en las UB y que lo hicieron solo para evitar la cesantía. Ante la pregunta respecto a cuál fue su actitud ante el Golpe (la “Revolución” dirán los interrogadores), en todos los casos (siete, pues una empleada había cesado en agosto) cerraron los locales y se retiraron a sus domicilio. Difícil esperar otra cosa de alguien que figura como responsable político de un comité, pero solo es un empleado público.²⁰ De nuevo, podría pensarse si el disgusto con cumplir tareas en locales partidarios era real o es producto exclusivo del contexto del Gobierno militar bajo el cual se toma la declaración. Que el problema es real, más allá de la magnitud que tenga, lo muestra el caso de una de las empleadas que se opuso a trabajar en la

20 Ana María Rocío Facio de Otero, UB Alberdi 2439, fs. 62; fs. 66. Ester la Marine Saurraldes en UB Rivadavia 5161; fs. 136. Mercedes Tarrata, UB Carboho 722; fs. 137. Ida Valestra, UB de Berazategui; pág. sin foliar (entre fs. 137 y 138). Ana Rosa Zitta, UB Monroe 4347; fs. 139. María Mercedes Ramirez de Tiscornia, UB Almirante Brown 1201; fs. 140. Trinidad Ferrer, UB, Andrés Ferreyra 3599; fs. 143. Rosa Ida Barbara Misraca, UB Varela.

UB y que reclamó ser reintegrada a su puesto inicial. Ante su reclamo empieza a ser hostigada hasta que deja de trabajar en agosto de 1955. Mientras tanto, ella fue la subdelegada consista de la UB que tenía a cargo. Es decir, era la responsable dentro del PPF por dicho local partidario al tiempo que reclamaba su reintegro a anteriores funciones.²¹

Si bien lo ocurrido en la ESP es el caso más claro, tenemos otros indicios que operan en el mismo sentido. Jose de la Huerta, Jefe de la Policía de la provincia de Buenos Aires, dice que el 16 de septiembre se pensó en dar armas a gente de la CGT y en la administración pública en función de que el Ejército estaba disperso y la Policía contaba con pocos efectivos. Le habían dicho que saldría un decreto. Tanto por la Dirección Nacional de Seguridad como por el Gobierno de la provincia le llegó esta información y la orden de que mientras esperaba el decreto confeccionara listas de personas a incorporar. Por ello, habló con los organismos correspondientes, pero estos le dijeron que era difícil de realizar porque existía poco interés por incorporarse a esas fuerzas, además de poco entusiasmo (De la Huerta, 1955: fs. 84-89).

Rosario: la excepción que confirma la regla

Según Juan M. Vigo, ya antes del Golpe distintos dirigentes querían preparar en Rosario la resistencia. Por ello, él junto con Eduardo Artesano (ambos dirigentes provenientes del PC cercanos al peronismo) se entrevista con el Secretario gremial de la presidencia, para solicitar 300 ametralladoras “a fin de reforzar el armamento que, según se decía, estaba en poder de los obreros rosarinos” (Vigo,

21 Micaela Pariente Ruiz, quien cumplió la tarea de subdelegada de la UB calle Brandsen 2746, había cesado funciones en agosto de 1955, no estaba a cargo de local en septiembre, fs. 147.

1973: 134). Estas armas se las habrían dado a los obreros, en el intento golpista de junio, suboficiales de una fábrica militar cercana a Rosario. Pero en Casa Rosada, ahora, se les dice que la situación estaba controlada y la comitiva regresa a su provincia sin las armas requeridas. Vigo pasa unos días en Rosario, pero el 19 de septiembre se dirige a su casa en Santa Fe. Por lo tanto, el autor del principal testimonio citado para referir a la movilización de los obreros de Rosario no estuvo en esa ciudad durante la protesta. Su relato se basa en los sucesos que su compañero, Astesano, le contó posteriormente.

Al iniciarse el Golpe contra Perón, el 16 de septiembre, en Rosario el Partido Justicialista prepara una concentración para el sábado 17. Pero esta se levanta al declararse el estado de sitio, lo que demuestra que efectivamente las medidas tomadas desde arriba estaban dirigidas a desmovilizar a la clase obrera. Según los diarios, durante los días siguientes Rosario permanece en calma y con total acatamiento del estado de sitio.

El día 19 vuelven las actividades sindicales puertas adentro y sale un comunicado de la CGT contra los levantamientos de parte de las fuerzas armadas, agradeciendo a sus afiliados por la predisposición para la lucha contra los sublevados militares. El jefe de policía de Rosario niega que se hayan sublevado los militares en la ciudad y comunica que en la misma “reina la calma”. Mientras ocurren estos hechos en Rosario, en la capital del país Perón renunciaba a su mandato, información que llegaría a la ciudad portuaria recién el día 20, en el que se dan una serie de marchas en apoyo a la Libertadora. El diario *La Capital* habla de una ciudad tranquila y da cuenta de reuniones sindicales que informan acatamiento al estado de sitio.

A partir del 21 de septiembre Rosario se encuentra en estado de agitación. A nivel nacional asume Lonardi y Santa

Fe queda a cargo del general Enrique Lugand. Continúan en el centro las marchas en apoyo a la Libertadora. El jueves 22 de septiembre por la noche comienzan las acciones por parte de los trabajadores que habitan la periferia, hecho que coincide con el ingreso a la ciudad del Regimiento 11. Los diarios rosarinos informan que grupos de manifestantes en la periferia (zona sur y zona norte) buscaban llegar al centro. Los obreros son amedrentados por los militares, quienes amenazaron con tanques y camiones para “calmar” a los agitadores.

El diario *Crónica* del 23 informa de estos movimientos ocurridos en la madrugada: se producen marchas desde los barrios al centro en la madrugada, que son interceptadas por civiles. En particular se mencionan columnas de zona sur formadas por 150 personas, encabezadas por mujeres y niños a las que salen a enfrentarse civiles armados. Los vecinos denuncian complicidad policial con los manifestantes. Pero también indican que hubo registro de bombas de gas lanzadas desde el aire.

Si bien los testimonios orales, mediatizados por el libro de Vigo, indican la llegada del regimiento 11 como uno de los catalizadores de la protesta debido a la probada lealtad peronista de este regimiento, en el diario *Crónica* se informa que este regimiento desmiente su vinculación con los rebeldes.²²

El diario *La Acción* señala que los manifestantes del jueves realizan destrozos en la ciudad.²³ El viernes 23, desde la mañana, se concentran numerosos manifestantes que repudian la Libertadora. Estos se encuentran en la periferia; el diario *La Capital* resalta la zona sur, mientras *La Acción*

22 *Crónica*, 23-9-55. De hecho, el 24-9-55 el mismo diario informa que el regimiento 11 participa en la represión de la protesta.

23 *La Acción*, 25-9-55; el diario no sale el 24 de septiembre por cambiar de titularidad, por eso el 25 hace un racconto retrospectivo.

habla también de la norte. *Tribuna* dirá que esta última estuvo “controlada” por los manifestantes peronistas. Los distintos grupos que buscan llegar al centro son reprimidos por las fuerzas militares, que logran establecer “el orden” a través de gases lacrimógenos y apertura de fuego sobre los manifestantes. Como saldo, *La Capital* cuenta 25 muertos y 55 heridos; *La Acción* coincide en el número de heridos, pero solo contabiliza 15 muertos (*La Capital*, 25-9-1955; *La Acción*, 24-9-1955). El viernes se ve paralizada la actividad laboral en casi todas las ramas (industria, comercio, administración pública). Según el *New York Times*, a las 4 de la tarde hubo reportes de serios conflictos en los que peronistas armados volcaron autos en la calle y pintaron consignas, montando barricadas alrededor de las calles del Parque Independencia. Según la misma fuente, se movilizaron tanques a controlar la situación (*New York Times*, 24-9-1955).

El sábado 24, según *La Capital*, vuelven a salir manifestantes desde la periferia hacia el centro en apoyo a Perón. Solo un grupo logra llegar, pero se le corta el paso y es reprimido. El diario da cuenta de 3 muertos y 11 heridos. Según *La Acción*, el número de muertos del sábado superaría al del viernes. En la zona norte, en el barrio Lisandro de la Torre, formado en su mayoría por trabajadores del ferrocarril, del agua y la electricidad, políticos peronistas se reúnen con vecinos y organizan manifestaciones hacia el centro. Según la descripción del diario, políticos del Gobierno depuesto “se lanzaron a agitar a la barriada para lanzarlos en manifestaciones hacia el centro de la ciudad” (*La Acción*, 24-9-1955). En el operativo represivo se allanan y toman dos UB peronistas, una de ellas cercana a los talleres ferroviarios. Los manifestantes se vuelven a reunir en la zona norte el mismo sábado al mediodía, siendo otra vez amedrentados por los militares. En la zona de Barrio Parque (lindante con Parque Independencia), un grupo de personas busca levantar las

vías del ferrocarril, recibiendo la misma respuesta por parte de los golpistas. Durante todo el día se van a repetir acciones similares, todas con el mismo resultado.

Los militares refuerzan tropas, se hacen nidos de ametralladoras en varios puntos de la ciudad y se movilizan dotaciones de infantería. Se utiliza la Sociedad Rural (cerca a la zona de Parque Independencia donde se habían reportado barricadas e intentos de levantamiento de vías) como lugar de concentración militar. Los aviones del Ejército sobrevuelan desde el mediodía la ciudad con orden de abrir fuego. El diario *La Capital* da cuenta de ataques aéreos para “calmar” a los manifestantes. No hubo trenes ni colectivos el día sábado. En las emisoras de radio locales un desfile de líderes sindicales se dirige a sus bases pidiendo el retorno al trabajo. La Unión Ferroviaria y la Unión Tranviarios Automotor piden a sus afiliados que regresen a sus obligaciones. En el sindicato de metalúrgicos, el dirigente Jesús Lobato llama a la cordura. Son los mismos dirigentes que habían cuestionado en su momento las movilizaciones en contra del envío de tropas a Corea.

Esta información concuerda con la que aparece en el *New York Times* que señala la existencia de serias luchas callejeras en Rosario. Un chequeo incompleto de registros hospitalarios daría un saldo de 15 muertos y más de 50 heridos de gravedad. Se envió el Cuarto Regimiento de Caseros para reprimir. Militares ocuparon locales peronistas desalojando de allí a alborotadores tras desarmarlos (estimamos que se refiere a los locales allanados en el Barrio de Alberdi, según la crónica del diario *La Acción*). Desde la hora 1 de la tarde aviones empezaron a patrullar Rosario en forma constante, con la orden de disparar contra cualquier manifestación. En el gran taller ferroviario de la ciudad hubo un paro no declarado al que luego se sumaron los obreros de frigoríficos y los molineros. Las tropas mantenían el

control del centro, pero en los suburbios los trenes que llegaban desde Buenos Aires eran detenidos y se les separaba la locomotora. Lugand, a cargo del Ejército, ordenó disparar a todo el que estuviera en la calle después de las 8 de la noche. Patrullas motorizadas con tanques recorrían la ciudad. Más tarde Lugand modificó la amenaza, al informar que todo grupo de más de dos personas sería inmediatamente detenido (*New York Times*, 25-9-1955).

El domingo 25 se mantiene la represión por tierra y por aire, pero ahora parece contenerse a la población en sus barrios. Las manifestaciones que intentan llegar al centro controlado por las fuerzas militares son repelidas de forma extremadamente violenta. A la mañana son atacados tranvías. Las fuerzas represivas informan que hay tiradores emboscados en algunos edificios. Llegan a Rosario el ministro del Ejército, general Bengoa, con altos jefes militares, quienes se contactan con el comando del Primer cuerpo de Ejército y guarnición de Rosario y también con miembros de la delegación de la central obrera de esta ciudad. Después de deliberar junto a estos representantes del poder, la CGT comunica que compromete todos sus esfuerzos para que sus dirigentes sean respetados por todos los trabajadores de los gremios. La CGT pone en claro, también, que ningún miembro de la comisión directiva ni sus delegados han dispuesto el paro. El plenario llevado adelante por la central obrera resuelve, entre otras cosas, que los trabajadores vuelvan a sus tareas y que se libere a los obreros detenidos.

El lunes 26 se declara zona militar a Villa Constitución, ciudad que dista 57 kilómetros de Rosario. La medida es repudiada por parte de los obreros, quienes deciden llevar adelante actos callejeros. Desde el día del Golpe los obreros de Villa Constitución realizaban un paro. El diario *La Capital* explica la situación a partir del rechazo por parte de los trabajadores a volver a sus labores.

Ese mismo 26 encontramos la primera mención a los sucesos de Rosario en la prensa nacional: *La Razón* anuncia el cierre de un conflicto de cuyos inicios nunca había informado. Según este diario, el mismo se solucionó de inmediato una vez que llegó Bengoa y habló con los representantes obreros.

El martes 27, los diarios afirman que hay calma completa. El toque de queda fue levantado en todo el país excepto en Rosario y se normaliza la actividad en Villa Constitución. El 29 *Democracia*, bajo el título “Retoman el ritmo en fábricas locales”, informa que el 28 todas las fábricas de Rosario trabajaban con un cien por ciento de asistencia, algo que el Ejército se encargó de verificar. En la fábrica de metal Eureka, donde persistía el paro pero con otro motivo, este se resolvió con presencia del secretario del gremio.

Tucumán y Chaco

El caso de Tucumán y Chaco es significativo porque el análisis de los sucesos nos muestra que las fuerzas policiales no parecen simpatizar con el Golpe y limitan algunas de las manifestaciones de civiles en apoyo de la Libertadora. Es decir, se da uno de los factores que favorecieron el accionar de la clase obrera en Rosario y Villa Constitución. En Chaco incluso se verifica la tenencia de armas por parte de dirigentes gremiales y cierta actividad en la CGT; pese a ello, no hay registro de manifestaciones obreras en contra del Golpe.

La *Gazeta de Tucumán* informa el 22 de septiembre que se produjeron actos callejeros de adhesión al movimiento militar que quieren llegar a la plaza céntrica, pero soldados se lo impiden y los manifestantes acatan ordenadamente. Del mismo modo, estudiantes intentaron realizar un acto

celebratorio en la Universidad Nacional de Tucumán, pero no los dejaron. Las autoridades justifican su proceder aduciendo que quieren evitar una excesiva demostración “demócrata” (en alusión al movimiento civil a favor del Golpe) para evitar una contraofensiva peronista. Sin embargo, no resulta convincente.

El 23 hay un incidente cuando una columna de manifestantes a favor del Golpe pasa por el local y comedor de la Confederación Gremial Universitaria (CGU) desde cuyos balcones se gritan vivas a Perón, se insulta a la muchedumbre y se tiraron cáscaras de naranja y otros desperdicios y luego cascotes. El diario consigna también que podía verse que uno de los ocupantes del balcón sangraba en la frente (es decir, los proyectiles no habían sido solo de arriba hacia abajo como el diario parecía señalar). Ante esto llega la policía montada y protege a los estudiantes de la CGU. La montada impidió que los manifestantes hicieran destrozos, lo que los enojó puesto que querían una acción más enérgica de la policía contra los que según ellos eran los “agresores”.

Luego llega el Ejército y, en previsión de que los estudiantes del comedor estuvieran armados, hacen retirar al público. Entran al edificio y detienen a más de 20 estudiantes y, para evitar agresiones del público enardecido, los trasladan en camión militar custodiado a la policía, donde son liberados. El diario fue informado de que el procedimiento fue realizado “en salvaguarda de la vida de los estudiantes ya que era evidente el estado de ánimo de numerosas personas aglomeradas en los alrededores del CGU” (*La Gazeta de Tucumán*, 21-9-1955).

Mientras tanto en la Universidad reina cierta confusión puesto que el vicerrector a cargo aparentemente se niega a renunciar, y la Federación Universitaria del Norte (FUN) toma control de hecho de la Facultad a la espera de que se nombren nuevas autoridades. Ante esto, los empleados

dejan de ir al trabajo, el 24 el sindicato llama a concurrir a actividades, pero parece imponerse el criterio de la FUN de que solo asistan los administrativos contables a liquidar sueldos. Las referencias a la ausencia de personal administrativo pueden llegar a interpretarse como un paro no declarado, amparado por confusión y vacío de autoridad en la universidad.

La Razón del 24 de septiembre informa de la situación en Chaco. “Reacción en el Chaco ante una extraña actitud del gobernador” (*La Razón*, 24-9-1955) titula el diario. El gobernador de Chaco prohibió embanderar los edificios y realizar reuniones para festejar el triunfo revolucionario, aduciendo que no contaba con suficiente fuerza para proteger a quienes participaran. En la Universidad hubo una asamblea que nombró cinco personas para que le reclamara al Gobierno pronunciarse a favor de la Libertadora y reclamarle la intervención del diario *El Territorio*. También se decidió que si el Gobierno no satisfacía estos pedidos, lo denunciarían al comando revolucionario en Córdoba.

Se produce la entrevista y en ella el Gobierno insiste en que las marchas y embanderamientos podían generar rencor y reacciones y que no disponían de personal para mantener el orden, a lo cual los representantes de la asamblea responden que eso se debe a que los mismos funcionarios del régimen anterior mantienen puestos clave en la Policía. A su vez, les informan que van a embanderar igual. Se realiza una nueva asamblea en la que los asistentes portan escazapelas, y en la que se produce un momento de tensión porque la policía armada los rodea, pero al final se retira sin actuar.

En la misma provincia, en el Colegio Nacional se produce otro conflicto porque el rector se niega a retirar las fotos de Perón y su esposa, ante lo cual los alumnos no ingresan al establecimiento y se quedan afuera del mismo. Ante

ello acude la policía (el mismo jefe de policía se apersona en el lugar) y exhorta a los estudiantes a entrar a clases; ellos, en cambio, deciden irse en parejas y se quedan por los alrededores.

Por la tarde, en la Escuela Superior de Comercio que funciona en el mismo establecimiento, el director permitió que se cantara el himno, pero no autorizó a los alumnos a ausentarse para concurrir a la asamblea que se realizaba en la Universidad Popular. Los estudiantes que de todos modos concurrieron, cuando regresaron al Colegio lo encontraron cerrado.

En Chaco, pese a la actitud policial contra los estudiantes, no hay grandes movilizaciones obreras. *La Razón* del 21 de septiembre solo registra algunos desórdenes en la localidad de Sáenz Peña, donde hubo detenidos que poco después fueron liberados. La investigación realizada por las autoridades de facto a poco del Golpe dio cuenta de que el gobernador de la provincia hizo cierto reparto de armas. Dirigentes gremiales de UPCN y de La Fraternidad²⁴ declaran haber recibido armas para defender sus locales gremiales de posibles ataques comunistas. Mientras, otras declaraciones atestiguan haber visto gente armada en el techo de la CGT y del PPF y procedimientos del Ejército contra ellos. Respecto al operativo en la CGT, el testigo dice haber visto a 40 personas colocadas contra la pared.²⁵ Tenemos aquí un conato de resistencia por parte de dirigentes sindicales en contexto de apoyo de gobernador local y de fuerzas policiales, pero que no tiene eco en las masas.

24 FNRP, expte. 8419/55 y 8421; y FNRP, expte. 26/55, respectivamente.

25 FNRP Comisión Provincial Chaco, caja 8, expte. 8421. Un testigo dice que esto ocurre el 16 a la noche, pero otros testimonios no precisan fechas. Si la fecha fuera correcta, la represión del intento de resistencia se realiza bajo el mismo gobierno peronista.

Zona sur de Gran Buenos Aires, La Plata y su periferia

El diario *El Día* de La Plata del 17 de septiembre informó que la delegación seccional de la CGT dispuso paro al promediar la tarde del 16; desde las 4 de la tarde la paralización era absoluta. Pero, a las cero horas levantaron el paro, normalizándose la actividad laboral, a excepción de Ensenada y Berisso donde se mantuvo un paro total. Cabe señalar que en esta zona, al igual que en Mar del Plata, la población es amedrentada por las amenazas de la flota de bombardear distintos objetivos y hay evacuación.

El jefe de la Policía de la provincia confirma la versión sostenida por Godio respecto del envío desde La Plata a Capital de camiones con obreros que regresaron.²⁶ No hemos encontrado reportes de movilizaciones en La Plata y alrededores. En cambio sí hallamos dos referencias a algún tipo de actividad en la zona de Avellaneda. Entre las noticias de los sucesos argentinos del día 23 de septiembre, el *New York Times* indica que a las 5 de la tarde hubo reportes de disturbios en Avellaneda. Se situaron tropas en todos los puntos de entrada de Capital Federal y dos aviones navales sobrevolaron el distrito (Edward Morrow, 1955).

Al día siguiente, algún tipo de acción se repitió en el distrito puesto que el diario *Democracia* de Santa Fe indica que grupos armados de la Alianza Libertadora Nacionalista volvieron a producir desórdenes en un barrio de Avellaneda, siendo dispersados por las autoridades, pero que volvían a reunirse para ser dispersados de nuevo (*Democracia*, 25-9-1955).

Sin embargo estas concentraciones no parecen numerosas y, de acuerdo con otra publicación, no habrían afectado

26 Huerta señala que del envío de camiones se enteró recién cuando estos llegaron a Capital. Da a entender que había puestos de control para evitar el acceso a la ciudad. Señala que se comentó que Suarez, jefe de delegación local, llamaba a los obreros a subirse a los camiones, pero que él se quedó en La Plata. Testimonio de Jose de la Huerta, *op. cit.*, fs. 85-86.

la concurrencia obrera al trabajo. El diario *El Día* de La Plata publica el 25 un informe del Jefe de la Policía de Buenos Aires que asegura que solo en Lavallol y Monte Grande los obreros se retiraron del trabajo en algunas fábricas. En cambio, la situación general en el Gran Buenos Aires y La Plata era normal. Presenta como prueba las cifras de presentismo en Swift y Armour de Berisso y de La Negra de Avellaneda y llama a no seguir rumores (*El Día*, 25-9-1955).

Capital y Mar del Plata

El dato descollante en la capital del país no son las movilizaciones obreras sino la resistencia del grupo de derecha Alianza Libertadora Nacionalista, dirigido por ese entonces por Patricio Kelly. El *New York Times* indica que miembros de este grupo patrullaron armados las calles de la ciudad increpando a los transeúntes a que respondieran al grito “Viva Perón”. A su vez, es un hecho conocido la resistencia de, según las fuentes, entre 400 y 600 militantes de esta organización en su local central de la calle San Martín 398, local que fue atacado por dos tanques a la madrugada del 21 de septiembre.

Como ya señalamos, un diario menciona acciones de miembros de este grupo en Avellaneda. Por su parte, una fuente militar reporta que militantes de esta agrupación identificados con brazaletes visitaron regularmente el día 17 al jefe del arsenal de marina de Zárate, mientras que este estaba en manos leales.²⁷ Por lo que el grupo aparece como muy activo no solo en la Capital Federal. Además, este

27 Fondo Isaac Rojas, *Historia de las operaciones militares de la Marina de Guerra durante el movimiento revolucionario del 16/23 septiembre de 1955*. República Argentina, original secreto. Informes del Arsenal de Marina Zárate, se relatan continuas consultas de civiles de la CGT y de la ALN con el jefe del arsenal durante el 17 de septiembre (fs. 402).

sector que operó como fuerza de choque paraestatal durante el Gobierno peronista había conseguido armamento adicional después del fallido Golpe de junio (Furman, 2014).

El diario estadounidense que brinda bastante detalle de los sucesos de estos días en Capital Federal solo menciona las acciones de la Alianza. Como en otras ciudades, la iniciativa en las calles parecen tenerla quienes apoyan el golpe militar y la única acción que aparece por parte de los peronistas es defensiva: un grupo de trabajadores en la estación Belgrano del ferrocarril pelearon contra una multitud que intentó tirar abajo una estatua de Eva Perón. Una persona resultó muerta en medio de un tiroteo asociado (*New York Times*, 22-9-1955).

En Mar del Plata el 21 de septiembre una columna a favor del Golpe recorre las calles principales, ataca el hotel de obreros petroleros, destruyendo retratos, y se dirige a la comisaría donde libera presos políticos. La multitud también se dirigió a la CGT, rompieron las puertas, saquearon archivos, muebles y libros e hicieron con ellos una fogata en la calle. Luego repitieron la operación en la sede del partido peronista y de su sede femenina. En el recorrido fueron hostigados por tiradores aislados.

Un balance de Rosario

Si bien hay grupos armados y se montan barricadas en ciertos lugares, la actitud de la mayoría de las masas es otra y la protesta asume las características de una demostración pacífica. Es decir, se procura una reedición del 17 de octubre, una manifestación donde la gente ante la represión se dispersa, para luego volver a agruparse. Como señala Vigo: “En suma durante dos días el pueblo fue dueño de la ciudad. Todo estaba en sus manos. Pero no hizo otra

cosa que recorrer las calles, cambiar tiros con los comandos gorilas y vivir a Perón” (1973: 84). No se observa un combate callejero propiamente dicho, a excepción de la zona de Parque Independencia donde hay registro de barricadas. Si en un momento la policía parece desbordada es porque no se decide a actuar y en gran medida simpatiza y fraterniza con los manifestantes, como el mismo Vigo reconoce. Por ello, deben traerse regimientos de otras provincias para reprimir.

En conjunto, la protesta no parece poder caracterizarse como insurreccional, aunque hay elementos que expresan claramente esa tendencia. Si bien el relato de Balvé habla de incendios, estos no aparecen reflejados en los diarios relevados, aunque se mencionan destrozos durante la primera jornada de protesta. Es cierto que hay sectores puntuales que se han procurado algún tipo de armamento, incluso con cierta antelación al Golpe. Pero se trata de grupos particulares, en principio localizados en el barrio Independencia, o francotiradores desperdigados por la ciudad. A su vez, la dirección de este sector más decidido aparece, al menos en parte, en manos de una fracción originada en un desprendimiento del Partido Comunista. Algunos de los gremios involucrados son los mismos que con su movilización frenaron en 1950 el envío de tropas a Corea que Perón había decidido.

Hay un fuerte contraste entre los relatos cuasi mitológicos del hecho y la información que puede verificarse. Beatriz Balvé repite la visión que el mismo peronismo construyó de sí: destaca la espontaneidad y el protagonismo de los sectores más sumergidos de la clase obrera, los descamisados que, según ella, se dirigirían al centro con su torso desnudo. Si bien reconoce las movilizaciones de otras zonas y la presencia de dirigentes, resalta como hito Villa Manuelita donde, según testimonios, trabajadoras se opusieron a que se retirara un cartel que decía “Todos los

gobiernos reconocen a Lonardi, Villa Manuelita no lo reconoce”, que en otras versiones es una bandera armada con guardapolvos que reza “Los yanquis, los rusos y las potencias reconocen a la Libertadora, Villa Manuelita no”, frase que después aparecería en distintas pintadas callejeras. En algunas versiones las mujeres desarman a los soldados y les devuelven las armas cuando salen de la villa. La versión de Perón es igualmente mítica: los únicos volantes anónimos en los que hemos encontrado referencias llamando al paro se distribuyeron en Rosario.

Al relevar los diarios aparece en primer plano el rol de los obreros del barrio Lisandro de la Torre (ferroviarios, de la luz y el agua) y los militares se ven necesitados de ocupar locales sindicales de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM). Los ferroviarios figuran como los primeros en realizar el paro y ocupan un puesto de vanguardia en varios sentidos. Esta participación de los obreros mejor pagos, con cierto grado de organización y con cierta vinculación con la izquierda, es algo que la mitología peronista ha pasado por alto. Es más, una de las versiones del supuesto cartel-bandera de Villa Manuelita tiene una connotación anticomunista. La protesta tampoco dura una semana (arranca el 22 a la noche y se extiende hasta el 25 de septiembre). Asume la forma de paro con movilización y los enfrentamientos callejeros son marginales (al igual que los francotiradores aislados). Otras medidas como el ataque a tranvías o trenes corresponde a formas de acción orientadas al cumplimiento del paro, no a la toma de centros neurálgicos de poder. Esto no resta heroísmo a las acciones realizadas, pero modifica el carácter político de las mismas. Por otra parte, gran parte de los muchachos peronistas que se manifiestan en Rosario no son los descamisados que retrata Balvé en forma tan pintoresca, sino obreros organizados de los principales gremios de la ciudad. En el mismo sentido puede leerse el desarrollo de

la protesta en Villa Constitución que había sido declarada ciudad en 1950 y que ya se estaba convirtiendo en un importante polo industrial. Allí el paro tiene mayor duración que en Rosario. Al igual que en el relato oficial del 17 de octubre, se oculta la presencia de la vieja guardia sindical; en el de la manifestación de Rosario se borra el protagonismo de núcleos organizados vinculados al activismo que habían mantenido una mayor autonomía respecto de las directivas de Perón.

Fuera de la zona de influencia de Rosario, estos hechos no se reproducen: en el resto del país no encontramos registros de paro ni de manifestaciones importantes de peronistas. El caso excepcional de Rosario se explica por la existencia de un núcleo organizado que prepara la resistencia y la aquiescencia inicial de las fuerzas del orden que eran peronistas a nivel local. Este último factor también marca probablemente uno de los límites de la protesta: parte de la ausencia de medidas ofensivas más decididas puede explicarse, quizás, por la espera de que la situación la resolviese en gran parte el mismo Ejército. En cambio, los elementos más avanzados de la protesta se nos aparecen como el embrión de una nueva etapa: una en la cual la clase obrera refuerza su tendencia insurreccional y donde la izquierda recupera su protagonismo en el seno de la clase obrera.

Epílogo. De héroes, víctimas y victimarios

La historia del general Enrique Lugand, un verdugo del movimiento obrero transmutado en héroe de la resistencia

Todas las fuentes marcan como responsable de la represión en Rosario al general Enrique Lugand quien da las órdenes más feroces contra el levantamiento. Es el responsable

directo de 50 muertos obreros, obreros que salieron a combatir el Golpe de 1955. La cifra de 50 obreros es un dato estimativo en base a los reportes que cada día publican los diarios. Una cifra exacta solo podrá conocerse cuando se habilite el acceso a los archivos del Ejército. Tampoco, por ahora, podemos conocer los nombres de estas personas. En 1974 una investigación encarada por la revista *Noticias* dio con uno de ellos: “de esos hombres y mujeres que pusieron el pecho desnudo frente a las ametralladoras, *Noticias* solo ha podido rescatar —hasta ahora— un nombre. Una foto de la época reproduce un humilde altar con flores erigido en la esquina de Corrientes y San Lorenzo, con un letrero que decía aquí murió Manuel Abella. Era canillita” (*Noticias*, 22 de agosto de 1974).

Uno creería que el responsable de semejante masacre sería repudiado por el movimiento obrero argentino y por el partido peronista. Sin embargo, hoy un pasaje de Rosario lleva su nombre. Cada año en ese pasaje se rinde homenaje a los héroes de la Resistencia (*Página/12*, Rosario, 9-6-2006). Sorprendentemente, Lugand es considerado uno de ellos por su participación en el frustrado levantamiento de Valle.

El hecho parecía demasiado extraño para ser cierto. Por eso, pensamos la posibilidad de que hubiera otro general del mismo nombre y fuimos a cotejar esta información en los archivos del Ejército a los que teníamos acceso. El legajo de Lugand muestra que él está en Rosario desde el 21 de septiembre con el cargo que aparece mencionado en los diarios al referir a sus órdenes represivas. El mismo legajo también da cuenta de su participación en el levantamiento de Valle, el juicio que se le hace y la posterior amnistía. Se trata, sin dudas, de la misma persona.²⁸ El general Enrique

28 Ejército Argentino, Dirección General de Personal, legajo del General de Brigada Enrique Lugand, núm. sellado 14314, fs. 233-234. Archivo General del Ejército.

Lugand, camarada de Valle y héroe de la resistencia peronista, es el responsable directo de la represión en Rosario en septiembre de 1955.

Bibliografía

Balvé, B. (2005). *Septiembre de 1955. La guerra civil*. En línea: <<http://goo.gl/sLMneR>> (publicado: 10-9-2005).

_____. (2009). Acerca de tres insurrecciones proletarias de la Argentina contemporánea, *Razón y Revolución*, núm. 19.

Balvé, B. y Beatriz, B. (2005). *El '69. Huelga política de masas: rosariozo, cordobazo, rosariozo*. Buenos Aires, RyR-CICSO.

Furman, R. (2014). *Puños y pistolas. La extraña historia de la Alianza Libertadora Nacionalista*. Buenos Aires, Sudamericana.

Godio, J. (1985). *La caída de Perón*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.

Luna, F. (2013). *Perón y su tiempo*, tomo 3. Buenos Aires, Sudamericana.

Page, J. (1984). *Perón, segunda parte, (1952-1974)*. Buenos Aires, Vergara.

Vigo, J. M. (1973). *La vida por Perón. Memorias de un combatiente de la resistencia*. Buenos Aires, Peña Lillo.

Fuentes

Ejército Argentino, Dirección General de Personal. Legajo del General de Brigada Enrique Lugand, n. sellado 14314, fs. 233-234. Archivo General del Ejército.

Fondo Fiscalía Nacional de Recuperación Patrimonial (AGN-AI-FNRP). Comisión 31, caja 4, expte. 100159, núm. de archivo 35.

_____. Comisión Provincial Chaco, caja 8, expte. 8419/55 y expte. 8421/55.

_____. Comisión 48, caja 11, expte. 23763.

_____. Testimonio de Jose de la Huerta, 22 de diciembre de 1955, comisión 47, caja 3, expte.19.

_____. Testimonio de Tessaire, comisión 8, caja 7, expte. 103667.

Fondo Isaac Rojas. *Historia de las operaciones militares de la Marina de Guerra durante el movimiento revolucionario del 16/23 septiembre de 1955*. República Argentina, original secreto. Informes del Arsenal de Marina Zárate.

Morrow, E. (1955). Lonardi is sworn at Buenos Aires; rule by "law" due: First Cabinet, *New York Times*, 24 de septiembre.

Perón, J. D. (1955, 31 de agosto). En línea: <<http://constitucionweb.blogspot.com.ar/2009/10/y-cuando-uno-de-nosotros-caiga-caeran.html>>.

Revistas, diarios y periódicos

Democracia, 25-9-1955.

El Día, 25-9-1955.

La Acción, 1955.

La Capital, 1955.

La Gazeta de Tucumán, 21-9-1955.

La Razón, 24-9-1955.

New York Times, 1955.

Página/12, Rosario, 9-6-2006, en línea: <<http://www.pagina12.com.ar/diario/suplementos/rosario/15-3899-2006-06-09.html>>.

Revista Noticias, 1974.

Capítulo 3

De la reforma a la reacción

La burocracia sindical durante el tercer gobierno peronista (1973-1976)

Ianina Harari y Julia Egan

El tercer gobierno peronista se inscribe en el ciclo de lucha de clases abierto en mayo de 1969 con el Cordobazo y clausurado en 1976 con el golpe militar encabezado por Videla. La huelga política de masas de Córdoba (Balvé *et al.*, 2006) marcó el inicio de un proceso revolucionario signado por la irrupción de una fuerza social revolucionaria que contenía a una fracción minoritaria pero creciente de la clase obrera y la pequeña burguesía. Esta fuerza social se enfrentaba a otras dos fuerzas acaudilladas por diferentes fracciones burguesas: la reformista y la contrarrevolucionaria.

La fuerza social contrarrevolucionaria involucraba a las capas más concentradas de la burguesía industrial y a la burguesía agraria. En rigor, en esta alianza se disputaban dos programas: el liberal y el desarrollista (Sanz Cerbino, 2016). El primero era levantado por la burguesía agraria que nunca logra imponerse políticamente. El segundo es el programa de la burguesía industrial más concentrada (nacional y extranjera) y es el que hegemoniza la fuerza social contrarrevolucionaria. Es este programa el que va a

imponerse con el Golpe de 1976 para resolver la crisis. La resolución implicaba, en lo económico, avanzar en la liquidación de capital sobrante y en el ataque a las conquistas obreras para abaratar la fuerza de trabajo. Ambas tareas requerían de una victoria política al interior de la burguesía (derrotar a las fracciones mercadointernistas que dominaron el tercer gobierno peronista) y sobre la clase obrera (liquidando la fuerza social revolucionaria, imponiendo una derrota física y moral).

La fuerza social reformista estaba conformada por una fracción mayoritaria de la clase obrera y las capas más débiles de la burguesía argentina. Su representación corporativa era ejercida por la Confederación General del Trabajo (CGT) y la Confederación General Económica (CGE), respectivamente. La expresión política de esta alianza era el peronismo, con su programa de defensa del mercado interno. El regreso del peronismo al poder, con Cámpora primero, Perón e Isabel después, implicó la victoria de esta alianza, que aunque efímera, mostró los límites y la inviabilidad de su programa. No solo fracasó en términos económicos, sino también políticos.

La burguesía argentina confió que el regreso de Perón, el máximo cuadro del reformismo, tras dieciocho años de proscripción, lograría contener la agudización de la lucha de clases. El régimen bonapartista tomó una serie de medidas tendientes a regimentar al movimiento obrero que tuvieron como principal artífice a los sindicatos peronistas. Sin embargo, aunque inicialmente logró una desmovilización parcial de la clase obrera, el gobierno peronista no logró clausurar el proceso abierto en 1969 ni resolver la crisis económica, tensando las contradicciones al interior de la fuerza reformista. Es así que la fuerza contrarrevolucionaria logra acaudillar al conjunto de la burguesía y a una fracción de la clase obrera.

Este proceso explica, entonces, las posiciones que va adoptando la dirección peronista de la CGT, vulgarmente conocida como burocracia sindical. Sobre el concepto de *burocracia* las definiciones tienden a polarizarse entre verla como expresión directa de los intereses y la conciencia de la clase (consenso pleno), o bien como un conjunto de dirigentes alejados de las bases, con intereses propios que se perpetúan mediante la constante represión y eliminación de la democracia interna (coerción plena). Cualquiera de estas posiciones es idealista, porque se abstrae del proceso histórico que da lugar a la consolidación de los dirigentes sindicales peronistas, de la dinámica de la lucha de clases y del movimiento de la conciencia obrera, que nunca es estática.

En los estudios históricos se ha señalado que el proceso de burocratización nace en la década de 1960 con el vanderismo y como resultado de la derrota de la resistencia peronista en 1959 (Salas, 1990) y el reflujo en el que se sumergió el movimiento obrero (James, 1988). Aunque se ha indicado también que los inicios del proceso de burocratización pueden rastrearse bajo los primeros gobiernos peronistas, dado por las nuevas leyes que regulan el accionar de los sindicatos y la negociación colectiva, el proceso de afiliación masiva y el desarrollo de los sindicatos como prestadores de beneficios sociales (Doyon, 2006). En el capítulo precedente, al analizar la actuación de la dirigencia sindical en el levantamiento del paro y las manifestaciones de Rosario contra la Libertadora, Kabat, Fernández y Costes aportan evidencia en este mismo sentido.¹

1 Cabe señalar que ambos enfoques no son necesariamente opuestos ya que, quienes resaltan el proceso de burocratización desde la derrota de la resistencia peronista, plantean también que ese proceso de luchas había dado lugar a la emergencia de liderazgos sindicales que desplazaron a las burocracias sindicales que no habían sabido o querido responder al Golpe de Estado (James, 1988). Si es contrastante la posición de Schneider que niega la derrota de la resistencia, así como la existencia de una renovación de la dirigencia sindical pos 1955 (Schneider, 2006). En la visión de

Para el período que nos atañe, los estudios centrados en las direcciones sindicales han analizado su relación con el gobierno y con la estructura peronista (Torre, 1983; Fernández, 1985; Abós, 1986; James, 1988), o de manera lateral con lo que se llamó el “nuevo sindicalismo” (Jelin, 1977). Las investigaciones recientes sobre el movimiento obrero en este período han tendido a centrarse en el accionar de los partidos de izquierda en las comisiones internas y la importancia que cobran estos organismos en la conflictividad del período (Lobbë, 2006; Basualdo, 2006; Werner, 2007).

Ahondar en la investigación histórica sobre el accionar de la dirigencia peronista en los sindicatos permite avanzar en una explicación sobre el rol de la burocracia sindical en el proceso abierto en 1969. En ese sentido, el período escogido resulta fundamental porque implicó la llegada al poder del programa que los sindicalistas peronistas defendían y la exacerbación de los enfrentamientos en el seno de la clase obrera y, por ende, de los sindicatos.

La defensa del Pacto Social

Las elecciones de marzo de 1973 dieron por finalizada la dictadura de la Revolución Argentina y marcaron el inicio de tres años de gobiernos peronistas, con el triunfo de Cámpora. La CGT festeja la asunción de Cámpora como un mojón más en el camino de la “liberación nacional”.

Y así como ayer luchamos, aplicando los métodos que consideramos más convenientes en cada circunstan-

James, lo importante es la idea de los condicionantes históricos de la emergencia del proceso de burocratización, que asocia a momentos de reflujo de la lucha política. Por el contrario, la posición de Schneider tiende a negar la existencia de momentos de alza y reflujo de la lucha de clases y a relativizar los aspectos más negativos de la burocracia sindical.

cia, fieles a una estrategia irrenunciable que apuntaba a la toma del poder por parte del pueblo, para asegurar un destino propio y una realización integral, con el mismo vigor y la misma decisión, estamos prontos ahora y dispuestos, para la enorme y enaltecida tarea de la reconstrucción y la liberación nacional. (CGT, 1973: 279-280)

La exaltación del gobierno de Cámpora puede observarse en varias publicaciones. Por ejemplo, en la revista del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) se lo tilda de revolucionario y se lo compara con la Revolución de Mayo: “Nace otra esperanza argentina a los 163 años de la primera revolución” (SMATA, 1973a). Este tipo de comparaciones van a mantenerse con la asunción de Perón y luego serán utilizadas como defensa del gobierno de Isabel.

La CGT se prestaba a ser uno de los pilares del régimen y a garantizar la implementación de las políticas peronistas. Las referencias a la liberación nacional, la independencia económica, junto con el repudio al imperialismo y las empresas extranjeras, serán una constante en el discurso de los sindicalistas peronistas, así como a la conciliación con los empresarios nacionales, lo cual cobrará importancia en la firma del Pacto Social. De hecho, este es uno de los puntos del plan de gobierno de Cámpora: “Acordar una ‘tregua política y social’ cuyos alcances en el campo socio-económico serán trazados de común acuerdo con las organizaciones representativas de los trabajadores y del empresariado nacional” (SMATA, 1973a).

El Pacto Social se firmó entre el gobierno, la CGT y la CGE en junio de 1973 y consistió en un acuerdo de congelamiento de precios y salarios por dos años. Esto implicaba la suspensión de las negociaciones colectivas previstas por

la ley 14.250, ley por cuya vigencia los sindicatos peronistas batallaron durante la Revolución Argentina. Ahora, en cambio, defendían la interrupción de paritarias en pos de la unidad nacional y la pacificación social. En una editorial de la revista de la Federación de Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE) se defiende la firma de este pacto:

Nadie puede negar que las FF.AA. actúan mancomunadamente con el pueblo del cual forman parte en la tarea de la recuperación, como así también, que el pacto socio-económico instrumentado entre las Confederaciones General del Trabajo y la Económica establece una forma armónica de convivencia entre los sectores empresariales y los trabajadores. [...]

Es menester dejar perfectamente en claro, frente a determinadas críticas, que las políticas antiinflacionarias que precedieron a la actual coyuntura económica, se basaron en bruscas devaluaciones de nuestro signo monetario, rebajas de aranceles para la importación y una técnica eficientista orientada en el sentido de producir una concentración económica compulsiva. Sus víctimas fueron los trabajadores y la pequeña y mediana industria. Las nuevas pautas han permitido detener la inflación, originando en muchos rubros una rebaja en los precios, sin haber apelado a devaluar el peso, obligando a una nivelación en el valor del dólar paralelo. Por otra parte lejos de disminuir los aranceles aduaneros, se prohibió la importación de productos, aplicando en forma estricta la ley "compre nacional". (SUPE, 1973: 4-5)

La búsqueda del gobierno de frenar la inflación a costa del salario obrero fue, entonces, acompañada por la CGT

que durante los siguientes dos años se encargó de defender la vigencia del acuerdo a pesar de que ello implicó un retraso salarial.

La retórica peronista

La tarea de “reconstrucción” y “pacificación” no solo implicaba la concordancia entre clases sino también librar una batalla al interior de la clase obrera tanto contra las corrientes revolucionarias como contra la izquierda peronista. El sindicalismo peronista es el encargado de regimentar a la clase en el ámbito laboral para que acepte las políticas del gobierno en cuanto a congelamiento salarial. En ese sentido, el ataque al clasismo resulta crucial para evitar las “malas influencias”. En los documentos, solicitadas y periódicos de los sindicatos peronistas aparecían cientos de referencias a las corrientes combativas a las que tildaban de “antipatria”, “enemigos de la nación” y otros adjetivos similares. La conducción sindical peronista se presentaba como custodio de los intereses nacionales:

Nuestra CGT, identificada plenamente con la idiosincrasia de los trabajadores argentinos, ha rechazado en forma permanente todos los intentos que, bajo pretextos sectariamente clasistas, intentaron aislarla de quienes, sin ser específicamente trabajadores, confluían hacia objetivos similares de carácter nacional [...]. Aportará, pues, el número, la unidad, la disciplina y la organización; con esa amplitud que los trabajadores, históricamente, han puesto siempre al servicio de las altas causas nacionales, seguros de que su destino es, absolutamente, el propio destino del país. (CGT, 1973: 279-280)

Los sindicalistas peronistas no negaban cierto enfrentamiento de intereses, pero sí que los mismos lleven a enfrentamientos de carácter clasista, denostando las experiencias socialistas:

De esta forma ha de llegarse a la democracia integrada donde solo ha de haber lucha de intereses teniendo en cuenta una real escala de valores para obtener una escala jerárquica, pero jamás una lucha clasista. Los importadores de este pensamiento no han analizado las tremendas contradicciones en que ha caído el propio socialismo marxista. Por eso ha dicho el General Perón que los ultraizquierdistas ya no tienen cabida, ni siquiera detrás de la cortina de hierro; sirven nada más que de material de exportación. (Unión Ferroviaria, 1973: 15)

Por momentos el ataque al clasismo asumía la forma de un discurso paternalista hacia la juventud, que sería manipulada por intereses foráneos y no comprendería la lucha que los dirigentes sindicales habrían librado en los dieciocho años de proscripción peronista.

La juventud, sin caer en generalizaciones que siempre encierran una gran injusticia, fue elegida como conejo de indias para este nuevo y desgraciado experimento [...]. Caer en el infantilismo revolucionario, incurriendo en el peor de los pecados, la soberbia, es una manera de entorpecer el cambio. El sectarismo, la violencia sin justificación, el desprecio por los méritos de los demás, el juzgamiento indiscriminado de la conducta de quienes también han brindado testimonio de autenticidad política, suele conspirar contra la legitimidad de una prédica. ¿Por qué ese afán de señalar a

los dirigentes obreros como expresiones de una burocracia sindical? Los sostenedores de ese “slogan” no han advertido que aun a pesar de sus defectos, quienes detentaron la conducción de las organizaciones gremiales, constituyeron el más sólido bastión contra el avance de ideas disociadoras del ser nacional, alzando las banderas de un nacionalismo popular, ante el cual fracasaron los imperialismos económicos e ideológicos. Lo que realmente molesta, no son los contactos que pudieron haber mantenido con funcionarios del régimen en carácter estrictamente sindical, sino el no haber cedido durante dieciocho años a la política de intimidación de los poderosos ni al canto de sirena del marxismo. Con errores o sin ellos, los dirigentes obreros no claudicaron jamás en la defensa de los principios que hacen a la esencia misma de la argentinidad. De ahí surge el encono antipatria. (SUPE, *op. cit.*)

Además de tildar al marxismo y al socialismo como ideologías extrañas a la clase obrera y a la nación, es muy usual encontrar otro recurso retórico: la apelación al cristianismo del pueblo argentino. Cabe aclarar que la Iglesia católica que se había lanzado en los años treinta a cristianizar al pueblo argentino obtuvo un gran apoyo de la dictadura de 1943 y luego del gobierno de Perón (Zanatta, 1999). Pese a los conflictos de fines del segundo mandato de Perón frente a la consolidación de la Iglesia católica en el país, el peronismo se ha identificado siempre con la ideología cristiana cuya prédica sobre la armonía social resulta un instrumento ideológico poderoso para aplacar la lucha de clases y promover la conciliación.

No necesitamos apelar a concepciones extrañas, ni corrientes filosóficas que repugnan nuestra tradición

cristiana, para concretar la revolución anhelada, de esencia, raigambre, estilo nacional. No vamos a instituir la lucha de clases como fin, sino suprimir el enfrentamiento sectorial, para crear las condiciones económicas que permitan una distribución equitativa de las riquezas y bienes producidos [...]. Cristo redimió a la criatura humana y le señaló el camino de su igualdad y dignidad predicando el amor entre hermanos. Así debe ser nuestra revolución Justicialista. (SUPE, 1973: 5)

La defensa del “verdadero peronismo” contra el peronismo de izquierda, en especial Montoneros, es otro caballito de batalla de la burocracia para buscar ahuyentar a las bases de estas organizaciones.

Ayer el pueblo, con sus organizaciones de base, ganó la guerra que le permitió recobrar la soberanía de sus decisiones. Hoy, en presencia de un país desbastado, es menester encarar algo que resulta más difícil: triunfar en la paz. La segunda y la tercera de las verdades peronistas señalan que todo círculo político es antipopular y, por lo tanto, no es peronista, como así también, que aquellos que utilizan el nombre del movimiento para servir una fracción, tampoco pueden llamarse justicialistas. Mantener rótulos excluyentes, sentirse más peronista que otro, tal como reza la séptima verdad, es apartarse de los principios y empezar a convertirse en oligarca. (SUPE, 1973: 13)

La virulencia discursiva se va a exacerbar tras las acciones de algunas organizaciones peronistas de izquierda contra dirigentes sindicales. Algunas de las organizaciones de izquierda que optaron por la estrategia de lucha

armada se daban como tarea el asesinato de dirigentes sindicales a los que tildaban de traidores, acción que se denomina “ajusticiamiento”. Durante 1973 se dieron dos de estos hechos. El primero fue a Dirck Kloosterman, secretario general de SMATA, unos días antes de la asunción de Cámpora. La acción fue realizada por las Fuerzas Armadas Peronistas. El SMATA no ahorró palabras para dejar en claro que era intención suya y del gobierno combatir a estas organizaciones:

Un grupo de prostituidos mentalmente al servicio del antipueblo, genuinos representantes de la ultra izquierda y derecha reaccionaria, han quitado la vida a un hombre, que como Dirck Kloosterman, Secretario General de SMATA, representa el más puro sentimiento de nacionalidad que postulamos todos los argentinos con vocación de Patria y que sólo nos hemos impuesto como mandato supremo el que nace de lo más profundo de la historia, y tiene en su contenido, toda una filosofía nacional, popular y cristiana, que se sintetiza en todo un pueblo en el tránsito a su liberación definitiva.

Estos alienados, pagados con la vil moneda que le reportan los secuestros de inocentes criaturas, asesinos de la peor calaña, vergüenza de los argentinos y todos los hombres decentes que habitan esta tierra, persisten invocando al pueblo que lo repudia, en consumir crímenes incalificables, en el desesperado esfuerzo de desconocer el pronunciamiento histórico del 11 de marzo, que consagró a un gobierno que sepultará inexorablemente las pretensiones enfermizas, lo que éstos mal nacidos representan; las minorías reaccionarias conjuradas entre sí en un abierto atenta-

do contra el proceso que nos hemos impuesto y que tiene ya el camino elegido, la revolución nacional de los argentinos y para los argentinos. [...] Las sombras tenebrosas en las cuales se ocultan estos conjurados contra la Nación, desaparecerán con la claridad del nuevo amanecer argentino que estamos pronto a presenciar y sus horrendas figuras, quedarán sepultadas definitivamente. (Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor, 1973a)

En septiembre de ese año tiene lugar otra de estas acciones, el ajusticiamiento de José Ignacio Rucci, secretario general de la CGT, en manos de los recientemente fusionados Montoneros y FAR. Ante este hecho, el Consejo Superior Peronista (CSP) decide declarar el estado de guerra contra las organizaciones de izquierda, explicando que los ataques que sufre el peronismo son de diversa índole:

El asesinato de nuestro compañero José Ignacio Rucci y la forma alevosa de su realización marca el punto más alto de una escalada de agresiones al Movimiento Nacional Peronista, que han venido cumpliendo los grupos marxistas terroristas y subversivos en forma sistemática y que importa una verdadera guerra desencadenada contra nuestra organización y contra nuestros dirigentes. Esta guerra se ha manifestado de diversas maneras;

a. Campaña de desprestigio de los dirigentes del Movimiento buscando ridiculizarlos mediante slogans, estribillos o insultos, atribuyéndoles defectos personales e imputándoles “traición” al general Perón o a la doctrina. (CSP, 1973)

El CSP impartió una serie de directivas para enfrentar los ataques no solo con acciones defensivas sino también ofensivas:

Ese estado de guerra que se nos impone, no puede ser eludido, y nos obliga no solamente a asumir nuestra defensa, sino también a atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión. En ello va la vida del Movimiento y sus posibilidades de futuro, además de que en ello va la vida de sus dirigentes. (CSP, 1973)

Entre esas directivas se indicaba que debía iniciarse una campaña de propaganda de la doctrina peronista, delimitándola del marxismo con el cuidado de no incluir ninguna referencia textual de este ni siquiera como forma de polémica:

2. Reafirmación doctrinaria: Debe realizarse una intensa campaña para difundir y reafirmar los principios doctrinarios del Movimiento, esclareciendo sus diferencias fundamentalmente con el marxismo. En esta campaña no se admitirá intromisión alguna de elementos promarxistas, con pretexto de polémica u otro similar, y se les excluirá de toda reunión y del acceso a todos los medios de difusión del Movimiento. (CSP, 1973)

Por otro lado, se exigía de todos los sectores una pronunciación pública contra los grupos de izquierda y su participación activa en todas las acciones que se llevaran adelante:

4. Definiciones: Los grupos o sectores que en cada lugar actúan invocando adhesión al peronismo y al general Perón, deberán definirse públicamente en

esta situación de guerra contra los grupos marxistas y deberán participar activamente en las acciones que se planifiquen para llevar adelante esta lucha. Asimismo, deberán acatar estas directivas. (CSP, 1973)

Es en este marco que debe entenderse la agudización de los ataques a la izquierda desde las publicaciones de la burocracia peronista. En este sentido, en las páginas de la publicación de SMATA vuelve a atacarse a estas organizaciones sin mencionarlas.

Agentes miserables de los intereses antinacionales, no pudieron perdonarle al pueblo argentino el haber votado por la liberación y contra la dependencia. Mercenarios sin patria y sin doctrina, fronterizos de la más baja ralea criminal, no pudieron perdonarle el haber contribuido con su lucha apasionada al retorno del General Perón y al triunfo definitivo de los ideales justicialistas. (SMATA, 1973b)

Como vemos, la burocracia no ahorra descalificativos hacia las organizaciones a las que atacaba, buscando desprestigiarlas. Esto acompañaba la campaña ideológica en defensa del peronismo. Por supuesto, todo ello iba de la mano de la represión física y la eliminación de la disidencia sindical.

La regimentación sindical y los ataques al clasismo

El regreso de Perón a la Argentina, el 20 de junio de 1973, marcó el inicio de los ataques de la derecha peronista, entre la que se incluía la burocracia sindical, hacia la izquierda del movimiento, y al clasismo en general. En efecto,

una vez de regreso en el poder, Perón buscó fortalecer a los dirigentes sindicales contra los jóvenes “imberbes”. La masacre de Ezeiza fue una primera muestra del ataque que estaba planificándose. La Juventud Peronista (JP) acusó a la burocracia de haber participado del ataque y la mantanza. Ante esta imputación, el SMATA les dirige una carta defendiéndose:

Frente a vuestras declaraciones sobre los sucesos de Ezeiza inculcando al movimiento obrero. El Plenario de Delegados y Comisiones Internas de Reclamos de Capital Federal y Gran Buenos Aires del SMATA reunido en la fecha resolvió invitar a los integrantes de esa Mesa a un nuevo Plenario [...] A efectos de discutir de frente y no acusando por comunicados a los hechos reales de Puente 1, nuestro Gremio con plena autoridad para hacerlo al estar presente miles de trabajadores mecánicos que marcharon con sus gargantas enronquecidas de vivir al Líder de los Trabajadores. (SMATA, 1973c)

Los problemas con la izquierda no estaban solo en las calles, sino al interior de los sindicatos, donde organizaciones peronistas y no peronistas fueron ganando influencia. Por este motivo, en los informes de congresos de delegados pueden encontrarse menciones a activistas opositores, a quienes se ataca por atentar contra la “unidad del gremio”. Un ejemplo puede encontrarse en las resoluciones de la Junta de mayo de la SUPE.

3° Denunciar como improcedente y anárquica, la actitud asumida por grupos de afiliados que, desconociendo la legitimidad del mandato de quienes ejercen la conducción en los diversos planos jerárquicos de

la organización, y en abierta rebeldía contra normas legales y estatutarias, procuran dividir al gremio en mérito a inconfesables apetencias de tipo personal y maniobras políticas divorciadas del sentimiento de la mayoría de los Petroleros del Estado.

4° Hacer suyas las palabras del GRAL. JUAN DOMINGO PERON, en su mensaje del 1° de mayo a los trabajadores, en el sentido de que debemos fortalecer nuestra unidad, porque el látigo del infortunio siempre se descarga sobre las espaldas de los humildes. Conscientes de esa verdad los Delegados de Exploración, no escatimarán ningún esfuerzo, para defender la unidad monolítica del Gremio, oponiéndose enérgicamente a toda acción que suponga fomentar la desunión o alterar las normas legales que los afiliados tienen para hacer conocer sus inquietudes. El caos solo beneficia a los enemigos de la clase trabajadora. (SUPE, 1973: 39)

El mismo sindicato tuvo que hacer frente a las críticas recibidas en ocasión de la negociación de la recategorización del personal, por considerarlas insuficientes, advirtiendo que no se trataba de una forma de eludir el Pacto Social para conseguir aumentos salariales.

No faltan quienes con absoluta irresponsabilidad, haciendo gala de una falsa demagogia, crean expectativas infundadas entre el personal, procurando imágenes que no corresponden a la realidad. Las Plantas Orgánicas se discutían entre gremio y empresa, no como medio para otorgar aumentos masivos, sino para adecuarlos de forma tal que desaparecieran desniveles irritantes entre quienes cumpliendo funciones

similares, según el lugar geográfico en que desempeñaran sus tareas, se encuadraban en categorías distintas. (SUPE, 1973: 32)

El sindicato ferroviario también debió llamar la atención frente a la conflictividad creciente en el gremio, ante la cual advierten que desautorizan las medidas de fuerza.

El día 3 de octubre ppdo. el compañero Adolfo Medina, en nombre del Cuerpo Directivo del gremio, envió a todas las Comisiones Ejecutivas, Comisiones de Reclamaciones, etcétera, el siguiente telegrama: “Comisión Directiva UNIÓN FERROVIARIA desautoriza todo movimiento de fuerza inconsulto, atentatorio tranquilidad y seguridad gobierno del pueblo. Imponerse instrucciones impartidas Superior Gobierno sobre drásticas medidas a adoptar frente a toda tentativa subversión. Adolfo Medina, presidente”. (Unión Ferroviaria, 1973: 22)

En el sindicato automotriz los conflictos con las corrientes de izquierda eran frecuentes, sobre todo en la provincia de Córdoba, donde el clasismo había ganado posiciones. En julio de 1973, el Plenario de Delegados y Comisiones Internas de Capital Federal y Gran Buenos Aires se pronuncia frente al avance del clasismo en general y en particular sobre la situación en Córdoba, atacando a la figura de Agustín Tosco:

El Plenario de Delegados y Comisiones Internas de Capital Federal y Gran Buenos Aires del SMATA resuelve:

Hacer pública nuestra advertencia a quienes pretenden dividirnos con una campaña de bajos procedi-

mientos repartiendo volantes en las fábricas con el apoyo de armas de fuego, son elementos enemigos del pueblo argentino que responden a intereses foráneos y también internos, y que buscan crear caos entre la clase trabajadora.

Por otra parte, SMATA señala otro enemigo del pueblo, Agustín Tosco, individuo perturbador de la clase obrera que aliado con sus agentes marxistas y sus secuaces gorilas, no respeta ni la memoria de nuestro Secretario General Dirck Henry Kloosterman, lanzándole injurias que demuestran una mente retorcida y cargada de odio y oscuros designios. [...] SMATA, como ya lo hizo estará siempre alerta y dispuesto a rebatir a quienes quieran dividirlo y manchar la trayectoria con palabras o ataques solapados, empleando si es necesario todo el peso de la ley y la razón, sin recurrir a la fuerza, porque sabemos que ese es el último recurso de la clase trabajadora, ahora más unida que nunca ante el ataque de sus enemigos comunes. (SMATA, 1973c)

Cómo eliminar la oposición de izquierda en los sindicatos preocupaba al sindicalismo peronista. Por eso, presentó en julio de 1973 un proyecto para reformar la ley 14.455 que regulaba las asociaciones profesionales.² La ley fue aprobada en noviembre y otorgó a la dirigencia de los sindicatos mayor poder para regimenter sus organizaciones. Para ello, se fortalecía el monopolio de representación sindical, negando la personería a más de un sindicato por actividad.

2 Un análisis de esta ley y otras que formaron parte del arsenal legal para la represión del activismo sindical, como la reforma del Código Penal y la Ley de Prescindibilidad Laboral, puede verse en el trabajo de Guido Lissandrello en el capítulo 4 de este mismo volumen.

Por otro lado, se otorgaba a las conducciones centrales la potestad de intervenir seccionales o filiales. Asimismo, podían interrumpir los mandatos de comisiones internas. También se amplió el período del mandato de los dirigentes. Todo ello fortalecía el poder de las conducciones sindicales sobre el conjunto del gremio y le otorgaba herramientas para aplacar los focos de conflicto y “depurar” los sindicatos.

Estas herramientas legales le fueron de gran utilidad a la burocracia, en especial en aquellos gremios donde la izquierda había ganado mayor peso. En Luz y Fuerza se arremetió contra la filial cordobesa encabezada por Agustín Tosco. En la reunión de secretarios generales del gremio en noviembre se discute sobre la negativa de la filial cordobesa a acatar las resoluciones del congreso del sindicato y se decide finalmente desafiliarla, como puede leerse en las resoluciones:

3° Rechazar los agravios innecesarios y negativos contenidos en la mencionada nota del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba por no ser ese el lenguaje que enriqueció una trayectoria y una historia sindical de nuestro gremio que es motivo de legítimo orgullo y fuente de prestigio que nuestra organización posee en el concierto sindical nacional e internacional.

4° En cuanto a que el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba reitera y ratifica todas sus actitudes y posiciones en torno a este problema y ello configura una respuesta negativa a la resolución del 51° Congreso Extraordinario, la reunión de Secretarios Generales resuelve determinar el estricto cumplimiento de la mencionada resolución, lo que significa de hecho la suspensión de la afiliación del Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba a la Federación Argentina de Tra-

bajadores de Luz y Fuerza. (Federación Argentina de Trabajadores de Luz y Fuerza, 1973b: 7)

En SMATA, las acciones contra la disidencia fueron moneda corriente en los años siguientes. En noviembre se realiza la VI Asamblea General Extraordinaria de Delegados Congressales, en la cual sancionaron a varios delegados de fábricas de Buenos Aires y a la seccional Córdoba. Los delegados sancionados fueron trece. A nueve de ellos, pertenecientes a la empresa Deutz, los acusaron de no haber respetado el paro que se realizó en homenaje a Kloosterman y por agraviar su memoria. El resto de las sanciones no fueron justificadas por ningún hecho particular sino simplemente con una alusión abstracta a la “inconducta gremial” o a “la gravedad de las falta cometidas” (SMATA, 1973d). A todos ellos los expulsaron del gremio, con lo cual perdían su inmunidad gremial y las empresas quedaban habilitadas para despedirlos. El sindicato se disponía a realizar una purga en el movimiento obrero con vías de recuperar la plena hegemonía y disciplinar a los trabajadores, en sintonía con las tareas que se propuso Perón a su regreso: cerrar el proceso revolucionario.

Los mecánicos hemos estado siempre en la defensa del país y nuestra organización. A Kloosterman lo asesinaron a traición por defender esas banderas, nosotros no vamos a esperar más sentados que la traición y la contrarrevolución marxista destruya nuestro pueblo. Estamos dispuestos a darles batalla en todo el país, estén donde estén, en las fábricas, seccionales, talleres, etcétera, y con la movilización activa de los mecánicos auténticos, que sólo reconocen una bandera, la Azul y Blanca, y un líder, el Teniente General Juan Domingo Perón y una Doctrina, la Justicialista, SMATA eli-

minará para siempre de nuestras filas a quienes han actuado y actuarán al servicio de la anarquía internacional con apoyo de adentro y afuera. (SMATA, 1974a)

El principal blanco de ataque de la conducción nacional del gremio de mecánicos fue la seccional Córdoba, que había sido ganada por la lista marrón en 1972. Salamanca, quien encabezaba esta lista, era militante del Partido Comunista Revolucionario y había fundado el Movimiento de Recuperación Sindical. Las relaciones de la comisión directiva del gremio con la seccional Córdoba se endurecieron con el triunfo de la lista clasista y se estableció un enfrentamiento abierto. La central del gremio realizaba una fuerte campaña contra Salamanca, en especial por su llamado a votar en blanco y no haber apoyado al peronismo en las elecciones (SMATA, 1973e), a pesar de la cual la conducción cordobesa contaba con apoyo de las bases. En noviembre de 1973, en ocasión de la VI Asamblea General Extraordinaria de Delegados Congressales, en la cual se había sancionado a otros activistas, también se declara una sanción a la seccional Córdoba. Las acusaciones a esta seccional, y a la persona de Salamanca en particular, se refieren a cuestiones sindicales menores y a cuestiones políticas:

a) Tergiversa la verdad en el Plenario Nacional de Secretarios Generales del 18 de enero de 1973, al afirmar que la Comisión Ejecutiva no tenía prevista la realización de ninguna Asamblea General de Afiliados para el día siguiente, cuando en realidad así lo había resuelto la Asamblea General de Afiliados de la Seccional celebrada el día 12 del mismo mes. Es evidente que falsea la verdad para impedir que el Consejo Directivo Nacional y el Plenario concurren a esa asamblea, tal como se había decidido.

b) Injuria de palabra al Consejo Directivo Nacional en la Asamblea General de Afiliados celebrada finalmente en Córdoba el 19 de enero de 1973 y tolera que otros oradores difamen e insulten a los integrantes del mismo, a pesar de que en ese momento se encontraban detenidos, juntamente con los Secretarios Generales del Interior, que habían viajado en cumplimiento de lo resuelto por el Plenario. En lugar de movilizar al gremio en defensa de los presos, los calumnia y levanta la asamblea sin esperar la incorporación de los mismos.

c) Descarta una resolución del Consejo Directivo Nacional y del Plenario Nacional de Secretarios Generales que disponen constitución de una comisión surgida del seno del Plenario, llamada a esclarecer tales sucesos y deslindar responsabilidades. Tanto en el Plenario de Delegados, realizado en Córdoba el 23 de marzo de 1973, como en la Asamblea General de Afiliados de la Seccional, celebrada el mismo día, se reiteran los insultos y las falsas imputaciones contra el Consejo Directivo Nacional, dándole además amplia difusión por la prensa y otros medios a las especies calumniosas.

d) Propiciar públicamente el VOTO EN BLANCO, durante toda la campaña electoral previa al 11 de marzo de 1973, con el objeto de impedir el triunfo popular y mantener el continuismo de la dictadura militar, colocándose de esa manera directamente en contra del General Perón.

e) Idéntica actitud repite en ocasión de la campaña electoral realizada en Córdoba, con motivo de la se-

gunda vuelta a la que debió concurrir la ciudadanía en el mes de abril del año en curso.

f) Con motivo de las elecciones del 23 de septiembre del corriente año en la que todo el gremio se pronunció activa y abiertamente en favor de la candidatura del Teniente General Perón, porque a través de ésta se jugaba el destino nacional, repite su actitud negativa y reticente, colocándose de esa manera claramente en contra del sentimiento de la inmensa mayoría de los compañeros mecánicos de Córdoba y de los trabajadores del país.

g) Descarta lo resuelto por el Consejo Directivo Nacional al decretar éste el 23 de mayo en curso, un cese general de actividades en señal de duelo por el asesinato del compañero DIRCK HENRY KLOOSTERMAN, repitiendo públicamente injurias contra el compañero fallecido. Los trabajadores de Córdoba se adhieren igualmente al paro y abandonan las tareas, desoyendo las directivas de la Comisión Ejecutiva.

h) Participa activamente de la ocupación de la CGT de Salta —edificio donde tiene instalada su sede la seccional del SMATA en dicha provincia— y contribuyó con su acción y con su prédica documentada en declaraciones públicas, a la división del movimiento obrero organizado en dos centrales obreras regionales.

i) A partir del 18 de enero de 1973 sistemáticamente, el Secretario General se abstiene de concurrir a los Plenarios de Secretarios Generales, dejando de cumplir de ese modo una responsabilidad personal ineludible. (SMATA, 1974b: 88-89)

De estos puntos, sólo 4 ('a', 'b', 'c', 'i') podrían considerarse como problemas estrictamente gremiales, aunque se trata de cuestiones menores y que están relacionadas con la disidencia que la seccional cordobesa mantenía respecto de la central. Los puntos 'g' y 'h' aluden a una cuestión de política sindical y refieren a derechos democráticos. Lo más grave consiste en los puntos 'd', 'e' y 'f'. Éstos refieren a diferencias exclusivamente políticas, ajenas a lo sindical, que eran utilizadas por la dirección nacional para apelar a la adhesión que la figura de Perón despertaba entre los trabajadores. Evidentemente, estas acusaciones no correspondían a un ámbito gremial en donde se supone la existencia de libertad política, cuestión que la conducción nacional pretendía restringir. Pero, como eran conscientes del apoyo que Salamanca tenía en Córdoba, el gremio se limitó a declararse en estado de alerta y a constituir una comisión investigadora que realizara un seguimiento de la regional.

El gobierno de Isabel

Tras la muerte de Perón, el 1 de julio de 1974, asume su mujer, Isabel. Para ese momento la represión a la fuerza social revolucionaria había escalado con la actuación de la Triple A, comandada por López Rega. Frente a la asunción de Isabelita, el sindicalismo peronista cierra filas en torno al gobierno, defiende a la presidente como líder y llama a respetar el verticalismo peronista:

Pero la guerra de Liberación Nacional continúa. La auténtica guerra de Liberación de todas las presiones monopólicas, del Este y del Oeste. De todos los extremismos, de la izquierda y de la derecha. [...] Toca a to-

dos nosotros —a todos, incluso a aquellos que alguna vez merecieran el reproche del caudillo por mantener desavenencias e incomprensiones y en esto conviene aclarar que estamos hablando de peronistas, no de los que usan o usaron la camiseta y que, por otra parte, ya están perfectamente identificados— apretar filas en torno a la figura de Isabel y poner lo mejor de nuestra capacidad en pro del logro de las liberaciones ansiadas. [...]

Los que ponen en tela de juicio esa verticalidad —pretendiendo ponerse la camiseta de nuestro movimiento— no son más que mercenarios al servicio de intereses antiargentinos. (Unión Ferroviaria, 1974: 3)

Por su parte, las 62 Organizaciones emiten un comunicado en donde manifiestan su apoyo a Isabel y denostan a quienes se enfrentan al gobierno:

El triunfo del pueblo, logrado con una profunda vocación nacional en las urnas, pretende ser desvirtuado por los personeros de filosofías que nos repugnan.

Son los infiltrados que el Teniente General Perón marcó a fuego en históricas jornadas, identificándolos como mercenarios al servicio de intereses foráneos. Nuestro líder alabó nuestra prudencia. Destacó nuestro anhelo de paz que hizo que evitáramos hacer tronar el escarmiento.

Pero hoy debemos echar las cartas sobre la mesa. Porque seríamos cómplices de la iniquidad de esos pigmeos que juegan a la contrarrevolución si nos mantuviéramos en silencio. [...]

Sin embargo, debimos chocar con la prédica y la disociación de los que se suman a la conjura antinacional y que estarán permanentemente al servicio de los imperialismos que quieren someternos. (Unión Ferroviaria, 1974: 9)

Uno de los puntos sensibles que generaba descontento en las bases era la vigencia del Pacto Social. La CGT comenzaba a sentir la presión del reclamo por el aumento salarial.

Tanto la Confederación General del Trabajo, como su Comité Central Confederal y las 62 Organizaciones han dado reiteradas pruebas de ese propósito de permanente servicio al interés supremo de la Nación. Lo concretamos en el Pacto Social, la máxima expresión de entendimiento entre las fuerzas que hacen a la vida misma del país.

Ese Pacto Social fue la coincidencia plena de trabajadores, empresarios y Estado en la búsqueda de un objetivo común: el de la reconstrucción nacional. Justamente por eso no aceptamos que ninguno de los firmantes desvirtúe su esencia como así tampoco que haya quienes, usando inconsistentes reivindicaciones, pretendan sabotear el sacrificio de millones de argentinos.

Expresar una vez más nuestra solidaridad con el Pacto Social como herramienta óptima para alcanzar la reconstrucción nacional, destacando que es inexcusable responsabilidad de todos los firmantes dar cumplimiento a ese histórico compromiso nacional. (*Ibidem*)

En este comunicado también dedican algunos párrafos a la situación del sindicalismo en Córdoba, donde la izquierda

peronista y la revolucionaria habían alcanzado posiciones importantes, en la Unión Tranviarios Automotores (UTA), la primera, y en el SMATA, la segunda.

El peronismo cordobés, transformado hoy en pauta del acontecer político nacional, es la ratificación más absoluta de esa conciencia ortodoxa y verticalista que es calidad inexcusable de nuestro movimiento.

En las elecciones de la Seccional cordobesa de la Unión Tranviarios Automotores, los compañeros de base desplazaron a los que se autotitulaban “combativos” para respaldar a quienes, en verdad, respetan y cumplen con nuestra doctrina.

En el ficticio problema creado por seudos dirigentes de la seccional Córdoba del SMATA, los agentes de la provocación solo vieron las espaldas de los trabajadores de verdad en el “famoso” paro activo que solo sirvió para llenarlos de ridículo.

Nosotros rechazamos todo tipo de sectarismo. Queremos, como lo quiso Perón, que en la Argentina de hoy lo mejor que tenemos sean los propios argentinos.

Es por ello que nos alegra que el pueblo, el verdadero pueblo, repudie así a los aventureros que únicamente pueden ambicionar encaramarse a un tambaleante liderazgo, usando la intranquilidad y la anarquía apátrida. (*Ibidem*)

Como mencionamos, el conflicto entre la conducción nacional del SMATA y la seccional cordobesa venía desde 1972, pero se exacerbó luego de la reelección de la lista marrón.

A mediados de 1974, en SMATA se producen elecciones tanto para los cargos nacionales como de las comisiones seccionales. El SMATA impugnó los comicios de la seccional cordobesa, aduciendo que los padrones utilizados no eran los que había confeccionado la comisión electoral, sino los presentados por el comité ejecutivo cordobés. Sin embargo, como se detectaron pocos casos en los que aparecerían irregularidades, las elecciones se dieron por válidas y se declaró ganadora a la lista marrón, encabezada por Salamanca (SMATA, 1974b). Es decir, que la retórica peronista contra las posiciones políticas de Salamanca no impidieron que su lista fuera reelecta.

El enfrentamiento va a precipitarse cuando ese año la seccional Córdoba decide emprender un plan de lucha por aumentos salariales. Tanto las medidas de fuerza tomadas por esa regional, huelgas y paros, como los aumentos salariales violaban el Pacto Social que regía. Las medidas de fuerza fueron declaradas ilegales y la seccional rechazó la conciliación obligatoria. El Consejo Directivo Nacional aprovechó esta situación, expulsó a la Comisión Ejecutiva cordobesa e intervino el gremio, tal como lo facultaba la nueva Ley de Asociaciones Profesionales (SMATA, 1975). En la justificación a la expulsión, aparece nuevamente la apelación a la doctrina justicialista:

Todos los mecánicos del país por amplia mayoría tomaron la decisión de expulsar a la Comisión Ejecutiva de la Seccional Córdoba por haber equivocado, reiteradamente, el camino de liberación y reconstrucción nacional en el que estamos todos comprometidos, por la patria, por Perón y por Isabel Perón, la presidente de los argentinos [...] ya era de notoriedad en todos los órdenes del país, que la huelga que se estaba propiciando en Córdoba era contrarrevolucionaria, es

decir que atentaba contra todos los principios legales, gremiales y argentinos. (SMATA, 1974c)

La conflictividad obrera y la influencia de la izquierda en el seno de la clase iban en aumento, lo que suscitaba una respuesta en directa proporción. La burocracia no escatimaba palabras para atacar al clasismo, apelando a la figura del infiltrado y anunciando su voluntad de eliminarlos de sus filas.

... todavía existen los enemigos dentro del país; están los que pregonaron la violencia y los que la practicaron; están los de izquierda y los de derecha. Todos ellos existen y viven dentro del país. Lo que sucede es que se han replegado, para rearmarse y embestir en el momento oportuno. Y están también los que se visten de peronistas [...] que al grito de "¡Viva Perón!" están destruyendo nuestras propias organizaciones sindicales. [...] Ustedes tengan la absoluta seguridad que toda esta conducción va a cuidar celosamente que dentro de nuestras filas puedan existir infiltrados. Si los detectamos y los comprobamos, los aplastaremos todas las veces que sea necesario. (Unión Ferroviaria, 1975: 6-7)

Los meses de junio y julio de 1975 fueron cruciales, debido a la reacción obrera al Rodrigazo y al intento del gobierno de no homologar los convenios firmados, desconociendo las negociaciones paritarias. Ante la presión de las bases, los sindicatos se ven obligados a convocar a paros, pedir la aplicación de la Ley de Convenciones Colectivas y reclamar aumentos salariales. La burocracia no podía quedarse de brazos cruzados porque ello implicaría perder terreno frente a las corrientes de izquierda que estaban ganando

peso en las comisiones internas y cuerpos de delegados. En varias zonas del Gran Buenos Aires se habían conformado coordinadoras interfabriles que articulaban la lucha de diferentes fábricas que dirigían organizaciones de izquierda (Lobbë, 2006; Colom y Salomone, 1998). En este contexto, el 27 de junio la CGT convoca a un paro, tras el cual el gobierno decide homologar los convenios colectivos. Sin embargo, el sindicalismo peronista buscó presentar esta medida como un apoyo de las bases a la CGT y al gobierno, como puede leerse en la revista de SMATA:

La jornada histórica del 27 de junio, más allá de las pretendidas sutilezas de algunos minúsculos sectores, dejó en claro que los trabajadores apoyaban a la compañera Isabel, a la Confederación del Trabajo, pero que, más allá de los nombres, no alentaban la prosecución de una línea dentro de la cartera económica, como la que regía por entonces. (SMATA, 1975)

El SMATA firmó en los convenios una escala salarial unificada para todas las terminales ya que la negociación, que siempre se realizaba de forma descentralizada por empresa, se realizó en forma conjunta. Esto implicó que los aumentos salariales firmados no repercutieran de la misma forma en todas las fábricas, ya que en algunas los salarios eran mejores que en otras. Esto suscitó el descontento de los obreros de Ford, que formaron un comité de reclamos con vistas a presionar a la comisión interna. Los trabajadores de la planta se negaron a convalidar el aumento salarial firmado, el cual no alcanzaba a compensar el alza inflacionaria desatada por el Rodrigazo. Desconocieron la autoridad de los delegados del SMATA e iniciaron una huelga. El SMATA, junto al presidente de Ford y el subsecretario de Seguridad, Héctor García Rey, miembro de la Triple A, decidieron

declarar ilegal la huelga y despedir a 300 trabajadores, entre los que se encontraban activistas gremiales opositores. José Rodríguez intentó justificar esta medida aduciendo que el paro había sido organizado por una minoría:

Acá hemos dicho que nadie saca los pies del plato, pero hay una fábrica, Ford, que sacó los pies del plato. Pero no lo sacaron los delegados de los trabajadores, los sacó un grupo de gente organizada en concomitancia con la empresa y grupos golpistas [...] la huelga de Ford es ilegal porque el Consejo Directivo no la respeta. (SMATA, 1975)

El auge de la conflictividad obrera en 1975 convenció a la burguesía de organizar el golpe militar contrarrevolucionario que será ejecutado el 24 de marzo de 1976. El ataque al clasismo por parte del sindicalismo peronista va a continuar y finalmente va a ser coronado con la confección de listas negras que varios sindicalistas entregaban a las empresas y a la dictadura militar.

Conclusiones

Los tres años de gobierno peronistas estuvieron signados por la agudización de la lucha de clases en el marco de la apertura, en 1969, de un proceso revolucionario. El crecimiento de la izquierda peronista y revolucionaria en el seno de la clase obrera fue la principal preocupación de la burguesía argentina, que buscó en Perón un dique de contención a la creciente conflictividad obrera, esperando poder restaurar la plena hegemonía. El máximo cuadro de la fuerza social reformista, artífice del bonapartismo de 1945, era el encargado de resolver la crisis orgánica en la que se

sumergía la Argentina. Pero la clausura de esta situación no podía resolverse como en sus anteriores gobiernos, en los cuales las condiciones económicas daban otro aire a la capacidad estatal de intervención. Perón había venido a cerrar el proceso por derecha. Es en este punto donde el apoyo del gobierno en la burocracia sindical cobra importancia. Los dirigentes sindicales se ubicaban en la derecha del movimiento peronista y fueron los encargados de purgar los sindicatos. Por ello, el ataque a los activistas de izquierda fue constante en todo el período.

La dirigencia sindical defendió acérrimamente las políticas del gobierno, en especial del Pacto Social. Este acuerdo resultaba crucial como medida para intentar aplacar la inflación y la conflictividad. Por ello los sindicalistas no dudaron en apoyarla, a pesar de haber reclamado por años que se respete la vigencia de la ley que regula las negociaciones colectivas. La apelación al discurso de la unidad nacional y el llamamiento a la pacificación del país fueron algunos de los argumentos que se esgrimían para defender la medida. Junto con ello, se buscó desacreditar a quienes se oponían a ella exaltando el nacionalismo, tildando a las corrientes de izquierda de opositoras a los intereses nacionales, cristianos y populares que defenderían los obreros junto a Perón. Se presentaban, así, como gendarmes de la nación, del movimiento peronista y de la clase obrera, contra aquellos que atentaban contra sus intereses. Todo ello fue parte de una batalla ideológica que los sindicatos peronistas desplegaron contra las corrientes marxistas y peronistas de izquierda en el seno de la clase obrera, en la que no ahorraron tinta ni argumentos para ganar la conciencia de las bases y mantenerlas en el redil peronista.

Pero los ataques a los activistas de izquierda no fueron solo verbales, dado que su influencia seguía creciendo. A la represión ideológica se sumaba la represión física. La

eliminación física del enemigo comenzó con la masacre de Ezeiza y siguió un curso ascendente con la creación de la Triple A y otras organizaciones de choque paraestatales. La tarea formal de los sindicalistas era la de desterrar la oposición por izquierda en los gremios. Para ello apelan a diferentes medidas, en especial sanciones disciplinarias, algunas por motivos absurdos, pero otras son abiertamente por oponerse a directivas políticas del sindicato. En función de fortalecer el poder de la dirigencia sobre las estructuras sindicales, la burocracia peronista impulsa la reforma de la Ley de Asociaciones Profesionales, cuya aprobación le otorgó mayores prerrogativas para controlar sus gremios y expulsar de ellos a la izquierda. Esto tuvo particular importancia para disciplinar seccionales, filiales o comisiones internas combativas.

Finalmente, tras la muerte de Perón, queda en evidencia que el gobierno no estaba en condiciones de aplacar la lucha de clases, destruyendo a la fuerza social revolucionaria. Por ello, la salida golpista va ganando consenso y así la fuerza social contrarrevolucionaria logra acaudillar al conjunto de la burguesía y a las mismas organizaciones obreras que hasta entonces defendían el programa reformista, como la CGT.

Bibliografía

- Abós, A. (1986). *La columna vertebral, sindicato y peronismo*. Buenos Aires, Hyspamérica.
- Balvé, B., Murmis, M., Marín, J., Aufgang, L., Bar, T., Balvé, B. y Jacoby, R. (2006). *Lucha de calles, lucha de clases. Elementos para su análisis (Córdoba 1971-1969)*. Buenos Aires, RyR-CICSO.
- Basualdo, V. (2006). Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina: los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. En *Engranajes*, núm. 5.

- Colom, Y. y Salomone, A. (1998). Las *coordinadoras inter-fabriles* de Capital Federal y Gran Bs. As. 1975-1976. En *Razón y Revolución*, núm. 4.
- Doyon, L. M. (2006). *Perón y los trabajadores: Los orígenes del sindicalismo peronista, 1943-1955*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Fernández, A. (1985). *Ideologías de los grupos dirigentes sindicales (1966-1973)*. Buenos Aires, CEAL.
- James, D. (1988). *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina, 1946-1976*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Jelin, E. (1977). *Conflictos laborales en la Argentina, 1973-1976*. Buenos Aires, CEDES.
- Löbbecke, H. (2006). *La guerrilla fabril. Clase obrera e izquierda en la Coordinadora de Zona Norte del Gran Buenos Aires (1975-1976)*. Buenos Aires, RyR.
- Salas, E. (1990). *La resistencia peronista: la toma del Frigorífico Lisandro de la Torre*. Buenos Aires, Centro Editor de América Latina.
- Sanz Cerbino, G. (2016). La lógica del enemigo. Los programas de la burguesía argentina y sus límites, 1955-1976. En *Razón y Revolución*, núm. 29, pp. 151-198.
- Schneider, A. (2006). *Los compañeros. Trabajadores, izquierda y peronismo, 1955-1973*. Buenos Aires, Imago Mundo.
- Torre, J. C. (1983). *El gigante invertebrado. Los sindicatos en el gobierno, 1973-1976*. Buenos Aires, Centro de Editor de América Latina.
- Werner, R. y Aguirre, F. (2007). *Insurgencia obrera en la Argentina 1969-1976*. Buenos Aires, IPS.
- Zanatta, L. (1999). *Perón y el mito de la nación católica*. Buenos Aires, Sudamericana.

Fuentes

- Confederación General del Trabajo (CGT) (1973). *Argentina Liberada*.
- Consejo Superior Peronista (1973). *Documento reservado*, 1 de octubre de 1973. Citado en *La Opinión*, 2-10-1973.
- Federación Argentina de Luz y Fuerza (1973a). *Contacto*, núm. 90, mayo.

_____ (1973b). *Contacto*, núm. 95, octubre-noviembre.

Federación Sindicatos Unidos Petroleros del Estado (SUPE) (1973). *Petróleo Argentino*, núm. 74, agosto-septiembre.

Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) (1973a). *Avance*, núm. 17, mayo.

_____ (1973b). *Avance*, núm. 21, septiembre.

_____ (1973c). *Avance*, núm. 19, julio.

_____ (1973d). *Avance*, núm. 23, noviembre.

_____ (1973e). *Memoria y Balance*.

_____ (1974a). *Avance*, núm. 24, enero.

_____ (1974b). *Memoria y Balance*.

_____ (1974c). *Avance*, núm. 29, septiembre.

_____ (1975). *Memoria y Balance*.

Unión Ferroviaria (1973). *El Obrero Ferroviario*, núm. 839, octubre.

_____ (1974). *El Obrero Ferroviario*, núm. 843, agosto.

_____ (1975). *El Obrero Ferroviario*, núm. 845, enero-febrero.

Capítulo 4

Represión dentro (y fuera) del movimiento peronista (1973-1974)

Guido Lissandrello

Reunido con representantes del amplio espectro de partidos políticos legales que existían en la Argentina, en noviembre de 1973 Perón señaló:

Lo que quería despertar es el deseo de que seamos todos amigos y vengamos a discutir los problemas entre nosotros, y que en medio de esos problemas consideremos que defendernos nosotros es defender el sistema. Porque los que atacan el sistema no lo atacan en forma directa; nos atacan a nosotros que somos representantes del sistema. [...] debemos tender a que los enfrentamientos se resuelvan con un cambio de gobierno y no con un cambio de sistema. (Perón, 1974: 189)

Con esas declaraciones el por entonces presidente de la Argentina no hacía más que reconocer el papel que cumplía en favor de la burguesía frente al proceso revolucionario en curso. El Cordobazo de mayo de 1969 había inaugurado una nueva etapa política, signada por la

intervención directa de las masas en las calles, la ruptura con el reformismo de capas minoritarias de la clase obrera y la emergencia de una fuerza social revolucionaria que amenazaba la continuidad del capitalismo argentino (Sartelli, 2007: 89-ss.). Frente al ascenso de esta fuerza, la burguesía debió ensayar mecanismos para contenerla y eliminarla. La apertura democrática y el retorno del peronismo en 1973 fue una de las maniobras que logró reavivar las ilusiones reformistas de buena parte de la clase obrera y llevar el proceso a un impasse. El breve ascenso de los ingresos por exportaciones entre 1973 y 1974 permitió sostener una tibia política de recupero salarial, que tomó forma en el llamado “Pacto Social”, y dar rienda a las aspiraciones de un capitalismo “nacional y popular”, que vendría a recuperar el “fifty-fifty” del “peronismo clásico”. Política cuyas propias limitaciones se hicieron manifiestas en su colapso hacia fines de 1974.

Sin embargo, la coyuntura que se abre en 1973 no debe pensarse en contraposición directa con aquella que inaugura la dictadura de 1976. No se trata de un primer momento de consenso que luego abre un momento represivo. Consenso y represión conviven en simultáneo como mecanismos de dominación. Este capítulo busca echar luz sobre la faceta represiva del gobierno que encabezó Perón entre 1973 y 1974. Nos concentramos, en particular, en la coerción que debió ejercer sobre su propio movimiento, en virtud de que allí se desarrollaba una organización, Montoneros, cuyo programa reformista representaba un obstáculo para la estrategia bonapartista. Clausurar el proceso requería no sólo eliminar del terreno político a las organizaciones revolucionarias sino también a las reformistas, que tenían cierta encarnadura en la clase obrera, y cuyo programa de “liberación nacional” no estaba en los planes de Perón.

Represión institucional

El crecimiento acelerado de Montoneros desde 1972 presentó una seria amenaza para las estructuras del movimiento peronista, amenaza que se tornó más severa cuando se lanzó la Juventud Trabajadora Peronista (JTP), frente sindical montonero que buscaba disputar la dirección de la burocracia sindical peronista en las bases obreras. La reacción del líder y su movimiento inicialmente fue de contención y subordinación, para pasar luego a la lisa y llana expulsión. En este apartado reconstruimos los mecanismos y acciones por los cuales el movimiento peronista como institución buscó sanear sus filas.

Desde que se esbozara el proyecto de construcción de la JTP, la burocracia sindical peronista comenzó a actuar. Hacia fines de 1972, Lorenzo Miguel se reunió con Dante Gullo —cara visible de la Juventud Peronista (JP)— y Horacio Mendizábal —miembro de la conducción nacional montonera— para proponerles un pacto de “no agresión” a partir de una división organizativa: la rama juvenil del movimiento quedaría en entera dirección para Montoneros a cambio de no avanzar en el plano sindical (Costa, 2016). Decidida ya a conquistar la rama gremial del movimiento, la organización desistió de la propuesta y en enero de 1973 hizo pública su voluntad de avanzar en ese terreno (*Primera Plana*, 09-01-1973). La respuesta de la burocracia no se hizo esperar: el 23 de febrero se hizo pública la declaración constitutiva de la Juventud Sindical Peronista (JSP), integrada por agrupamientos sindicales vinculadas a las 62 Organizaciones. Sin embargo, esto no implicó un abandono de la táctica de contención de Montoneros dentro de la rama juvenil.

En agosto de ese mismo año, Perón convocó a los gobernadores de las provincias a la residencia presidencial

de Olivos a los efectos de plantear su voluntad de “institucionalizar el movimiento”, creando una Consejo Superior provisorio como órgano de dirección y sometiendo a todas las ramas a un proceso eleccionario. Explícitamente reconoció que el problema era la pata juvenil: “debemos encaminar a una juventud que está, por lo menos, cuestionada en algunos graves sectores [...] tenemos una juventud maravillosa, ipero cuidado con que ella pueda tomar un camino equivocado!” (Perón, 1974: 83-84). Continuando con estos planes, un mes más tarde convocó a todos los sectores de la juventud del peronismo a una reunión en su casa de Gaspar Campos, donde concurrieron no solo los sectores de la “Tendencia Revolucionaria” —Montoneros y sus frentes de masas, Fuerzas Armadas Peronistas (FAP), Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR)— sino también sectores abiertamente de derecha —Concentración Nacional Universitaria (CNU), Frente Estudiantil Nacional (FEN), JSP—. Allí nuevamente el líder reconoció que sus planes de organizar la juventud estaban orientados a excluirlos del sector sindical: “el Movimiento viene su rama masculina organizada, femenina organizada, la CGT y ‘las 62’ perfectamente organizadas, porque están organizadas no hay lugar a dudas... muy bien... falta la juventud, que está un poco dispersa” (Perón, 1974: 118). No tardó en advertir, además, que esa rama no quedaría en manos de quien tuviera mayor capacidad de movilización sino en quienes tuvieran a los “mejores” dirigentes, entendiendo como tales aquellos que se subordinarían a sus directivas. Era una advertencia directa a Montoneros, que a través de la JP movilizaba varios miles de jóvenes, pero de cuya ortodoxia peronista el General tenía dudas.

La represión institucional abierta dentro del movimiento comenzó tras el ajusticiamiento de José Ignacio Rucci por parte de Montoneros y FAR, el 25 de septiembre de 1973.

Cuatro días después, en una conferencia de prensa, Perón llamó a “derrotar a este enemigo que es el marxismo” y convocó a los dirigentes peronistas a “una acción activa y decidida [...] para sanear las filas partidarias” (*La Razón*, 29-9-1973). Esa propuesta se concretó dos días después, en una reunión a puerta cerrada en Casa de Gobierno, de la cual se filtró el llamado “Documento reservado” del movimiento, donde quedaban expuestos los lineamientos centrales de la tarea represiva que debía encarar. Allí se diagnosticaba una situación de guerra contra el peronismo, en cuyo escenario el ajusticiamiento de Rucci sería el peldaño más alto de una progresiva agresión hacia el movimiento, cuyos protagonistas serían subversivos marxistas que habrían declarado una guerra abierta contra los dirigentes peronistas. Además de atentar contra el movimiento, estos sectores buscarían en el fondo actuar “contra el país” e “impedir la constitución y actuación del gobierno que presidirá el general Perón”. En tal sentido el documento denuncia los mecanismos de esa guerra, de los cuales el principal sería:

[La] infiltración de esos grupos marxistas en los cuadros del Movimiento con doble objetivo: desvirtuar los principios doctrinarios del justicialismo, presentando posiciones aparentemente más radicalizadas y llevar a la acción tumultuosa y agresiva a nuestros adherentes (especialmente sectores juveniles) colocándose así nuestros enemigos al frente del movimiento de masas que por sí solo no pueden concitar, tal que resulte orientando según sus conveniencias. (Consejo Superior Peronista, 1973)

Como puede verse, el documento lo dice sin nombrarlo: el problema es Montoneros. La “infiltración” sería la culpable de las campañas de desprestigio a dirigentes, acusándolos

de traidores al General y su doctrina, ridiculizándolos en cánticos y slogans; de las amenazas, atentados y agresiones para generar “desconfianza entre nuestros cuadros, y a intimidar a la población en general” (CSP, 1973); y, finalmente, del asesinato de dirigentes.

Frente a este cuadro de situación, el documento balancea la necesidad de asumir la defensa, pero también, “atacar el enemigo en todos los frentes y con la mayor decisión” (CSP, 1973). A tales efectos establece una serie de directivas: decreta el estado de movilización del movimiento, señala la inmediata expulsión de quien no colabore en la campaña, obliga a que todos los grupos o sectores que adhieren al peronismo y al General se pronuncien públicamente, y llama al acatamiento vertical indiscutido de las orientaciones y directivas de Perón, sin posibilidad de pronunciar disensos públicamente. Todos los recursos del movimiento deberán estar destinados, por un lado, a la reafirmación doctrinaria y, por el otro, al combate del enemigo. La reafirmación deberá centrarse en una intensa campaña de difusión de los principios doctrinarios, estableciéndose de manera clara sus diferencias con el marxismo, pero imposibilitando a su vez el debate con esta corriente, excluyéndolo de cualquier tipo de reunión y del uso de los medios de difusión del peronismo. En cuanto al combate, se establece que “en las manifestaciones o actos públicos los peronistas impedirán *por todos los medios* que las fracciones vinculadas al marxismo tomen participación”, “se impedirá la difusión [de los grupos marxistas] por todos los medios”, y se establece que “se utilizará todos los [medios de lucha] que se consideren eficientes, en cada lugar y oportunidad” (CSP, 1973). Asimismo, se promoverán sistemas de inteligencia en todos los niveles que reportarán a un organismo central, y se apuntará a lograr la participación popular, clarificando las posiciones del movimiento y buscando el involucramiento

de la población. Finalmente, se extienden estas disposiciones a todo el personal peronista que ocupaba cargos en los gobiernos nacionales, provinciales y municipales, que deberán ajustarse a estas disposiciones, impulsando la vigencia de los principios del justicialismo, la comunicación constante con los “sectores populares”, la utilización del aparato del Estado para impedir “los planes del enemigo y *para reprimirlo con todo rigor*” (CSP, 1973) y colaborar con el movimiento.

Como puede apreciarse, las directivas represivas exceden lo meramente “institucional”, fijan como objetivo una represión que va más allá del propio movimiento. Sobre ello volveremos en los siguientes apartados. Aquí corresponde señalar que efectivamente estas directrices se convirtieron en acciones concretas contra la pertenencia institucional de Montoneros en el encuadramiento orgánico del movimiento. En noviembre el Consejo Superior Peronista (CSP) decretó que las únicas organizaciones gremiales reconocidas como integrantes del movimiento serían la Confederación General del Trabajo (CGT), las 62 Organizaciones y la JSP (*El Descamisado*, 1973a). Asimismo, se pronunció en favor de combatir el “desviacionismo ideológico”, por lo que dictaminó sanciones contra el periódico montonero *El descamisado*, un órgano afín a la “Tendencia”: *Ya! Es tiempo de pueblo*, y la revista ligada al Peronismo de Base *Militancia Peronista para la Liberación*. Más tarde algunas de ellas serían definitivamente clausuradas: *El Descamisado* en abril de 1974 y sus sucesoras, *El Peronista Lucha por la Liberación* en mayo y *La Causa Peronista* en septiembre de ese mismo año, mientras que *Militancia...* lo sería en junio y su sucesora, *De Frente*, no duraría más que unos pocos números. Igual suerte corrió el diario de tirada masiva de Montoneros, *Noticias*, clausurado en agosto de ese mismo año. Con todo, el avance sobre la prensa no fue privativo del movimiento peronista,

como lo atestigua el cierre del diario *El Mundo*, vinculado al PRT-ERP, en marzo de 1974. La mayoría de estas clausuras estuvieron precedidas de ataques con armas de fuego y explosivos a las redacciones e imprentas.¹

Un mes más tarde, Ricardo Otero, en su triple rol de Ministro de Trabajo, miembro del peronismo y dirigente de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), en un plenario de ese gremio atacó abiertamente a la JTP poniendo en cuestión su composición obrera y afirmando su ajenidad al peronismo: “de juventud puede que tenga algo, pero de trabajadora muy poco y de peronista nada [...] a los peronistas nunca nos gustaron los bichos, *así que aplastamos al bicho colorado con el mejor insecticida nacional*”. En diciembre de 1973, el CSP resolvió el congelamiento de las estructuras y reconoció como unidades básicas sólo aquellas fundadas antes del 11 de marzo de 1973, lo que dejaba fuera a la mayoría de las que estaban ligadas a Montoneros. Finalmente, hacia fines de mayo de 1974 se dispuso la disolución de la rama juvenil. Perón lo justificó en los siguientes términos:

Espero, compañeros, que se concrete la organización de las fuerzas del Movimiento, es decir, la rama política masculina, la rama política femenina y la rama sindical, que fueron las tres grandes fuerzas que se nuclearon para formarlo [...]. Se había pensado en una rama juvenil, pero los hechos han demostrado que es una anarquía tan grande la que reina en este sector, que vamos a desensillar hasta que aclare [...]. No queremos incorporar la manzana de la discordia dentro

1 En octubre de 1973 explotó una bomba en la redacción de *Militancia...*, y tiempo después sufrió un intento de secuestro Osvaldo Natucci, director de *Ya!*. En enero de 1974 la Policía Federal irrumpió en la redacción de *El Descamisado*. Por su parte, los talleres de la cooperativa COGTAL, donde se imprimía *El Mundo*, sufrieron un atentado a manos de un comando que se adjudicó el hecho denominado “José Ignacio Rucci”, en enero de 1974.

del Movimiento [...]. La juventud es bienvenida pero, naturalmente, no queremos que después de su bienvenida nos haga un bochinche dentro del Movimiento. (Perón, 1974: 336)

Estas iniciativas muestran efectivamente que el movimiento peronista cercenó crecientemente los espacios en los que Montoneros intentaba ganar influencia. El “documento reservado” constituye una declaración de guerra que se traduce en una expulsión, en la medida que le desautoriza las “credenciales peronistas” y llama a unificar a todo el movimiento en un cuerpo único que enfrente y liquide a la “infiltración”.

Represión legal

La represión peronista no se circunscribió únicamente a las filas del Movimiento. Durante 1973 y 1974, el gobierno sancionó una serie de leyes destinadas tanto a la contención del ascenso de fuerzas antiburocráticas como a la represión sobre los elementos de confluencia entre las organizaciones políticas y los sindicatos. Estas leyes de regimentación obrera muestran que la represión no se circunscribió al seno del peronismo, sino que se extendió a la fuerza social revolucionaria.

Uno de los principales instrumentos legales fue la Ley de Asociaciones Profesionales, que venía a fortalecer y proteger a las direcciones sindicales, piezas clave en la “paz social” que requería el gobierno para sostener el Pacto Social. Esta ley fue aprobada en noviembre de 1973, a través de un proyecto presentado por dirigentes de la Unión Obrero Metalúrgica (UOM), Federación de Asociaciones de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA), Federación

de Obreros y Empleados de Correos y Telecomunicaciones (FOECyT), Sindicato de Empleados de Comercio, Federación de Trabajadores Aceiteros, Sindicato Único de Trabajadores de la Industria de Aguas Gaseosas y Afines de Córdoba (SUTIAGA), gremio de elevadores de granos, miembros de las 62 Organizaciones y un grupo de diputados de origen sindical y peronista. El proyecto respondía a una realidad palpable: ya había acontecido la experiencia de recuperación de Sitrac-Sitram y la izquierda en general mostraba capacidad de inserción en la clase obrera. En lo inmediato, ese mismo año se había producido la conquista de la seccional Villa Adelina de Ceramistas, una de las más importantes dentro del gremio, a manos de una lista conducida por Montoneros, y la de la seccional Córdoba de Sanidad a manos del Peronismo de Base, por lo que no sorprende ver al secretario general de FATSA promoviendo esta ley.

Los artículos innovadores del proyecto se centraban en la cuestión del reconocimiento legal de los gremios, eliminando las dobles personerías y los sindicatos por empresa. Establecía, por ejemplo, que ante el surgimiento de una nueva organización que pretendiera alcanzar la personería gremial, esta debería tener una cantidad de afiliados “considerablemente superior” al sindicato vigente. En el mismo sentido, en caso de que se intentara legalizar un sindicato por empresa, no se le concedería la personería si ya existiera una asociación profesional de primer grado con personería para representar a la actividad a la que pertenece dicha empresa. Esto se complementaba a su vez con una nueva concesión a las federaciones y confederaciones: se les adjudicaría con el nuevo proyecto la facultad de investir el carácter de asociaciones de primer grado en aquellas zonas o empresas donde no hubiera organizaciones de ese tipo. Estas dos medidas buscaban, a partir de la experiencia de los sindicatos

clasistas de Sitrac-Sitram, anular toda posibilidad de que emergieran gremios por empresa, pues se habilitaba a las federaciones a ocupar ese espacio. Asimismo, se reforzaba el poder de intervención de las federaciones sobre las asociaciones de grado inferior. En el capítulo precedente de este volumen, Ianina Harari y Julia Egan mostraron el papel central que tuvo la dirigencia sindical peronista en el intento de clausurar el proceso revolucionario, de modo que se comprende la necesidad de otorgarle un refuerzo a las conducciones vigentes. Sobre todo en un momento en el cual el congelamiento salarial propiciado por el Pacto Social requería la contención de la conflictividad obrera. Por la vía de fortalecer la cúpula de la estructura gremial, se reprimía la emergencia de nuevas conducciones por debajo (cuerpos de delegados, comisiones internas, seccionales).

Naturalmente, una disposición de este calibre excedía los marcos del movimiento peronista. En abril de 1974, en una reunión con los dirigentes gremiales de Córdoba —provincia donde el activismo clasista y combativo tenía un peso importante, allende de las direcciones peronistas—, advirtió la existencia de “dos grandes peligros con los que hay que terminar y *suprimir de cualquier manera*: primero, las disensiones internas y, segundo, que nadie de afuera meta la mano dentro de los sindicatos. Esto es cosa fundamental” (Perón, 1974: 305). El llamado a “suprimir de cualquier manera”, como veremos en el siguiente apartado, es una evidente luz verde a la represión paraestatal.

Una vez sancionada, la ley fue utilizada para amenazar a los trabajadores que luchaban por mejoras salariales que excedían los marcos del Pacto Social —tal fue el caso del gremio de imprenteros en enero del 74 (*Noticias*, 28-1-1974 y 31-1-1974)—, abortar procesos de recuperación gremial —como ocurrió en la seccional Santa Fe de la Asociación Bancaria (*El Descamisado*, 1974a)—, y la

disolución de comisiones internas —así sucedió en la mina Hierro Patagónico de Sierra Grande (*La Causa Peronista*, 23-6-1974)—.

Hacia octubre se instaló en la escena política la discusión en torno a la Ley 20.549 de Prescindibilidad Laboral. Enviada desde el Ejecutivo y con apoyo de los legisladores del FREJULI, dicha regulación ponía en cuestión la estabilidad laboral de los trabajadores vinculados al Estado. En efecto, autorizaba hasta el 31 de marzo de 1974 a dar de baja “por razones de servicio” y designar al personal de planta permanente, transitorio o contratado que prestara servicios tanto en la administración pública nacional, organismos descentralizados, autárquicos, empresas del Estado y propiedad del Estado, servicios de cuentas especiales, obras sociales y otras dependencias. Estas bajas, según indica el artículo 2 de la ley, podrían ser dispuestas por ministros, secretarios de Estado y autoridades superiores de los organismos y/o empresas. El artículo 3 estipulaba el derecho a una indemnización, calculada en función de un mes por cada año de servicio (o fracción superior a seis meses), tomando como referencia el último salario percibido, siempre y cuando sea inferior a los 3.000 pesos. Quienes se vieran afectados por esta ley, aclara el artículo 5, quedarían inhabilitados para retornar a la administración pública por cinco años.

La aparición de esta regulación causó preocupación en varios sindicatos cuyos trabajadores podían verse afectados: Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Unión del Personal Civil Nacional (UPCN), Municipales, Telefónicos, Judiciales, Bancarios, Gas del Estado, Obras Sanitarias, entre otros. Poner en cuestión la estabilidad laboral significaba avanzar sobre una conquista histórica de los trabajadores estatales. No obstante, la ley encubría no solo una preocupación económica sino también política: desalojar de la administración pública a activistas políticos

y gremiales. Justamente, Montoneros inicialmente la apoyó por ese potencial “depurador”, confiando en que el “gobierno popular” la utilizaría para desligarse de los “elementos continuistas” de la dictadura militar (*Ya! Es Tiempo de Pueblo*, 1-11-1973; *El Descamisado*, 1973b).

El caso que mejor ilustra su aplicación y sus consecuencias es el proceso de lucha que se desarrolló entre noviembre y diciembre de 1973 en Industrias Mecánicas del Estado (IME), planta ubicada en la provincia de Córdoba. Allí la JTP había desarrollado un sólido trabajo de organización con su agrupación “17 de noviembre”. Trabajo que le sirvió de base para, en septiembre de 1973, ganar la conducción de la regional Córdoba de ATE, colocando como secretario general a Custodio Ramallo.

A mediados de noviembre los trabajadores de IME iniciaron un proceso de movilización en repudio a miembros del consejo directivo de la empresa, a quienes calificaron como representantes de las “empresas monopólicas del imperialismo”. La solución parecía sencilla: habiendo una ley que habilita a la depuración de la administración pública, esta debería aplicarse para eliminar a los “continuistas” en la empresa. De esa manera, creía Montoneros, podría recuperarse el pasado de esplendor de un “bastión” de la industria nacional. A la movilización de los trabajadores, la empresa respondió el 3 de diciembre con 250 cesantías avaladas por la Ley de Prescindibilidad Laboral, licenció al resto del personal y cerró sus puertas. Lo que esto muestra es el uso represivo y regimentador de la ley que, en este caso, permitió golpear con firmeza en un gremio que había pasado a ser dirigido por Montoneros. Si bien los reclamos originales en IME fueron atendidos, no fueron reintegrados en su totalidad los trabajadores cesantes (*El Descamisado*, 1973c).

Finalmente, la innovación legal más abiertamente represiva fue la modificación del Código Penal en enero de

1974. Esta fue sancionada con el pretexto de enfrentar a la “guerrilla” a raíz del copamiento del Regimiento 10 de Caballería Blindada y el Grupo de Artillería Blindado, situado en la localidad de Azul, por parte del PRT-ERP el día 19 de ese mes. Al día siguiente del hecho, Perón advirtió por cadena nacional:

El Movimiento Nacional Justicialista movilizará asimismo sus efectivos para ponerlos decididamente al servicio del orden y colaborar estrechamente con las autoridades empeñadas en mantenerlo [...]. El aniquilar cuanto antes este terrorismo criminal es una tarea que compete a todos los que anhelamos una Patria justa, libre y soberana, lo que nos obliga perentoriamente a movilizarnos en su defensa. (Perón, 1974: 230-231)

Cinco días más tarde, el nuevo Código Penal fue sancionado y promulgado el 28 de enero de 1974. La nueva reglamentación no solo recrudecía las penas para aquellos que cometieran acciones como asesinatos premeditados, robos con armas o secuestros —formas en las que se buscaba encuadrar a las acciones de organizaciones político-militares— sino que incluso criminalizaba abiertamente la protesta obrera. Un ejemplo de ello es la inclusión del artículo 149 bis, que estipulaba “prisión o reclusión de cinco a quince años, al que substrañere, retuviere u ocultare a una persona con el fin de obligar a la víctima, o a un tercero, a hacer, no hacer o tolerar algo contra su voluntad” (Boletín oficial, 1974). Y el artículo 149 ter, que en relación al anterior aumentaba las penas “si las amenazas tuvieren como propósito la obtención de alguna medida o concesión por parte de cualquier miembro de los poderes públicos” (Boletín oficial, 1974). Las tomas de fábrica, que habían caracterizado los primeros meses de la asunción de Cámpora,

y reaparecían nuevamente en 1974, fácilmente podrían ser encuadradas en este articulado. Un mes atrás, el 22 de diciembre de 1973 había sido suscripta por el presidente y los gobernadores el “Acta de compromiso de seguridad nacional”, en una ceremonia que se celebró en Casa de Gobierno con los susodichos firmantes, junto a Benito Llambí (Ministro del Interior) y Ángel Robledo (Ministro de Seguridad). La medida en cuestión creaba un Consejo Nacional de Seguridad, integrado por todos los ministros nacionales y presidido por el Ministro del Interior, cuya misión sería: “coordinar y centralizar la acción gubernamental tendiente a combatir aceleradamente cualquier tipo de acción delictiva destinada a atentar contra los derechos y garantías individuales, la seguridad de la Nación, el orden público o los gobiernos nacional y provinciales” (*El Litoral*, 22-12-1973).

Un claro ejemplo de la aplicación del Código Penal puede observarse en la fábrica fideera Matarazzo. En abril de 1974, una asamblea de trabajadores de la planta resolvió el trabajo a desgano —no realización de horas extras— a los efectos de exigirle a la patronal el cumplimiento de un pliego de diez puntos que incluía mejoras salariales, de salubridad e higiene (comedor, guardería, atención médica). La empresa redobló la apuesta con el despido de 26 trabajadores y los trabajadores resolvieron una toma de instalaciones que comenzó el 9 de mayo. A pesar de que finalmente el conflicto culminó con éxito —fueron reincorporados los despedidos y se consiguió el compromiso de cumplir el pliego—, la medida de fuerza fue calificada por el flamante Código Penal como privación “ilegítima de la libertad”, dejando un saldo de 40 trabajadores detenidos a los que se les aplicarían penas de entre 5 y 15 años (JTP, 1974).

Las tres leyes analizadas son contundentes muestras del intento que encaró el gobierno peronista para regimentar

al movimiento obrero, contener el ascenso del clasismo y obstaculizar la confluencia entre las organizaciones políticas y el proletariado.

Represión física

En su última reunión política pública, antes de fallecer, Perón reunido con dirigentes de la CGT señaló:

Ahora ya no se sabe quiénes son los que asaltan, quiénes son los que roban. Algunos dicen que son políticos, otros dicen que son delincuentes. Yo creo que son todos delincuentes. [...] Hasta ahora no hemos querido sumar a la violencia de ellos, la violencia nuestra. Pero, policialmente, se va a ir resolviendo este problema [...]. Tenemos que erradicarlo de una u otra manera. Intentamos hacerlo pacíficamente con la ley. Pero si eso no fuera suficiente tendríamos que emplear la represión un poco más fuerte y un poco más violenta también. (Perón, 1974: 361-362)

La declaración es un reconocimiento público de la necesidad de emprender una represión *fuera* de la ley. Sin embargo, detrás de esa verdad que el líder del movimiento peronista reconoce, existen dos elementos que son falsedades. Por un lado, que la violencia paraestatal no se hubiera desplegado hasta entonces. Por el otro, que esta estuviera circunscripta a las acciones “violentas” o “delincuenciales”, es decir, aquellas que se le adjudicaban a la “guerrilla”, y no las que encaraban los frentes de masas.

Circunscribiendo el análisis a la represión física del frente sindical montonero, nos encontramos con una realidad muy distinta. Elegimos ese observable toda vez que el

frente sindical es aquel espacio en el que la organización va al encuentro con la clase obrera. Nótese que el recorte excluye otros frentes de masas de Montoneros (dentro del cual se destaca la JP, que alcanzaba a movilizar varios cientos de miles de jóvenes) y al resto de las organizaciones que formaron parte de la fuerza social revolucionaria y desplegaron diferentes formas de inserción en las masas. Es decir, se trata de un análisis circunscripto que, sin embargo, muestra las formas y el alcance de la represión física.

Para el año 1973 la cifra de militantes sindicales de la JTP caídos asciende a nueve. Los asesinatos comienzan a producirse en el último cuarto del año: uno en agosto, uno en septiembre, dos en octubre, cuatro en noviembre y uno en diciembre. De ellos, cuatro fueron bajo la forma de secuestro y posterior aparición del cuerpo sin vida, en ocasiones con signos de tortura, o fueron tiroteados a la salida de su lugar de trabajo. Esa fue la suerte que corrieron José Damiano, organizador de la Agrupación Peronista de Trabajadores de Taxis; Pablo Fredes, dirigente de JTP en UTA y delegado en Transporte Centenera; Lorenzo Perino, de quien no hallamos mayores datos; y Hugo Jaime, activista en la planta metalúrgica FITAM. Se trata de casos de aniquilamientos selectivos, en razón del trabajo gremial que estos militantes desarrollaban. Otros tres asesinatos se produjeron en el marco de movilizaciones en medio de conflictos o en defensa de sedes gremiales por parte de los trabajadores, que fueron atacadas por matones o fuerzas represivas regulares. Así murieron Juan Carlos Bache, quien se encontraba defendiendo la sede del gremio ceramista de Villa Adelina (dirigido por la JTP) de un ataque de la burocracia sindical; Adrián Sanchez, activista minero que fue asesinado en medio de la represión de Gendarmería en el marco de un conflicto por mejoras salariales; y Juan Ávila, activista en UOCRA que cayó defendiendo la sede de la CGT cordobesa

de un ataque de matones al servicio de Alejo Simó (dirigente de la UOM). Los dos casos restantes corresponden a dos militantes que concurrían a un acto de la JTP y fueron asesinados por fuerzas policiales, que alegaron haberlos “confundido” con delincuentes. En la mitad de los casos, los atacantes forman parte de matones de la burocracia sindical o fueron adjudicados por la Triple A, pero estas fuerzas de represión irregular son las que asumen la totalidad de los casos de aniquilamiento selectivo, mientras que las fuerzas regulares (Policía y Gendarmería) sólo aparecen en los casos de asesinatos en medio de movilizaciones.

El escenario represivo de 1973 se completa con importantes ataques a la JTP del Transporte, rama en la que el frente sindical montonero comenzaba a tener destacada presencia. En octubre y noviembre son secuestrados, torturados y liberados Miguel Mars, chofer de la línea 41 de colectivos y candidato a las elecciones internas, y Oscar Arca, delegado en Costera Criolla. En esos mismos meses detonó una bomba en el local de Moreno de la JTP y otra en la terminal de la línea 67 de colectivos, que apareció pintada con la frase “No queremos a la JTP”.

En 1974 la represión física continúa. Contabilizamos en ese año cuatro asesinatos, todos ellos de carácter selectivo por bandas paraestatales: Manuel Yapura, activista en Ingenio San Pablo; Silverio Mazzolini y Francisco Martínez, activistas en la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA); y Rodolfo Achem, directivo de la Asociación de Trabajadores de la Universidad Nacional de La Plata (ATULP). Tampoco faltan los ataques y secuestros, con posterior liberación. Eso le ocurrió a José Rosemberg, activista bancario en Mar del Plata, torturado con picana eléctrica durante tres días de cautivero. En la misma ciudad fue secuestrado Rafael Martínez, de la agrupación “Evita” del Sindicato Obrero del Pescado. Por su parte, Carlos

Balietto, delegado sindical de la empresa química Doex, sufrió una balacera de la Triple A, de la cual sobrevivió.

Lo que recrudece notablemente este año es el ataque a locales de la JTP. No es un dato menor, toda vez que estos funcionaban no solo como un espacio físico donde se podía desplegar la vida interna de la organización, sino también como un polo de atracción para agrupaciones sindicales sin referencia partidaria o para activistas obreros que buscaban referencias y apoyo. Miembros de la Mesa Capital Federal de la JTP han señalado la importancia de la red de locales como herramienta central para la construcción de la corriente sindical (Costa, 2016; Suárez, 2016). De modo que el ataque a estos espacios permitía inutilizarlos y amedrentar al activismo que en ellos se nucleaba. En la madrugada del 28 de enero detonaron 19 artefactos explosivos que dinamitaron unidades básicas ligadas a la JP y JTP en todo el país, y en la sede porteña del Sindicato de Gas del Estado, que dirigía la corriente sindical montonera. Una semana después era allanado el local de la JTP en la ciudad de San Justo, partido de La Matanza. Nuevamente, en horas de la madrugada cien efectivos de la Policía Federal y la Guardia de Infantería ocuparon el local con tanquetas, carros de asalto y armas de guerra. A pesar de no encontrar material suficiente para declarar a la organización como “asociación ilícita”, amparándose en el nuevo Código Penal, el local fue clausurado y una decena de militantes fueron detenidos.

El 18 de febrero, el objetivo fue el local en Valentín Alsina, sede de la Agrupación “17 de octubre” de Aceiteros, que dirigía la comisión interna de Molinos Río de la Plata e impulsaba un reclamo contra el sistema de premios de la patronal. Tres días después fue el turno del local central de la JTP, en la calle San Juan (Capital Federal), cuyo operativo estuvo dirigido en persona por Alberto Villar y Luis Margaride, jefe y superintendente de la Policía Federal,

respectivamente, y ambos miembros de la plana mayor de la Triple A. Participaron del operativo la Superintendencia de Seguridad Federal con el Cuerpo de Guardia de Infantería y el VI Cuerpo de Vigilancia. Los verdaderos motivos del allanamiento no son difíciles de explicar: en aquel local participaban importantes agrupaciones de la JTP, entre ellas las metalúrgicas “17 de octubre” y “Mussy-Retamar”, de Telefónicos, el Bloque Peronista de Prensa y la agrupación bancaria de Banco Nación. No es coincidencia que allí obraban las planillas de firmas de afiliados para las elecciones de Capital Federal, La Matanza y Morón de la UOM, y que su sustracción posibilitara la descalificación de la Lista Azul y Blanca de la JTP en las primeras dos seccionales. Seis meses más tarde, este local volvió a ser objeto de un allanamiento, que esta vez se vio frustrado dado que en su interior se desarrollaba un curso de formación sindical con más de 50 personas.

Los datos que hemos presentado no dejan lugar a dudas. Desde muy temprano, el aniquilamiento de militantes formó parte de la política represiva del gobierno peronista. No alcanzaba aún una escala generalizada, era una eliminación física selectiva. El blanco no fue exclusivamente la “guerrilla” como se presentaba oficialmente, sino que golpeó también en el personal que operaba como canal de comunicación entre la base obrera y la organización política. Intentaba, de ese modo, el amedrentamiento de la primera y el aislamiento de la segunda. Los perpetradores son las bandas paraestatales de la Triple A y de la burocracia sindical peronista, de la que la primera se nutre y cuya vinculación directa con Perón ya ha sido demostrada (Bufano y Teixidó, 2015). Esta tendencia se acentuará en 1975, ascendiendo a 19 el número de bajas de activistas sindicales montoneros, casi un quíntuple del año anterior, emergiendo además la modalidad de desaparición.

Conclusión

Como hemos visto en esta reconstrucción, el gobierno encabezado por Perón entre 1973 y 1974 no se limitó a hacer tibias y transitorias concesiones a la clase obrera, sostenidas por una coyuntura económica favorable. Empezar la tarea de cerrar el proceso revolucionario requería altas dosis de violencia para quebrar el empate entre las clases en favor de la burguesía. Perón no le escapó a esa tarea. En primer lugar, avanzó en la depuración de su movimiento. La “juventud maravillosa” se convirtió en un “infiltrado” al que había que relegar a un espacio insignificante —la rama juvenil— primero, y expulsar luego. En medio de ese proceso, Montoneros se convertía en un enemigo al que todo peronista debía combatir, en cada movilización, en cada lugar de trabajo y en cada espacio público. El “Documento reservado” es la más palmaria muestra de esta guerra interna.

Pero la represión no se circunscribió únicamente a los marcos institucionales del peronismo. La amenaza revolucionaria estaba fuera de él. Otra de las tareas entonces fue la creación de una legislación represiva, destinada a contener el ascenso de las corrientes clasistas y combativas. La Ley de Asociaciones Profesionales, la de Prescindibilidad Laboral y la reforma del Código Penal apuntaron a salvaguardar la continuidad de la burocracia sindical peronista que era una pieza clave en la política de represión de la conflictividad, pero que justamente por ello se encontraba fuertemente cuestionada y amenazada sobre todo a nivel de las bases. En paralelo a ello, se procedió al aniquilamiento selectivo de los activistas gremiales que encabezaban el cuestionamiento de esas direcciones burocráticas y que, en ocasiones, impugnaban la sociedad misma.

Todos estos mecanismos perseguían el objetivo de cerrar el proceso revolucionario y relanzar la acumulación de

capital en la Argentina. Para ello buscaba cortar lo que había sido la novedad de la etapa: la creciente confluencia de las organizaciones revolucionarias y de la izquierda peronista con el proletariado. La profundidad del proceso mostraría finalmente que su clausura requería, entre otras cosas, mayores niveles de violencia, por lo que a partir de 1975 tendió a ganar consenso la fuerza social contrarrevolucionaria. Esta fuerza, de la que el peronismo también formó parte, terminó por imponerse con el Golpe de 1976, cerrando a sangre y fuego el proceso.

Bibliografía y fuentes

Acá se lucha por sobrevivir. En *La Causa Peronista*, 23-7-1974.

Boletín oficial (1974), núm. 22.841, martes 29 de enero.

Bufano, S. y Teixidó, L. (2015). *Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a Montoneros*. Buenos Aires, Sudamericana.

Consejo Superior Peronista (CSP) (1973). *Documento reservado*. Citado en *La Opinión*, 2-10-1973.

Costa, E. (2016). Archivo oral del CEICS, febrero.

JTP Existe. En *El Descamisado*, 20 de noviembre de 1973a.

Juventud Trabajadora Peronista (JTP) (1974). *Vea, vea, vea que lindo cachetazo los obreros le ganaron al borracho Matarazzo*, junio.

La JTP fijó su posición. En *El Descamisado*, 30-10-1973b.

La posición de la JTP. En *Ya! Es Tiempo de Pueblo*, 1-11-1973.

Otro atropello al amparo de la Ley de Asociaciones. En *El Descamisado*, 5-2-1974.

Perón, J. D. (1974). *1973-1974. Todos sus discursos, mensajes y conferencias*, Tomo I. Buenos Aires. Citado en Bufano, S. y Teixidó, L. (2015), *Perón y la Triple A. Las 20 advertencias a Montoneros*. Buenos Aires, Sudamericana.

Sartelli, E. (2007). *La plaza es nuestra. El argentinazo a la luz de la lucha de la clase obrera en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires, RyR.

Suárez, I. (2016). Archivo oral del CEICS, febrero.

Una ley hecha para los gorilas ahora se usa contra los peronistas. En *El Descamisado*, 18-12-1973c.

Publicaciones periódicas relevadas

El Descamisado

El Litoral

El Peronista Lucha por la Liberación

La Causa Peronista

Noticias

Primera Plana

Ya! Es Tiempo de Pueblo

Capítulo 5

Top secret

Los cómplices del Golpe y los aportes de los documentos desclasificados de la embajada norteamericana

Gonzalo Sanz Cerbino y Melina Cazabat

Toda aquella persona interesada en develar lo que aún no se sabe de la última dictadura militar argentina recibió con expectativa la desclasificación de documentos que Obama prometió en su visita al país en marzo de 2016. Lo que no todos saben es que no es la primera vez que salen a la luz este tipo de documentos. A fines de los años noventa, la prensa argentina dio a conocer algunos de los cables diplomáticos del período 1976-1983. Posteriormente, el Departamento de Estado norteamericano desclasificó más de 4.500 documentos (el cuádruple de los que ahora salen a la luz por el acuerdo Obama-Macri) y, más recientemente, WikiLeaks puso muchos más en línea. Algunos de esos documentos han sido traducidos y publicados, pero el grueso aún espera difusión (Novaro, 2011). Es probable que este déficit esté relacionado con lo que han sido las líneas de interpretación dominantes en relación a la última dictadura. Problemas como la complicidad civil con la masacre perpetrada por las Fuerzas Armadas, tema sobre el que los partes de la embajada podrían echar luz, recién han comenzado a trabajarse, muy parcialmente, en los últimos años.

En el apéndice de esta publicación la cátedra pone a disposición del lector una selección de documentos de la embajada norteamericana en Buenos Aires, muchos de ellos traducidos por primera vez al castellano, que publicamos en el segundo tomo. Se trata de una selección de documentos que develan la complicidad de empresarios, dirigentes políticos y las altas jerarquías de la Iglesia Católica con el Golpe y la masacre que le siguió. En este capítulo analizamos las líneas de análisis dominantes en los estudios sobre la última dictadura, que han relegado a un segundo plano los problemas aquí abordados, y presentamos una sucinta reconstrucción de la conspiración golpista, dando cuenta de la participación de todos los involucrados, lo que brinda el marco de contextualización necesario para abordar la documentación presentada en el apéndice.

La dictadura, de un prólogo a otro

Durante la década de 1980 y hasta bien entrada la de 1990, el grueso de los estudios sobre la dictadura adhirió y reforzó una línea de interpretación que era el resultado de la derrota de las fuerzas revolucionarias en los años setenta. Esa interpretación no solo escondía bajo la alfombra el compromiso militante de miles de desaparecidos, eliminando como elemento explicativo del Golpe el nivel alcanzado por la lucha revolucionaria, sino que al mismo tiempo descargaba la responsabilidad por la masacre exclusivamente sobre la cúpula de las Fuerzas Armadas, salvando la ropa de sus cómplices civiles. Era una explicación que se adecuaba a los nuevos tiempos democráticos, donde los que habían luchado por el cambio revolucionario quedaban reducidos a “víctimas inocentes” o “violentos guerrilleros” que con su accionar alimentaron al “demonio militar”, y quienes

habían impulsado el golpe se beneficiaban de un manto de silencio. Se trataba de una explicación funcional a la reconstitución de la hegemonía burguesa sobre la base del “consenso” democrático, que despojaba al régimen de sus anclajes clasistas al mismo tiempo que borraba de la historia a quienes habían luchado por su transformación. Esa explicación quedó plasmada en el prólogo del *Nunca más*, y devino en sentido común de la mano del cine, los medios de comunicación y los estudios académicos, que rara vez fueron más allá del análisis de la mecánica represiva del Proceso o de la “espiral de violencia” que lo habría precedido. Dado que en ese prólogo es donde encontramos la versión más acabada de esta explicación, resulta conveniente volver sobre sus líneas.

Entre fines de los años sesenta y mediados de los setenta, la sociedad argentina se partió en dos. El ciclo insurreccional abierto tras el Cordobazo y la creciente influencia de la izquierda en importantes capas del proletariado y la pequeña burguesía daban cuenta de la apertura de un proceso revolucionario y el surgimiento de una fuerza social revolucionaria. La clase dominante reaccionó intentando contener el ascenso de la lucha de clases por todos los medios a su alcance, lo que generó las condiciones de una guerra civil. Sin embargo, la explicación elaborada tras la restauración democrática de 1983, conocida como “teoría de los dos demonios” y plasmada en el prólogo del *Nunca más*, despojaba a los bandos enfrentados de cualquier tipo de lazo con el resto de la sociedad. Según el prólogo, “durante la década del ‘70 la Argentina fue convulsionada por un terror que provenía tanto desde la extrema derecha como de la extrema izquierda” (CONADEP, 1984). De esta manera, el amplio campo de los que lucharon por una transformación revolucionaria quedaba reducido a lo que fue tan solo una expresión minoritaria: la guerrilla. Eran “violentos” que

sembraban un “terror” inadmisible bajo los parámetros de la democracia burguesa. Pero como la realidad que brotaba en las denuncias sobre torturas y campos de concentración, en los que no solo cayeron “guerrilleros”, sino cientos de militantes revolucionarios que nunca empuñaron un arma, se empeñaba en contradecir la explicación sobre el “primer demonio”, la teoría debía recurrir a argumentos adicionales. De esta manera, se trazaba una división entre los “guerrilleros” y las “víctimas inocentes” que cayeron en manos de la represión por la “irracionalidad” y la “barbarie” del “segundo demonio”:

... Se sabía de tantos que habían sido tragados por aquel abismo sin fondo sin ser culpables de nada; porque la lucha contra los “subversivos”, con la tendencia que tiene toda caza de brujas o de endemoniados, se había convertido en una represión demencialmente generalizada, porque el epíteto de subversivo tenía un alcance tan vasto como imprevisible... [Alcanzaba] desde gente que propiciaba una revolución social hasta adolescentes sensibles que iban a villas-miseria para ayudar a sus moradores. (CONADEP, 1984)

Esta operación tuvo su correlato en la forma en que la CONADEP seleccionó y presentó los testimonios sobre las violaciones a los derechos humanos que nutrieron el *Nunca más*. La pertenencia a organizaciones políticas era un dato ausente en los testimonios, que remarcaban, por un lado, los rasgos que detonaban la vulnerabilidad y la “inocencia” de las víctimas (las vejaciones sufridas por mujeres embarazadas o adolescentes, entre otros) y, por otro, el trato “bárbaro” que recibieron de sus captores (Izaguirre, 1998; Vezzetti, 2002). De esta manera, se descalificaba a todo el campo de la militancia revolucionaria, unos por su violencia irracional,

otros por su ingenuo idealismo. La revolución social desaparecía del horizonte de lo posible o lo aceptable. Se desdibujaban, en la misma operación, las verdaderas causas del Golpe: desarticular una amplia alianza social que había puesto en cuestión la continuidad de las relaciones sociales capitalistas, las que la dictadura había defendido mediante la coerción y la democracia seguía sosteniendo mediante el consenso.

Coherentemente, la represión no podía ser otra cosa que una reacción injustificada e irracional de un puñado de locos. El “segundo demonio” empezaba y terminaba en la cúpula de las Fuerzas Armadas, que “a los delitos de los terroristas [...] respondieron con un terrorismo infinitamente peor que el combatido”. La descripción de su accionar está plagada de adjetivos que denotan su supuesto carácter irracional: “bárbaros”, “sádicos”, “perversos”. La represión fue mucho más allá de lo necesario para poner en caja al “primer demonio”, no solo porque alcanzó a miles de “víctimas inocentes”, sino porque para combatir al “terror de extrema izquierda” no habría sido necesario abandonar “los principios del derecho” (CONADEP, 1984).

De esta manera, los enfrentamientos de los años setenta quedan reducidos a la mera violencia, al combate irracional entre “dos demonios” que se habían puesto por encima de la “sociedad”. Siguiendo esta lógica, la mayoría de los estudios académicos sobre el Golpe eludieron analizar el complejo fenómeno de la militancia de izquierda en los años setenta en aquellos ámbitos que no encajaban en el arquetipo de la “espiral de violencia”: su inserción en el movimiento obrero, el campo de la cultura o la universidad. También se relegó el estudio del entramado de complicidades civiles que impulsaron el golpe y contribuyeron al sostenimiento del gobierno militar. Los trabajos sobre el rol de los empresarios y los dirigentes políticos, eclesiásticos o sindicales durante

el Proceso resultaron escasos, incompletos o directamente inexistentes. De esta manera, se elaboró una explicación de los años setenta que resultaba funcional a la reconstrucción de la hegemonía burguesa sobre las nuevas bases “democráticas”. La burguesía y sus personeros, que apoyaron el Golpe para salvar al capitalismo, salían de la escena y se reciclaban en democracia. Y también se borraba de la escena el horizonte del cambio revolucionario. La única utopía posible era la democracia burguesa, que se construía en oposición a la violencia del pasado reciente:

... el más terrible drama que en toda su historia sufrió la Nación durante el periodo que duró la dictadura militar iniciada en marzo de 1976 servirá para hacernos comprender que únicamente la democracia es capaz de preservar a un pueblo de semejante horror... (CONADEP, 1984)

Pero las promesas incumplidas del paradigma socialdemócrata (la democracia no dio de comer, ni educó, ni curó) y un nuevo ascenso de la lucha de clases fueron relegando una explicación que resultaba anacrónica, al tiempo que en la lucha callejera se recuperaba la herencia de la militancia setentista que habían intentado ocultar. Así, desde mediados de los años noventa comenzaron a ser revisados los hechos del pasado reciente. La militancia revolucionaria en los setenta salía a la luz de la mano de libros testimoniales, revistas específicas y una renovada preocupación académica por este tópico. También comenzaron a aparecer trabajos que escudriñaban las complicidades civiles de la dictadura o la relación entre la represión y el proyecto económico encabezado por José Alfredo Martínez de Hoz. La revisión del pasado bajo nuevos prismas acompañó el giro a la izquierda que vivía la sociedad argentina, con el ascenso

del movimiento piquetero en un ciclo que culminó en la insurrección del 2001.

Sin embargo, aunque los nuevos enfoques tomaban distancia de la “teoría de los dos demonios”, no resultaban necesariamente incompatibles con el orden social vigente. Las explicaciones clasistas siguieron siendo minoritarias, y el terreno que dejaban los “dos demonios” del alfonsinismo comenzó a ser ocupado por explicaciones que resultaban igualmente funcionales a reforzar la hegemonía burguesa. Aunque en los nuevos trabajos había una mayor preocupación por reconstruir la historia de la militancia setentista, el foco se posaba, casi con exclusividad, sobre las organizaciones peronistas. El estudio sobre la militancia de la izquierda marxista, armada y no armada, fue relegado a un segundo plano. De esta manera, se rescataba positivamente aquella militancia que no era antagónica a las relaciones sociales vigentes. La izquierda peronista habría luchado por la “justicia social”, por la “distribución del ingreso”: es decir, por reformas dentro de los marcos del capitalismo.

La misma parcialidad se observaba en relación al bando contrarrevolucionario, en donde solo una parte de los cómplices civiles de las Fuerzas Armadas fue analizada. En trabajos como los de Basualdo (2013) o Sidicaro (2002), el golpe aparecía impulsado por las capas más concentradas de la burguesía (la “oligarquía”, los “monopolios”, el capital extranjero), que tendrían por objetivo imponer un modelo económico liberal para desmontar la “Argentina industrial”. El Golpe, según esta visión, no se produjo para desarticular el proceso revolucionario, sino el modelo de país impulsado por la alianza peronista. Se iba imponiendo así un nuevo paradigma en el que, aunque se reconocía la existencia de una conflictividad social previa al Golpe, ella quedaba reducida al enfrentamiento entre dos alianzas burguesas, a dos “modelos” de capitalismo: liberalismo

versus proteccionismo industrial. Nuevamente, se trataba de una explicación funcional al sostenimiento de la hegemonía burguesa: los crímenes de la dictadura no habrían sido responsabilidad de una clase, la burguesía, sino de algunas de sus capas. Su contracara era una burguesía “buena”, democrática, que postulaba un modelo de país inclusivo, industrial, sin desocupación ni miseria.

Esta explicación de los setenta, que como veremos es tan inexacta como la “teoría de los dos demonios”, resultó funcional al personal político que se abocó a la reconstrucción de la hegemonía burguesa luego de la crisis de 2001. El kirchnerismo se apropió de estas explicaciones, elaboradas en los años noventa, para nutrir el “relato” con el que legitimó su acción de gobierno. Una versión edulcorada de la militancia setentista podía ser reivindicada por aquellos que se abocaban a reconstruir el capitalismo. Una lista parcial de cómplices de la dictadura podía servir para desprestigiar a los enemigos (mientras se ocultaban las relaciones *non sanctas* de los amigos). Estas explicaciones resultaron tan útiles a las nuevas tareas de la burguesía luego de 2001 que quedaron finalmente canonizadas en un nuevo prólogo al *Nunca más*, elaborado esta vez por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación con motivo de los 30 años del Golpe. La “teoría de los dos demonios”, que el nuevo prólogo discutía, fue reemplazada por una nueva interpretación de la lucha de clases en los setenta, tan compatible como la anterior con los intereses de la clase dominante.

Según esta nueva historia oficial, el Golpe se hizo para imponer un modelo económico “neoliberal” y la masa cre tenía por objetivo disuadir toda “resistencia” a este modelo:

La dictadura se propuso imponer un sistema económico de tipo neoliberal y arrasar con las conquistas

sociales de muchas décadas, que la resistencia popular impedía fueran conculcadas. [...] En la aplicación de estas políticas, con la finalidad de evitar el resurgimiento de los movimientos políticos y sociales la dictadura hizo desaparecer a 30.000 personas, conforme a la doctrina de la seguridad nacional, al servicio del privilegio y de intereses extranacionales. Disciplinar a la sociedad ahogando en sangre toda disidencia o contestación fue su propósito manifiesto. (CONADEP, 2006)

No había en los setenta ninguna amenaza al *status quo*, apenas movimientos sociales que defendían las “conquistas” del peronismo. Las contradicciones que motorizaron la conflictividad social previa al Golpe quedaron reducidas, de esa manera, al enfrentamiento entre peronistas (defensores del modelo industrialista y la justicia social) y neoliberales. Esta construcción permitió erigir al personal político que oficializó esta versión de la historia, el kirchnerismo, en los herederos de la militancia setentista y de la “lucha contra la impunidad” en democracia. Pudieron reivindicar, así, una versión “buena” del capitalismo, el peronismo, que defendería intereses “nacionales y populares”. Ese capitalismo “bueno” se construyó en oposición al “malo”: el neoliberalismo, que para imponerse debió recurrir al “terrorismo de Estado”.

Al igual que con la “teoría de los dos demonios”, estamos ante una explicación fragmentaria e interesada de los enfrentamientos de los setenta. Si la primera buscaba ocultar bajo la alfombra la militancia revolucionaria, la nueva historia oficial convertía a cada militante en defensor de un capitalismo “más justo”. Si el primer prólogo intentó borrar los lazos entre la clase dominante y su brazo armado, el nuevo prólogo se limitaba apenas a establecer las conexiones

de los militares con una parte de la burguesía, aquella que decía enfrentar el personal político encargado de reescribir esta historia. El problema de esta nueva “invención del pasado” es que el Golpe no se hizo contra el peronismo, sino que fue el resultado de su agotamiento: del agotamiento de un esquema económico (aquel que tocó fondo con el Rodrigazo) que pretendía seguir sosteniendo una industria ineficiente con transferencias de una renta agraria que se contraía; y del agotamiento de la relación entre la burguesía peronista, sus socios en los sindicatos (la “burocracia sindical”) y la clase obrera, a la que se pretendía hacer pagar el ajuste necesario para seguir sosteniendo un esquema económico inviable. El Cordobazo y la formación de una fuerza social revolucionaria son el resultado de este agotamiento. Esa es la razón por la que Perón volvió al país en 1973: para ponerse al frente de la represión de esa fuerza social revolucionaria, de la mano de la Triple A, y no para encabezar el “proceso de liberación”. El Golpe no se hizo contra el “proyecto peronista”, sino contra aquellas fracciones de la clase obrera y la pequeña burguesía que entraban en crisis con el reformismo para abrazar las ideas revolucionarias, que no solo impedían avanzar por la senda del ajuste, sino que podían poner en peligro la continuidad del orden capitalista. Por eso, como veremos a continuación, los militares también contaron entre sus aliados a dirigentes políticos, burócratas sindicales y empresarios peronistas. Dictadura y democracia (capitalistas) no son pares opuestos, sino dos caras de la misma moneda. Como el sistema estaba en peligro, y los métodos propios de la democracia burguesa (el consenso de los explotados con la explotación) no permitían recomponer el orden necesario para relanzar la acumulación de capital, se recurrió a un régimen de excepción como lo es una dictadura.

Las causas profundas del Golpe

El Golpe de Estado de marzo de 1976 comenzó a gestarse varios meses antes, tras el fracaso del plan de ajuste del Ministro de Economía Celestino Rodrigo. Sin embargo, las causas profundas que lo explican estaban sobre la mesa desde mucho antes. A comienzos de los años cincuenta, el país entró en un ciclo errático en el que fases de crecimiento económico fueron sucedidas por estruendosas caídas. Entre fase y fase, aparecía el fenómeno de la crisis de balanza de pagos, por el desajuste entre los ingresos por exportaciones e importaciones, y la crisis fiscal. Su aparición obligaba a implementar devaluaciones y ajustes en un intento por descargar la crisis sobre el sector obrero, que vio sus salarios carcomidos por la inflación. Los vaivenes económicos se reflejaron en la evolución errática de la tasa de ganancia agraria e industrial, la productividad del trabajo y el PBI. La renta agraria, que operó en algún momento como factor de compensación y permitió el desarrollo de un entramado industrial poco competitivo, empezaba a mostrar límites para seguir sosteniendo este esquema.

El capitalismo argentino se enfrentaba, así, a una crisis de acumulación. La renta ya no alcanzaba para todos los sectores, lo que imponía la necesidad de realizar un ajuste. Los candidatos a pagarlo eran, por un lado, la clase obrera, que veía amenazado el nivel de vida conquistado durante las décadas previas, y, por otro, las capas más débiles de la burguesía industrial, que necesitaban para sostenerse de las transferencias de ingresos bajo distintas formas (subsidios, protección del mercado interno, crédito barato). La situación puso a la orden del día el enfrentamiento interburgués: las alianzas capitaneadas por la burguesía se alternaron en el comando de los resortes estatales, sin que ninguna pudiera sacar a flote el barco.

La incapacidad de la clase dominante para ofrecer una salida a la crisis derivó en un deterioro de las condiciones de vida para la clase obrera y la pequeña burguesía. Por eso, los lazos ideológicos y políticos que sustentaban la dominación comenzaron a debilitarse. Desde comienzos de los años sesenta, fueron apareciendo síntomas de una crisis hegemónica: crecimiento de los enfrentamientos sociales, aparición de organizaciones de izquierda que intentaban desarrollar la lucha armada, “peronización” de las clases medias, radicalización de los intelectuales y movilización de los estudiantes. El descontento eclosionó en mayo de 1969, cuando estalló en Córdoba una huelga general con características insurreccionales. Confluyeron en ella obreros y estudiantes, que arrastraron a la protesta callejera a buena parte de la población de la zona. La tendencia a la acción directa de las masas y la disposición al enfrentamiento contra el régimen no se agotaron en el Cordobazo: entre 1969 y 1973 se produjeron 17 insurrecciones en las que iba creciendo la influencia y el rol dirigente de la izquierda revolucionaria. Esta influencia se hacía notar, también, en el movimiento obrero, donde el “clasismo” comenzaba a rivalizar con la dirección tradicional peronista (la “burocracia sindical”). Todo ello daba cuenta del proceso de constitución, aún incipiente, de una nueva alianza que comenzaba a terciar en la disputa política. Aunque el programa y la estrategia todavía eran difusos, debatiéndose entre el socialismo revolucionario y variantes radicalizadas del peronismo, estas fracciones de la pequeña burguesía y de la clase obrera comenzaban a intervenir en el proceso político con independencia de las alternativas de poder encabezadas por la burguesía.

Las tendencias insurreccionales abiertas con el Cordobazo incidieron en el proceso político, lo que provocó una crisis de régimen. Los militares se vieron forzados a convocar

nuevamente a elecciones, y esta vez permitieron la participación del peronismo, proscrito durante 18 años. La salida elegida fue una estrategia consciente de ciertos sectores de la burguesía que buscaban descomprimir una situación social explosiva. Una vez en el gobierno, el peronismo intentó aquietar el conflicto social mediante un acuerdo capital-trabajo: el Pacto Social, suscripto por la Confederación General del Trabajo (CGT) y los industriales mercadointernistas nucleados en la Confederación General Económica (CGE). Además, avanzó en el disciplinamiento de la izquierda mediante herramientas legales (el endurecimiento de las leyes represivas) e ilegales (el armado de grupos parapoliciales, como la Triple A). Aprovechando el aumento coyuntural en los precios internacionales de granos y carnes, logró estabilizar momentáneamente las cuentas públicas, reforzar la protección para el entramado industrial —lo que le granjeó el apoyo de la Unión Industrial Argentina (UIA), que terminó fusionándose con la CGE— y contener los reclamos de la burguesía rural.

El armado político del tercer peronismo se sostuvo mientras se mantuvo el flujo de divisas. Hacia fines de 1974, el deterioro de los términos de intercambio y el derrumbe de los precios agropecuarios dinamitaron las bases del plan económico, y el Ministro de Economía José Ber Gelbard terminó renunciando. 1975 fue un año marcado por la crisis económica y la descomposición de la alianza gobernante. La situación del agro se deterioró profundamente: los precios internacionales se derrumbaron sin que las cargas impositivas internas se redujeran en compensación. En este contexto, los opositores al gobierno ganaron terreno en las corporaciones rurales y de la crítica se pasó a la acción. Durante ese año, se impuso una modalidad de protesta que reconocía pocos antecedentes en la historia argentina: los “paros agrarios”, que fueron acompañados de

movilizaciones, cortes de ruta y actos de intimidación para garantizar el acatamiento mayoritario. Entre enero y junio de 1976 se realizaron once paros agrarios de alcance regional y tres de alcance nacional, lo que indicaba la existencia en la burguesía rural de una disposición al enfrentamiento nunca antes vista. Entre los dirigentes que impulsaron la movilización de los ruralistas se destacó la figura de Jorge Aguado, presidente de la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (CARBAP), que fue escalando posiciones hasta convertirse en el líder indiscutido de la oposición al gobierno peronista y una de las figuras centrales de la conspiración golpista. En paralelo, el deterioro de las cuentas públicas volvía a poner en la agenda la necesidad de un ajuste, que intentó aplicar sin éxito Rodrigo, quien asumió su cargo a mediados de 1975.

Un punto de inflexión

El programa que Rodrigo intentó aplicar consistía en un brusco descenso de los salarios reales, que apuntaba a relanzar la acumulación de capital mediante un gigantesco aumento de la explotación. La devaluación de la moneda y el fuerte aumento de precios y tarifas no serían acompañados por reajustes salariales. Sin embargo, pronto el plan se encontró con un obstáculo político: la resistencia de la clase obrera a ser la variable de ajuste. Rápidamente comenzaron a estallar huelgas parciales y movilizaciones contra lo que se conoció como “Rodrigazo”. Dirigida por cuadros de la izquierda revolucionaria, la resistencia al plan comenzó a darse órganos de coordinación que rebasaron la conducción de la “burocracia sindical” peronista. El fracaso del programa, que expresaba los intereses de las fracciones más concentradas y poderosas de la burguesía, ofició como punto de

inflexión al poner en evidencia que los marcos del régimen democrático no eran, en este contexto, los más adecuados para imponer una política económica que implicaba un férreo avance sobre las condiciones de vida de las masas.

Mientras que las corporaciones agropecuarias respaldaron el plan de ajuste, el sector industrial se mostró dividido. La división se procesó al interior de la CGE, que desde la fusión con la UIA aglutinaba al grueso de los industriales. Tras un mes sin pronunciarse sobre la nueva gestión económica, la dirección nacional de la CGE salió al cruce: acusó a Rodrigo de exagerar los alcances de la crisis para justificar la implementación de medidas impopulares. El balance del ministro, sin embargo, fue defendido por viejos dirigentes de la UIA integrados a la CGE que actuaban también en el Consejo Empresario Argentino (CEA). De esa forma, justificaron el ajuste implementado, que venía a reparar los “desaciertos” que achacaban a la gestión de Gelbard. De hecho, el CEA, formado en 1967, tendría un rol protagónico en la gestación del Golpe de marzo de 1976. Reunía a un puñado de empresarios (no más de treinta) que representaban a los capitales industriales más concentrados de la Argentina, tanto de origen nacional como extranjero. Lo integraban Techint y Acindar, dos de las metalúrgicas más importantes del país; Alpargatas, una de las más grandes fábricas de calzado y confección; automotrices como Fiat y Ford; las petroleras Astra, PASA y el Grupo Soldati; la química Duperial; las alimenticias Noel y Bunge y Born; y la papelera Celulosa, entre otras. Su influencia sobre el poder político, que se había opacado con el retorno del peronismo, se acrecentaría notablemente tras el Golpe: su presidente, Martínez de Hoz, sería el primer Ministro de Economía de la dictadura.¹

1 *La Nación*, 9, 12, 13 y 14-6-1975; *Cronista Comercial*, 14-6-1975 y 5-7-1975; *La Tierra*, 12-6-1975.

Los alineamientos en torno al programa de Rodrigo prefiguraron lo que sucedería tiempo después. La burguesía rural grande y chica, y los industriales medianos y grandes (el CEA y los ex dirigentes de la UIA incorporados a la CGE) respaldaron el plan de ajuste. El programa sólo fue cuestionado por algunos de los industriales más débiles, que dirigían la CGE. A pesar del importante respaldo alcanzado por el plan de Rodrigo entre la clase dominante, su gestión terminó en un fracaso. Tras cuarenta y cinco días, el ministro se vio forzado a renunciar en medio de una crisis política desatada por la ofensiva del movimiento obrero contra el plan de ajuste. La forma en que se abortó el cambio en los lineamientos económicos, con el movimiento obrero organizado imponiendo un límite al gobierno, encendió luces de alarma. Esa alarma aparecía claramente en los primeros balances que hicieron distintas fracciones de la burguesía de la crisis que terminó en el alejamiento de Rodrigo. La evaluación de la Sociedad Rural Argentina (SRA), plasmada en un extenso documento difundido por la prensa, resulta representativa de lo que muchos sectores de la burguesía sostenían. Allí admitían los efectos recesivos y el “esfuerzo económico” que implicaba el “cambio de rumbo” para los asalariados, pero sostenían que los problemas serían menos graves si la crisis se enfrentaba con “realismo”:

El pueblo tiene que pagar ahora errores que se cometieron anteriormente en la conducción de la economía nacional, donde con palabras altaneras se desfiguró la realidad y se pretendió violar principios económicos elementales, sacrificando la Argentina a fantasías ideológicas que fracasaron en todos los países que se sometieron a ellas [...]. La oportunidad se ha desperdiciado en forma irresponsable, a pesar de nuestras advertencias y quizás porque quienes advertimos a las

autoridades éramos nosotros y no la extrema izquierda marxista, que con sus aliados ideológicos aplaudía esa política que llevó al país al desastre. (*La Nación*, 16-7-1975)

El balance era claro: el plan Rodrigo implicaba un ajuste duro pero necesario. Fueron los errores de las gestiones económicas anteriores los que habían llevado la situación a ese punto y la única forma de salir era mantener el rumbo elegido o, incluso, profundizarlo. La declaración no era solo un respaldo al plan, fuertemente cuestionado, sino una advertencia: no se podía volver atrás.

La salida de Rodrigo, como hemos dicho, constituyó un punto de inflexión. Desde este momento, la burguesía se lanzó a la acción con un objetivo cada vez más claro: derrocar al gobierno para forzar el ajuste que este no había logrado consolidar. La ofensiva se observó, por un lado, en la radicalización de los discursos, donde comenzaron a reiterarse con insistencia ciertos tópicos. En primer lugar, encontramos la caracterización de la situación como una crisis general —económica, política y social—, producto de los errores del gobierno. También aumentaron las referencias a la “subversión”, en la que se englobaba ya no solo a las organizaciones armadas, sino también al activismo obrero que actuaba bajo la dirección de la izquierda: la “guerrilla fabril”. Por último, se insistió una y otra vez en la incapacidad del gobierno para dar salida a la crisis, acompañado de un permanente llamado al “restablecimiento del orden”, con claras connotaciones golpistas. Aguado, dirigente de CARBAP, aparecía como el principal vocero de estas posiciones. Sus discursos, con amplia difusión en la prensa periódica, sintetizaron estas ideas que comenzaron a plasmarse en los pronunciamientos de todas las corporaciones empresarias. El discurso pronunciado en un acto el

24 de julio de 1975 es un ejemplo de ello. Allí caracterizó que la Nación se encontraba ante “una crisis general” que comprometía la existencia misma del poder del Estado, la posibilidad de una convivencia civilizada entre los argentinos y la estabilidad de las instituciones. Señaló que se vivían horas inciertas y difíciles para el país ya que “fuerzas extrañas a nuestro ser nacional, no tan ocultas pero de inconfesables designios están listas para alzarse con el botín de la República a poco que la ciudadanía no se defienda”. La alusión al fantasma de la “subversión” era clara. A continuación realizó un llamamiento a enfrentar la amenaza, luchando por devolver al país “tres factores fundamentales”: autoridad, seguridad y confianza (*La Nación*, 25-7-1975). Era este un discurso decididamente golpista, que presentaba una crisis de magnitudes históricas a la que el gobierno no podía ofrecer ningún tipo de salida. Y contenía una invocación final al restablecimiento de la “autoridad”, que era un guiño apenas velado a una nueva intervención de las Fuerzas Armadas en la política argentina.

La CGE, impulsora de la política económica que ahora aparecía en la picota, comenzó a experimentar una crisis interna producto del avance de las posiciones golpistas en la clase dominante. En agosto de 1975, las regionales de Salta y Tucumán cuestionaron a sus dirigentes nacionales, que volvían a apostar a un programa similar al que había fracasado de la mano de Gelbard. Las industrias alimenticias y los sectores agrarios que integraban la CGE, en medio de una crisis que afectaba particularmente a este sector, comenzaron a alejarse de la entidad. En abril de 1975 se desafiliaron varias empresas que dieron forma a la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL). En septiembre, dos entidades vinculadas con la actividad agropecuaria se escindieron de la CGE: la Bolsa de Cereales de Buenos Aires y la Unión General de Tamberos. A comienzos

de noviembre se desvinculó también la Federación de Productores Frutícolas de Río Negro. De esta forma, la CGE perdía a las últimas corporaciones de la burguesía rural que permanecían bajo su égida. La más importante de ellas, la Federación Agraria Argentina (FAA), se había desafiado a mediados de julio de 1975. Su alejamiento fue el resultado de un largo proceso de enfrentamiento con el gobierno nacional a raíz de los montos de renta capturados por el Estado, que la había llevado a confluir con CARBAP y SRA en los paros agrarios de ese año.

Luego del *impasse* de la gestión Rodrigo, FAA, CARBAP y SRA se lanzaron nuevamente a las calles con nuevos paros. Por su extensión, las nuevas medidas de protesta tuvieron un efecto desestabilizador sobre un gobierno golpeado por la crisis. A fines de agosto estas corporaciones convocaron a un paro ganadero nacional de once días, que se realizaría entre el 19 y el 29 de septiembre. Durante los días de paro prácticamente no se remitió hacienda a los mercados y se afectó la comercialización de leche. A su vez, los productores agropecuarios se movilizaron a bordo de sus máquinas y realizaron cortes de ruta para visibilizar la protesta. Durante algunas jornadas, las industrias y comercios de varios pueblos del interior cerraron sus puertas en solidaridad con la protesta ganadera. A poco de finalizada la medida, sus organizadores convocaron a un nuevo paro para el 24 de octubre que tendría una duración de 18 días. El anuncio repentino y su extensión tomaron por sorpresa al gobierno, que no pudo acumular *stocks* de hacienda. El masivo acatamiento produjo desabastecimiento y aumentos en los precios de la carne y sus sustitutos, que agravaron la inflación. A esto se sumaron los ya tradicionales cortes de ruta y las movilizaciones con maquinaria agrícola (*La Nación*, 26-9-1975, 31-10-1975 y 5-11-1975; *Cronista Comercial*, 25-9-1975; *La Tierra*, 25-9-1975, 16-10-1975 y 6-11-1975).

En paralelo a la ofensiva de la burguesía agropecuaria, se conformó la Asamblea Permanente de Entidades Gremiales Empresarias (APEGE), integrada por SRA, CARBAP y COPAL, junto a la Unión Comercial Argentina (UCA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO), la Cámara de Sociedades Anónimas (CAMSOCANON), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y la Bolsa de Comercio, que sirvió como punta de lanza de los empresarios golpistas. Ya para septiembre de 1975, las entidades adheridas llegaban casi a un centenar aunque no se habían sumado todavía los pequeños industriales, que continuaban bajo la órbita de la CGE. El capital comercial estaba representado por la UCA, entidad del comercio minorista, y CAC, en la que se nucleaban los importadores y los grandes grupos económicos que hacían pie en el comercio, la industria y las finanzas (Bunge y Born, Astra, Techint, Braun, Garavoglio y Zorraquín, Roberts, Shaw, Acindar, Mihanovich y Celulosa, entre otros). ADEBA reunía a los bancos de capital nacional y CAMARCO a las grandes constructoras con intereses ligados a la obra pública. También se encontraba representada la gran burguesía terrateniente (SRA y CARBAP) y la agroindustria (COPAL). Aunque el CEA no se había sumado como entidad, muchos de sus integrantes participaban en representación de las corporaciones que dirigían. En síntesis, podemos señalar que en el seno de APEGE actuaban algunos de los más encumbrados representantes de la burguesía local, que con sus aportes financiaban la actividad desplegada por el grupo.

Desde un principio, APEGE cuestionó el manejo de la crisis por parte del gobierno y fustigó a la CGE, a la que responsabilizaba de la situación imperante. Otro de los ejes de su intervención fue el llamado a “restablecer el orden”, una alocución con claras connotaciones represivas

en el que coincidían los núcleos golpistas. Un documento programático de la entidad difundido a fines de octubre de 1975 señalaba que el país se encontraba frente a una “gravísima crisis”, que no era sólo económica sino también ética, política y social: “La pérdida del principio de autoridad, la indisciplina, la inmoralidad, la incompetencia y la falta de seguridad para personas y bienes visibles son síntomas de un proceso de descomposición que urge remediar si deseamos sobrevivir como Nación” (*La Nación*, 23-10-1975). El intervencionismo estatal, la burocratización creciente y la subversión, supuestamente apañada por el gobierno, serían los causantes de esta situación.

Sin embargo, el principal reclamo de la entidad fue contra el “avance sindical”, que afectaría “gravemente la economía nacional”. En telegramas enviados a los ministros de Economía y Trabajo, solicitó imperativamente que “se garantice el normal desenvolvimiento de las actividades laborales y se ponga fin a la inseguridad jurídica, económica y personal en que se ven obligadas a desenvolverse las empresas”. En documentos posteriores, criticó el avance de los sindicatos en “expresa contravención de las normas constitucionales”, ostentando “privilegios irritantes”. La crisis, en las alocuciones de APEGE, parecía reducirse a estos núcleos de activistas sindicales decididos a defender los derechos laborales adquiridos: “... la iniciativa y la empresa privada están sucumbiendo [...] la productividad desciende a niveles alarmantes y [...] la propiedad se encuentra amenazada; [...] el país continúa su camino hacia el marxismo” (*La Nación*, 14-12-1975). El tema, a su vez, preocupaba sobremanera a los grandes industriales nucleados en el CEA. En una cena organizada en agosto de 1975, varios integrantes del Consejo (Carlos Dietl de PASA, César Polledo de la constructora homónima, Agostino Rocca de Techint y Eduardo Braun Cantilo del Grupo Braun) expresaron su inquietud

frente al problema. Las palabras de Braun Cantilo resultan representativas de lo expresado en aquel mitin. Señaló que se había creado “un vacío que impide el legítimo ejercicio de la autoridad en los ambientes industriales y no permite una normal producción”. Ello contribuía a crear “un clima asfixiante de inseguridad, de desconfianza y de temor, por falta de garantías suficientes en resguardo de vidas, bienes y el trabajo fructífero” (*Mercado*, 28-8-1975).

No podemos dejar de relacionar el énfasis puesto por estos núcleos empresarios en la activación sindical, que aparecía como el principal problema económico y social del país, con el rol que tuvieron las comisiones internas de fábrica en la organización de la movilización y la protesta que derrotó el plan de ajuste de Rodrigo. El dirigente radical Ricardo Balbín bautizó el fenómeno como “guerrilla fabril”, una metáfora clara de cómo los sectores empresarios percibían el problema y de cuáles eran los métodos que demandaban para solucionarlo. Así como las Fuerzas Armadas se estaban ocupando mediante el accionar represivo de la guerrilla urbana y rural, era menester aplicar los mismos métodos contra la “guerrilla fabril”. Apuntaban desembozadamente a la eliminación de los delegados sindicales combativos, cosa que no podía hacerse estando vigentes las garantías democráticas. Para eso hacía falta un golpe de Estado. Las Fuerzas Armadas, una vez derrocado el gobierno, complacieron el reclamo empresario: el mismo día del Golpe se militarizaron las principales zonas industriales del país. A partir de entonces, “grupos de tareas” militares se hicieron presentes en las fábricas de mayor actividad sindical (entre otras, en las plantas de Ford, Acindar y Dálmine Siderca del grupo Techint, cuyos directivos integraban APEGE y el CEA) con listas que incluían los nombres de los principales activistas, que, según se constató tiempo después, los propios empresarios confeccionaron con la ayuda de la “burocracia sindical”.

Esos activistas fueron detenidos y muchos de ellos se convirtieron en “desaparecidos” (Basualdo, 2006; AA.VV., 2015). En los partes de la embajada norteamericana que presentamos en este libro, se menciona el caso de Cerámica Lozadur, donde más de una docena de activistas fueron secuestrados en noviembre de 1977. Aquel parte consigna que, más allá de lo que declararan los directivos de la empresa, su connivencia con el accionar represivo resultaba evidente.

Los conspiradores

Por su carácter secreto, resulta difícil reconstruir las relaciones entre estos núcleos empresarios con la cúpula de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, hoy contamos con algunos elementos para hacerlo. La SRA, por ejemplo, mantuvo una reunión con el general Jorge Rafael Videla en noviembre de 1975. Allí, los ruralistas manifestaron su preocupación por el avance de la “subversión” en el ámbito agropecuario, a la que no se dudó en relacionar con la política del gobierno:

La baja rentabilidad al productor [...] constituye un excelente caldo de cultivo para el desarrollo de concepciones extremistas; existen constancias de penetración subversiva a nivel de los productores medianos y pequeños, a través de entidades que constituyen ramas políticas del extremismo colectivista.

El enemigo mayor, la “subversión”, si no brotaba del propio gobierno, por lo menos no era enfrentado por él con decisión:

La falta de seguridad física y jurídica ha determinado un clima de desconfianza. No se percibe una acción

definida en contra del extremismo, [hay] desgobierno [y] un clima de terror creado por la guerrilla, a la que es difícil combatir por estar amparada en diversos niveles políticos y administrativos. (*Memoria y Balance de la Sociedad Rural Argentina, 1975-1976*)

La demanda que se desprende de este balance es clara: los militares debían alzarse con el poder para derrotar el “extremismo”.

Otro contacto central entre empresarios y generales golpistas ha trascendido gracias a uno de los documentos de la embajada norteamericana que presentamos en el segundo tomo. Un parte firmado por el embajador Hill fechado el 16 de marzo de 1976 da cuenta de una reunión que este mantuvo con el almirante Emilio Massera. En dicha reunión, Massera puso al tanto al embajador del inminente Golpe de Estado e intentó sondear sobre la actitud que tomaría el gobierno estadounidense. En particular, se mostró preocupado por la reacción de EE.UU. ante posibles violaciones a los derechos humanos, con lo que, entre líneas, le anticipaba la represión que se avecinaba. Estos planes estaban en conocimiento de quien acompañó al Almirante para secundarlo en tal delicada misión: Alejandro Shaw, uno de los titulares del banco homónimo, empresa que tenía representantes en la dirección de CAC y ADEBA, y por lo tanto tenía influencia sobre APEGE.

Por su parte, Aguado, decidido animador de APEGE, también contaba con aceitados vínculos con las Fuerzas Armadas, en particular con la facción liderada por el general Ibérico Saint Jean, quien, después del Golpe, ocuparía la gobernación de Buenos Aires. Aguado integró, junto a los juristas Jaime Smart y Alberto Rodríguez Varela (que había revistado también como Consejero de CAC), el círculo íntimo del General. Posteriormente, a ellos tres se les

adjudicó la redacción del documento *Un nuevo ciclo histórico argentino: del Proceso de Reorganización Nacional a la Tercera República*, con el que Saint Jean intervino en la discusión sobre los objetivos políticos de la dictadura en 1976. Con este documento, el grupo se postulaba como recambio de la facción comandada por el presidente Videla, a quien cuestionaba por su excesivo “politicismo” y por la “tibieza” en el accionar represivo. A Aguado se le atribuyó, también, injerencia en la estructuración del poder municipal en la provincia, en donde colocó a civiles y militares de su confianza. Las cuotas de poder acaparadas por Aguado le permitieron ubicar a cuadros de su confianza provenientes de CARBAP en las estructuras de gobierno provincial y nacional. El propio Aguado llegó a ocupar la cartera de Agricultura y Ganadería de la Nación durante la presidencia del general Roberto Viola, y la gobernación bonaerense bajo la presidencia del general Leopoldo Galtieri (Palomino, 1989: 117; Canelo, 2008; Palermo y Novaro, 2003: 169-260; Muleiro, 2011).

Sin embargo, el núcleo empresario de mayor influencia en los círculos militares parece haber sido el CEA. Tanto su presidente, Martínez de Hoz, como su director ejecutivo, Enrique Loncan (ejecutivo del Banco de Quilmes, consejero de CAC y dirigente de ADEBA), fueron activos animadores de las reuniones secretas en las que, con anterioridad al Golpe, se definió la política económica dictatorial. A ellas asistían importantes dirigentes empresarios, muchos de los cuales llegaron a ser funcionarios de la dictadura, junto a algunos de los generales que se hicieron con el poder en 1976. Entre los asiduos concurrentes a estas reuniones podemos contar a Mario Cadenas Madariaga, dirigente de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) y futuro funcionario dictatorial; Alberto Rodríguez Varela, consejero de CAC y futuro ministro de la dictadura; Horacio

García Belsunce, directivo de Acindar y dirigente de CAC; y Armando Braun, del grupo empresario homónimo, a su vez presidente de CAC y miembro del secretariado ejecutivo de APEGE.

Tras el Golpe, muchos de estos dirigentes fueron nombrados funcionarios. Martínez de Hoz fue Ministro de Economía entre 1976 y 1981, y lo acompañaron en su gestión Cadenas Madariaga en la Secretaría de Agricultura y Ganadería, y Juan Alemann, ligado a SRA, en la Secretaría de Hacienda. Su hermano, Roberto Alemann, Consejero de CAC, fue Ministro de Economía entre 1981 y 1982. Alberto Rodríguez Varela, otro consejero de CAC, ligado a Aguado y CARBAP, ocupó el cargo de Ministro de Justicia en 1978 y el de Rector de la Universidad de Buenos Aires en 1982. Pero no fueron estos dos últimos los únicos funcionarios provistos por CAC a la dictadura militar: 16 consejeros de esta entidad ocuparon cargos en el gobierno militar entre 1976 y 1983. La lista abarca desde subsecretarios y secretarios de Estado hasta embajadores, incluyendo también jueces de la Suprema Corte, directores de empresas y bancos públicos. A su vez, dos importantes dirigentes de la SRA, CRA y APEGE acompañaron a Cadenas Madariaga en su gestión al frente de la Secretaría de Agricultura: Alberto Ramón Mihura como Subsecretario de Ganadería y Jorge Zorreguieta como Subsecretario de Agricultura. Tras la salida de Cadenas Madariaga, Zorreguieta ocupó el puesto vacante, que desempeñó entre 1979 y 1981. Eduardo Oxenford, directivo de la textil Alpargatas y del Banco Francés, que integraba la dirección de CEA, ADEBA y APEGE, fue director de la petrolera estatal YPF entre 1978 y 1979, y Ministro de Industria y Minería en 1981. Francisco Soldati, titular del grupo homónimo, integrante de CEA y ADEBA, fue director del Banco Central de la República Argentina en 1976. Estos últimos son solo dos de los diez dirigentes de ADEBA

que ocuparon cargos jerárquicos en la administración pública entre 1976 y 1983 (Muleiro, 2011: 55-95; Palomino, 1988: 132; Itzcovitz, 1985).

Otro núcleo de empresarios con participación en la conspiración golpista es el de los “desarrollistas”, aquellos que se referenciaban en el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) fundado poco antes por el ex presidente Arturo Frondizi y por Rogelio Frigerio. El desarrollismo tenía una influencia decisiva sobre dos corporaciones empresarias: la Unión Comercial Argentina y la Federación Económica de Buenos Aires (FEBA). Ambas se habían sumado a APEGE desde el comienzo y aportaron dirigentes a su secretariado ejecutivo. En cada acto de la Asamblea, aparecían en la primera línea de combate contra el gobierno. El desarrollismo también tenía influjo sobre el diario *Clarín*, en donde Frigerio logró colocar un gerente que respondía al MID: Héctor Magnetto. El apoyo del matutino (y del resto de la prensa burguesa) a los golpistas es de sobra conocido, por lo que no vamos a abundar. Menos conocida es la relación del MID con la dictadura. Este partido no solo dio su apoyo abierto al Golpe, sino que calificó a la dictadura como la “manifestación de la revolución nacional”. Aportó, a su vez, dirigentes partidarios a la función pública. Es el caso de Oscar Camilión, que asumió como embajador en Brasil (Yannuzzi, 1996).

Como se puede observar, el apoyo de la clase dominante al Golpe fue prácticamente total. La burguesía agropecuaria, grande y chica, adhirió tempranamente a la conspiración y contribuyó a la desestabilización del gobierno peronista movilizándolo a sus bases en los “paros agrarios”, colocando dirigentes gremiales en APEGE y trabajando en conjunto con los militares golpistas en el diseño de las nuevas políticas. La burguesía comercial y financiera se sumó a APEGE y desde allí operó a favor del Golpe; también lo hicieron

algunos industriales medianos y pequeños (los que se organizaban en FEBA, por ejemplo). La burguesía industrial, aunque más fragmentada, también ofreció su respaldo mayoritario a la asonada. Los capitales más concentrados conspiraron desde sus posiciones en CAC o el CEA y luego aportaron sus cuadros a las filas del gobierno. Muchos de ellos también formaban parte de la CGE, a la que se habían integrado tras la fusión con la UIA. Como se verá a continuación, también operaron desde allí para arriar a los capitales de menor tamaño hacia la alianza golpista, lo que provocó en las semanas previas al Golpe el desmembramiento de la CGE, que contenía a su interior el único núcleo de empresarios que aún no se había alineado.

La ofensiva final

A fines de 1975, el clima estaba decididamente inclinado hacia la salida golpista: amplios sectores del empresariado (y sus representantes políticos) estaban convencidos de que esa era la única solución a una crisis que rebasaba por mucho lo económico y actuaban decididamente a favor del quiebre de la legalidad democrática. Sin embargo, faltaba resolver dos problemas: 1) algunos empresarios, que se nucleaban en la CGE, todavía respaldaban al gobierno democrático; y 2) no estaba clara la reacción que podían tener la clase obrera y la pequeña burguesía frente al Golpe. Si no se convencía a estos sectores de la gravedad de la situación y el *putsch* no aparecía como única alternativa frente al “caos”, los militares podían llegar a encontrar resistencias que hicieran peligrar sus planes. Para torcer la balanza en su favor, los golpistas iniciaron una última embestida contra el régimen democrático en diciembre de 1975, encabezada por APEGE.

Entre aquel diciembre y enero de 1976, la entidad publicó solicitudes en la prensa y convocó a una serie de asambleas en donde se exigió con vehemencia un ajuste económico y un disciplinamiento de los trabajadores que el gobierno, muy debilitado, no estaba en condiciones de realizar (*La Nación*, 20-12-1975 y 27-1-1976). La prensa misma caracterizaba que el objetivo de esta arremetida apuntaba a desplazar al propio gobierno: “Los sectores económicos adversos a la política de concertación nucleados en APEGE, han lanzado en los últimos días una enérgica ofensiva cuyo destinatario, más que la conducción económica, es el gobierno en su conjunto” (*Cronista Comercial*, 15-12-1975). Para forzar la situación, APEGE convocó a una medida de fuerza para el 16 de febrero: un *lockout* general. Ese día se paralizaría la actividad productiva en todo el país. A lo largo de las dos primeras semanas de febrero, fueron llegando adhesiones al *lockout* de distintas cámaras votadas en centenares de asambleas de empresarios en todo el país. Muchas de estas cámaras estaban adheridas a la CGE, pero desobedecieron la posición oficial de su dirección de no respaldar la medida. La central mercadointernista fue desmembrándose ante la ofensiva final de APEGE y se convirtió en una cáscara vacía en la antesala del Golpe. Según los organizadores, las cámaras que adhirieron al “paro empresario” llegaron finalmente a 1.200. Entre las empresas de todo el país la adhesión osciló entre el 80% y el 90% y las crónicas periodísticas hablan de un acatamiento mayoritario (*La Nación*, 14, 16 y 17-2-1976). El *lockout* tuvo un importante impacto político. El apoyo masivo de la burguesía al “paro empresario”, y por ende, al programa golpista impulsado por APEGE, quedó cabalmente demostrado. El gobierno democrático había perdido el apoyo de la clase dominante, lo que se constataba especialmente en la crisis que la convocatoria ocasionó en la CGE. A su vez, la medida sirvió también para medir el

respaldo que aún conservaba el gobierno en la clase obrera. La completa pasividad de los trabajadores, que no salieron a enfrentar el *lockout* golpista ni a defender al gobierno ni al régimen terminó de definir su suerte.² En suma, a inicios de 1976 se demostró que el Golpe tenía el respaldo de la clase dominante y se había obtenido, por lo menos, la neutralidad del resto de los sectores.

Por último, no podemos dejar de hacer mención a otros actores por fuera de los círculos empresarios que también fueron fundamentales en la consecución del movimiento golpista. En pleno *lockout*, se produjo un hecho significativo: COPAL, representante de la industria alimenticia, organizó una misa destinada a rendir homenaje a los “empresarios abatidos por la violencia”. El hecho ponía de manifiesto la complicidad de la jerarquía católica con los golpistas. Desde mediados de 1975, distintos prelados hicieron público su apoyo a la “lucha contra la subversión” encabezada por las Fuerzas Armadas. Algunos fueron más lejos, como el pro-vecario castrense Victorio Bonamín, quien en una homilía pronunciada en septiembre de 1975 frente a Viola, saludó a los militares “purificados en el Jordán de la sangre para ponerse al frente de todo el país”, y se preguntó: “¿no querrá Cristo que algún día las Fuerzas Armadas estén más allá de su función?” (Mignone, 1999: 24). La comunión entre curas y militares era tal que, en la noche previa al Golpe, Videla y Massera mantuvieron una reunión con las autoridades eclesiásticas en la sede del Episcopado. Luego del Golpe, el apoyo de la jerarquía eclesiástica, respaldada por la nunciatura papal, se expresó por múltiples vías: declaraciones públicas de apoyo, reuniones semanales con el Ejecutivo,

2 Se repite aquí, en forma más aguda, el cuadro que prevalecía antes de que el Golpe de 1955 acabara con la segunda presidencia de Perón, analizado por Marina Kabat en el segundo capítulo de este volumen.

fundamento espiritual a la Doctrina de Seguridad Nacional, “consuelo espiritual” para los torturadores y encubrimiento de los crímenes de la dictadura, entre otras (Dri, 2011). En el segundo tomo de esta publicación el lector encontrará algunos documentos que refieren a los servicios prestados por la jerarquía católica al gobierno dictatorial.

Así como el apoyo de la Iglesia resultó imprescindible para el sostenimiento del régimen militar, los partidos políticos burgueses también hicieron su aporte. A medida que la crisis de régimen avanzaba, los dirigentes políticos fueron decididos impulsores de la intervención de las Fuerzas Armadas en la represión del conflicto interno. Desde el líder de la Unión Cívica Radical (UCR), Balbín, quien luego del Rodrigazo llamó a terminar con la “guerrilla fabril”, hasta el dirigente del Partido Justicialista (PJ) Ítalo Luder, quien estando en ejercicio de la presidencia de la Nación, firmó el decreto que ampliaba las tareas contrainsurgentes de las Fuerzas Armadas a todo el país, con la orden de “aniquilar el accionar de elementos subversivos”. Estos dirigentes, tras intentar infructuosamente desplazar a Isabel Perón, terminaron apoyando el Golpe como única alternativa al “caos”. A lo largo de 1976 y 1977, la UCR y el PJ, entre otros partidos, dieron claras muestras de colaboración con la dictadura: aceptaron sin demasiadas reservas la suspensión de la actividad de los partidos políticos, concurrieron a las reuniones convocadas por el Ministro del Interior Albano Harguindeguy e incluso llegaron a respaldar abiertamente la represión. Juan Carlos Pugliese, presidente de la UCR de Buenos Aires, señaló, por ejemplo:

Los amigos de Córdoba nos dicen que Menéndez asume la responsabilidad personal de la represión [...]. La gente en Córdoba entiende que esto ha creado una sensación de paz. En algunos diarios del exterior se

ha escrito que Menéndez es duro, pero digamos una cosa, ¿hay algún militar que pueda no ser duro con la subversión? (Yannuzzi, 1996: 108)

Además, estas fuerzas llegaron a aportar importantes cuadros partidarios para cubrir puestos en distintas esferas del gobierno. Un caso paradigmático es el de Ricardo Yofre, abogado radical, que con la venia de Balbín asumió como subsecretario general de la presidencia en 1976, puesto en el que se hizo acompañar por otras figuras del radicalismo, como Virgilio Loíacono y José María Lladós. Sobre él, el lector encontrará información en los documentos del segundo tomo. A su vez, reconocidas figuras con trayectoria en sus partidos cubrieron puestos diplomáticos. Además del ya nombrado Camilión, están los casos de Héctor Hidalgo Solá (UCR), embajador en Venezuela; Francisco Moyano (Partido Demócrata Progresista, PDP), embajador en Colombia, y Américo Ghioldi (Partido Socialista Democrático, PSD), embajador en Portugal. Los partidos burgueses también contribuyeron a cubrir cargos en miles de municipios. Un informe de fines de 1978 indicaba que apenas un 10% de las intendencias habían sido cubiertas por militares, mientras que el 18,3% (310) se encontraba en manos de radicales y el 11,3% (192) en manos de peronistas. El resto se lo repartían otras fuerzas, como el MID, el PDP o partidos provinciales, o estaban encabezadas por individuos sin militancia conocida (Yannuzzi, 1996: 78-123; Quiroga, 2004: 70-135; Marín, 2003: 67-68; Seoane y Muleiro, 2001).

Como hemos intentado demostrar a lo largo de este trabajo, la trama de complicidades civiles que sostuvo a la última dictadura es compleja y extensa. Ni las Fuerzas Armadas constituyeron un “demonio” aislado de la sociedad ni sus cómplices se limitaron a poderosos empresarios transnacionales y tecnócratas. El Golpe militar ejecutado

en marzo de 1976, y la masacre que le siguió, fue la reacción de una clase social, la burguesía, ante el peligro que constituía la organización y la lucha de los explotados por fuera de los marcos que ofrecía la propia clase dominante en un contexto que exigía el ajuste como único medio para recomponer la tasa de ganancia. Por eso, los vínculos de los militares golpistas con la burguesía no se limitan solo a algunos individuos o sectores solitarios. Casi todos los empresarios —industriales, agropecuarios y banqueros, grandes o chicos—, junto a sus representantes en los partidos, los sindicatos y la Iglesia, apoyaron y propiciaron el Golpe. Los documentos que presentamos en el segundo tomo, desclasificados recientemente por el gobierno norteamericano, contribuyen a develar algunos de los puntos oscuros de esta trama de complicidades.

Bibliografía

- AA.VV. (2015). *Responsabilidad empresarial en delitos de lesa humanidad*, tomos 1 y 2. Buenos Aires, Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
- Basualdo, E. (2013). El legado dictatorial. El nuevo patrón de acumulación de capital, la desindustrialización y el caso de los trabajadores. En Verbitsky, H. y Bohoslavsky, J. P. (eds.), *Cuentas pendientes. Los cómplices económicos de la dictadura*, pp. 81-99. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Basualdo, V. (2006). Complicidad patronal-militar en la última dictadura argentina. Los casos de Acindar, Astarsa, Dálmine Siderca, Ford, Ledesma y Mercedes Benz. En *Engranajes*, núm. 5, pp. 1-21.
- Canelo, P. (2008). *El proceso en su laberinto. La interna militar de Videla a Bignone*. Buenos Aires, Prometeo.
- CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) (1984). *Nunca más*. Buenos Aires, Eudeba.
- _____ (2006). *Nunca más*. Buenos Aires, Eudeba.

- Dri, R. (2011). *La hegemonía de los cruzados: la Iglesia Católica y la dictadura militar*. Buenos Aires, Biblos.
- Iltzovitz, V. (1985). *Organizaciones corporativas del empresariado argentino: La Cámara Argentina de Comercio*. Buenos Aires, CISEA.
- Izaguirre, I. (1998). La memoria de la política y la política de la memoria en la Argentina. *Razón y Revolución*, núm. 4, pp. 69-79.
- Marín, J. C. (2003). *Los hechos armados*. Buenos Aires, PICASO-La Rosa Blindada.
- Mignone, E. (1999). *Iglesia y dictadura*. Buenos Aires, UNQ-Página/12.
- Muleiro, V. (2011). *1976. El golpe civil*. Buenos Aires, Planeta.
- Novaro, M. (2011). *Cables secretos*. Buenos Aires, Edhasa.
- Palermo, V. y Novaro, M. (2003). *La dictadura militar (1976-1983). Del golpe de estado a la restauración democrática*. Buenos Aires, Paidós.
- Palomino, M. (1988). *Tradición y poder: La Sociedad Rural Argentina (1955-1983)*. Buenos Aires, CISEA.
- _____. (1989). *Organizaciones corporativas del empresariado argentino. CARBAP (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) 1955-1983*. Buenos Aires, CISEA.
- Quiroga, H. (2004). *El tiempo del [Proceso]. Conflictos y coincidencias entre políticos y militares, 1976-1983*. Rosario, Homo Sapiens-Fundación Ross.
- Seoane, M. y Muleiro, V. (2001). *El dictador*. Buenos Aires, Sudamericana.
- Sidicaro, R. (2002). *Los tres peronismos. Estado y poder económico 1946-55/1973-76/1989-99*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Vezzetti, H. (2002). *Pasado y presente. Guerra, dictadura y sociedad en la Argentina*. Buenos Aires, Siglo XXI.
- Yannuzzi, M. (1996). *Política y dictadura*. Rosario, Fundación Ross.

Capítulo 6

El capital extranjero y el desempeño de la economía argentina en el último cuarto de siglo

Un análisis a partir del caso automotriz

Damián Bil y Jonathan Bastida Bellot

El papel del capital extranjero según la historiografía dominante

En la historiografía nacionalista, y en la mayoría de las variantes del marxismo, suele atribuirse al capital extranjero un papel preponderante en las explicaciones sobre el atraso argentino. Su rol se asocia a la dependencia y a los efectos nocivos del imperialismo, al saqueo de los recursos naturales y a los problemas de la economía local. En esta concepción, el capital extranjero vendría a bloquear el despliegue de las supuestas potencialidades de la Argentina, impidiendo que el país alcance la capacidad productiva de naciones más competitivas. La década de 1990 se presenta, entonces, como uno de los momentos de expansión del fenómeno, asociado a las políticas neoliberales. El kirchnerismo, dentro del *relato*, utilizó esta noción para presentarse de manera progresiva en la lucha contra los monopolios, los grandes grupos económicos y el capital concentrado. Por el contrario, los liberales tienden a ver en los flujos de capital una herramienta indispensable para lograr un sendero de crecimiento virtuoso.

A nuestro entender, ambas concepciones están erradas. Por un lado, los críticos de la inversión externa no explican por qué las empresas foráneas tienden a ser las más grandes en términos de magnitud de capital y a concentrarse en sectores de inversión inicial elevada (automotriz, química, petróleo). A su vez, sus apologistas no logran dar cuenta de por qué las multinacionales que operan aquí no consiguen impulsar la productividad del trabajo al nivel de sus países de origen, con un tamaño reducido en comparación con otras regiones, permaneciendo como “pymes” en el mercado mundial.

Nuestra propuesta es reconstruir la trayectoria de los flujos de la inversión extranjera en la Argentina desde los años noventa, mediante el análisis de los indicadores generales y la discusión con la bibliografía dominante. En este punto, tanto nacionalistas como liberales describen elementos que aparecen, superficialmente, como atendibles. No obstante, consideramos que sus interpretaciones tienen problemas que les impiden entender la naturaleza de las dificultades de la economía y la incapacidad del capital extranjero para superar esas trabas. La falta de un análisis en términos de la competencia internacional obstaculiza la comprensión de los alcances y límites de la inversión extranjera en la economía Argentina. Lo que se debe explicar es por qué, en ramas en las que se insertan capitales extranjeros de renombre y donde se incrementa la productividad y la tecnología, no logran ser competitivos en el mercado mundial salvo contadas excepciones. En este trabajo proponemos desarrollar algunos elementos para entender los motivos de este déficit en ramas seleccionadas de la industria. Nos concentramos en las condiciones de la rama automotriz a partir de fuentes oficiales y empresarias y aportes de otros investigadores. El objetivo es determinar el papel de la inversión extranjera en la economía argentina y sus efectos sobre la acumulación, y

brindar una explicación alternativa a los obstáculos al incremento de la productividad como problema histórico de la industria local.

La inversión extranjera directa desde los años noventa

Durante la década de 1990 se inicia un período de crecimiento en los montos de inversión extranjera directa (IED). Entre 1992 y 2000 los flujos de IED llegaron a 8.253 millones de dólares anuales en promedio, con un pico de 24.000 millones en 1999 por la compra de YPF, adquirido en su mayor parte por REPSOL.

Gráfico 6.1. Inversión extranjera directa en millones de dólares (1992-2014).



Fuente: elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales y CEPAL.

El boom de la IED en Argentina en los noventa refleja la tendencia general a escala mundial de crecimiento de las transacciones de capital. Por caso, en este período Argentina ocupó el cuarto lugar en el ranking de receptores de IED entre los países “en desarrollo” (detrás de China, Brasil y México). El contexto de privatizaciones permite explicar buena parte de los flujos, junto con un período de sobrevaluación sostenida (CEPAL, 2004).

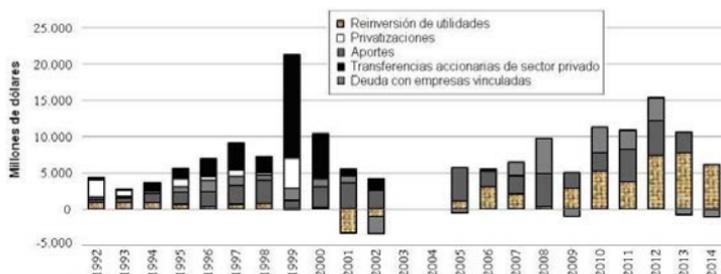
Entre 1990 y 2000, la IED alcanzó 77.876 millones de dólares corrientes (Kulfas *et al.*, 2002). Esta oleada facilitó el acceso del capital extranjero a buena parte de las actividades económicas, incluso los servicios. En ese sentido, algunos plantean la existencia de un proceso de “extranjerización” y concentración (Kulfas, Porta y Ramos, 2002; Varesi, 2010), consecuencia de las políticas neoliberales menemistas. En particular, la modificación de los marcos regulatorios de industrias como la automotriz o la minería, así como la política de concentración del sector bancario y financiero; y el establecimiento de la igualdad de tratamiento para el capital nacional e internacional en 1989. La entrada de firmas extranjeras se habría orientado hacia actividades con escasa integración y articulación con el resto de la economía. Como consecuencia, el dinamismo en la generación de valor agregado, en la construcción de eslabonamientos y puestos de trabajos habría sido pobre. Otro inconveniente señalado es que una parte significativa del endeudamiento extranjero no se reinvertió en el proceso productivo, sino que se volcó a las finanzas. A su vez, la distribución del ingreso habría sido desigual y regresiva. Esto, junto con otros factores, daría cuenta de un proceso de desindustrialización (Briner y Schorr, 2002).¹

A su vez, el proceso de privatización y concesión de activos públicos jugó un rol clave en el fortalecimiento de la presencia del capital extranjero, exigiendo la presencia de operadores internacionales y dando la opción de financiar la adquisición de activos por mecanismos de capitalización de deuda externa. Las privatizaciones y concesiones en servicios públicos impulsaron los flujos en una primera etapa, de 1990 a 1993. Al respecto, fueron señaladas como un

1 No desarrollamos aquí en profundidad la discusión con el concepto de *desindustrialización*. Para una crítica a esta teoría, *cfr.* Grigera (2011).

mecanismo al que recurrió la administración de Menem para solucionar problemas de “caja”, sin atender a la calidad de los flujos e hipotecando el patrimonio. Por el contrario, para los liberales la privatización permitió mejorar la eficiencia productiva, la calidad de los servicios y las cuentas fiscales. El problema, para los liberales, fue que se subordinó la privatización a la política inmediata y a las necesidades coyunturales del gobierno, que las privilegió como una inversión financiera antes que física, impidiendo mejoras de productividad de largo plazo. En consecuencia, los efectos virtuosos se relegaron en pos de objetivos cortoplacistas. Lo cierto es que, a partir de 1993, las fusiones y adquisiciones de empresas privadas fueron la fuente central de ingresos de IED, y en un nivel inferior los nuevos proyectos de inversión y ampliación de otros ya existentes.

Gráfico 6.2. Inversión extranjera directa por componentes en millones de dólares (1992-2012).



Fuente: elaboración propia en base a la Dirección Nacional de Cuentas Internacionales y CEPAL (datos no disponibles para 2003 y 2004).

En esta última década del siglo XX las transferencias accionarias constituyeron el componente más importante de la IED. A partir de 1999 cayeron; los aportes se mantuvieron estables pero se dirigieron al sostenimiento patrimonial de las empresas, es decir, fondos del controlante para

afrontar pérdidas o capitalizar deudas antes que para financiar nuevos proyectos. Los otros rubros (deuda con empresas vinculadas y reinversión de utilidades) decrecieron hasta pasar a ser negativos. En esta etapa, caracterizada por el nacionalismo como de “valorización financiera” (1976-2001), la inversión se concentró en ramas de escaso valor agregado, mientras que el mercado interno se oligopolizó en detrimento del capital nacional.² Por su parte, los liberales saludan esta apertura y la inserción de la Argentina en el marco de la *globalización*, que le permitió incrementar el flujo comercial y acceder a tecnología de punta, incrementar su capacidad productiva y mejorar las prácticas empresariales. Este proceso estaría motivado por la complementariedad, bajo el esquema ricardiano del comercio exterior, recurso por el cual las naciones participan del intercambio en provecho mutuo. Esta estrategia se habría dado por la vía de acuerdos bilaterales, ventajas para estos inversores en los mercados internos, por la generación de posibilidades de exportación al resto de la región e incluso al mundo, entre otras.

En cuanto a la distribución sectorial, estuvo marcada por el predominio del sector petrolero. Para el período 1992-2004 acumuló el 34%, mientras que el 23% tuvo como destino la industria manufacturera. Los servicios públicos recibieron el 11%. Al interior de la industria sobresalen las actividades de alimentos, bebidas y tabaco (31%), el sector químico, caucho y plásticos (30%) y el complejo automotor y de equipo de transporte con 18%.

En los primeros años de los noventa el mayor dinamismo de la inversión se registró en los servicios públicos. A mediados de esa década la industria se transformó en el mayor receptor de IED. Hacia el final el sector petrolero se

2 Criticamos esta periodización en trabajos anteriores (*cf.* Bil *et al.*, 2011).

consolidó, aunque ese movimiento estuvo vinculado a la compra de YPF por Repsol (se verifica en el Gráfico 6.2 donde se observa que en 1999 el aumento de la IED se corresponde en un 46% a transferencias accionarias).

Con el primer año del nuevo siglo asistimos al corto predominio del sector transportes y comunicaciones; y ya desde 2002 se verifica una recuperación de la mano de la industria manufacturera y el petróleo, tendencia que se mantendrá durante el resto del período bajo estudio. En base a información de CEPAL podemos concluir que para el período 2005-2014 la distribución de la IED es estable pero con otra clasificación: 42% manufacturas, 32% servicios y 26% explotación de recursos naturales.

Luego de la crisis de 2001 se inició un ciclo de lenta recuperación. Por un lado, aunque la devaluación había implicado ciertas desventajas a la hora de girar remesas al exterior, produjo una baja salarial y un aumento en la tasa de explotación que sirvió como estímulo para el ingreso de nuevas firmas y la ampliación de algunas existentes. Por otro lado, la crisis había generado una situación de sobreproducción petrolera que giró a la exportación. Durante los primeros años del kirchnerismo, los ingresos de divisas producto de la exportación de crudo y derivados significaron una considerable masa de riquezas para recrear ciertas condiciones de acumulación en el mercado interno, lo que atrajo capitales. Esto se sumó al motor fundamental del período: los inusitados precios de los commodities. Durante los años del gobierno de Néstor Kirchner y la primera presidencia de Cristina Fernández esta situación permitió un ingreso de divisas que permitió transferir recursos al mercado interno, tanto para los capitales nacionales como para los de origen extranjero. La posibilidad de disputar porciones de renta de la tierra elevó los niveles de IED superando los 89.000 millones de dólares. Incluso el promedio anual

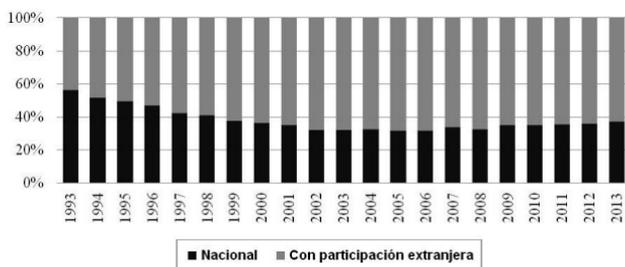
de entradas durante el período 2003-2014 superó a lo que se percibió durante 1992-2002: 8.121 millones de dólares contra 7.859, aunque en los últimos años se retrajo, según Gerchunoff y Kacef (2016) debido a una cuestión de malas decisiones. Es decir, medidas que perjudicaron el movimiento, como el cepo cambiario.

La ubicación del capital extranjero y su peso en la cúpula empresaria

Aquí nos concentraremos en analizar los efectos de la inversión extranjera sobre la producción en ramas como la automotriz. Previo a ello, es necesario reconstruir un panorama general de la inversión extranjera durante las últimas décadas como marco de análisis en el que se desenvuelve el fenómeno. Una fuente para ver el peso de las empresas extranjeras y el grado de concentración y centralización de capital es la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (ENGE). Es un panel con las 500 empresas más grandes del país.³ Como observamos en el acápite previo, la crisis del Estado a fines de los años ochenta, y en los noventa el proceso de privatizaciones y la sobrevaluación del peso, impulsaron el crecimiento de la cantidad de firmas mundiales en el espacio nacional. Al contrario de lo que planteaba el relato kirchnerista, durante la última década la participación del capital extranjero en la cúpula empresaria se mantuvo estable, superando por buen margen el promedio de los noventa (*cfr.* Gráfico 6.3).

3 Se excluyen del total país las actividades agropecuarias, de pesca, de intermediación financiera, servicios personales, servicios de vivienda imputados y del sector público.

Gráfico 6.3. Peso del capital extranjero en la cúpula empresaria argentina, porcentaje de empresas nacionales y con participación extranjera entre las 500 más grandes del país (1993-2013).



Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (INDEC).

Mientras que con Menem el capital extranjero avanzó en la cúpula empresaria, durante los gobiernos kirchneristas consolidó las posiciones al punto de representar entre un 60% y un 70% del grupo de firmas más grandes de la Argentina. Cabe destacar que estas 500 empresas que contempla la ENGE del INDEC (Instituto Nacional de Estadística y Censos) representan entre un 25% y un 30% del valor de la producción de la economía. Según Schorr y Wainer (2014 y 2014b), esto significaría que la extranjerización del gran capital se convirtió en un elemento estructural, continuidad de la década de 1990.

Este indicador deja un interrogante sin responder, ya que ese predominio extranjero podría estar concentrado en el estrato más pequeño. Para resolver ese problema, observamos otro elemento para determinar el lugar del capital foráneo.

El capital extranjero es el que tiene la mayor participación en el valor de producción y el que genera la mayor magnitud de utilidades dentro del grupo de las 500 empresas, situación que se consolida a lo largo del período estudiado (Santarcángelo, 2012; Azpiazu *et al.*, 2012, Manzanelli y

Schorr, 2012). Este fomento a la inversión extranjera se habría dado sin un contrapeso por parte del Estado, lo que profundizó para estos autores la inserción del capital extranjero en ramas que generan poco valor agregado (commodities) o en las vinculadas a la nueva fase de internacionalización de los procesos productivos. Es decir, donde se ubicaron los “ganadores” de la última década (Castellani, 2009).

Gráfico 6.4. Valor de producción de las 500 empresas principales de la Argentina, por origen del capital, en millones de pesos (1993-2013).



Fuente: elaboración propia en base a la Encuesta Nacional de Grandes Empresas (INDEC).

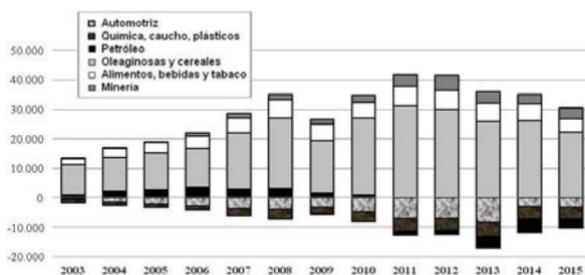
Una revisión somera de los principales indicadores nos muestra que en realidad la IED se vuelca a los sectores más concentrados. En ese sentido, es relevante comprender dónde se ubican las firmas, tanto nacionales como extranjeras. En promedio, un 61% de las empresas más grandes de la Argentina son industriales. Nuevamente, este fenómeno permite discutir el concepto de *desindustrialización*, término utilizado con frecuencia para describir la situación de la producción local a partir de 1976.

Dentro de la manufactura, un 36% corresponde a alimentos y bebidas, un 27% a combustibles, químicos y plásticos y 14% a maquinarias, equipos y vehículos. A priori, se evidencia que la manufactura reúne a las empresas más grandes de la

Argentina, y estas se concentran en sectores de alta inversión inicial (combustibles, químicos, maquinarias y vehículos) y en ramas potencialmente exportadoras, como las manufacturas de origen agropecuario, como alimentos y bebidas. Dentro de la actividad manufacturera, las extranjeras representan un 68% de la muestra; con un peso mayor en combustibles (casi 80% de las firmas que figuran son de origen foráneo), 78% en maquinarias y vehículos, un 60% en “resto” y 56% en alimentos y bebidas. Es decir, buena parte de la producción industrial en ramas claves se concentró en firmas extranjeras, no solo en los años noventa sino en la supuesta etapa de reconstrucción de la burguesía doméstica desde 2003.

En cuanto a la performance, existen varias formas de mensurarla. Una de ellas, en términos generales, es analizar su capacidad de generación de divisas. El balance cambiario publicado por el Banco Central nos aproxima a una consideración del fenómeno (*cf.* Gráfico 6.5).

Gráfico 6.5. Balance cambiario sectorial, actividades seleccionadas, en millones de dólares (2003-2015).



Fuente: elaboración en base a Balance Cambiario Sectorial, Banco Central de la República Argentina.

Nota: el saldo corresponde a lo cobrado por exportaciones menos lo pagado por importaciones y el giro de utilidades y dividendos al exterior.

El Gráfico 6.5 es ilustrativo de ciertas condiciones de la acumulación en Argentina. En primer término, se observa

el carácter superavitario de actividades tales como la producción de oleaginosas y cereales y de la actividad de alimentos y bebidas. Aparece como novedad desde 2006 el superávit de la minería, beneficiada con ciertos regímenes para la extracción de productos. En cuanto a los sectores deficitarios, también se repite una situación histórica: el déficit crónico de actividades ligadas a las “manufacturas de origen industrial” en este caso automotriz, químicos y plásticos. Incluso, se hace más fuerte a medida que la producción industrial aumenta, como en el período 2011-2013. Eso plantea la contradicción que buscaremos comprender con el estudio puntual: a pesar del predominio del capital extranjero y la renovación tecnológica, junto con el aumento de la productividad, estos sectores siguen siendo deficitarios y con un bajo nivel de competitividad.

Para recapitular, lo que se desprende de este primer abordaje es que la IED no aparece como una traba para el desarrollo industrial. El valor de la producción y el PBI manufacturero, así como la producción física y la productividad del trabajo en el sector crecen de manera constante durante las décadas consignadas.⁴ El capital extranjero no aparece como carril de la desindustrialización. Por el contrario, se dirige a la actividad manufacturera, con énfasis en ciertos rubros. Más aún, durante la primera década del siglo XXI se verifica que el crecimiento de la IED está motorizado por los aportes de capital y la reinversión de utilidades a niveles no dispares del que muestran las empresas de capital nacional. Queda por resolver los elementos que explican el ingreso de capital extranjero, los efectos sobre la estructura y por qué no se logran superar los límites históricos. El caso automotriz nos permitirá analizar este fenómeno.

4 En la mayor parte de las ramas con predominio de capital extranjero, la productividad medida como producto sobre horas trabajadas por obrero y la producción física se incrementan de forma constante. Puede analizarse esto a partir de la información de los Estimadores Industriales y de la Encuesta de Productos Industriales, ambos disponibles en el sitio web de INDEC.

La industria automotriz argentina, el capital extranjero y los límites históricos

En los años ochenta, luego de la crisis económica de la actividad a nivel internacional (con la bancarrota de importantes firmas como Chrysler) y de la fuerte recesión en el mercado interno argentino, la producción automotriz se estancó (Bil, 2015). Varias multinacionales salieron de la producción hacia finales de los años setenta, como Citroen, General Motors y Chrysler. Otras, como Fiat y Peugeot, vendieron su operatoria local a empresarios nacionales, en este caso al Grupo Macri. A pesar de las inversiones y la racionalización que efectuaron las firmas que quedaron en operación, se registró un atraso tecnológico y un estancamiento productivo hasta la constitución del MERCOSUR. En los años noventa, con la integración entre los mercados brasileño y argentino (Sartelli, 1999), las multinacionales retomaron su operación a ambos lados de la frontera e iniciaron un proceso de modernización de plantas que redundó en un aumento de la productividad interna.⁵

La creación del MERCOSUR significó un negocio para las multinacionales. Las empresas locales, como Sevel (Grupo Macri) o Ciadea (Grupo Antelo, que había adquirido la operatoria de Renault Argentina), solo podían sobrevivir en un mercado cerrado incorporando tecnología de segunda con licencias europeas. El tamaño del mercado interno era su límite y se beneficiaban de la virtual ausencia de competencia, dado que para las multinacionales un mercado cuyo tope era de menos de 200.000 vehículos al año no justificaba mayores inversiones. Con la conformación del

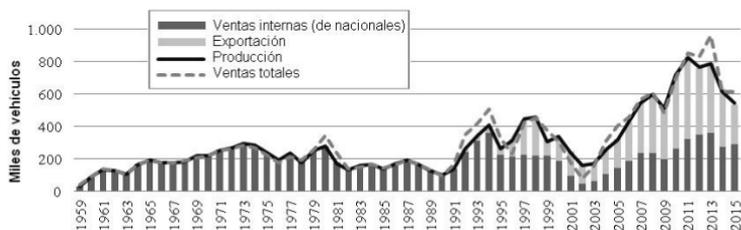
5 A fines de 1991, a través del Decreto 2677/91, los fabricantes de vehículos se vieron favorecidos por un esquema de desgravaciones arancelarias para la importación de vehículos y autocomponentes para producción, con compensación de exportaciones y "asimilados", los que también eran utilizados para dar cumplimiento a la exigencia de una balanza comercial equilibrada.

MERCOSUR, el mercado potencial se extiende a una capacidad de consumo que se proyectaba en 3 millones de unidades (*Clarín*, 17-2-1996). Como consecuencia, las terminales nacionales pierden su coto de caza. Por un lado, se incrementa la competencia con terminales internacionales atraídas por el nuevo mercado. Por otro lado, se vencen las licencias de operación y las terminales mundiales, en este caso Fiat, PSA Peugeot-Citroen y Renault, buscan recuperar su lugar. En ese punto, a pesar de ser el sector más concentrado de la burguesía argentina, con capitales valuados en miles de millones de dólares, no son nada frente a las grandes firmas. Por caso, el Grupo Macri debió contentarse con armar una joint-venture con terminales chinas para operar desde Uruguay, hasta su cierre en 2015.

En el período 1992-2004, el sector automotriz argentino absorbió el 18% de la IED en la industria. Como resultado, se instalaron nuevas firmas e inversiones, lo que derivó en un crecimiento inédito de la producción anual: de 99.639 unidades en 1990 se pasa a 457.956 en 1998. Bajo el menemismo, el promedio fue de 305.942 unidades anuales, contra los 160.131 del alfonsinismo. Durante la crisis del 2001 hay una importante retracción industrial que afectó también al sector. La recuperación arrancó recién en 2004, hasta alcanzar el récord en 2011: 828.771, y en 2013 en ventas internas, con más de 930.000. En promedio en el período 2003-2014 se produjeron 546.223 unidades anuales.

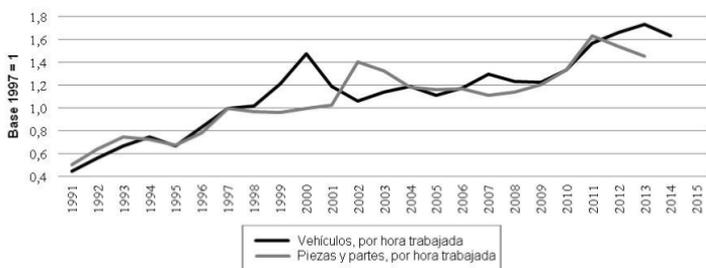
La afluencia de capital extranjero y la recuperación pos 2001 se basó en diversos elementos. El primero fue común a toda la industria: la devaluación, que deprimió el salario y el costo laboral. Además, a nivel particular, el complejo recibió en forma de subsidios o créditos gran parte de los recursos destinados a política industrial. Bajo ese panorama, se incorporaron equipos y aumentó la productividad.

Gráfico 6.6. Producción, venta de unidades (mercado interno) y exportaciones, en miles de vehículos, Argentina (1959-2015).



Fuente: elaboración propia en base a datos de ADEFA (2016).

Gráfico 6.7. Evolución de la productividad en el complejo automotriz, Argentina (1991-2014).



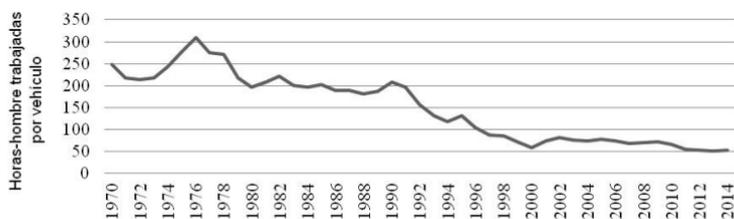
Fuente: elaboración propia en base a datos de CEP (2014), ADEFA (2016) y Ministerio de Trabajo (2016).

Notas: datos de piezas y partes hasta 2013. Productividad por hora trabajada en terminales hasta 2014.

Los indicadores mejoran durante el período, en especial a partir de la década de 1990 con la modernización del sector, determinado por el arribo de nuevos participantes extranjeros. Tal es así que, en la actualidad, once terminales internacionales cuentan con plantas de producción, para un mercado catorce veces menor que el norteamericano y

cuatro veces menor que el brasileño o el mexicano, y que podría ser abastecido con la mitad de lo que fabrica una sola empresa coreana en su país. Las empresas locales, dada la magnitud de capital necesario para ingresar a la actividad, no logran acceder al sector más concentrado de armado, reservado al capital extranjero. Deben conformarse con ser proveedores desde la industria auxiliar (donde también disputan espacios con autopartistas internacionales que se instalan). Más allá de los conflictos históricos entre proveedores y terminales, los autopartistas nacionales buscaron participar del crecimiento de las automotrices extranjeras con el objeto de obtener su parte en la plusvalía embolsada por el sector. Las marchas y contramarchas en las normas sobre integración reflejan en cierta medida las disputas al interior de la cadena y la necesidad de atraer a las terminales, que históricamente buscaron flexibilizar la importación de autopartes para evitar el abastecimiento local, más costoso. En el período bajo estudio, la integración nacional se redujo de un mínimo del 60% al 28,6% en 1996, cuando el Decreto 33/96 modificó nuevamente la metodología de medición del requisito del contenido local de autopartes. Posteriormente, se intentó fijar un contenido nacional mínimo de autopartes del 30% para los vehículos livianos y 25% para los pesados, descontando el contenido importado de las compras locales y procesos internos. En 2002 se implementó el Flex con el objetivo de poner un tope a las importaciones brasileñas de acuerdo a una proporcionalidad en el comercio bilateral. En 2005 el gobierno emitió el Decreto 774, estableciendo un reintegro en efectivo sobre el valor de las compras de las autopartes locales destinadas a la producción, entendiendo por locales a aquellas que tuvieran un contenido máximo importado desde cualquier origen del 30% (Cantarella *et al.*, 2008).

Gráfico 6.8. Horas-hombre trabajadas por vehículo en la industria automotriz argentina (1970-2014).



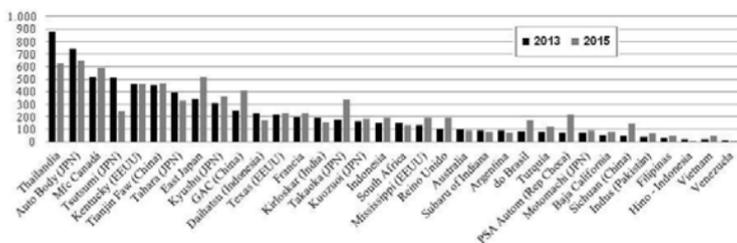
Fuente: elaboración propia en base a datos de ADEFA (2016).

Para los proveedores locales, las terminales no aparecen como un competidor a vencer, sino como un actor con el cual articular para obtener beneficios. O sea, los burgueses locales que operan en la actividad precisan de las terminales para la vida misma del negocio. La disputa se presenta para los autopartistas por la presión de las terminales por reducir la integración nacional e importar piezas de productores más eficientes o baratos.

Hasta aquí, se podría pensar como los liberales que el capital extranjero, aun con resultados deficitarios en el balance cambiario y las disputas con otros eslabones de la cadena, impulsó la actividad. No obstante, al reinsertar la cuestión de la competencia internacional, se evidencia que los problemas históricos no han sido superados. Por el contrario, tienden a profundizarse. Por ejemplo, en lo que respecta a la escala y la productividad del trabajo. La producción automotriz argentina alcanzó niveles récord en los últimos años. Sin embargo, al considerar la competencia mundial, encontramos las mismas dificultades: un consumo doméstico que por su volumen es reducido para impulsar un incremento de la escala, haciendo imposible la incorporación de mejoras tecnológicas rentables solo

con grandes volúmenes productivos. En las condiciones actuales, entre Brasil, Argentina y otros mercados menores la producción nacional coloca cerca de 600.000 unidades anuales, un 15% de lo que se consume en el MERCOSUR. En términos comparativos, esto representa apenas un cuarto de la producción brasileña, un 60% de la iraní o un 70% de la mexicana. La Argentina representa solamente un 0,6% de la fabricación mundial, lo mismo que en 1999. A nivel de empresa, se evidencia en la escala productiva que alcanzan las multinacionales en sus casas matrices o en mercados más grandes, con niveles de producción muy superiores a las filiales argentinas. Por ejemplo, como sucede en el caso de Toyota (*cfr.* Gráfico 6.9).

Gráfico 6.9. Producción de Toyota en sus plantas del mundo, en miles de unidades (2013 y 2015).

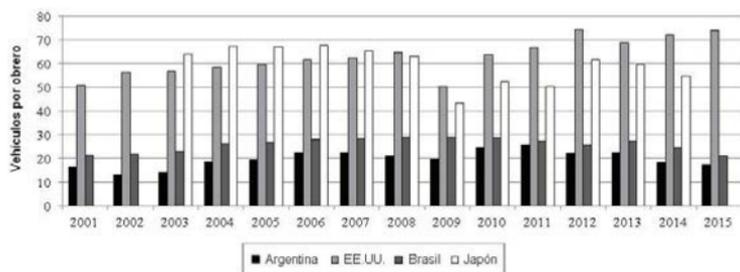


Fuente: elaboración propia en base a información de Toyota (2016).

La producción argentina tiene un límite en su escala. La situación de Toyota es evidencia de ello: una sola planta de la firma en Tailandia o en Japón produce lo mismo o más que las once terminales que operan en Argentina, y diez veces más que la filial de la firma japonesa en el país. Las empresas se instalan aquí con un tamaño y productividad menor a la que tienen en sus plazas de origen o en mercados mayores. Esa limitación de escala no puede ser compensada

con otros factores, como podría ser la productividad o el costo laboral. En cuanto al primero de estos elementos, como vimos, la productividad en la automotriz argentina creció desde los años noventa, incentivada por la modernización de plantas y el aumento de la producción física junto a la reducción de personal ocupado. Pero si comparamos en términos internacionales, aún se encuentra alejada de los parámetros mundiales. Podemos reconstruir un indicador aproximado desde las estadísticas oficiales (*cfr.* Gráfico 6.10).

Gráfico 6.10. Productividad de la industria automotriz en países seleccionados (2001-2015).



Fuente: elaboración propia con base en información de cámaras de Argentina (ADEFA), Brasil (ANFAVEA), Japón (JAMA), y BLS y U.S. Statistical Abstract para EE.UU.).

El indicador tiene sus limitaciones,⁶ pero es útil para observar la brecha productiva entre los países del MERCOSUR y los líderes mundiales. De 2010 a 2015, mientras que en Argentina se produjeron 21,8 vehículos por obrero y en

6 El análisis de productividad requiere una etapa de perfeccionamiento. En primer lugar, la estadística oficial no siempre diferencia entre operarios directos de producción y otras categorías (capataces, administrativos y otros). En segundo lugar, se toma la producción total, lo que incluye vehículos diversos (autos, camiones, buses) que tienen diferentes tiempos de producción. Queda pendiente para un próximo trabajo depurar el indicador con las metodologías disponibles e incorporar otros países a la muestra. *Cfr.* un ejemplo de unificación de los datos disponibles y de cómo ponderar los diferentes procesos según tipo de vehículo en Pratten y Silberston (1967).

Brasil 25,9, en Japón el promedio fue de 56 y en EE.UU. de 70. Como en el período de instalación de la industria, la productividad en esta región se encuentra por detrás de la media mundial, con las mismas empresas involucradas.

Como señalamos, este es un indicador parcial, pero nos permite extraer algunas conclusiones provisorias e identificar líneas de análisis. En este sentido, consideramos que los productores más eficientes en términos internacionales serán los que cuenten con menores costos unitarios y mejores condiciones para ocupar los renglones mayoritarios del mercado. Los fabricantes más productivos, por esta capacidad, lograrán producir a valores absolutamente más bajos y vender las mercancías a precios de producción en promedio menores, avanzando en la concentración (Shaikh, 2006). Es decir, mientras mayor productividad, menores costos unitarios de producción. Es claro que la Argentina no logra competitividad por esta vía. Históricamente, algunos compensaron su menor productividad con bajos salarios. En efecto, esa fue la manera de incorporación al mercado mundial de Japón (entre los años cincuenta y setenta) y de Corea del Sur. Pero la Argentina no contó con esa fuente. El costo laboral en dólares, durante los noventa, se ubicó casi al nivel de EE.UU. y muy por encima de competidores regionales como Brasil y México. Hay que tomar en cuenta que durante ese período el peso estaba sobrevaluado. La devaluación hacia fines de 2001 deprimió el salario y alentó la producción interna (Pinazo y Ludueña, 2011; Santarcángelo, 2013). De todas maneras, hacia 2007-2008 la economía argentina inició otro ciclo de sobrevaluación monetaria acompañado de inflación. El costo laboral volvió a incrementarse, por encima del de Brasil, México y otros países. En 2012 llegó a la mitad del alemán, un 80% del de EE.UU. y casi al nivel de España. Ese año, superó por ejemplo en 11% al coreano, y por amplio margen al de competidores regionales: fue 53% más alto que el brasileño y 2,7 veces el de México.

Esto significa que, sin contar con la posibilidad de ampliar su presencia en otros destinos por productividad (como logran los alemanes, japoneses o norteamericanos), el complejo automotriz tampoco tiene bajos costos laborales para insertarse como lo hiciera en su momento Corea.

A estos límites en la escala y los costos se añade el déficit comercial de autopartes, que hace al sector dependiente de las importaciones y de la disponibilidad de divisas o recursos para importar insumos. Durante la última década el autopartismo no logró revertir su tendencia deficitaria. Al contrario, mientras más crece la producción de vehículos, más se acrecienta el déficit comercial de autopartes, lo cual resulta en un rojo del complejo en su conjunto: a pesar de que las terminales realizan buenos negocios en el país, con superávit comercial, el complejo automotor tiene salidas de más de 3.200 millones de dólares anuales en el lapso 2010-2015. Según nuestros cálculos, el contenido de importación de un vehículo argentino es de aproximadamente 9.000 dólares. Otros especialistas calculaban para 2011 un contenido de 10.028 dólares por vehículo, mientras que en casos de grandes exportadores como Japón o Corea del Sur no superaban los 2.700 (Garriz y Soltz, 2013). Es decir, en este apartado no se producen cambios históricos, ya que se mantiene la tendencia desde los orígenes de la actividad en los años cincuenta. Para reproducir la fabricación de vehículos depende de la disponibilidad de divisas que no puede generar, para importar los insumos que el sector autopartista local no está en condiciones de abastecer. La salida de dólares en los años recientes pone en cuestión la salud del complejo y genera parte de los problemas que derivan en suspensiones y conflictos. Esto evidencia los límites de la capacidad estatal para sostener una actividad con baja competitividad. Bajo estas condiciones, el sector tiende a reproducir sus problemas, enfrentándose con periódicas crisis.

Reflexiones finales

En este trabajo realizamos un breve recorrido por los aportes de los principales autores sobre la presencia del capital extranjero en la economía argentina. Este elemento es utilizado tanto para explicar los límites de la economía argentina y el bloqueo al desarrollo de una burguesía que impulse los verdaderos intereses nacionales, como para subrayar las consecuencias virtuosas sobre la productividad y la eficiencia internas que provoca su arribo. Para los primeros (agrupados en torno al rótulo de nacionalistas) el capital foráneo relegó a los actores locales, ya sea empresarios nacionales y Estado, en pos de alcanzar sus objetivos. Por ello, la innovación tecnológica estuvo subordinada a sus intereses, más proclives a generar ganancia rápida en ramas de bajo valor agregado para remitir al exterior y sin interés en el desarrollo nacional. Asimismo, se reforzó el carácter oligopólico de varias actividades. También se habría producido una regresión en la integración de la economía argentina, resultando en pobres eslabonamientos y baja generación de empleo. El sumun de esta política sería la oleada de privatizaciones bajo el menemismo, con pobres resultados e hipotecando el patrimonio nacional al interés externo. Para los liberales, la inversión extranjera es una condición necesaria para el desarrollo de la estructura económica, ya que su intervención mejora la eficiencia productiva y con ello, en un mediano plazo, puede lograrse una correcta asignación de factores y bienestar de la población. Aunque en el caso argentino eso se vio debilitado por decisiones políticas equivocadas.

Si bien ambos enfoques presentan elementos relevantes, sus interpretaciones tienen un serio problema: no trascienden la superficie del fenómeno, se detienen en el análisis local sin incorporar la situación en el mercado mundial y, por ende, no avanzan sobre las determinaciones más profundas

de la acumulación de capital. Ninguno logra explicar por qué en ramas donde el capital extranjero se instaló en una posición dominante y donde las empresas locales mostraron su incapacidad absoluta (como en el sector terminal automotriz), no pueden superar las trabas históricas de la acumulación y conseguir posiciones en el mercado mundial. Para avanzar con la respuesta a ese interrogante, describimos la situación de la inversión extranjera directa desde la década de 1990, cuando dadas ciertas transformaciones a nivel internacional y local se expandió la llegada de inversión y firmas extranjeras en el país. Encontramos que, en promedio, la mayor parte se concentró en la denominada *industria manufacturera*, en sectores que demandan grandes inversiones iniciales o donde se pueden explotar ventajas naturales, como en alimentos. Con este proceso, y a pesar del *relato*, durante la última década se consolidó el peso del capital extranjero en las 500 empresas más grandes del país. Este fenómeno produjo una modernización en varios sectores y un incremento de los indicadores como la producción física y la productividad. No obstante, no parece saldar los inconvenientes históricos de la estructura económica del país, como se vislumbra en el estudio de las actividades y su balance cambiario.

El análisis del caso automotriz es relevante porque el sector reúne condiciones que atienden a los argumentos de ambas corrientes, como la presencia de capital extranjero y la imposibilidad de acceso del capital nacional por la magnitud de inversión necesaria (al menos para la instancia del armado), la modernización y el incremento de la producción y la posibilidad de superar los condicionantes históricos de la industria. En nuestro estudio observamos que, a pesar de los avances producidos a nivel interno desde los años noventa, la rama continúa arrastrando sus déficits históricos, a saber: una escala reducida debido a un mercado

interno estrecho, lo que impide la incorporación de equipamiento solo amortizable con grandes series productivas; imposibilidad de insertarse por la vía de menores costos como lo hicieron antes los países del sudeste asiático o incluso China. Por eso, la producción argentina, a pesar de la intervención de empresas líderes a nivel internacional, continúa manteniendo una posición marginal en el mercado mundial y una balanza deficitaria. La situación del sector no está determinada por el comportamiento de las multinacionales, o por el bloqueo a la burguesía local. Al contrario, esta última no tiene capacidad de asumir los ramos más rentables del negocio y precisa de las firmas internacionales para poder rapiñar algo de lo generado en la actividad. Los límites se encuentran en las características del capitalismo en Argentina: chico, tardío, lo que determina una baja eficiencia y altos costos. Eso explica que las firmas internacionales se instalen aquí con un tamaño reducido y su campo de acción sea, como el capital local, el mercado interno. No por la depredación foránea, ni por las fallas del Estado, sino por las condiciones estructurales. El capital extranjero reproduce la ineficiencia internacional de la industria argentina. El problema es de la burguesía en su conjunto, que bajo estas condiciones reproduce una estructura obsoleta a costa de la masa de la población.

Bibliografía

- Azpiazu, D., Manzanelli, P. y Schorr, M. (2012). Concentración y extranjerización en la economía argentina en la posconvertibilidad (2002-2008). En *Cuadernos del CENDES*, núm. 28.
- Bil, D. (2015). Las transformaciones del complejo automotriz argentino durante la década de 1980. ¿"Revancha" del capital nacional o eslabón de la crisis mundial?. En *VI Jornadas Uruguayas de Historia Económica*. Montevideo.

- Bil, D., Dachevsky, F. y Kornbliht, J. (2011). La mentada "industrialización por sustitución de importaciones" en Argentina a la luz de los datos empíricos. En Sartelli, E. (dir.), *La crisis orgánica de la sociedad argentina*. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.
- Briner, M. y Schorr, M. (2002). Principales características e impactos de la "extranjerización" reciente de la economía argentina. En *Realidad Económica*, núm. 189.
- Cantarella, J. *et al.* (2008). La industria automotriz argentina: limitantes a la integración local de autocomponentes, *LITTEC, Documentos de Trabajo*, núm. 1. General Sarmiento.
- Castellani, A. (2009). Estado y grandes empresarios en la Argentina de la postconvertibilidad. En *Cuestiones de Sociología*, núm. 5-6.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) (2004). *La inversión extranjera en América Latina y el Caribe*. Publicación anual.
- Garriz, A. y Soltz, H. (2013). *Evolución del comercio exterior en el complejo automotriz argentino (2002-2011)*. Informe inédito.
- Gerchunoff, P. y Kacef, O. (2016). ¿Y ahora qué hacemos? La economía política del kirchnerismo. *Documentos de Trabajo, IELAT*, núm. 87.
- Grigera, J. (2011). La desindustrialización en Argentina. ¿Agresión a la manufactura o reestructuración capitalista? En Bonnet, A. (comp.), *El país invisible*. Buenos Aires, Continente.
- Inversión Extranjera Directa en América Latina y el Caribe 2016* (2016). Santiago, CEPAL.
- Kulfas, M., Porta, F. y Ramos, A. (2002). *La inversión extranjera en la Argentina a fines del siglo XX*. Buenos Aires, CEPAL.
- Manzanelli, P. y Schorr, M. (2012). Extranjerización y poder económico industrial en Argentina. En *Problemas del Desarrollo*, vol. 43, núm. 170.
- Pinazo, G. y Ludueña, A. (2011). Una estimación del empleo asalariado vinculado a la producción de automóviles en la Argentina. En *III Congreso Anual AEDA*.
- Santarcángelo, J. (2012). Concentración, rentabilidad y extranjerización en Argentina. Una mirada desde la cúpula empresaria. En *Ensayos de Economía*, núm. 40.
- _____. (2013). Dinámica y generación de empleo en el sector automotriz durante la Postconvertibilidad. En *Ensayos de Economía. Medellín*, núm. 42.

Sartelli, E. (1999). ¿Sobre ruedas? Los trabajadores, el Mercosur y la industria automotriz. En *Américas*, núm. 5.

Schorr, M. y Wainer, A. (2014a). Extranjerización e internacionalización de las burguesías latinoamericanas: el caso argentino. En *Perfiles Latinoamericanos*, vol. 22, núm. 44.

_____. y _____. (2014b). Concentración y extranjerización del capital en la Argentina reciente. ¿Mayor autonomía nacional o incremento de la dependencia. En *Latin American Research Review*, vol. 49.

Shaikh, A. (2006). *Valor, acumulación y crisis*. Buenos Aires, RyR.

Varesi, G. (2010). La Argentina de la posconvertibilidad: modelo de acumulación. En *Problemas del desarrollo*, vol. 41, núm. 161.

Capítulo 7

Entre el mito y la realidad

Las transformaciones de las condiciones de trabajo
y el impacto en la salud de los docentes entre 1990 y 2015

Romina De Luca y Lucila D'Auria

En este capítulo se presenta un primer avance en el estudio sobre las condiciones del trabajo docente y el impacto de esas condiciones sobre la salud de los trabajadores de la educación. También nos ocupamos de la construcción ideológica que el Estado hace sobre los trabajadores de la educación. En suma, mostraremos cómo “el relato” no se corresponde para nada con la realidad del sector.

Las características fundamentales del trabajo de los educadores impactan en el modo en que entienden su tarea diaria y en la forma de organizarse para mejorarla. La tendencia a la degradación del sistema educativo y la desvalorización social y económica de la tarea docente que implica un gran esfuerzo psicológico y mental, largas jornadas de trabajo, multiplicidad de roles asumidos (de asistencia social, de psicopedagogos y de transmisores de saberes), sumado a la imposibilidad de obtener tiempo libre extraescolar, son condiciones que impactan en la salud de los docentes. La literatura académica reflexionó sobre este problema a partir de la noción de “malestar docente”, término que en la producción científica de los años noventa se

volvió canónico (Martínez, 2009: 389). La categoría hace referencia a las manifestaciones de alteración de la salud que son resultado de las condiciones psicológicas y sociales en que se ejerce la docencia.

La palabra malestar se refiere a una desazón o incomodidad indefinible. Cuando usamos la palabra malestar sabemos que algo no anda bien, pero no somos capaces de definir qué es. Las manifestaciones más frecuentes del malestar son los sentimientos de desconcierto e inhibición como forma de cortar la implicación personal con el trabajo que se realiza, las peticiones de traslado como forma de huir de situaciones conflictivas, el deseo de abandonar la docencia, el ausentismo, el cansancio físico permanente, la ansiedad y la auto-culpabilización ante la incapacidad para mejorar la enseñanza y la depresión. (Esteve, 1994: 12)

En línea con este estudio, trabajos de CTERA (Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina) (González, 2009), ADEMyS (Asociación Docentes de Enseñanza Media y Superior) (AA.VV., 2011) y SADOP (Sindicato Argentino de Docentes Privados) (Jaureguiberry, Chavez y Garcia, 2010) presentan testimonios de docentes que manifiestan la interiorización de una responsabilidad y temor individual porque como no se les permite enfermarse más allá de determinada cantidad de días, asumen la culpabilización de su propio estado de agotamiento por fuera de las relaciones sociales que entablan dentro del ámbito laboral, con sus pares y superiores. Y esto sucede, además, porque:

... la invisibilidad del trabajo extra-clase (como la invisibilidad del trabajo doméstico) permite ocultar que

la docencia no es un empleo de tiempo parcial [...]. Cuando terminan sus horarios formales de trabajo, la mayoría de las maestras y maestros continúan trabajando como tales, pero ahora en sus casas. Realizan allí tareas imprescindibles para el desarrollo pedagógico y además exigidas por las autoridades [...]. Desde esta confusión el tiempo extraescolar dedicado al trabajo escolar se asimila al trabajo doméstico y pocas veces es pensado como tiempo que requiere ser tenido en cuenta en la retribución. (Birgin, 1999: 101)

La culpabilización implica precisamente la forma en la que el malestar es percibido en un plano individual e inconsciente. El docente no puede problematizar los cambios exigidos en el ejercicio de su función producto de la tendencia general a la degradación de la educación, y de allí la proliferación de tareas vinculadas a la contención de alumnos y a garantizar su permanencia y egreso en detrimento incluso del desarrollo de las tareas propiamente educativas. A esa transformación se suma, como veremos, la caída del salario docente, las largas jornadas de trabajo y el problema del trabajo no remunerado asociado a la función. En general, la bibliografía sobre “malestar” enfatiza cómo los docentes pueden resignificar su función positivamente, reeditando las teorías sobre el apostolado en versión moderna, lo que implica la no resolución de los problemas estructurales que, como veremos, llevan a la pérdida de la salud.

La percepción de los docentes, además, se ve influenciada por el relato oficial que pesa sobre ellos y los muestra al conjunto de la sociedad como un grupo de trabajadores privilegiados. Y, en efecto, en la última década los ejemplos sobre cómo el gobierno construyó ese “relato” se multiplican, en particular, a partir de 2008. Fue Cristina Fernández de Kirchner quien se encargó de construir el relato sobre

los docentes: aquellos que ganan más que el resto y, de todos modos, cada inicio de clases toman de rehenes a los alumnos para discutir el salario, aquellos cuya jornada de trabajo es la mitad de la del trabajador promedio, aquellos que toman licencias, aquellos que tienen mucho tiempo de ocio y vacaciones. La comunicación del relato se inicia, por lo menos, a partir del 2008. Por cuestiones de espacio, solo nos ocupamos de los discursos en los actos de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, momento representativo donde se sumarizan todos los temas y se le presenta un diagnóstico a la sociedad. En la apertura de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación, el 1 de marzo de 2008, los acusó de huelguistas crónicos y comparó la evolución del salario ascendente, entre 2004 y 2007, con la cantidad de días de huelga protagonizados. Ella les reprochó que, en 2007, año electoral, protagonizaran...

... casi 250 días de huelga. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Invalidar el derecho de los trabajadores de la educación a defender sus derechos? No. Sí a encontrar mejores instrumentos. Porque no hay peor educación que la que no se imparte, no hay peor día de clase que el que no se tiene y no hay peor escuela pública que la que está cerrada y no da clases. Esa es la escuela pública que no queremos. (Discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso, 1-3-2008, p. 9)

En la apertura del ciclo lectivo 2010, les pidió a los docentes que garanticen los 180 días de clases obligatorios que se habían fijado para ese año (Fernández de Kirchner, 2010). Un año más tarde, en 2011, recordaba la necesidad de cumplir con los días obligatorios para “dar el salto en calidad educativa”. Era tarea de los docentes porque el gobierno ya había realizado su contraparte en salarios e infraestructura

(Fernández de Kirchner, 2011a). Al finalizar el 2011, en la asunción de su segundo mandato, Fernández de Kirchner instó, una vez más, a que se hiciera un esfuerzo colectivo para garantizar los días de clase. En esa oportunidad también promocionó un capítulo de la evaluación educativa. Cristina sostuvo: “la evaluación no solamente debe ser de los alumnos, sino también tiene que ser la evaluación de los docentes. Es un imperativo que debemos hacer y que le debemos a nuestros hijos” (Fernández de Kirchner, 2011b).

La embestida furibunda arrancó en 2012. En esa oportunidad destacó:

Quiero también decir que el salario mínimo lo cobra solamente el 9 por ciento de los docentes. ¿Por qué? Porque una cosa son la cantidad de docentes y otra cosa son los cargos docentes. Hay aproximadamente 998.000 docentes físicos, personas físicas, pero hay aproximadamente 1 millón y medio, 1 millón 600 mil cargos, con los cuales la proporción por docente de cargo es 1.53. Eso de cargos, sin contar suplentes. Si uno va al marco de las suplencias, se encuentra con situaciones francamente preocupantes. El promedio de ausentismo, es decir de cargos docentes que se requieren cuando el docente titular o el mismo suplente por equis motivo no va, el promedio nacional es 24,18 por ciento de ausentismo. Un cuarto de la masa salarial que se paga en la República Argentina en materia de docentes, se paga 2 veces. ¿Se entiende? Porque le estoy pagando al que está en el cargo y al suplente y al que tiene el cargo que está por alguna situación no presente frente al aula o no dando las horas cátedra. En algunas provincias alcanza valores preocupantes [...] para trabajadores que gozan de estabilidad frente al resto de los trabajadores, [...] por el tiempo que

también tienen de cuatro horas frente a la jornada laboral obligatoria de ocho horas para cualquier trabajador; frente a la suerte también, porque siempre fue así y está bien que sea así, de tres meses de vacaciones [...]. ¿Cómo es posible que cada vez que nos tengamos que reunir con sus dirigentes siempre tengamos que hablar de salarios y no hablemos de qué pasa con los pibes que no tienen clases? Esto es lo que yo quiero cambiar de la cultura. (Fernández de Kirchner, 2012)

Un año más tarde le apuntó, una vez más, al presentismo docente. Defendió que las paritarias ese año incorporaran en el salario testigo el rubro “presentismo”. Destacó que tal exigencia era una, llamémosle “contraparte”, por la gran inversión que en materia educativa se había realizado en los últimos años. Y se encargó de explicar las razones de tal planteo:

Si hemos hecho toda esta inversión —y todavía nos falta en calidad educativa—, ¿es tan ilógico que estemos discutiendo el rubro “presentismo” o, si quieren, “presencia pedagógica”? Esto tiene dos caras: la del niño que necesita que el mismo docente le enseñe todo el año por la calidad. Vos ponete a pensar en un chico sentado en su pupitre que dos meses tiene un maestro, cuatro meses tiene otro, cinco meses tiene otro: ningún maestro... Hay algo fundamental en el proceso de aprendizaje: la interacción entre el docente y el alumno. [...] También, mírenlo desde el lado del docente, desde el lado del trabajador: ¿es justo que el que va todo el año, que el que se pela el que te dije para estar sentado frente al grado con todos los deberes, cobre lo mismo que el que va cada muerte de obispo o agarra cuanta licencia tiene a mano? Yo creo que no. Creo que hay que mirarlo de los dos lados. (Fernández de Kirchner, 2014)

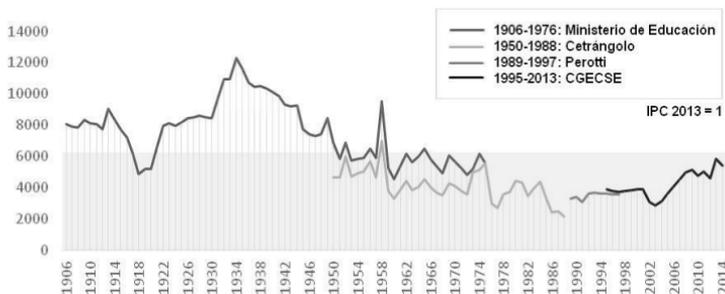
Desde ese momento hasta el final de su gestión, estas fórmulas se repetirían una y otra vez. Pero el relato de trabajadores con muchos privilegios no se corresponde con la realidad que viven los docentes día a día en sus condiciones de trabajo. Y esa realidad es uno de los detonantes de la pérdida de la salud de los trabajadores de la educación.

Cómo viven: el valor del salario docente

Uno de los indicadores para aproximarnos a las condiciones de vida de los docentes es medir el valor de su salario. La mayoría de los trabajos suele presentar series cortas que permiten ver el poder adquisitivo real (si crece o se pauperiza) pero no reconocer tendencias de largo plazo para pensar problemas como el de la proletarización de trabajadores, es decir, el cambio en su composición de clase. Presentamos aquí una evolución de largo plazo del salario de los docentes. Los datos salariales de largo plazo prácticamente son inexistentes. Por eso, construimos la serie con datos disponibles de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para el período 1906-1975. Trabajamos con cuatro fuentes. La primera, *Evolución de los salarios docentes 1906-1975*, del Ministerio de Educación, sistematiza los salarios nominales de un maestro de grado de escuela común de la CABA entre 1906 y 1975. Para las siguientes décadas, la información también es bastante escasa. Eso nos hizo trabajar con series que, en el caso de Perroti, cuentan con los datos de diez provincias (donde se encuentran las más importantes) para 1946-1990. Con lo cual, nos permite realizar una serie larga bastante representativa empalmando datos (aunque no exenta de límites, claro). Aclaremos que, hasta la década de 1930, los docentes de la CABA representaban una porción relevante a nivel nacional (*Revista Monitor*,

1921). Para el período 1995-2010 trabajamos con los datos de la Coordinación General de Estudio de Costos del Sistema Educativo (CGECSE), y para 1988 y 1996 con datos elaborados por Cetrángolo.

Gráfico 7.1. Salario bruto real de docentes (cargo testigo: maestra de grado de escuela común). Diferentes fuentes, CABA y promedios provinciales (1906-2013).



Fuente: elaboración propia en base a CEICS, "Documento de trabajo. La evolución del salario docente", fuentes del Ministerio de Educación, Cetrángolo, Perotti y CGECSE.

En la serie podemos identificar tres subperíodos. Uno que va desde la década de 1900 hasta mediados de la década de 1930, de crecimiento del salario, fase que se corresponde también con la masificación de la escuela primaria y, por ende, con una necesidad creciente de maestros de grado. Recordamos brevemente algunos datos generales. Según los censos nacionales, hacia 1869 la tasa de analfabetismo del país era de 77,4%; hacia 1895, 53,3%; en 1914, 35,9% y en 1947, 13,9% (Ministerio de Educación y Justicia, 1965). Para la misma época, el promedio de América Latina se ubicaba entre el 40% y el 50%. En efecto, Argentina se distinguió del resto de América Latina por el alto porcentaje de reclutamiento escolar. Para 1950, los indicadores mostraban que el 85% de la población de más de diez años sabía leer y escribir. La evolución del nivel medio era diferente puesto que su

masificación es un proceso contemporáneo. Recordemos que, si hacia 1958 se registraban 2.859.826 alumnos en el nivel primario, la matrícula secundaria era apenas un 18% (505.173 alumnos). La evolución del salario del maestro de grado parece acompañar ese proceso de masificación del sistema primario: el salario crece como incentivo para la incorporación a la carrera docente. Una vez cumplida dicha tarea, la evolución del salario inicia un largo período descendente hasta 1988. En un tercer período, que va desde 1989 hasta la actualidad, el salario se recupera levemente, aunque a niveles más bajos del pico máximo, lo que muestra una caída tendencial total del salario. Esta evolución muestra el empobrecimiento del salario de los docentes, o su pauperización.

Pero existen dos formas más para aproximarnos al salario real: medir el poder adquisitivo comparando el salario de bolsillo con la canasta básica total (CBT), y ponderar su evolución en función de otros sectores de la economía. Veamos primero la evolución del salario en función de la CBT. Esta última constituye un indicador para la medición de la línea de pobreza. Se trata de una canasta de consumo de bienes y servicios que se estima por intermedio de las encuestas de gastos e ingresos de los hogares (ENGHO) realizadas por el INDEC cada diez años aproximadamente. Esta canasta se calcula con la realización de cada ENGHO y luego se estima para cada mes, trimestre o año por intermedio de la evolución del Índice de Precios del Consumidor (IPC). Para tener un grupo representativo tomamos como ejemplos la evolución salarial y las canastas de las provincias de Misiones, CABA y Tierra del Fuego (una provincia del norte, CABA para región centro y una provincia del sur). Como se observa en el Cuadro 7.1, en todo el período 1995-2015 el salario de bolsillo promedio del maestro de grado no logra cubrir el valor de la CBT.

Cuadro 7.1. Salario de bolsillo de maestra de grado con diez años de antigüedad, canasta básica total provincial y porcentaje de cobertura del salario docente en relación a la CBT. Argentina, provincia de Misiones, CABA y Tierra del Fuego (1995-2015).

Año	Sueldo de bolsillo, Maestro de grado con 10 años de antigüedad (incluye fondos federales). Promedio anual en pesos			Canasta Básica Total (CBT). Medición de pobreza de un hogar tipo (dos adultos y dos niños)			Porcentaje de cobertura del salario docente en relación a la Canasta Básica total (CBT)		
	Misiones	CABA	Tierra del Fuego	Misiones	CABA	Tierra del Fuego	Misiones	CABA	Tierra del Fuego
1995	312,45	416,49	813,79	672,41	914,44	1092,72	46,47	45,55	74,47
1996	322,89	416,49	770,28	657,79	915,86	1049,46	49,09	45,48	73,40
1997	328,1	416,49	746,17	641,50	920,70	1011,05	51,15	45,24	73,80
1998	328,1	420,53	813,79	649,72	929,22	975,88	50,50	45,26	83,39
1999	411,26	481,05	845,46	640,60	918,38	920,25	64,20	52,38	91,87
2000	393,04	481,05	802,12	632,82	909,76	879,87	62,11	52,88	91,16
2001	393,04	459,5	815,98	621,35	900,06	864,64	63,26	51,05	94,37
2002	393,04	459,5	838,4	603,38	1132,90	1337,52	48,92	40,56	62,68
2003	393,04	509,3	901,4	929,45	1286,19	1631,77	42,29	39,63	55,24
2004	409,37	566,19	979,27	979,18	1341,94	1617,47	41,81	42,19	60,54
2005	499,49	717,34	1340,56	1066,55	1471,33	1774,59	46,83	48,75	75,54
2006	737,37	938,94	1644,72	1160,76	1631,67	1977,80	63,52	57,54	83,16
2007	927,76	1152,15	2189,88	1370,77	1845,13	2459,84	67,68	62,44	89,03
2008	1160,31	1475,52	2775,61	1740,27	2262,89	3350,89	66,67	65,21	82,83
2009	1343,94	1776,21	2959,24	1953,37	2598,89	3851,28	66,80	68,34	76,84
2010	1391,04	1811,06	2899,19	2417,73	3270,73	4794,41	57,53	56,37	60,47
2011	1897,54	2335,38	3646,85	2995,92	4050,85	6224,88	63,34	57,65	58,59
2012	2241,79	2648,02	3991,77	3670,09	5008,53	7895,54	61,08	52,87	50,56
2013	3668,63	4424,08	7731,32	4620,84	6306,02	9713,52	79,41	70,16	79,59
2014	4823,16	5616,63	9780,93	6593,29	8937,79	13273,76	73,15	62,42	73,69
2015	6708,75	7493,58	11981,66	7979,14	11388,30	16694,37	84,08	65,80	71,77

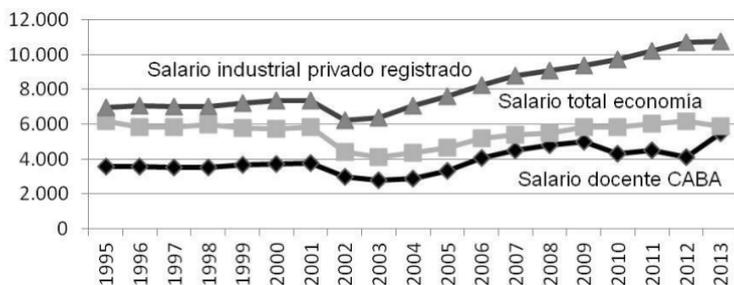
Fuente: elaboración de las autoras en base a CEICS, "Documento de trabajo. La evolución del salario docente", sobre datos del CGECSE e INDEC.

Para el caso de la provincia de Misiones, tal como muestra el Cuadro 7.1, en todo el período 1995-2015 el salario de bolsillo promedio del maestro de grado nunca logró cubrir el valor de la CBT. Como sucedió en todos los sectores de la clase obrera del país, la pauperización progresiva tras el "argentínazo" encuentra su estabilidad relativa después del 2004, comienza un ciclo ascendente (condicionado por la fuerte devaluación previa de los salarios) hasta 2010, momento en que la devaluación de ese año vuelve a disminuir el poder adquisitivo de los docentes a un poco más de la mitad. Un proceso de recuperación se registra hasta el 2015, donde encontramos el mejor número de la serie bajo estudio que cubre el 84,08% del valor de la

canasta. Es decir, en el mejor de los casos los docentes apenas se aproximan al valor de lo necesario para resguardar su reproducción material (comida, vivienda, vestimenta y servicios). En el caso de Tierra del Fuego que, luego de Santa Cruz posee uno de los salarios nominales más altos del país, vivió su mejor situación en el año 2001 (cubriendo casi el 95% de la CBT), y a partir de entonces un descenso hasta el 2005 y su posterior recuperación que encuentra límite con la crisis del campo en 2008. Por su parte, la CABA muestra una evolución más estable, aunque sus valores son tan bajos como los de las otras provincias. En ese sentido, una de las primeras conclusiones: un solo cargo no garantiza la subsistencia del docente como cabeza de familia.

Veamos por último un segundo indicador, comparemos el salario de los docentes en función del promedio del salario industrial y del salario promedio del conjunto de la economía (lo que incluye las fracciones peores pagas del trabajo informal). Tomemos el caso de los docentes de la CABA (*cfr.* Gráfico 7.2).

Gráfico 7.2. Evolución del salario real (a pesos de 2013) de docente CABA, total economía e industrial privado registrado, CABA (1995-2013).



Fuente: elaboración propia en base a CEICS, "Documento de trabajo. La evolución del salario docente", sobre datos del CGECSE.

El salario de los docentes se encuentra por debajo de los niveles del total de la economía y del salario del sector privado industrial (estos últimos pueden representar a las fracciones mejores pagas de la clase obrera ocupada).

A nuestro entender, pueden extraerse algunas conclusiones importantes. En primer lugar, la evolución del salario docente en el largo plazo muestra una caída general, lo que podría ser interpretado como un síntoma de proletarización de la profesión. Ello se refuerza si comparamos el salario de los docentes en función de otros sectores de la economía (trabajadores industriales y salario promedio) y el poder adquisitivo propio de ese salario: el docente con un solo cargo no puede ser sostén de un hogar tipo sin caer en la pobreza. Como vimos en la evolución de largo plazo, si bien la evolución salarial docente en los últimos años se recompone, esa mejora no recupera el valor histórico del salario docente. También vimos que los docentes pierden peso salarial en relación con otras fracciones de la economía: su salario está por debajo del promedio total de la economía y debajo del salario industrial. Así, la situación material del sector se ubica lejos del relato oficial que en la última década se construye sobre ellos: los docentes con un solo cargo no logran garantizar el acceso a la CBT de bienes y alimentos. Como veremos, la duración de la jornada y las condiciones de trabajo también cuestionan esa imagen de los docentes como grupo privilegiado que apenas trabaja cuatro horas por día.

La pauperización salarial fue de la mano de evidencia creciente del llamado “malestar docente”, al punto tal que estadísticas oficiales indagan sobre ese fenómeno. Según el balance inter-censal docente (1994-2004), el malestar docente habría aumentado 22%, teniendo en cuenta los establecimientos educativos, de ambos sectores de gestión y de todos los niveles de enseñanza. Nos preguntamos quiénes son esos trabajadores a partir de algunos datos del censo docente.

Ser docente: las características generales del trabajo

Los censos docentes proporcionan algunos datos para conocer ciertos aspectos del trabajo docente. El censo proporciona datos sobre nivel de calificación y estudios (tanto de los docentes en ejercicio como de sus padres), edad, distribución por sexo, duración de las jornadas, situación de revista, cantidad de escuelas en las que se trabaja, actualización y perfeccionamiento, entre otros. Lamentablemente, los datos del último censo realizado en 2014 aún no han sido publicados. Con lo cual aquí reconstruiremos la situación al 2004, último año disponible.

Según el censo 2004, la edad promedio del plantel era de aproximadamente 41 años. Los maestros y profesores que trabajan en el Nivel Inicial eran los más jóvenes y los del Secundario los que tenían mayor edad promedio. En todos los niveles de enseñanza, aquellos que trabajaban en escuelas de gestión privada eran algo más jóvenes que los del sector estatal. Estas diferencias resultaron similares a las ya advertidas en el censo de 1994. Sin embargo, para el censo de 2004, se observaba un proceso de “envejecimiento” del plantel docente de todos los niveles. En comparación con el censo anterior, la edad promedio del docente se elevó entre 3 y 4 años para el año 2004 tanto en el sector estatal como en el privado.

Para 2004, el censo muestra que el 68% de los docentes está exclusivamente frente a alumnos. Menos de la mitad de los docentes (46,2%) son solo titulares en todo el país; la mayoría tiene entonces formas de trabajo inestables: cargos provisionales, interinos, suplentes y contratos, entre otros. Aunque la proporción de titulares cae al 40,3% en el sector estatal. En el nivel primario, el 52% de los docentes estatales son titulares, mientras que casi la otra mitad tiene alguna forma de contratación inestable; el 81% está únicamente frente a alumnos. Tres de cada diez docentes manifiestan abiertamente que eligieron

la docencia porque representaba una salida laboral y un 4% porque no tuvo otra opción. En primaria la mayoría de los docentes concentra su trabajo en un solo establecimiento, pero el restante 30% trabaja en dos o más de tres. En primarias estatales casi el 58% es titular, mientras el otro 42% se reparte entre interinos y provisionales, suplentes, contratados o una combinación de ambas. Para los docentes de EGB3/Secundario básico, la cantidad de titulares desciende al 40%, siendo mayoritarias las formas de trabajo con mayor inestabilidad. En el sector estatal, el porcentaje de titulares desciende a 34% y el 75% se encuentra frente a alumnos. En lo que refiere a los motivos de la elección de la profesión, en el sector estatal un 25% de los docentes lo hicieron porque representaba una opción laboral (en provincias como Formosa, Corrientes, Chaco, Misiones y Santiago del Estero la cifra se eleva a 30% y 38%), un 2,5% más porque no tuvo otra opción (en las provincias citadas la cifra se eleva a entre 4% y 6%). Solo el 36% de los docentes estatales trabaja en un único establecimiento: casi un 28% lo hace en dos, y entre tres y cuatro casi otro 36%. Además, casi el 48% tiene designación por horas y un 29% por módulos, y solo el 38% es titular. En lo que refiere a los docentes de Polimodal (hoy Escuela Secundaria Orientada), solo el 32% reviste como titular en el sector público (cifra que en el sector privado se duplica) y el 66% ejerce funciones exclusivamente frente a alumnos. Más del 25% declaraba ser docente porque era una salida laboral y un 2,5% porque no tenía otra opción; ambos rangos aumentan en las provincias del NEA. Más del 60% de los docentes trabaja en dos o más establecimientos dentro del sector estatal y apenas un 8% tiene un cargo; la amplísima mayoría tiene designación por horas o módulos y solo el 33% era titular.

Algunos otros estudios nos permiten complementar la mirada sobre las condiciones de trabajo del censo. Por ejemplo, el estudio llevado a cabo en Rosario por Jorge Cohen aporta datos extra (Cohen, 2005: 57). A partir de encuestas

realizadas a 243 docentes de ocho escuelas públicas urbanas, el estudio reveló que el 50% de los docentes trabajaba más de 30 horas semanales (y un 12,9% más de 40), y el 47,5% de ellos aseguraba tener un tiempo de descanso inferior a los cinco minutos durante la jornada entre las distintas escuelas. Además, la tercera parte de los docentes sostenía que, en su hogar, realizaba una jornada de la misma duración que su trabajo en la escuela en tareas asociadas a su trabajo frente al aula (el 35,2%, más de treinta horas semanales).

La violencia surgía como una exigencia laboral y se constituía, para el 83,9% de los docentes, como un problema grave. Poco menos del 40% (37,4%) vio amenazada su integridad física y mencionó la existencia de formas de “delincuencia organizada” dentro de la escuela (en declaraciones del 32,5% de los maestros). En cuanto a la seguridad de los docentes en la escuela, el 53,3% de los maestros consideró que no era seguro trabajar en la escuela durante las horas de trabajo en las que lo hacía, y para el 62,7% era inseguro la entrada o a la salida (Cohen, 2005: 63).

En efecto, la violencia es otro de los fenómenos que impactan de lleno sobre las condiciones de trabajo de los docentes. Sobre un total de 768 casos de violencia escolar relevados desde 1969 a partir de la información periodística del diario *Clarín*, 585 casos se registraron entre 1991 y 2010. En el período bajo estudio, la violencia escolar creció tanto en extensión como en intensidad. Y si bien los alumnos aparecían como los principales agresores y víctimas, la intensidad con la que la violencia fue ejercida sobre los docentes como destinatarios creció en los años de la serie analizada (Alvarez Prieto, 2016).¹

1 Puede consultarse la base de datos construida en la tesis doctoral en la página del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales, <www.ceics.org.ar>, como base de datos “La violencia escolar en perspectiva histórica”.

Largas jornadas de trabajo (escolar y extraescolar), magros salarios, capacitación y perfeccionamiento en tiempo de ocio, inestabilidad laboral, dificultades en el acceso a la docencia por parte de los docentes jóvenes, parecen ser los síntomas distintivos del trabajo docentes. Veamos cómo impacta ello en la pérdida de su salud.

Salud y enfermedad en los trabajadores docentes

Miremos ahora las causas de enfermedad y licencias de los trabajadores docentes. En relación a los accidentes de trabajo, se registran por problemas vinculados con desniveles o averías en los pisos (32,3%) escalones o escaleras (25,7%) y superficies de tránsito y de trabajo en mal estado (22,8%). En lo que respecta a las pisadas, golpes o choques con objetos, esos tres suman el 45% de los accidentes. Como vemos, todos están vinculados a la crisis edilicia, un nuevo factor que desmiente el “relato”:

Si mediante determinadas políticas o prácticas preventivas pudiera reducirse a la mitad los accidentes que derivan en lesiones en las dos zonas del cuerpo más afectadas (pies y manos) el índice de incidencia de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales podría retroceder de 11,5 a 9,4. (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2014: 4)

Mientras que en el conjunto del Sistema de Riesgos del Trabajo, quienes en 2012 padecieron un accidente o una enfermedad profesional tuvieron en promedio 32,8 días de baja, en el sector educativo este indicador se eleva (34,7 días). No obstante, el hecho de que el promedio de días con incapacidad laboral transitoria (ILT) sea más baja en este sector

de actividad que en el total del sistema, resulta indicativo de que en los establecimientos educativos hay situaciones en las que se registran licencias más extensas —y que hacen aumentar los promedios— (esto está en línea con el ámbito privado también). Así, si bien la mitad de los trabajadores de la educación tiene hasta 13 días con ILT (2 menos que el conjunto del sistema), la extensión de algunas licencias lleva a que el promedio aumente considerablemente. Esto confirma nuestra hipótesis inicial sobre el “malestar docente” como aspecto crónico de su tarea: la irresolución de problemas de salud y psíquicos en la docencia termina en una licencia extendida.

El colectivo educativo representa uno de los sectores en los que mejor queda plasmada la subutilización de las Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (ART). Diferentes estudios pusieron en evidencia que la labor docente y las condiciones y medio ambiente de trabajo (CyMAT) tienen múltiples implicancias para la salud, pero el sistema de información de Riesgos del Trabajo muestra que las ART atienden fundamentalmente accidentes laborales y una proporción muy baja de enfermedades profesionales, proporción que se viene reduciendo durante los últimos años:

Este subregistro de enfermedades profesionales muestra que una parte importante de las afecciones que son causadas por la actividad docente podría estar siendo atendida por el sistema de obras sociales y por los efectores públicos. No obstante, esta situación de sub-registro, cuando se lo compara con el total del sistema, el porcentaje de enfermedades profesionales notificadas en el sector educativo más que duplica al del resto del sistema. (Superintendencia de Riesgos del Trabajo, 2014: 4)

Entonces, si bien aún es baja la cantidad de enfermedades profesionales reconocidas, las características del trabajo de los docentes hace que estos pierdan su salud: largas jornadas de trabajo, en más de un establecimiento, existiendo condiciones precarias en cuanto a su situación de revista en un grupo considerable —lo que aumenta la rotación de docentes—, desarrollando además tareas por fuera del ámbito laboral ya sea para su función cotidiana (planificaciones, actividades extraescolares, proyectos, diseño de actos y jornadas) como aquellas vinculadas a la conservación de su puesto (cursos de capacitación, estudios superiores de posgrado, etcétera).

Un análisis de estudios de campo representativos

El Centro de Investigación de la Educación Privada de la Provincia de Buenos Aires (CIEPBA) llevó adelante un estudio para conocer las condiciones y el medio ambiente de trabajo de los docentes privados y las consecuencias sobre su salud. El universo sobre el que trabajó la investigación fueron los docentes de las escuelas de nivel primario del partido de La Matanza y de La Plata durante noviembre y diciembre de 2008. En el estudio se realizaron 363 encuestas a docentes del nivel primario, abarcando 47 unidades educativas, mediante un cuestionario con preguntas cerradas y abiertas. Los resultados arrojaron que el 48% de los docentes encuestados consideraban que realizaban tareas burocráticas poco satisfactorias o agradables y tareas psicosociales, vinculadas al apoyo y contención de los alumnos. En las entrevistas mencionaron que, ante conflictos familiares de los alumnos, ellos asumían el rol de psicólogos y asistentes porque la mayoría de las escuelas no contaba con gabinetes psicopedagógicos ni con mediadores escolares.

En este mismo sentido, el 53% de los docentes señaló que los problemas de los alumnos que más los afectaban eran el abandono y el desinterés de los padres en su trayectoria escolar, seguido por la violencia entre los propios alumnos (49%) y los problemas de aprendizaje derivados de estas dos situaciones (44%).

Como si eso fuera poco, la carga global de las actividades desarrolladas dentro de la escuela era percibida como “alta” por el 69% de los docentes. Estar de pie y en movimiento durante toda la clase era una situación sufrida por el 70% de los docentes, y un 65% expresaba estar forzando la voz durante toda la jornada. Al ser consultados sobre si consideraban que su carrera docente les había producido algún daño a su salud, el 51,6% de los docentes contestó que sí. En referencia a los malestares que padecieron durante el último año, los datos arrojaban que un 67% padeció fatiga, cansancio y desánimo sin causa que lo justifique, un 64% dolores de cabeza, un 59% dolores musculares, de huesos y articulaciones, y un 56% nerviosismo o mal humor. El 74,9% de los docentes que tuvieron dolores de cabeza lo vincularon con su trabajo; reconocimiento que ascendía al 78% para el caso de los que padecieron fatiga, cansancio y desánimo, y alcanzaba al 80,3% del colectivo para los casos en que sufrían dolores musculares, huesos y articulares.

Los docentes también asociaban condiciones infraestructurales con el deterioro de su salud. Por ejemplo, cuando se les consultó acerca del estado de calefacción y/o refrigeración de las aulas, el 49% —casi la mitad— respondió que la misma era “muy mala”, “mala” o “regular”. Todos estos datos contradicen la idea de que las condiciones de infraestructura en los colegios privados son muy buenas, a diferencia de lo que sucede en los colegios de gestión estatal.

En línea con este estudio, desde el año 2013 el Departamento de CyMAT de SADOP realizó la segunda etapa de

la encuesta. Se elaboró una nueva con 111 preguntas para realizar en 888 escuelas afectando a 4.500 de todo el país. En la presentación de los primeros resultados, Marina Jaureguiberry, directora del Departamento CyMAT, aseguró que “la excesiva cantidad de alumnos por curso es un tema señalado con fuerza y en forma recurrente”, situación que genera una sobrecarga física y mental. El estudio resalta que los docentes del sector privado tienen en promedio más de 30 alumnos por curso y en algunas escuelas la cifra puede ascender a 40. El impacto en la salud es claro: “más del 35% de los docentes de ambos niveles educativos tuvo disfonías o afonías en el último año, mientras que el 65% de los docentes padece estrés” (SADOP, 2013: 31) y más del 70% manifestó padecer cansancio, fatiga y desánimo sin una causa aparente que lo genere (SADOP, 2013: 46). Esto nos lleva a pensar, como decíamos más arriba, que la interiorización de una preocupación asociada a la profesión puede nublar la identificación del origen de la misma. Si bien la presentación de los resultados de la encuesta nos muestra balances porcentuales de considerable dimensión, evita profundizar en las condiciones de enseñanza que producen estos malestares, es decir, la responsabilidad de ese grupo pequeño de empresarios y del Estado controlando tal situación.

Por otro lado, el número de estudiantes por curso puede estar sugiriendo el crecimiento de situaciones que imposibilitan desarrollar las tareas de enseñanza y aprendizaje en un clima adecuado, ya que:

... el 44,2% de los docentes encuestados de nivel primario y el 27,3% de los profesores expresan encontrarse realizando importantes esfuerzos de concentración y/o atención, como así también un 45,4% de los maestros y un 34,9% de los profesores está llevando a cabo

un sinnúmero de actividades al mismo tiempo [...]. Un 47,3% de los maestros expresa que contiene emocionalmente a sus alumnos [...] un 15,5% de los docentes de nivel primario encuestados siente que hay momentos que lo agotan emocionalmente. (SADOP, 2013: 40)

La sobrecarga de trabajo que poseen los docentes del nivel primario se refleja en el alto porcentaje de estrés padecido. Según la encuesta, el promedio trabaja 26 horas semanales, a los que se deben sumar alrededor de 11 horas semanales más en tareas ligadas a la docencia fuera del horario escolar. Es decir, que la jornada laboral total de los maestros alcanza un promedio de 37 horas semanales aproximadamente, y no las 20 horas contabilizadas como jornada legal (SADOP, 2013: 36). Acorde con esa situación objetiva y real frente a la pregunta de “¿cómo percibe su carga global de trabajo?”, el 35,9% contestaban que era “alta”, y “media alta” el 46,9% de los mismos. Por su parte, entre los docentes del nivel secundario, el 26,3% de los profesores afirmaron tener una carga de trabajo “alta” dentro del horario escolar, y el 47% como “media alta” (Mezzadra y Veleda, 2014).

Según la encuesta, en secundaria el 68% de los profesores trabajaba únicamente en establecimientos educativos de gestión privada, mientras que el 32% lo hacía en ambas. Para la mayoría la docencia era la única fuente de ingreso. El alto porcentaje de docentes secundarios que trabajaban exclusivamente en el ámbito privado remarca la particularidad del nivel: la fragmentación de las horas de trabajo y la informalidad para acceder a los cargos en el sistema público y estabilizar un paquete de horas. Ello puede llevar a muchos docentes a tomar la decisión de concentrar sus horas en instituciones del ámbito privado donde prevalecería el acceso a cargos, incluso en detrimento salarial y de la estabilidad laboral que en el largo plazo podría

obtenerse dentro del sistema público. En ese sentido, sumado a otros problemas —como la tardía clasificación e incorporación de docentes recién recibidos en los listados oficiales— la escuela privada puede aparecer como una salida laboral rápida.

La encuesta también mostró que el promedio de edad de los docentes se ubicaba en la franja de los 39 años de edad (Pascual, 2008: 22). Los datos profundizan una dimensión que arrojó el censo nacional de 2004, porque traslada al ámbito privado una tendencia al “envejecimiento” del plantel docente, sector en el que suelen comenzar a trabajar los llamados “docentes nóbeles” (los casos más representativos podrían ser los de CABA y provincia de Buenos Aires) por la dificultad de ingresar al sistema público sin puntaje ni título. Aunque la inserción de los docentes jóvenes también varía entre provincias. Un aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de observar la situación de los docentes nóbeles en las escuelas públicas es el problema de la rotación, asociado a la dificultad de consolidar un paquete de horas que les garantice su subsistencia. En un estudio del CIPPEC sobre la distribución de docentes a nivel nacional, se asocia la rotación de docentes con las características socio-estructurales de la matrícula. Según este trabajo, en las escuelas públicas que reciben estudiantes de sectores socioeconómicos medios y altos, el 82% de los docentes tenía cinco o más años de experiencia, proporción que caía por debajo del 77% en las escuelas ubicadas en barrios obreros pauperizados. Esta diferencia era más amplia en algunas provincias, como Catamarca, la provincia de Buenos Aires y Salta (Mezzadra, 2007). Los autores del estudio, reeditando una versión de la profesión asociada con el apostolado, abonan la idea de que se relega a los inexpertos a las situaciones áulicas más conflictivas, lo que redundaría en una educación de peor calidad.

Un problema de alta repercusión pública es el del ausentismo. En un análisis posterior que expone los avances del análisis de la encuesta de docentes privados, se señala que el 50% de los docentes de primaria y el 57% de secundaria tomó una licencia en el último año (2012), pero el 73% de los docentes iban a trabajar enfermos, por ejemplo disfónicos.² Esa situación responde al control más directo que ejerce la patronal sobre sus trabajadores, ya que la mayoría de los docentes se relacionan de forma individual y atomizada con la entidad propietaria, que no garantiza la continuidad permanente del cargo (por lo que los docentes dudan en faltar). Sin embargo, la acumulación de síntomas derivaría en una licencia.

Según el estudio de SADOP, el ausentismo docente se vincula con las condiciones laborales. Discutiendo la famosa “irresponsabilidad” o “viveza” del docente de la que habla el relato: “... el ausentismo se presenta como forma de encontrar un respiro, una huida, una fuga que permite al docente escapar momentáneamente de las tensiones acumuladas en el trabajo, producto de la organización en la escuela” (SADOP, 2014b).

Junto a esta respuesta encubierta, a las malas condiciones de trabajo surge otra durante la última década: los cargos sin cubrir al comienzo del ciclo lectivo. Se estaría evidenciando la falta de atracción de la docencia, ya sea por motivos salariales o por las condiciones de trabajo. En Comodoro Rivadavia, para marzo de 2012, se encontraban 22 cargos de primaria sin cubrir.³ Durante febrero de 2016, en la misma ciudad, los cargos sin cubrir eran 43 (35 de ellos en el nivel primario) y ponían en duda el inicio de las clases.⁴ El

2 La cifra contemplaba disfonías u otras patologías en las cuerdas vocales, incluyendo nódulos (*idem* anterior).

3 <<http://www.elpatagonico.com/en-comodoro-hay-22-cargos-cubrir-n616405>>.

4 <<http://www.elpatagonico.com/hay-43-cargos-grado-cubrir-si-no-hay-maestros-no-hay-clases-n1472562>>.

mismo panorama se presentaba en la CABA. En mayo de 2011 faltaban cubrir 600 cargos en primaria y 300 en media.⁵ En una entrevista de marzo de 2013, Eduardo López, titular de la Unión de Trabajadores de la Educación (UTE), señalaba:

... las materias donde más docentes faltan son Química e Inglés, pero también faltan muchos docentes de grado en las escuelas del sur de la ciudad. En esos casos, puede pasar que las directoras de las escuelas se pongan al frente del aula o que los chicos tengan horas libres. Los que estudian inglés tienen otras salidas laborales mejor remuneradas, como las academias o el ámbito privado.⁶

En abril del mismo año, el Ministerio de Educación porteño estimaba que el déficit de docentes de grado era de unos 500 profesionales, “es decir, cerca del 3% de los 16.000 que hay en actividad”.⁷ En julio del 2016 la ministra de educación porteña, Soledad Acuña, señalaba que la falta de docentes era crítica e inclusive afectaba la implementación de algunos programas.⁸

Sin embargo, la falta de docentes en determinadas zonas se encuentra íntimamente asociada a las condiciones de mayor degradación del ejercicio del trabajo por parte de los docentes. Recordemos que en la CABA, durante las últimas cuatro décadas, el distrito escolar que más creció en

5 “El gremio sostiene que las condiciones laborales no son atractivas para que los jóvenes ingresen a la carrera docente. (...) De acuerdo con UTE, de los 30 mil cargos en el nivel primario, alrededor de 600 están vacantes, lo que afectaría a unos 15 mil chicos”, *Página/12*, en línea: <<http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-168806-2011-05-25.html>>.

6 <<http://www.perfil.com/ediciones/sociedad/-20133-758-0046.html>>.

7 <<http://www.lanacion.com.ar/1570550-faltan-mas-de-500-maestros-en-las-escuelas-portenas>>.

8 <<http://www.telam.com.ar/notas/201607/156898-faltan-docentes-ciudad.html>>.

términos absolutos fue el número 19, con un aumento de su población en 53.487 habitantes. Se trata del distrito que agrupa a los barrios más pauperizados de la ciudad: Nueva Pompeya, Villa Soldati, el sur del barrio de Flores, Villa Riachuelo y Villa Lugano. Durante el año 2006, por ejemplo, era el distrito con mayores niveles de desocupación y subocupación (11,6% y 13,1%, respectivamente) y de pobreza —29,3% en la comuna 8 (Villa Lugano, Villa Riachuelo y Villa Soldati); 27,9% en la comuna 4 (Barracas, Nueva Pompeya y Parque Patricios)—.

Del mismo modo, en el conurbano, los partidos que más se expandieron fueron los más empobrecidos: Florencio Varela (332,7%), Esteban Echeverría y Ezeiza (318,1%), Moreno (296,8%), Merlo (179,8%), José C. Paz, Malvinas Argentinas y San Miguel (174,1%), La Matanza (169,4%), Berazategui (153,8%), Tigre (147,1%) y Almirante Brown (126,9%), y allí también es donde se registra ausentismo y rotación.

Para paliar el deterioro de su salud, algunos estudios registran el impacto de la medicalización en el sector docente. Dentro de los estudios de medicina laboral, se destaca el que realizaron Mabel Ojea, Tamara Socolovsky y Paula Matheu en el marco de la “Campana de desmedicalización de la vida cotidiana” que llevó adelante la Secretaría de Salud de SUTEBA (Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires) (Ojea, Socolovsky y Matheu, 2014: 403-409). Se administró una encuesta a 168 afiliados docentes sobre “utilización de psicofármacos” en los centros de atención primaria entre septiembre de 2011 y febrero de 2012. En general encontraron que las causas de prescripción eran problemas como ansiedad, angustia y depresión y, en casi un cuarto de los casos, la prescripción no resultaba clara; en todos los casos, el consumo de psicofármacos podía extenderse de forma regular por varios años. El problema de fondo que manifiesta el consumo de

psicofármacos de forma regular es el intento de atenuar de forma individual el padecimiento para poder continuar la rutina. De esta manera, el trabajador logra exteriorizar y desentenderse de su propio contexto de trabajo (de las preocupaciones sobre los problemas de sus alumnos, de la incapacidad de alcanzar un clima de aprendizaje adecuado, de su inestabilidad en el cargo). Esos problemas que percibe de forma aislada y privada (condicionado en parte por la carga extra-escolar de su trabajo intra-escolar) en realidad son estructurales, porque afectan a la salud de todo el colectivo docente. En suma, el carácter de este estudio no hace más que reforzar la tendencia a interiorizar y encubrir el padecimiento en el ámbito de trabajo.

Una primera síntesis

En este capítulo presentamos una primera aproximación a los cambios en las condiciones de vida y de trabajo de los docentes en Argentina y su impacto en su salud. Desde el 2008, el relato oficial los presenta como trabajadores en inmejorable posición. Privilegiados que negocian buenos salarios en paritarias siendo, además, sus condiciones de trabajo mucho más favorables que las de otros sectores. El relato oficial machaca, una y otra vez, la idea de que la jornada laboral de los docentes es corta (apenas cuatro horas diarias), con larguísimos descansos vacacionales (tres meses mínimo) en un medioambiente de trabajo cuidado (a través de los planes de infraestructura escolar). Sin embargo, la realidad desmiente de plano este relato. Como vimos, la reconstrucción del salario muestra que, en el largo plazo, el salario docente no hace más que caer y, si bien durante los último doce años se registró una recomposición salarial, el salario de los docentes es bajo: un solo cargo no logra cubrir la canasta básica total de alimentos y el poder

de compra de los docentes es menor a los del promedio de la economía. Los datos censales mostraban que una cantidad considerable de docentes tiene un solo cargo; ello implica que el salario que reciben los ubica al borde de la pobreza como jefes de hogar.

Lejos están los docentes de trabajar cuatro horas. La duración real de la jornada de trabajo se extiende casi el doble si contemplamos el trabajo extra-clase. La inestabilidad y la dificultad de inserción de los docentes jóvenes aparece como otra de las características de la docencia, problemática que se expresaba también en la rotación docente (en escuelas descartadas por los docentes con mayor puntaje o en el sector privado). El medio ambiente de trabajo está muy lejos del ideal del relato. Vimos en los estudios sindicales la proliferación de patologías propias asociadas a las condiciones de trabajo: el impacto de la infraestructura escolar en quebraduras, torceduras y otras patologías; problemas en las cuerdas vocales vinculadas a cursos sobrepoblados. Pero también, el stress, el desgano y el agotamiento paliado por una salida individual (ausentismo como vía de fuga) o por el uso farmacológico de psicofármacos para superar tal condición.

La salud y las condiciones de trabajo se modificaron drásticamente en las últimas décadas al calor de la degradación educativa y social. El relato oficial sobre los docentes solo busca oscurecer su real situación impidiendo el abordaje colectivo y organizado a los nuevos problemas de la profesión.

Bibliografía

Álvarez Prieto (2016). *La violencia escolar en perspectiva histórica. Un análisis de la trayectoria del fenómeno en escuelas públicas de nivel medio (Ciudad de Buenos Aires y conurbano bonaerense), 1969-2010*. Tesis doctoral dirigida por Eduardo Sartelli. Buenos Aires, Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires.

AAVV. (2011). *Salud y condiciones de trabajo en el sector docente: diagnóstico y respuestas posibles*. Taller de Estudios Laborales (TEL), informe final provisorio. Buenos Aires, Ademys.

Birgin, A. (1999). *El trabajo de enseñar*. Buenos Aires, Troquel.

Departamento de CyMAT (2013). La salud de los docentes y su relación con las condiciones de trabajo. En *La Tiza*, núm.57, año 23. Buenos Aires, SADOP.

_____. (2014). Presentismo/Ausentismo: dos caras de la misma moneda. En *La Tiza*, núm.60, año 24, julio. Buenos Aires, SADOP.

Esteve, J. M. (1994) *El malestar docente*. Barcelona, Paidós.

Fernández de Kirchner, C. (2008). *Discurso de Apertura de las Sesiones Ordinarias del Congreso de la Presidente de la Nación Cristina Fernández de Kirchner*, 1 de marzo.

_____. (2010). *Palabras de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Escuela N° 24 del Partido de Berazategui con motivo de la inauguración oficial del ciclo lectivo 2010*, 2 de marzo. Disponible en línea: <<http://www.casarosada.gov.ar/discursos>> (consulta: 26-6-2014).

_____. (2011a). *Mensaje de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner a la Asamblea Legislativa con motivo de la apertura del 129° período de sesiones ordinarias del Congreso de la Nación*, 1 de marzo. En línea: <<http://www.cfkargentina.com/cfk-en-el-congreso-apertura-del-periodo-de-sesiones-ordinarias-2011/>> (consulta: 18-10-2016).

_____. (2011b). *Acto de Asunción de mando en el Congreso de la Nación*, 10 de diciembre. En línea: <<http://www.casarosada.gov.ar/discursos>> (consulta: 26-6-2014).

_____. (2012). *Discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Apertura del 130° Período Ordinario de Sesiones del Congreso*, 1 de marzo. En línea: <<http://www.cfkargentina.com/cfk-en-el-congreso-apertura-del-periodo-de-sesiones-ordinarias-2012/>> (consulta: 18-10-2016).

_____. (2014). *Discurso de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner en la Apertura del 132° Período Ordinario de Sesiones del Congreso*, 1 de marzo. En línea: <<http://www.cfkargentina.com/cristina-asamblea-legislativa-2014/>> (consulta: 20-10-2016).

González, H. (2009). *Reconociendo nuestro trabajo docente*. Buenos Aires, CTERA.

Jaureguiberry, L. M., Chaves, J., García Salciarini, M. et al. (2010). *Las condiciones de trabajo y salud de los docentes privados*. Buenos Aires, SADOP.

- Kohen, J. (2005). Estudio de caso en Argentina. En Robalino Campos, M. y Körner, A. (coords.), *Condiciones de trabajo y salud docente. Estudios de casos en Argentina, Chile, Ecuador, México, Perú y Uruguay*. Chile, PRELAC-UNESCO.
- Martínez, D. (2009). Dimensiones del trabajo docente: una propuesta del abordaje del malestar y el sufrimiento psíquico de los docentes en Argentina. En *Educação e Sociedade*, vol. 30, núm.107, pp. 389-408. Campinas, Unicamp.
- Mezzadra, F. (2007). *El sistema de distribución de docentes en Argentina. Informe de Asistencia Técnica para la Implementación de Metas Específicas de la Ley de Educación Nacional*. Inédito. Buenos Aires, CIPPEC.
- Mezzadra, F. y Veleda, C. (2014). *Apostar a la docencia. Desafíos y posibilidades para la política educativa argentina*. Buenos Aires, Fundación Cippec-Unicef.
- Ministerio de Educación y Justicia (1965). Informe de la República Argentina. En *Congreso Mundial de Ministros de Educación para la Liquidación del Analfabetismo*, 8 al 19 de septiembre. Teherán.
- Ojea, M., Socolovsky, T. y Matheu, P. (2014) Algunos interrogantes surgidos del análisis de una encuesta en centros de atención primaria de la salud a docentes utilizadores de psicofármacos. En Badano, M. del R. y Ríos, J. (coords.), *Trabajo docente y pensamiento crítico. Políticas, prácticas, saberes y transformación social. II Seminario de la Red Latinoamericana de Estudios sobre Trabajo Docente (Red Estrado)*. Paraná, Fundación La Hendija.
- Pascual, L. (coord.) (2008). Perfiles, formación y condiciones laborales de los profesores, directores y supervisores de la escuela secundaria. En *Boletín de la DINIECE, Temas de Educación*, año 3, núm. 6, noviembre-diciembre, Buenos Aires, DINIECE.

Capítulo 8

Entre planes sociales y la represión

La política estatal hacia los llamados “pueblos originarios” en la Argentina actual

Roberto Muñoz

Los hoy llamados “pueblos originarios” han cobrado una notable visibilidad pública en América Latina en las últimas décadas. Esto ocurre no solo en países en los que tradicionalmente se los ha considerado una porción importante de la población —México, Bolivia, Ecuador y Perú— sino también en aquellos donde la cuestión indígena tuvo una presencia marginal. Muestra de este último caso es la Argentina, donde sobre todo, a partir de la década del noventa, surgen y se desarrollan múltiples organizaciones que se reivindican como representantes de esta población en diferentes provincias del país. A su vez, desde el aparato estatal, tanto el nacional como los provinciales, se desarrollan una serie de herramientas legislativas e instituciones específicas destinadas a abordar a las personas que quedan englobadas bajo esta denominación identitaria.

En el mismo sentido, la abundante producción académica sobre la temática refuerza la idea de un “resurgir indígena”. Si uno se guía por las actuales cifras oficiales que miden esta población, ese despliegue parece justificado. Más allá de las disparidades que hay entre las distintas fuentes, las

mismas coinciden en que los denominados “indígenas” representarían a una franja minoritaria pero significativa de los habitantes del país. Se trataría —y así quedó establecido en la reforma constitucional de 1994— de “pueblos pre-existentes” al Estado-nación, con formas de vida distintas a las del resto de la sociedad. Marcando una distancia cultural, se les prescribe una idiosincrasia o cosmovisión radicalmente diferente, atada a modos de producción que no serían plenamente capitalistas.

Sin embargo, cuando uno se detiene a analizar las formas concretas de reproducción de esta población, se observa que detrás del “indígena” se oculta a una de las fracciones más pauperizadas de la clase obrera argentina. Es decir, se trata de sujetos plenamente incorporados al sistema capitalista bajo la forma de obreros desocupados. Este proceso de proletarización no es un fenómeno reciente. Observemos la cuestión en la región chaqueña, que por su incorporación relativamente tardía al proceso de producción capitalista, se constituyó en el último refugio de las comunidades aborígenes ante el avance del capital, y que hoy en día, según los datos censales, concentraría uno de los porcentajes más altos de la supuesta población indígena. En esta zona, las avanzadas militares de fines del siglo XIX y principios del XX permitieron la ocupación definitiva de la región chaqueña que todavía seguía en manos de diferentes “pueblos originarios”, la destrucción de su economía y su incorporación como fuerza de trabajo asalariada. Así, se completaron las tareas necesarias para permitir el desarrollo capitalista en este espacio, marcando, a su vez, el final del proceso de acumulación originaria en Argentina.

Entre las formas que tomó el avance del capital en este región, la producción forestal y azucarera, en primer lugar, y luego el cultivo del algodón, fueron las que requirieron gran parte de la fuerza de trabajo “indígena”, como obreros

transitorios para las tareas de cosecha. En el caso del algodón, esta actividad inició su ciclo expansivo a mediados de la década de 1920. Pero, desde mediados de la década de 1960 en adelante, la actividad entró en una crisis que no se revirtió, reproduciéndose en una escala estancada hasta principios de los años noventa. El repunte que tuvo la actividad a fines del siglo XX fue de la mano de la mecanización de la cosecha, lo que redundó en la eliminación masiva de puestos de trabajo (Muñoz, 2016). Mientras un cosechero podía recolectar un promedio de 80 kg diarios de algodón cuando realizaba la tarea de manera manual, ahora se alcanzan los 6.000 kg por obrero utilizando una cosechadora de dos surcos. Este proceso de expulsión de obreros no pudo ser contrarrestado por el avance sojero y de la ganadería que se observa en los últimos años en la región, por tratarse de actividades que demandan una cantidad insignificante de fuerza de trabajo (mientras la cosecha manual de algodón en Chaco demandaba 150 horas de trabajo por hectárea al año, la soja requiere de 4 horas de trabajo por hectárea al año). De esta forma, toda esa masa de población obrera, históricamente incorporada como trabajadores rurales transitorios, en la actualidad logra sobrevivir a duras penas en base a la percepción de planes sociales de asistencia o, en menor medida, con changas o algún empleo estatal precario. Por eso, Chaco es una provincia que ha expulsado población durante los últimos cincuenta años. También ha motivado una migración rural-urbana intraprovincial: entre 1980 y 2001 perdió alrededor de 70.000 habitantes rurales. Ese proceso los desplazó del campo a las ciudades de la provincia, principalmente Resistencia, que tiene una población de 360.000 personas, 100.000 de las cuales viven en alguno de los 184 asentamientos que abarcan 25 kilómetros de la periferia de la ciudad. De esos 100.000, se estima que alrededor de la mitad son migrantes recientes del

interior de la provincia. Los desplazados del interior chaqueño llegan también a los asentamientos de la periferia de Buenos Aires y Rosario, entre otras ciudades.

En este sentido, consumado el proceso de proletarización hace más de cien años, la tendencia general que se manifiesta en las últimas décadas es el pasaje de esta fracción de la clase obrera argentina de su condición de sobrepoblación relativa latente a estancada, en el caso de los que logran migrar a las ciudades, o el hundimiento en el pauperismo consolidado, los que todavía continúan en los espacios rurales (Marx, 2004; Kabat, 2009). Precisamente, estos últimos, aquellos a los que más fácilmente el imaginario popular identifica como “indígenas”, son los que se encuentran en las peores condiciones de vida, no por supuestas pautas productivas y culturales extrañas, sino por su condición de población sobrante para el capital.

Con estos elementos, sin embargo, la burguesía interviene a través de diferentes instituciones, inculcando una identidad falsa a estos obreros, obstaculizando su reconocimiento en tanto tales, y fracturando así a la clase obrera. La política de los gobiernos tanto nacionales como provinciales para estos sectores combina la cooptación y la represión. El primer mecanismo ha sido eficaz en la regimentación —salvo contadas excepciones— de gran parte de las organizaciones que se reivindican indígenas. Más allá de algunas medidas de carácter simbólico, de supuesto respeto a la diversidad cultural, en ningún momento se perdió de vista la condición de obreros expulsados del sistema productivo de gran parte de esta población, a la que se logró transformar en parte de la clientela política de los partidos burgueses, de la misma manera que ocurrió con el movimiento piquetero a base de planes sociales de asistencia.

Por otro lado, cuando estos mecanismos fallan, se apela a la represión. Durante los gobiernos kirchneristas, en

particular, esta política adquirió formas peculiares. Se masificó la represión irregular, aplicada no solo contra los llamados “pueblos originarios”, sino contra amplias capas de la clase obrera. La extensa lista de ataques e incluso de asesinatos de miembros de estas organizaciones indigenistas que han cobrado difusión pública se dieron en gran parte de una manera solapada, como casos supuestamente aislados —encubiertos tras aparentes rencillas vecinales o dudosos accidentes de tránsito— protagonizados por patotas. Aunque en menor medida, también fueron numerosos los casos de represión abierta a cargo de las fuerzas estatales. Uno de los casos, entre otros, que alcanzó resonancia nacional, fue la represión policial a la comunidad qom La Primavera, en Formosa, que provocó la muerte de uno de sus dirigentes, Roberto López, en 2010. En cuanto a la primera forma, es elocuente la estadística de obreros rurales, miembros de alguna organización, que fallecen en supuestos “siniestros viales”. Enumeremos: al día siguiente de la represión sobre La Primavera, un oficial de policía atropella a un dirigente del Movimiento Campesino de Formosa, Mario López, provocando su deceso. En junio de 2011, muere en un confuso accidente con su moto Mártires López, máximo referente de la Unión Campesina del Chaco y dirigente del Partido Comunista Revolucionario (PCR). Otra vez en Formosa, el 9 de diciembre de 2012, Ricardo Coyipé, su mujer y su nieta fueron atropellados por un gendarme. Él sobrevivió, pero las mujeres murieron en el acto. A principios de 2014, a pocos días del asesinato de Imber Flores en Bermejito (Chaco), murió un sobrino de Félix Díaz, Juan Daniel Asijak, de 16 años. La versión oficial dice que chocó con su moto. Los médicos que lo atendieron, en cambio, sostienen que tenía un golpe en la cabeza hecho con un fierro oxidado. Toda esta lista muy incompleta de casos permanece impune.

La construcción estatal de la “cuestión indígena”

Los indígenas según las fuentes oficiales

Los cambios introducidos en la Constitución Nacional de 1994 fueron el punto de llegada de un proceso de reconocimiento legal que venía gestándose desde la década del ochenta en las provincias que históricamente habían concentrado gran parte de la población denominada “indígena”.¹ Con variantes, aquellas herramientas legales consideraban al indígena como un ciudadano singular con derechos especiales. También por primera vez, presentaban al indígena como destinatario exclusivo de la acción legislativa. Si hasta entonces las políticas públicas operaban alcanzando por igual a todos los ciudadanos, de ahora en más procurarían instrumentarse en base al reconocimiento de que los mismos deben ser objeto de atención estatal especial (Carrasco, 1997). A partir de estos nuevos lineamientos, al igual que en la mayoría de los países latinoamericanos, en Argentina se considera oficialmente como criterio válido para la definición de lo indígena un concepto extremadamente subjetivista, dominante actualmente en la antropología, y que se basa en la auto-percepción o auto-reconocimiento de los sujetos bajo estudio.

En base a ello, el censo de población de 2001 incluyó, por primera vez, una variable que interrogaba a los censados si se reconocían como indígenas y si podían indicar su pertenencia étnica. Bajo esta metodología, se obtuvo una cifra de

1 La primera Ley del Aborigen es una ley provincial, sancionada por la provincia de Formosa (1984), que tiene especial influencia en la formulación de las leyes provinciales posteriores y en la Ley Nacional del Aborigen (Ley 23.302), sancionada en 1985 y reglamentada en 1989. Luego se promulgaron las leyes de Salta (1986), Chaco (1987), Misiones (1987), Río Negro (1988), Chubut (1990) y Santa Fe (1993). Por fin, se logra la derogación del artículo 67 inc. 15 de la Constitución Nacional de 1853 y su reemplazo por el artículo 75, inc. 17, en la Constitución Nacional de 1994 (Golluccio, 2008).

población total indígena de 1.117.746, distinguiendo a su vez su localización entre áreas urbanas (agrupamientos con dos mil o más personas), población rural agrupada (menos de dos mil personas) y población rural dispersa.

No obstante, ese total carece de validez científica. El criterio de auto-adscripción conlleva innumerables inconsistencias. Por ejemplo, al cruzar los datos de la población que se reconoce como indígena con los de nacionalidad de origen, encontramos un número importante de casos que son nacidos en España, Italia, entre muchos otros países del mundo. En ese sentido, la pregunta en sí dio lugar a distintas interpretaciones, confundiendo muchas veces pertenencia con apoyo a la “causa indígena” o bien “originario” de determinada localidad en su país de origen, entre otras. Tal es así que manteniendo los mismos criterios de auto-reconocimiento, la población que se considera indígena decrece en términos absolutos en el período inter-censal 2001-2010. Sin elementos que justifiquen tal reducción, en 2010 habría poco más de 955.000 indígenas en Argentina, 162.714 “indígenas” menos de los que supuestamente había en 2001.

Estas marcadas inconsistencias que muestran las estadísticas oficiales referentes a esta población parten de la imposibilidad de dar una definición científica de la categoría “indígena”. ¿Cuáles son las relaciones sociales que contiene lo “indígena”? Bajo el mismo concepto, quedan englobados “indígenas” explotadores e “indígenas” explotados. Al mismo tiempo, referirse a los diferentes grupos étnicos en los que se referencian estos sujetos como “pueblos originarios” o “naciones indígenas” implicaría probar la existencia de una burguesía indígena con intereses propios, que establezca un dominio sobre un espacio de acumulación específico. De lo contrario, sin burguesía nacional no hay cuestión nacional; las “naciones” son un producto de las revoluciones burguesas (AA.VV., 1973; Harari, 2016).

Obreros rurales y urbanos

Hoy en día, una gran paradoja de los estudios sobre la temática es que destacan el carácter urbano de la supuesta cuestión indígena: actualmente siete de cada diez de las personas que se definen como parte de los “pueblos originarios” viven en ciudades. Es más, uno de cada tres de ellos vive en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA —Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Gran Buenos Aires—). No obstante, es un lugar común afirmar que la principal demanda de los llamados “pueblos originarios” es disponer de las tierras que les corresponderían por derecho ancestral para poder desarrollar su vida, atada a pautas que serían diferentes a las que rigen la sociedad capitalista. Como dijimos, la Constitución Nacional de 1994 incluyó un apartado que establece la “preexistencia étnica y cultural de los pueblos originarios”, a la vez que reconoce “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que tradicionalmente ocupan, y regula la entrega de otras aptas y suficientes para su desarrollo humano”. Esta normativa y la suscripción de Argentina al Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) —que fija derechos especiales para los pueblos indígenas— dispararon los reclamos en ese sentido. Para poder tramitarlos, el Estado exige contar con personería jurídica. Es así que desde entonces emergieron gran cantidad de asociaciones indígenas.

Sigamos el derrotero de una de las “comunidades indígenas” que proliferan en la provincia de Buenos Aires: el nucleamiento guaraní “Cacique Hipólito Yumbay”, instalada en la localidad de Glew. Compuesta actualmente por 18 familias, sus primeros integrantes llegaron a mediados de los años setenta. La familia troncal, oriunda del Chaco boliviano, vivía en Salta, primero en el campo y, más tarde, en la ciudad de Tartagal, y había trabajado en los ingenios

de la zona. Con la crisis de la actividad y el avance de la frontera agropecuaria, fueron desalojados de las tierras que ocupaban. Luego, en sucesivos viajes, estas familias unidas por lazos parentales terminaron recalando en el barrio de Pompeya de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). Años después, escapando del hacinamiento, llegaron a Glew. Una vez aquí, sufrieron nuevos intentos de desalojo. Recién en este punto y ante esta situación, deciden tramitar una personería jurídica que les habilite el reconocimiento estatal como comunidad indígena. Finalmente, luego de sortear todo tipo de trabas burocráticas, la “comunidad” logró la compra de las tierras que ocupaban gracias a fondos otorgados por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) (Weiss, 2013). Se trata de un caso excepcional. El resto de las organizaciones con características similares de la zona no ha tenido todavía la misma suerte. Pero además, hay que resaltar que fuera de toda alusión culturalista, la descripción de los avatares de estas familias es la misma que la de miles de obreros por acceder a un techo.

El mismo censo del 2010 indica que un porcentaje elevado de esa población que se reconoce como indígena ha migrado recientemente a la región del AMBA. Un 15% de ellos nació en otro país (podemos suponer, al señalarse una presencia “aymara” de una magnitud similar, que entre ellos se encuentra parte de la población de origen boliviano que vive en esta zona) y, en el caso de los argentinos, un 38,8% declaró haber nacido en otra provincia. El ejemplo más claro de este proceso se observa entre los que adscriben al “pueblo Qom”, oriundos de la región chaqueña y que, desde la década de 1960 y más marcadamente desde los noventa, constituyen la mayoría de los que se establecen en el eje Rosario-Buenos Aires-La Plata.

Desde la antropología, algunos trabajos se detienen en analizar las características que asume el proceso migratorio,

destacando que su concepción de “comunidad” actuaría como factor de cohesión y solidaridad, que les permitiría “mantener viva su cultura” en los ámbitos de llegada. Una de las expresiones de este fenómeno sería la proliferación de “barrios tobas” en diferentes ciudades. Otros discuten si, en la nueva vida citadina, el avance de la “asalarización” entre estos pobladores pone en crisis o no su identidad indígena (Weiss, 2013). Todos estos planteos parten del error de considerar como específico de los llamados “indígenas” elementos que atraviesan a extensas capas de la clase obrera. ¿Qué diferencias sustantivas hay entre esta forma de organizar la migración basada en lazos intra e inter familiares y la que realizan los obreros agrícolas tucumanos o santiagueños que migran a levantar la cosecha de fruta fina en Río Negro o a realizar el desflore del maíz en la región pampeana? ¿Acaso son distintas de las prácticas de las desplegadas por argentinos descendientes de europeos que en estas últimas décadas han migrado a España o Italia? Estos patrones migratorios constituyen un fenómeno largamente estudiado por los especialistas en migraciones ya que trascienden espacios geográficos o grupos étnicos específicos. Por otro lado, la idea del “avance de la asalarización” parte del supuesto falso de que en sus tierras de origen vivían bajo un modo de producción distinto, desconociendo el proceso de proletarización ya completado hace por lo menos un siglo. Precisamente, es su condición de obreros desocupados lo que provoca la migración y una vez acá, como los mismos antropólogos señalan, siguen reproduciendo su vida estrictamente como obreros: fundamentalmente, como cartoneros o empleándose en las ramas de la construcción o de servicios (limpieza y mantenimiento) y, en el caso de las mujeres, en el empleo doméstico.

En relación a los que todavía mantienen su residencia en espacios rurales, veamos la situación en uno de los parajes

con población identificada como indígena en los que venimos desarrollando trabajo de campo. Resulta, a su vez, especialmente ilustrativo en cuanto a la política pendular de la burguesía entre la cooptación y la represión. A mediados de 2014, visitamos la comunidad Francisco Muñiz, ubicada a pocos kilómetros de la localidad Las Lomitas, en el centro de la provincia de Formosa. Las características generales del asentamiento no difieren sustancialmente de cualquier otro ubicado en la periferia de las grandes ciudades: caminos de tierra sin mantenimiento, anegadizos. Casas precarias y diminutas en relación al tamaño de las familias, que no cuentan ni con agua potable, ni inodoro con descarga sanitaria, ni red de gas natural. Ausencia total de transporte público y motos de baja cilindrada como único medio para movilizarse. Chicos con claros signos de malnutrición o desnutrición, gracias a una dieta rigurosa y exclusivamente hidratocarbonada, vestidos gracias a la caridad privada —camisetas de fútbol, remeras con personajes de Disney—, muchos de ellos, descalzos.

La desocupación abierta en la que se encuentra la mayoría hizo posible que gran parte que ellos nos den la bienvenida a nuestro arribo, un lunes al mediodía. En el caso de las mujeres, solo encuentran ocupación en sus hogares. Están a cargo de la crianza de sus hijos, algunas hacen artesanías con barro y canastos. En los pocos casos de familias que tienen algunas gallinas y cabras para autoconsumo, son ellas las que generalmente se encargan de su cuidado. Los hombres, por su parte, realizan algunas changas esporádicas, como peones de albañilería, hacheros o serenos en algún campo privado de la zona. Detectamos solo dos casos que se empleaban en el sector público. Son cargos que surgieron en el último tiempo a partir de las disposiciones legislativas sobre los pueblos originarios: el agente sanitario aborigen y el maestro de

escuela bilingüe, puestos con salarios por debajo del mínimo, vital y móvil.²

De todas formas, el principal ingreso de estas familias lo constituyen los diversos planes sociales de asistencia a la pobreza. Una situación que no es privativa de la población de ascendencia indígena. En efecto, por lo menos hasta 2014, Formosa era la provincia que más dinero recibía en la forma de planes sociales nacionales.

En este contexto, no sorprenden los resultados de la Encuesta Materno Infantil de Pueblos Originarios (EMIPO) del Plan Nacer, realizada en 2010. Según esta fuente, en Formosa un 23,9% de las mujeres clasificadas como “indígenas” había perdido uno o más hijos. A su vez, un 81,3% de las madres de menores de seis años afirmó que sus hijos ingieren sólo una comida diaria. En estas condiciones, la provincia se destaca por tener la tasa de mortalidad infantil más alta de la Argentina, con un índice de 21,2 muertes cada mil nacidos vivos.

Además, la mayoría de las viviendas de este asentamiento son ranchos de adobe. Es decir, que se encuentran dentro del 55% de los hogares que tienen algún tipo de déficit habitacional en la provincia. En 2009 esta comunidad, junto con otras de la zona, cortaron la ruta durante un mes reclamando trabajo, vivienda y luz eléctrica. Como resultado de esa acción, unos pocos hoy cuentan con casitas de material. Al respecto, cada vez que se entregan viviendas para los “aborígenes”, se destaca el hecho de que han sido construidas “respetando sus usos y costumbres”. Básicamente, eso significa entregar casas de material con las mismas

2 Actualmente, habría 150 agentes sanitarios y 430 docentes indígenas en toda la provincia. Los primeros están a cargo de las salitas de salud que deberían funcionar en cada comunidad. En la que nosotros estuvimos se trataba de una casilla que contaba sólo con una camilla y pocas cajas de leche. No funcionó ninguno de los cinco días que nosotros estuvimos ahí. Es más, como no se brinda ninguna atención, la misma comunidad nos ofreció ese lugar para instalar nuestra cocina.

características de los ranchos de tierra: diminutas en relación al tamaño de las familias, sin baño ni cocina incorporadas. En ese sentido, el “respeto intercultural” es un mecanismo eficaz para abaratar los gastos estatales destinados a asistir a esta población.

Generalmente, el gobierno distribuye los planes a las comunidades a través de los caciques. Ellos son asignados de manera hereditaria, según lo fija la Ley provincial 426. De esta forma, el gobierno de Insfrán logró ir conformando una red de “punteros indígenas” que manejan a discreción el reparto de los planes. Al mismo tiempo, esto provocó cierta fractura en el interior de las comunidades y la emergencia de referentes que, sin ser caciques, disputan la dirección de las comunidades.

Por otra parte, nuestro arribo a la comunidad Muñiz coincidió con el desencadenamiento de un hecho en otro asentamiento llamado El Colorado, en la localidad de El Potrillo, que iba a implicar la activación de uno de los mecanismos represivos recurrentes en la provincia hacia esta población y, en respuesta a ello, la movilización de parte de las comunidades de la región.

En esos días, un propietario “criollo” de un predio lindero a esta comunidad estaba alambrando parte del territorio que corresponde a los indígenas. Un grupo de ellos se acercó para frenar el trabajo y, finalmente, el criollo se comprometió a retirar el alambrado al día siguiente. Como garantía, el criollo les dejaba su moto a los indígenas. Con este artilugio, este vecino estuvo en condiciones de denunciarlos por robo a mano armada y en pocas horas ya estaban labradas las correspondientes órdenes de allanamiento. La celeridad judicial provocó la desprolijidad de dictarlas específicamente para las seis viviendas particulares de los acusados, aunque al estar ubicadas en el interior de una propiedad comunal tendría que haberse dictado en primer lugar el

allanamiento de ésta última. Detalle menor que no demoró el ingreso de alrededor de setenta policías en plena noche, la destrucción de los ranchitos allanados y la detención de los involucrados. Uno de ellos, herido con balas de plomo en ambas piernas, tuvo que ser trasladado al hospital de la capital provincial. Al resto los derivaron a la alcaldía de Las Lomitas. Al día siguiente varios pobladores del asentamiento tomaron la comisaría de El Potrillo y mantuvieron como rehenes a diez policías. Mientras tanto, otras comunidades de la zona, alertadas de la situación, deciden movilizarse hasta Las Lomitas para exigir la liberación de los detenidos. Ya en el pueblo, mientras adentro de la alcaldía presionaban a los detenidos para que cambiaran a su abogado por otro, afuera apareció un concejal para desactivar la movilización. Con solo unos sándwiches, gaseosas y una camioneta a disposición de los venidos desde El Potrillo para volver a su comunidad, logró mermar en parte la presencia indígena en la protesta.

Ese mismo día, en la comunidad Muñiz, ya de noche, entró una patota en camioneta y dos caballos. Como represalia por la activación de la comunidad que pedía la libertad de los detenidos, diez hombres armados con cuchillos, paños y cadenas amenazaron y atacaron a los habitantes de este paraje y le quebraron un brazo de un cadenazo a uno de sus referentes.

En síntesis, las aparentes diferencias culturales no son centrales a la hora de determinar sus condiciones de vida y de trabajo que no difieren de las de amplias capas de la clase obrera. En el caso de los que migran, lo hacen escapando de la desocupación más cruda y acá encuentran empleos precarios, estacionales, de bajos salarios. De allí que sus demandas inmediatas, más allá de cualquier particularidad idiosincrática, sean las mismas que la del resto de los trabajadores: trabajo, vivienda, educación, etcétera. En

ese sentido, las disposiciones estatales que fijan que la conciencia individual de su identidad indígena debe ser considerada como criterio fundamental para determinar su adscripción a un “pueblo originario”, los aísla del resto de la clase y los deja en manos ya sea de punteros de los partidos burgueses o de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) ligadas a la Iglesia.

La política indigenista bajo el kirchnerismo y los inicios del macrismo

Como señalamos, el kirchnerismo logró cooptar al grueso de las organizaciones indigenistas, transformándolas en parte de su clientela política. Eso implicó no solo su regimentación a través de planes sociales, sino también la inserción de algunos de sus dirigentes dentro del entramado de instituciones estatales creadas ad hoc. Así, varios referentes indígenas pasaron a ocupar cargos de gestión en áreas dedicadas a la temática: la Dirección de Pueblos Originarios y Recursos Naturales en el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, la Dirección de Afirmación del Derecho Indígena en el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y, sobre el final del segundo mandato de Cristina, la Dirección de Pueblos Originarios en el Ministerio de Agroindustria. Todas dependencias sin ningún poder real de intervención, que le aseguraban una base adicta al kirchnerismo. Fueron principalmente las organizaciones agrupadas en el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ETNOPO) las que sirvieron de cantera para reclutar funcionarios. Ejemplo paradigmático de esto fue Roberto Ñancucho, líder de la Confederación Mapuche de Neuquén, que estuvo durante cinco años a cargo de la

dependencia creada en el Ministerio de Medio Ambiente.³ Desde allí, se convirtió en el vocero indígena oficial, para contrarrestar la figura mediática de Félix Díaz, minimizando los casos recurrentes de muertes por desnutrición en gran parte del norte argentino. Tampoco denunció la escalada represiva en diferentes provincias, que implicó la muerte de varios referentes de organizaciones indígenas no alineadas con el gobierno anterior. Todavía más, avaló la brutal represión desatada contra los manifestantes en la legislatura neuquina al momento de aprobarse el acuerdo YPF-Chevron, muchos de los cuales eran miembros de la Confederación Mapuche.

Con la llegada de Cambiemos al poder, Macri hizo lo que no había hecho Cristina hasta entonces: recibió a los referentes indígenas —con Félix Díaz a la cabeza— que venían sosteniendo un acampe en el centro de la CABA de más de diez meses. Así, logró el levantamiento inmediato de la medida. Con la apertura de un espacio de diálogo, el primer gesto consistió en el traspaso del INAI de la órbita del Ministerio de Desarrollo Social al de Justicia y Derechos Humanos, algo que venían reclamando estas organizaciones desde hacía tiempo. Además, se lo tentó a Félix Díaz para asumir la presidencia de dicho Instituto, aunque finalmente no aceptó. Como contrapuesta, en febrero de 2016 se realizó una Asamblea de Pueblos Originarios, en Burzaco, provincia de Buenos Aires. Allí, se constituyó una Mesa de Trabajo y Diálogo Político conformada por el arco de organizaciones que se aglutinan detrás de la figura de Díaz. La misma —reclamaba— debía institucionalizarse de manera inmediata y tener carácter resolutorio y vinculante con el Estado nacional. La toma de las instalaciones del INAI en la

3 Actualmente esta organización se fracturó, a partir del rechazo de parte de sus miembros al liderazgo de Ñancucho.

ex Esma durante marzo por estas mismas organizaciones se explica en el sentido de acelerar la implementación de estas propuestas. De alguna manera, la Mesa vendría a reemplazar en sus tareas al INAI, desde el momento que toda política pública hacia los indígenas tendría que ser tratada en este nuevo espacio. A su vez, se exigía la creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. El gobierno, por su parte, reconoció enseguida a esta instancia como interlocutor válido, dejando fuera a todo el entramado de entidades que respondían al kirchnerismo.

Producto de este proceso, el 12 de mayo de 2016 se publica el decreto presidencial que establece la creación del Consejo Consultivo y Participativo de los Pueblos Indígenas de la Argentina. Se trata de un cuerpo colegiado que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y estará conformado por “los representantes que los Pueblos, Comunidades y/u Organizaciones de Pueblos Indígenas asignen a tales fines, respetando el auto-reconocimiento y las formas, usos y costumbres tradicionales de organización de cada pueblo y comunidad” y por la Mesa de Trabajo y Diálogo Político surgida de la asamblea de febrero. De esta manera, esta nueva institución viene a reorganizar el entramado estatal abocado a la cuestión. Al centralizar las tareas en este espacio, se habilita el desmantelamiento de las diferentes dependencias creadas durante el kirchnerismo, y consiguientemente, el desplazamiento de funcionarios indígenas por dirigentes afines. Así, siguiendo los mismos métodos kirchneristas, el gobierno logra desmovilizar a las organizaciones más activas y avanzar en su cooptación.

Esta reorganización de las áreas estatales que se ocupan de la cuestión indígena, sin embargo, no ha implicado un cambio de política para el sector. En efecto, el nuevo Consejo se

ocuparía de llevar adelante las mismas tareas diagramadas por el gobierno anterior. El decreto que lo constituye establece que el mismo tendrá por funciones: a) reglamentar el derecho a la consulta previa, libre e informada, conforme a lo establecido por el Convenio 169 de la OIT; b) fortalecer la identidad sociocultural y el autogobierno; c) impulsar el relevamiento y ordenamiento del territorio para la efectiva posesión de las tierras por las comunidades; d) proponer al Estado nacional la implementación de programas, planes y proyectos para la población indígena; e) promover la redefinición de las diferentes áreas relativas a políticas hacia Pueblos Indígenas en los diferentes Ministerios y organismos públicos del Estado nacional; f) impulsar medidas para la protección, defensa y desarrollo de los recursos naturales, genéticos y de biodiversidad de los territorios, los conocimientos y saberes ancestrales.⁴

Para Félix Díaz y su grupo, “esta es una herramienta importante para exigir al Estado que cumpla con su obligación de garantizar la aplicación de los derechos adquiridos por los Pueblos Indígenas, como la solución de cuestiones jurídicas en los territorios, la mejora en la atención de la salud y la educación, la posibilidad que los indígenas puedan conducir sus instituciones”.⁵ Por su parte, los que quedaron afuera de las negociaciones, el ya mencionado ETNOPO y el Parlamento de Naciones Originarias de Argentina, rechazaron el decreto, pero no por las funciones fijadas, sino precisamente por reproducir una lógica que muchos de ellos habían protagonizado hasta hace poco: crear “una burocracia indígena y desvirtuar los objetivos de las organizaciones y de sus autoridades, que es depender de sus instituciones

4 Decreto 672/2016.

5 INCUPO (2016), “Comienza a funcionar el Consejo Consultivo de Pueblos Indígenas de Argentina”, en línea: <<http://incupo.org.ar/comienza-a-funcionar-el-consejo-consultivo-de-pueblos-indigenas-de-argentina/>>.

propias y no de un gobierno momentáneo, convirtiendo a los dirigentes más débiles ideológicamente, que terminan defendiendo una fuente laboral personal”.⁶

En definitiva, el macrismo no hace más que continuar con la misma política estatal, con un personal político afín y haciendo propias las consignas más caras de la ideología indigenista. Es decir, se refuerza la idea de los “pueblos originarios” como sociedades no integradas a la Argentina. El problema no radicaría en la condición de población sobrante para el capital de esta fracción de la clase obrera, sino en la necesidad de avanzar en el reconocimiento de sus supuestas diferencias culturales, confinándolos en espacios de relativa autonomía para que puedan desarrollar sus “prácticas ancestrales” de reproducción. Bajo el artillugio del “respeto intercultural” puede desentenderse de la vida de estos obreros, a la vez que consolida la fractura de esta fracción con el resto de su clase, de la mano de dirigentes indígenas que actúan como agentes estatales de contención.

Bibliografía

- AA.VV. (1973). *La Segunda Intenacional y el problema nacional y colonial*, vol II. México, Siglo XXI.
- Carrasco, M. (1997). Procesos organizativos y propuestas legislativas de pueblos indígenas en Argentina, en *II Reunión de Antropología del MERCOSUR: Fronteras Culturales y Ciudadanía. Territorialidad y Políticas Indigenistas en los países del MERCOSUR*, noviembre. Piriápolis, Uruguay.
- Harari, F. (2016). Casas ajenas. La naturaleza de las naciones, en *Razón y Revolución*, núm. 29, pp. 71-105. Buenos Aires.

6 El Ojiverde (2016), “Rechazo indígena al reciente decreto presidencial que creó el Consejo Consultivo”, en línea: <<http://www.elorejiverde.com/toda-la-tierra-es-una-sola-alma/1269-rechazo-indigena-al-reciente-decreto-presidencial-que-creo-el-consejo-consultivo>>.

Kabat, M. (2009). La sobrepoblación relativa. El aspecto menos conocido de la concepción marxista de la clase obrera, en *Anuario CEICS*. Buenos Aires, RyR.

Marx, K. (2004). *El Capital*. Tomo 1, vol. 3, cap. 23. Buenos Aires, Siglo XXI.

Muñoz, R. (2016). Organizaciones campesinas en la provincia de Chaco, Argentina. Una aproximación a su composición social a partir de sus acciones de protesta: el caso de la Unión Campesina del Chaco (UCC), 2002-2011, en *E-latina*, núm. 23-44. En línea: <<http://publicaciones.sociales.uba.ar/index.php/elatina/article/view/1775/1521>>.

Weiss, L. *et al.* (2013). Pueblos indígenas urbanos en Argentina: un estado de la cuestión, en *Pilquen*, vol. 16, núm. 1, Viedma.

Capítulo 9

Los números no mienten

La represión estatal y paraestatal contra la clase obrera bajo el gobierno de Néstor Kirchner (2003-2007)

Fabián Harari, Nadia Bustos, Nicolás Grimaldi y Juan Flores

El Gobierno decidió no hacer nada y esa estrategia expandió la certeza de que ya todo es posible. Casi cuarenta años después, Néstor Kirchner ha hecho posible, en el confín del Sur, el lema del mayo francés: prohibido prohibir. [...] Los diarios del mundo sólo hablan de la Argentina piquetera o violenta.

Joaquín Morales Solá, 18 de julio de 2004

Dije que no iba a reprimir, no voy a reprimir, soy un hombre de palabra.

Néstor Kirchner, 23 de enero de 2007

Tanto insistir, de uno y otro lado, que se convirtió en una verdad indiscutible: el kirchnerismo no reprimió, o lo hizo en bajas dosis. Para algunos, un acierto. Para otros, un escándalo. Y para casi nadie, una mentira. Eso, la violencia estatal, había sido una característica del menemismo, de la Alianza, de Duhalde. Pero del kirchnerismo, no. Los Kirchner garantizaron los derechos humanos, permitieron el desorden o apelaron a la cooptación, según la mirada sea peronista, liberal o de izquierda. Si esta idea predomina

para los doce años de gestión, se acentúa al hablar de la primera presidencia, la de Néstor Kirchner, que es actualmente reivindicada, con mayor o menor énfasis, por el conjunto de los partidos del régimen.

Como la tarea de cualquier científico es desconfiar del sentido común y develar la trama que se oculta tras él, hemos decidido investigar el problema de la represión del kirchnerismo, particularmente en su primer gobierno, concebido como una “primavera”. Para ello, reconstruimos todas las acciones de violencia estatal y, también, la paraestatal, que no es tomada en cuenta fuera de denuncias puntuales. Ante todo, vamos a presentar un panorama de los estudios de este campo que, como veremos, es muy exiguo.

1. Estado de la cuestión y metodología

a. Los estudios sobre el tema

Los análisis del fenómeno kirchnerista carecen por el momento de un grado de profundidad satisfactorio, o bien, de una perspectiva adecuada. Los trabajos aquí reseñados apuntan a comprender los mecanismos que permitieron a Néstor Kirchner consolidar su gobierno a la salida de la crisis del 2001-2002. Sin embargo, el problema de la represión durante el kirchnerismo es apenas mencionado.

Una rama de intelectuales intenta definir al kirchnerismo en base a sus lógicas discursivas. Dado que sus análisis se abstraen de las relaciones sociales reales, carecerán de una evaluación material de las alianzas sociales que sostuvieron al kirchnerismo. Como es de imaginarse, ello implica ignorar u omitir deliberadamente cualquier explicación a los hechos represivos.

La base teórica de estos trabajos se encuentra en la obra de Ernesto Laclau, una formulación posmoderna del peronismo y, por extensión, del kirchnerismo (Laclau, 2005). Laclau proponía que el populismo surge en escenarios donde múltiples reclamos insatisfechos de varios colectivos dispersos son aglutinados por un líder, quien unifica a los sujetos portadores de este reclamo conformándolos como “pueblo”. La emergencia de ese *pueblo* y el tipo de relaciones discursivas que establece con dicho líder define al *populismo*. Aplicando dichas ideas en el análisis del kirchnerismo, se asiste a una reivindicación de su política en tanto se trataría de un *gobierno más democrático*, considerando sus variadas *representaciones colectivas* o un *populismo de izquierda* permeable a la protesta social (Salas Oroño, 2011). Así, su producción simbólica sería la clave para lograr adhesión de masas: el kirchnerismo crearía una identidad colectiva kirchnerista propia, basada en varias filiaciones alternativas y en la resignificación de conceptos de la política argentina (*dignidad, memoria*) (Barbieri, 2007; Biglieri, 2007; Canoni, 2007; Perelló, 2007; Rinesi, 2011; Montero y Vincent, 2013; González, 2011). Leiras y Baldioli (2012) señalan, además, que el kirchnerismo adoptó una novedosa forma ideológica-política desde lo funcional, borrando las huellas de un Estado no social y creando una *nueva religión secular*. Estas posiciones han sido convenientemente examinadas, mostrando su inutilidad (Kabat, 2014).

Dichos autores callarán sobre los mecanismos represivos bajo el kirchnerismo. La represión paraestatal tampoco tendrá su lugar. El posmodernismo vigente llega incluso al colmo de relativizar a las patotas como expresión de la descomposición social con nexos políticos, apuntalando un supuesto carácter “creador” positivo de “identidades” colectivas (Garriga Zucal, 2010).

Clara Marticorena señala que la estrategia de Néstor Kirchner habría consistido en conceder al sindicalismo peronista la exclusiva representación en la negociación colectiva, devolviéndole un espacio en la canalización de los reclamos obreros (Marticorena, 2013). Así, Marticorena caracteriza una “institucionalización” del conflicto social en el marco de un momento distributivo, complementado con un cierre de las políticas flexibilizadoras. Lo que no parece responder es cuál era el rol de ese elemento represivo durante la reconstrucción del poder del Estado y si le cupo al propio gobierno la responsabilidad en su utilización.

Julio Godio (2006) también reivindicaba la política sindical y social del gobierno kirchnerista. Caracteriza al gobierno de Néstor como una *revolución desde arriba* que debía ser completada *por abajo*, transformando al Partido Justicialista (PJ) en una suerte de Partido de los Trabajadores (PT). Respecto del movimiento piquetero, Godio elogia la “no represión”. Tan sólo se justificaba con la izquierda, que “aspiraba a provocar a corto plazo una crisis política” (Godio, 2006: 118). Incluso caracteriza al gabinete de Néstor como un “gabinete piquetero”.

Los trabajos que observan al gobierno kirchnerista desde una concepción liberal, también coinciden en la baja incidencia del fenómeno represivo en esos años, explicándolo de la misma manera que las posiciones más favorables: la voluntad de limitar las protestas obreras (Botana, 2006). Uno de los trabajos más recientes y completos sobre el kirchnerismo le dedica solamente un párrafo de sus 480 páginas al fenómeno represivo (Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014). Allí afirman que Néstor Kirchner tuvo que tomar la iniciativa para el “control de la calle”; para ello:

En sintonía con el discurso y las posiciones de las organizaciones de derechos humanos que venían criticando

desde la década anterior el tratamiento del conflicto social por parte del Estado, el gobierno dejó establecida su decisión de “no reprimir la protesta social”. (134)

Aclaran, sin embargo, que hubo excepciones: primero, gobernadores que “no se alinearon necesariamente con esta política”; segundo, contra cortes organizados por la Corriente Clasista y Combativa (CCC), Polo Obrero, Movimiento Independiente de Justicia y Dignidad (MIJD) y los Movimientos de Trabajadores Desocupados (MTD), donde las fuerzas fueron utilizadas “para incitar el final de las manifestaciones” (Novaro, Bonvecchi y Cherny, 2014: 134). Dejando a un lado ese eufemismo que no revela el contenido real del hecho (la violencia), los autores reducen la represión a la reacción contra acciones de la izquierda.

Desde perspectivas más críticas, pero que intentan situarse a la izquierda, la represión tampoco aparece como un elemento de peso. Maristella Svampa (2008) señala que el kirchnerismo sería el fracaso del armado de un partido de centroizquierda. Sin embargo, no señala si hubo bajo el kirchnerismo un grado represivo “necesario” para restablecer el poder estatal.

Si bien los partidos de izquierda tuvieron un papel muy importante en la denuncia de cada uno de los hechos de represión, a la hora de recapitular y caracterizar al gobierno de Néstor Kirchner han priorizado el elemento de “cooptación”. Al subestimar el problema no han emprendido ningún estudio sistemático. Diego Bruno (ligado al Partido Obrero) señala que el “fracaso” de la política represiva de Duhalde haría a Kirchner tomar otros canales para recomponer el poder del Estado, articulando relaciones con las masas y con los gobernadores (Bruno, 2012). Es decir, la represión estatal y paraestatal habría tomado un lugar secundario.

Cristian Castillo —dirigente del PTS (Partido de los Trabajadores Socialistas)—, por su parte, tiene una posición similar a la de los autores Novaro, Bonvecchi y Cherny. En un trabajo que compila sus intervenciones bajo el kirchnerismo, le dedica al problema de la represión, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, también un párrafo, ya que hace énfasis en la cooptación. Al referirse a la represión, la limita a la acción contra la izquierda:

Y, en relación al movimiento de masas, [el gobierno tiene] una política que combina un discurso de diferenciación con la política represiva que pregona la derecha con la persecución judicial contra luchas de vanguardia que no controla. (Castillo, 2011: 77)

Al igual que los autores liberales, e incluso los partidarios del kirchnerismo, Castillo reduce la violencia estatal a lo que haga o deje de hacer la izquierda. Es decir, subestima el elemento coercitivo, y sobreestima no solo la acción ideológica del Estado. Además, esa hipótesis supone dos escenarios poco creíbles: o la represión es mínima y la izquierda lo es, o la represión es importante y entonces la izquierda domina cualquier movilización. Es evidente que no se ha tomado el trabajo de realizar una reconstrucción seria del asunto. Si simplemente se hubiera tomado la delicadeza de juntar algunos datos, se habría dado cuenta de la barbaridad que escribió. Además, nótese que Castillo reemplaza la represión violenta por la “persecución judicial”.

El problema de la coerción ha comenzado a ser planteado en trabajos anteriores que caracterizaron al kirchnerismo como un régimen bonapartista, que no puede dejar de coaccionar a la clase obrera, sobre todo, en un escenario donde el proceso revolucionario no se ha cerrado en la Argentina

(Sartelli, 2007). Sobre esta formulación es que decidimos emprender este trabajo.

b. Cuestiones metodológicas

En términos generales, nuestro objetivo es reconstruir la represión contra la clase obrera durante el primer gobierno kirchnerista. Es decir, el que tuvo como presidente a Néstor Kirchner, de mayo de 2003 a diciembre de 2007. Decimos, “en términos generales”, porque, tal como lo formulamos, se trata de una definición muy amplia del objeto, que requiere de una mayor precisión.

Comencemos con la definición de “represión”. El término puede ser muy vasto, ya que abarca diferentes mecanismos que adquiere la dominación de clase, desde los más materiales hasta los más simbólicos. También, a los diversos agentes y formas, desde las legales a las informales. Aquí nos proponemos examinar la represión en tanto coacción física directa, organizada por el Estado. Es decir, dejamos de lado acciones espontáneas o individuales. Tampoco nos referimos simplemente como “de la burguesía” a secas, porque allí entraría cualquier tipo de violencia de tipo privada (el mundo de la delincuencia, narcotráfico y la rivalidad entre aparatos políticos burgueses). Cuando nos referimos al Estado, damos por supuesto que se trata de un aparato de la clase dominante (Sartelli, 2005).

Vamos a estudiar la represión del Estado, así definida, en dos de sus formas: la que utiliza fuerzas regulares y la paraestatal. La primera es la que recurre a las organizaciones que contempla la legislación y tienen una formación permanente: Ejército, Gendarmería, Prefectura y diferentes policías provinciales y federales. La segunda es la que suele denominarse “patotas” e incluye la formación de grupos reclutados en espacios estatales (miembros de las fuerzas

represivas), sindicales y/o ilegales (delincuencia). Los llamamos “paraestatales” porque, sin tener una vinculación formal y legal con el Estado, operan directa o indirectamente bajo el mando de elementos vinculados al personal que administra el poder político y su acción complementa a la represión formal. No se trata de una acción *contra* el Estado, ni completamente desconocida por este, sino que opera en forma paralela; de allí el término “paraestatal”.

En tanto nos referimos a la violencia física directa, dejamos de lado todo tipo de hostigamiento jurídico, como procesamientos o condenas sobre diferentes dirigentes sindicales o políticos, aunque haremos alguna mención al problema.

Procuremos ahora delimitar al objeto de esa violencia física directa organizada. Lo que buscamos no es la represión contra cualquier miembro del proletariado, sino contra su acción colectiva.

Esta reconstrucción permite examinar una serie de cuestiones importantes. En primer lugar, la intervención del kirchnerismo sobre los enfrenamientos de clase. En segundo, el grado de conflictividad que arrastraba la Argentina en la llamada “primavera” del kirchnerismo. En tercero, la dosis de coacción necesaria que hizo falta para esa reconstrucción (aunque incompleta) de la dominación burguesa, que llevaron adelante las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner, y que hereda el gobierno de Mauricio Macri.

El análisis de las variables que proponemos no agota el conjunto de elementos necesarios para caracterizar con precisión a los gobiernos kirchneristas. Simplemente, permite evaluar los elementos de continuidad con sus predecesores, la representación de los intereses de determinada clase social y el enfrentamiento con la clase obrera.

Lo que vamos a medir, entonces, es el peso de esa violencia física estatal sobre la acción colectiva de la clase obrera. Con “peso” nos referimos a una fuerza que ejerce un cuerpo

determinado (en este caso, la burguesía a través del Estado). Esa fuerza puede medirse por su volumen (despliegue en el espacio), su frecuencia (repetición en el tiempo) y su intensidad (cantidad concentrada). De estas variables, nos vamos a concentrar en las dos primeras. El objetivo primordial, entonces, es una reconstrucción cuantitativa del fenómeno.

El relevo no se reduce a los momentos de enfrentamiento colectivo: también incorpora las corporizaciones personales (ataque a dirigentes o a militantes). Es decir, lo que puede parecer una acción aislada sobre una sola persona es, en realidad, un enfrentamiento entre clases. Estos personajes fueron “investidos” por diferentes fuerzas, que otorgan poder de fuego a unos (la burguesía a los ejecutores) y representatividad a otros (trabajadores a sus dirigentes).

Entonces, identificamos a los hechos y su despliegue en el tiempo y el espacio nacional. Luego medimos su frecuencia, avanzando hacia una definición de su grado de sistematicidad y su aceleración o ralentización. Comenzamos con la represión estatal o legal, presentamos los hechos más importantes y analizamos los resultados totales. Luego, desarrollamos la represión paraestatal con la misma dinámica. Por último, en las conclusiones, vamos a examinar los resultados totales y esbozar un intento de caracterización.

Las fuentes que utilizamos son los periódicos nacionales y provinciales, las prensas y páginas web de diferentes organizaciones políticas (predominantemente de izquierda), espacios de denuncias (como Indymedia), archivos sobre represión —como el de CORREPI (Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional) o CLACSO (Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales)—. Por último, para cotejar y ampliar nuestro conocimiento, entrevistamos a militantes sindicales o políticos (en algunos casos, pidieron anonimato), con quienes estamos profundamente agradecidos.

Para poder deducir ciertas conclusiones cuantitativas (es decir, si la represión fue “mucha” o “poca”) se hace necesario un elemento de comparación. Por eso, vamos a confrontar los resultados del gobierno de Néstor Kirchner con los de un período mucho más convulsivo: el que abarcó los gobiernos de la Alianza y el de Eduardo Duhalde (1999-2003), más los breves interinatos en el medio.

2. La represión legal

Empezamos, entonces, por analizar la represión que realiza el Estado por las vías regulares y legales. Como dijimos, nos concentramos en aquella represión que opera sobre la acción colectiva de la clase obrera, o sea, sobre su desarrollo sindical y/o político. Dejamos de lado, por lo tanto, toda aquella represión molecular y cotidiana como las detenciones ilegales, casos de ejecuciones sumarias (“gatillo fácil”) o las razzias policiales sobre barrios obreros, a excepción de aquellas que sean una respuesta a alguna movilización o estén enfocadas en alguna organización obrera. Presentaremos, entonces, algunos hechos relevantes y luego realizaremos una sistematización del conjunto de los hechos relevados.

Ante todo, una aclaración necesaria: las acciones abarcan varios espacios. Algunos, sometidos a jurisdicción del gobierno nacional; otros, a gobiernos afines al kirchnerismo. Por último, jurisdicciones gobernadas por opositores (como San Luis o Neuquén). No obstante, en ningún caso el Gobierno nacional toma medidas para impedir, procesar o desplazar a los responsables políticos de las represiones. Ni siquiera, como vamos a ver, en los casos más graves, como los asesinatos de militantes. Por el contrario, los ayuda con el envío de fuerzas federales (Gendarmería, Prefectura). El argumento de la “autonomía provincial” carece de validez,

en la medida en que se están vulnerando derechos elementales. Podría argumentarse la prerrogativa constitucional de la intervención provincial, pero lo que importa es señalar que el poder central argumenta obstáculos de jurisdicción espacial que, a su juicio, prevalecen sobre los derechos de la clase obrera. Por lo tanto, puede deducirse, por parte del Gobierno nacional, una actitud que va de la colaboración a la tolerancia.

a. Algunos hechos

Los hechos no resuelven por sí mismos los problemas, pero saldan ciertas discusiones y permiten concentrarse en otras. Como vimos, la mayoría de los estudios soslaya este fenómeno. Como vimos también, lo soslaya particularmente para este período. Por eso, vamos a señalar una pequeña muestra de hechos de represión durante el gobierno de Néstor Kirchner. Algunos, de particular importancia. Procuraremos abarcar con amplitud el espacio geográfico y las fracciones reprimidas. Luego de un repaso muy general del accionar represivo, mostramos los casos que involucran el asesinato de obreros en lucha. Creemos que la envergadura de lo que vamos a presentar habla por sí sola.

15 de junio de 2003

A menos de un mes de asumir Néstor Kirchner, se produce una pueblada en Arequito (Santa Fe), a raíz del asesinato de Luis Cignoli, un obrero de 29 años, en un hecho de inseguridad. Los vecinos se reúnen frente a la comisaría y piden entrar. La represión no se hace esperar y la policía dispara con balas de goma.¹

1 <<http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-21744-2003-06-22.html>> (consulta: 26-9-2016).

24 de septiembre de 2003

Se producen dos acciones de represión. En Neuquén, se disuelve por la fuerza una movilización docente. En Rosario, se hace lo mismo con una marcha de organizaciones piqueteras.²

10 de octubre de 2003

En Libertador General San Martín (Jujuy), la policía reprime con balas de plomo una movilización en repudio al asesinato de un militante de la CCC. Allí muere otro militante de la misma organización.³

2 de noviembre de 2003

En General Mosconi (Salta), la policía desaloja, por orden del juez, un acampe frente al descargadero de Refinor, de ex trabajadores de YPF, exigiendo su indemnización.⁴

25 de noviembre de 2003

La policía provincial realiza una razzia en el barrio de San Lorenzo (Neuquén), para atacar una asamblea de vecinos, en el marco de la lucha por la expropiación de la fábrica ocupada Zanón. “Pepe” Alvear, militante del MTD y obrero de la fábrica, recibe 64 impactos de bala de goma y pierde un ojo.⁵

2 <<http://correpi.lahaine.org/?p=119>> (consulta: 26-9-2016).

3 <<http://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-26619-2003-10-11.html>> (consulta: 26-9-2016).

4 <<http://edant.clarin.com/diario/2003/11/25/p-00401.htm>> (consulta: 26-9-2016).

5 <http://argentina.indymedia.org/archives/archive_by_id.php?id=6956&category_id=19> (consulta: 26-9-2016).

30 de enero de 2004

En Santa Fe se produce una feroz represión en inmediaciones de la gobernación, ante una masiva marcha de vecinos perjudicados por las inundaciones.⁶

2 de octubre de 2004

En Caleta Olivia (Santa Cruz), Gendarmería y la Policía santacruceña desalojan la toma de Termap y el corte de la ruta 3, con un saldo de 80 trabajadores detenidos.⁷

1 de noviembre de 2004

En CABA se reprime una huelga de la seccional Oeste de la Unión Ferroviaria, que exige la reincorporación de un trabajador despedido. Los obreros toman las cabeceras para garantizar la huelga y la policía actúa con gases lacrimógenos y balas de goma. Además, detienen a doce trabajadores. Entre ellos, el dirigente de la Comisión Directiva, Rubén “Pollo” Sobrero, militante del MST (Movimiento Socialista de los Trabajadores).⁸

15 de noviembre de 2004

En la ciudad de Banda de Río Salí (Tucumán), la policía provincial desalojó el corte del puente Luca Córdoba que sostenían trabajadores azucareros nucleados en FOTIA (Federación Obrera Tucumana de la Industria del Azúcar), en reclamo de planes interzafra. El gobernador Alperovich (kirchnerista) justificó la represión argumentando que “los obreros del surco son unos inadaptados”.⁹

6 <<http://www.lanacion.com.ar/568549-atacan-la-gobernacion-en-una-marcha-de-inundados>> (consulta: 26-9-2016).

7 <<http://correpi.lahaine.org/?p=541>> (consulta: 26-9-2016).

8 <<http://argentina.indymedia.org/news/2004/10/226908.php>> (consulta: 26-9-2016).

9 <<http://argentina.indymedia.org/news/2004/11/236499.php> y <http://correpi.lahaine.org/?p=541>> (consulta: 26-9-2016).

1 de diciembre de 2004

En Las Heras (Santa Cruz), en un operativo conjunto, la Policía provincial y la Gendarmería desalojan a obreros petroleros que habían tomado las instalaciones de Oil ONS, contratista de Repsol-YPF, exigiendo la reincorporación de 70 detenidos y la liberación de los detenidos en el desalojo del corte del 2 de octubre.

11 de febrero de 2005

En La Rioja, la policía desalojó la toma de un policlínico que había sido recuperado por los trabajadores hacía un año e impidió que lo volvieran a tomar. El gobernador Ángel Mazza, del Frente para la Victoria (FPV), justificó la represión.¹⁰

1 de abril de 2005

En la ciudad de Salta, la policía provincial disuelve una marcha docente con el saldo de 28 docentes heridos y 20 detenidos. En Buenos Aires, el lunes 4 de abril, se convoca a una marcha a la Casa de Salta en repudio a la represión.¹¹

30 de mayo de 2005

La policía provincial de Neuquén reprimió con gases lacrimógenos a docentes y empleados públicos que exigían mejoras salariales frente a la gobernación e intentaban levantar una carpa.¹²

10 <<http://www.lanacion.com.ar/678885-la-rioja-la-policia-reprimio-a-trabajadores-y-a-dos-diputados-nacionales>> (consulta: 26-9-2016).

11 <<http://www.lanacion.com.ar/693268-salta-marcha-de-docentes-en-repudio-a-la-represion-policia>> (consulta: 26-9-2016).

12 <<http://www.lanacion.com.ar/708983-impiden-una-protesta-docente-en-neuquen>> (consulta: 26-9-2016).

18 de agosto de 2005

En Pico Truncado (Santa Cruz) la policía santacruceña disuelve una manifestación de desocupados en reclamo del cumplimiento del plan de incorporaciones a YPF-Repsol. Luego de encarcelar a 19 manifestantes, reprime también una movilización de sus familiares, a quienes va a buscar hasta sus casas.¹³

14 de septiembre de 2005

La Policía Federal disolvió un corte de trabajadores telefónicos en la calle San José. Un trabajador debió ser internado por traumatismo de cráneo.¹⁴

30 de septiembre y 1 de octubre de 2005

En Ushuaia primero y luego en Río Grande, la policía provincial de Tierra del Fuego disuelve asambleas docentes con gases lacrimógenos. En el segundo caso, cinco docentes resultaron heridos.¹⁵

20 de octubre de 2005

200 policías entran a las vías de la línea B del subterráneo de Buenos Aires y disparan con gases lacrimógenos para dispersar una protesta con corte de vías. Luego, reprimieron a una comisión de trabajadores del Garrahan que acudió en solidaridad. El saldo fue de cinco trabajadores que tuvieron que ser internados.¹⁶

13 <<http://correpi.lahaine.org/?p=639>> (consulta: 26-9-2016).

14 <<http://correpi.lahaine.org/?p=646>> (consulta: 26-9-2016).

15 <<http://correpi.lahaine.org/?p=649>> (consulta: 26-9-2016).

16 <<http://correpi.lahaine.org/?p=651>> (consulta: 26-9-2016).

6 de febrero de 2006

En Las Heras (Santa Cruz) la policía provincial detiene al dirigente petrolero y militante del Polo Obrero, Mario Navarro, mientras brindaba una entrevista radial.¹⁷ El hecho se produjo en medio de paros y cortes de ruta en defensa de puestos de trabajo. La detención provocó una pueblada que también fue reprimida. Al efecto, el Gobierno nacional le envió al gobernador Das Neves 300 gendarmes para restablecer el orden.¹⁸ Los enfrentamientos dieron por resultado la muerte del oficial Jorge Sayago. El Poder Judicial imputó a trece petroleros y condenó a cuatro de ellos a cadena perpetua, en una instrucción y un juicio que habría estado viciado de nulidades; entre ellas, el uso torturas para arrancar testimonios.¹⁹

11 de julio de 2006

En Mar del Plata, luego de once días de huelga de los obreros del pescado, la policía provincial reprimió a los obreros que intentaban ingresar en la planta Arhepez.²⁰

3 de agosto de 2006

En 25 de Mayo, un pueblo en el sur de La Pampa, el Grupo Especial de Operaciones (GEOP) desalojó un corte de la ruta 34, en reclamo de “trabajo digno” y en repudio al intendente (del FPV).²¹

17 <http://www.diariodecuyo.com.ar/home/new_noticia.php?noticia_id=141152> (consulta: 26-9-2016).

18 <<http://www.pagina12.com.ar/diario/ultimas/20-63653-2006-02-27.html>> (consulta: 26-9-2016).

19 <<http://www.po.org.ar/prensaObrera/1300/libertades-democraticas/un-fallo-politico>> (consulta: 26-9-2016).

20 <<http://correpi.lahaine.org/?p=714>> (consulta: 26-9-2016).

21 <<http://argentina.indymedia.org/news/2006/08/428825.php>> (consulta: 26-9-2016).

21 de septiembre de 2006

La Policía Federal desalojó violentamente a vecinos que ocupaban terrenos en Villa Lugano, con el saldo de 12 detenidos.²²

19 de diciembre de 2006

En Rawson (Chubut), la policía provincial disolvió una manifestación de los trabajadores de la planta pesquera Flota Amarilla S.A. que reclamaban por salarios adeudados. El saldo fue de 20 obreros heridos y 4 detenidos, entre los cuales se encontraba Fabián Molina, Secretario General del Sindicato de la Industria de la Alimentación.²³

20 de diciembre de 2006

En Jujuy, el GEOP disolvió una manifestación de desocupados organizada por la Asociación de Trabajadores Desocupados, en el barrio Alto Comedero, en las puertas de un hipermercado.²⁴

5 de abril de 2007

Un día después de la muerte del maestro Carlos Fuentealba, la policía reprime una movilización docente en la capital salteña.²⁵

25 de mayo de 2007

En la provincia de Buenos Aires asistimos a dos acciones represivas. La primera es en Moreno, contra los trabajadores de la empresa Fargo que reclamaban por condiciones

22 <<http://www.lanacion.com.ar/842335-incidentes-en-un-desalojo-en-villa-lugano>> (consulta: 26-9-2016).

23 <<http://correpi.lahaine.org/?p=751>> (consulta: 26-9-2016).

24 <<http://correpi.lahaine.org/?p=751>> (consulta: 26-9-2016).

25 <<http://www.lanacion.com.ar/897372-paro-docente-por-la-represion-policial>> (consulta: 26-9-2016).

laborales. La segunda, en Lisandro Olmos, en las afueras de La Plata, donde la policía desaloja la toma de la planta textil Mafissa.²⁶

9 de agosto de 2007

En la capital de Formosa, la Policía provincial desaloja violentamente a los acampantes frente al Instituto de Vivienda Provincial. Las familias eran del asentamiento El Mirador. El encargado del operativo no era otro que Ángel Insfrán, de la familia del gobernador.²⁷

22 de agosto de 2007

La policía reprime una marcha de trabajadores del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) que repudiaban la intervención del gobierno y la expulsión de trabajadores.²⁸ Ese mismo día, en Mendoza, los trabajadores estatales de salud, que exigían una reunión con el gobernador, fueron reprimidos en una operación conjunta entre la custodia del mandatario y candidato a vicepresidente del FPV, Julio Cobos, y la policía provincial.²⁹

27 de noviembre de 2007

En Villa Mercedes (San Luis), un grupo especial de la Policía provincial desalojó la toma de la fábrica textil Pagoda, cuyos trabajadores se encontraban en reclamo de salarios y en defensa de los fueros gremiales de sus delegados.³⁰

26 <<http://correpi.lahaine.org/?p=793>> (consulta: 26-9-2016).

27 <<http://correpi.lahaine.org/?p=809>>.

28 <<http://correpi.lahaine.org/?p=813>> (consulta: 26-9-2016).

29 *Ídem.*

30 <http://puntania.blogspot.com.ar/2007/11/martes-27-de-noviembre-de-2007_27.html> (consulta: 26-9-2016).

4 y 5 de diciembre de 2007

Antes de dejar el gobierno, Néstor Kirchner ordenó una última intervención: reprimió a los trabajadores del Casino, propiedad del empresario Cristóbal López, ligado al oficialismo.³¹

Como dijimos, esta es sólo una pequeña muestra (muy pequeña) del despliegue represivo sobre la clase obrera del gobierno de Néstor Kirchner. Resta aún la reconstrucción de hechos de suma gravedad: el asesinato por parte de fuerzas estatales. Aquello sobre lo cual el kirchnerismo dijo que venía a poner fin.

b. Algunos muertos...

Dos golpes a la CCC en Jujuy

El 4 de octubre del 2003, Cristian Ibáñez, militante de la CCC, apareció muerto en la comisaría de Libertador General San Martín, Jujuy. Horas más tarde, también sería asesinado su compañero Marcelo Cuellar, producto de la represión policial. Ibáñez fue detenido, según el informe policial, “por estar borracho y causar desórdenes en la vía pública”. Como Cristian tenía una herida cortante en la cabeza, antes de llevarlo a la comisaría lo habrían llevado al Hospital Oscar Oría, donde también, según la policía, generó disturbios, por lo que fue llevado a la comisaría y puesto en una celda junto a otros nueve detenidos. Una vez allí tuvo un altercado con el resto de los detenidos, por lo que fue trasladado a una celda solo, donde fue encontrado ahorcado con el cordón de su bermuda. Los familiares y la CCC, al enterarse de lo sucedido, se movilizaron a la comisaría,

31 <<http://www.lanacion.com.ar/968607-sancionaran-a-prefectos-por-los-disturbios-en-el-casino-flotante>> (consulta: 26-9-2016).

descreyendo de la versión policial.³² La movilización se convirtió en una pueblada que derivó en duros enfrentamientos con la policía. Allí sería asesinado Marcelo, quien, antes de morir, reconoció al policía Subia como el que efectuó el disparo mortal.³³ La represión estuvo a cargo del jefe de policía del gobernador, Carrizo Salvadore, que no tiene ninguna causa abierta. Subia fue imputado por la causa penal, pero el juez Argentino Juárez lo sobreseyó. El gobernador de ese entonces era Eduardo Fellner, parte del PJ y del kirchnerismo.

Esteban Armella, también en Jujuy

El 27 de noviembre del 2004 fue asesinado, por fuerzas policiales, Esteban Alejandro Armella, militante de la Tupac Amaru, coordinador del comedor comunitario Copa de Leche “Los Chiolitas”, en el barrio Belgrano de San Salvador de Jujuy. Esteban fue detenido el 23 de noviembre por la Brigada de Investigaciones para averiguación de antecedentes. Debido a los golpes recibidos, tuvo que ser trasladado al hospital Pablo Soria, donde cuatro días más tarde moriría. Producto de este hecho, fueron detenidos siete policías que serían dejados en libertad poco tiempo después.³⁴

Fuentealba

El 4 de abril del 2007 sería asesinado Carlos Fuentealba, docente de la provincia de Neuquén. Los docentes estaban en lucha por aumentos salariales y no llegaban a ningún acuerdo con el gobierno de Jorge Sobisch. Por eso iniciaron un plan de lucha que implicaba cortes diarios de tres horas en las rutas más importantes de Neuquén. El 4 de abril,

32 *La Nación*, 11-10-2003.

33 *Clarín*, 12-10-2003.

34 <<http://correpi.lahaine.org/?p=567&print=1>> (consulta: 26-9-2016).

unos 600 docentes llegaron a la localidad de Arroyito para cortar la ruta 22 y obstruir el paso hacia los centros turísticos, en el marco de los feriados por Semana Santa. Fueron reprimidos por la Policía local para evitar el corte. Para ello utilizaron gases y balas de goma, con lo que lograron dispersar la manifestación. En ese contexto, el policía José Darío Poblete disparó su pistola lanzagases sobre el automóvil Fiat 147 donde se encontraba Fuentealba. El disparo se produjo desde una corta distancia, por lo que el impacto le produjo una fractura y hundimiento de cráneo que derivaría en su muerte. Poblete huyó de la escena con la complicidad de sus compañeros y logró esconderse por varias horas con el amparo de la institución policial. Finalmente, el policía fue condenado a perpetua, pero Sobisch, responsable político del hecho, jamás fue imputado, a pesar de que luego del asesinato dijo ante las cámaras que “la responsabilidad política es mía, la asumo y tomaré las medidas necesarias para que esta responsabilidad política se convierta en una respuesta seria y responsable a la sociedad neuquina”. En la causa estaban además involucrados el subsecretario de Seguridad, Raúl Pasquarelli, y el jefe de la Policía, Carlos Zalazar, el subjefe de la Policía, Moisés Soto, el director de Seguridad, Adolfo Soto, el jefe del operativo, Mario Rinzafri, y el jefe de los grupos especiales, Jorge Garrido, junto a otros nueve efectivos policiales.

Todos los acusados fueron sobreseídos el 23 de febrero de 2016. En su fundamentación para pedir el cese de la imputación, el fiscal Andrés Azar sostuvo, entre otras cosas, que “las directivas eran dadas por el gobernador Jorge Sobisch”.³⁵ Este argumento, sirvió para liberar a los policías, pero no para imputar a Sobisch. El Gobierno nacional, ni en su momento ni después, pidió juicio político alguno, ni la

35 *Clarín*, 06-04-2007.

intervención provincial del Ejecutivo o del Poder Judicial. Más aún, Jorge Sobisch, quien admitió su responsabilidad política, llegó a ser incluso candidato presidencial en las elecciones de 2007, sin que ningún miembro del Poder Ejecutivo Nacional interpusiera ninguna impugnación.

Juan Carlos Erazo en Mendoza

En noviembre de 2007, 300 obreros de la empresa Campo Grande, dedicada a la exportación de ajo, llevaron adelante una huelga. Fundamentalmente, pedían por el fin de trabajo en negro, que aparecía encubierto bajo la forma de “cooperativa”. El 29 de noviembre cortaron el acceso a la empacadora, por lo que la fiscal Liliana Ginner ordenó su desalojo. El mismo fue llevado a cabo por la Infantería y la Policía de Mendoza. Entre los 75 trabajadores que terminaron golpeados estaba Juan Carlos Erazo, trabajador y delegado. Al día siguiente, el 30 de noviembre, le detectaron un absceso cerebral.³⁶ El 9 de abril del 2008, en Mendoza, Juan Carlos murió a causa de la patología provocada por la represión, siendo una de las más importantes en el rubro. El gobernador de Mendoza de ese entonces, Julio Cobos, era un aliado del gobierno nacional, fue el compañero de fórmula presidencial de Cristina Kirchner y luego ocupó la vicepresidencia de la Nación.

c. Hacia una sistematización

En total, hemos identificado un mínimo de 166 hechos de violencia estatal organizada contra acciones de la clase obrera, entre los que se cuentan 5 asesinatos. Teniendo en cuenta que Néstor Kirchner estuvo 74 meses en el poder

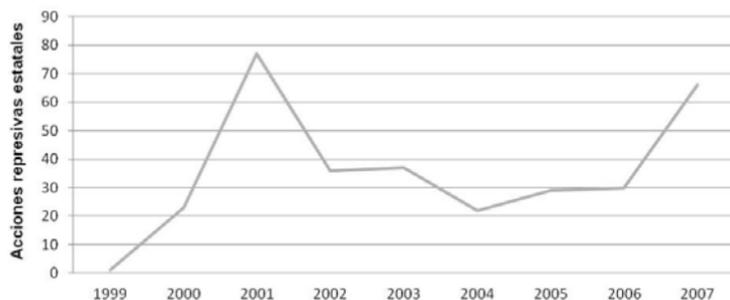
36 *Prensa Obrera*, 17-04-2008; <<https://goo.gl/mrR8Ow>>; *Los Andes*, 09-04-2008 (consulta: 26-9-2016).

(desde el 25 de mayo de 2003 al 10 de diciembre de 2007), el promedio de acción por año es de 37,1: algo más de dos acciones por mes. Difícilmente pueda caracterizarse a estos datos como de un gobierno que no reprime a la clase obrera.

Las cifras deben compararse con algún otro período y con otra administración. Elegimos, entonces, el período gobernado por la Alianza y la presidencia de Eduardo Duhalde, desde diciembre de 1999 a mayo de 2003. El total de las acciones estatales, de ambas administraciones, es de 153. Es decir, en términos solo de volumen total, ambas administraciones han llevado adelante menos acciones represivas que el primer gobierno kirchnerista. En cuanto al promedio anual, también el tándem Alianza-Duhalde registra un resultado sensiblemente menor: 35,3.

Para comprender esta paridad debemos examinar la evolución de la represión en el tiempo (*cf.* Gráfico 9.1).

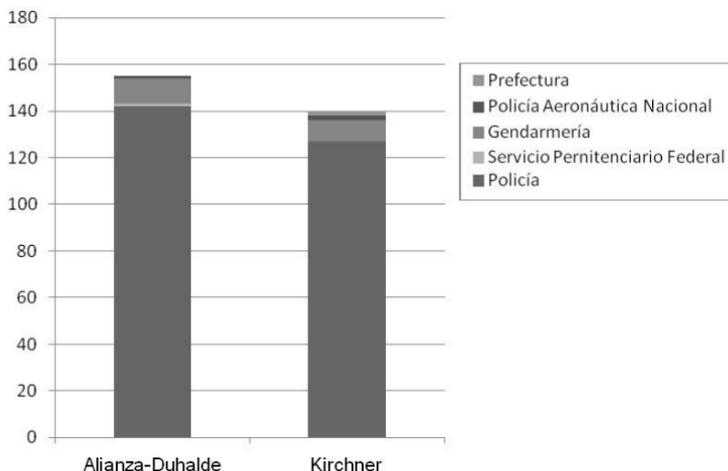
Gráfico 9.1. Evolución de la represión estatal (1999-2007).



Lo que vemos es una acción que no desciende desde los últimos meses del gobierno de Carlos Menem y que toma un gran impulso en 2001 y 2002. Luego de un amesetamiento de 2004 a 2006, vuelve a subir en 2007.

Veamos qué fuerza se utiliza para reprimir (*cfr.* Gráfico 9.2).

Gráfico 9.2. Cantidad de acciones según fuerza, por gobierno (1999-2007).

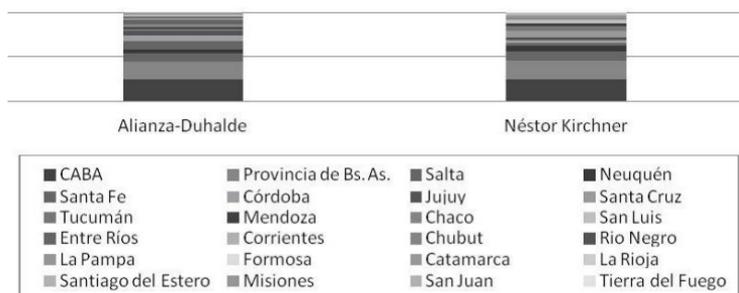


Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

A diferencia de lo que suele creerse, la Gendarmería, en este período, ocupa un lugar cuantitativamente menor. La gran mayoría de la represión queda a cargo de las policías provinciales o la federal. Es decir, las fuerzas federales argentinas tienen poca capacidad de intervención y la acción estatal debe basarse en reclutas locales, lo que es un serio problema en caso de agudización de la lucha de clases. De todas maneras, esto debería ser objeto de un estudio particular.

Con respecto a la distribución regional, podemos observar el peso de la represión según la provincia en que se produjo (*cfr.* Gráfico 9.3).

Gráfico 9.3. Represión por provincia según gobierno (1999-2007).



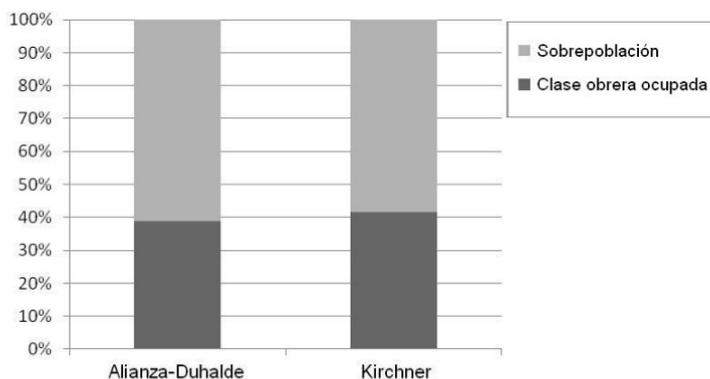
Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

Vemos que, en ambos períodos, un cuarto de las acciones se realizaron en la CABA y el otro cuarto en la provincia de Buenos Aires. Entre ambas acumulan la mitad de las acciones. Claramente, se trata de una concentración de la represión en el corazón de la clase obrera argentina y en el centro del poder político. Otras provincias aparecen con cierta importancia, como Salta, Santa Fe o Neuquén, lo que no es extraño ya que son lugares desde donde irradió el movimiento piquetero.

¿A quiénes reprimen? En el Gráfico 9.4 vemos cómo se reparte la represión a la clase obrera ocupada y a la sobreposición relativa.

Como vemos en esa comparación, en ambos períodos predomina la violencia estatal sobre la segunda, aunque los porcentajes se acercan a la mitad. En el caso del gobierno de Néstor Kirchner, apreciamos un ligero aumento del porcentaje de represión a la clase obrera ocupada. Pero las diferencias no son importantes aquí. Sí lo será, como veremos, en el caso de la represión paraestatal.

Gráfico 9.4: Porcentaje de acciones estatales sobre fracciones de la clase obrera (1999-2003).



Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

3. La represión paraestatal

Es el momento de examinar una forma de violencia organizada menos visible, pero no por eso menos presente. Se trata del uso de grupos de choque irregulares, reclutados al efecto entre personal civil o de las fuerzas represivas que operan fuera de su servicio regular. Como la tarea que realizan es no solo irregular sino ilegal, el rastreo y reconstrucción de las acciones y la identificación de sus autores materiales se hace mucho más difícil para el investigador. Más aún los vínculos entre los autores materiales de las agresiones y la dirección política. Recordemos que este tipo de acciones están tipificadas como delitos agravados de acuerdo con el Código Penal. De hecho, se invierte mucho más energía en ocultar la vinculación política que en encubrir a los responsables directos. A esto hay que agregar que, en algunos casos, no solo está implicado el Estado en sus

diferentes niveles (nacional, provincial o municipal) sino que, en varios casos, se teje toda una red de complicidades que abarca a las direcciones sindicales, los empresarios, los clubes de fútbol y el delito organizado.

Tenemos, entonces, un triple esfuerzo por encubrir estos fenómenos: ocultar el hecho a sus autores materiales y a las direcciones. Por eso, lo que vamos a ofrecer es una minuciosa reconstrucción, pero que abarca simplemente un mínimo de acciones: aquellas que hemos fehacientemente podido comprobar, pero que no agotan el universo.

Lo primero que haremos, entonces, es presentar una serie de hechos. Algunos han tomado estado público; otros han pasado casi desapercibidos. La búsqueda ha arrojado un total de 70 acciones en este período. No podríamos presentarlas a todas en este espacio, pero sí creemos necesario dar a conocer al menos una buena parte de ellas. En primer lugar, para dar cuenta de su existencia. En segundo, para que se pueda vislumbrar una dinámica de funcionamiento. Luego, pasaremos a la sistematización de los datos.

Los hechos

Noviembre de 2003

El 13 de noviembre de 2003, Alicia Gutiérrez, de la interbarrial que intervenía en Sasetru, presentó, junto a 20 matones, un documento falsificado que le daría la guarda de la fábrica. Mientras, 14 trabajadores de Sasetru del Polo Obrero son mantenidos como rehenes. Durante toda la noche del 14, los ocupantes respondían a tiros, baleando en el rostro a un trabajador del Polo Obrero. El 15 de noviembre Alicia Gutiérrez pide “la intervención en Sasetru Gestión Obrera, de Kirchner y Solá”.³⁷

37 <<http://argentina.indymedia.org/news/2003/11/151865.php>> (consulta: 26-9-2016).

Noviembre/diciembre de 2003

El 7 de noviembre de 2003, el SUTEBA de General Rodríguez realizó una protesta contra la municipalización de la educación en Malvinas Argentinas. El municipio formó una fuerza de choque con beneficiarios de los planes sociales, dirigida por el Secretario de Seguridad Municipal, Eduardo Cuevas.³⁸ El 4 de diciembre, en una nueva movilización, el FTV golpeó a dos integrantes de maestranza de ATE Sur.³⁹

Mayo de 2004 - abril de 2006

El 6 de mayo en San Luis, una patota de la UOCRA atacó a los manifestantes que exigían la salida del gobernador.⁴⁰ El 27, otra manifestación sería reprimida por una fuerza de choque conformada por trabajadores de los planes de inclusión social. El 4 de abril de 2006, la policía se declaró en huelga, y el secretario de la UOCRA provincial, y concejal por el PJ, Marcos Sosa, sacó a sus “muchachos” a la calle a patrullar la capital provincial en reemplazo de los efectivos.

Mayo de 2004 - mayo/septiembre/diciembre de 2007

El 13 de mayo, una patota de la UTA agredió a los trabajadores del subterráneo de Buenos Aires.⁴¹ El 16 de mayo del 2007, Néstor Segovia sería agredido por los dirigentes de la UTA, que trataban de imponer condiciones salariales.⁴² En septiembre del 2007, la patronal pidió retirar los fueros sindicales para poder efectuar despidos. La UTA apoyó y formó un grupo de 30 matones para amenazar a los trabajadores y agredir a Segovia, en su propia casa, el día 5 de sep-

38 *Página/12*, 30-10-2003.

39 <<http://www.tribunadocente.com.ar/notas/prensa828.htm>> (consulta: 20-7-2015).

40 *Clarín*, 7-5-2004.

41 *Prensa Obrera*, núm. 850.

42 *Clarín*, 17-5-2007.

tiembre. Un día después sería agredido a patadas Claudio Dellecarbonara, en el taller Rancagua. El 11 de septiembre, la viceministra de Trabajo, Noemí Rial, dijo que había una “interna gremial” e iba a “terminar con los sabotajes”.⁴³ El 17 de diciembre del 2007 se produciría la agresión en el Hotel Bauen, con la participación de talleristas, colectiveros y miembros de la agrupación 17 de Octubre.⁴⁴

6 de enero de 2005

Una patota de 200 matones del sindicato de ATILRA, encabezados por Héctor Ponce (secretario general), agredió a los trabajadores de Parmalat en las distribuidoras de Pilar y Carapachay, tomadas contra la “racionalización” impuesta por el empresario kirchnerista Sergio Taselli.⁴⁵ Ponce también era un aliado del kirchnerismo. Hombre de confianza de Héctor Cappaccioli, superintendente de Servicios de Salud, en 2015 asoció al gremio con Sancor para gestionar algunas empresas.⁴⁶

Julio de 2005 - julio de 2006

Veinte días antes de realizarse la marcha por el Apagón de Ledesma, la Tupac Amaru agredió a Lucas Arias, dirigente de la CCC. El 20 de julio del 2005 también agredieron a militantes del MST, con el objetivo de que se retiraran de la movilización. Exactamente un año después, los militantes del Partido Obrero fueron agredidos por Milagro Sala y 20 guardaespaldas, para expulsarlos de la movilización.⁴⁷ El 3 de julio de 2006, Lucas Arias y su compañero Juan Maidana

43 *La Verdad Obrera*, 13-9-2007; *La Verdad Obrera*, 13-9-2007.

44 <<http://www.metrodelegados.com.ar/spip.php?article1374>> (consulta: 26-9-2016).

45 Recordemos que Taselli, en los años noventa, se había hecho con la línea ex Roca, Trenes Metropolitanos y Yacimientos Carboníferos Fiscales, con la venia de Néstor Kirchner.

46 <<https://goo.gl/BYQYIN>> (consulta: 26-9-2016).

47 *Prensa Obrera*, 3-8-2006.

fueron interceptados por Milagro Sala y 15 matones de la Tupac Amaru, que comenzaron a golpearlos en las oficinas del ministro de Infraestructura y Planeamiento, Luis Cosentini, quien se retiró minutos antes de la agresión por un “llamado”.⁴⁸ Lucas moriría un tiempo después, producto de los golpes en la cabeza.

Noviembre de 2005

Los docentes de Comodoro Rivadavia luchaban por salario contra Das Neves, aliado de Néstor. El 1 de noviembre del 2005 protestaron frente a la Casa de Gobierno, donde los esperaba una patota de 200 personas. Al día siguiente, Das Neves recibía al ministro de Salud, Ginés González García. De proteger el acto se encargó Néstor “El Tano” Di Pierro, entonces titular de Petrominera y miembro del círculo íntimo de Das Neves, nombrado al frente del Correo Argentino por Néstor Kirchner. Di Pierro fue impulsado por el kirchnerismo a la intendencia de Comodoro Rivadavia, en 2011.⁴⁹

18 de diciembre de 2006

Rubén Sobrero volvía en tren a su casa. En la estación Ramos Mejía fue atacado por una patota sindical que lo golpeó hasta dejarlo internado.⁵⁰

Marzo de 2006

El 15 de marzo de 2006, una patota de la burocracia y de camioneros intentó desalojar el piquete de docentes en Trapial.⁵¹ El 30 de marzo, grupos del Movimiento Popular Neuquino (MPN) y de la UOCRA atacaron el corte de Plaza

48 *Alternativa Socialista*, 13-7-2006; *Jujuy al Momento*, 18-3-2016; *El Tribuno*, 4-5-2016.

49 *La Nación*, 20-10-2005.

50 *El Socialista*, 17-1-2007.

51 <<http://argentina.indymedia.org/news/2006/03/386487.php>> (consulta: 26-9-2016).

Huincul.⁵² Luego del asesinato de Fuentealba, Sobisch nombró a matones para cubrir los cargos de los docentes en huelga, que amedrentaron a la viuda, Sandra Rodríguez, y sus compañeros.

10 de octubre de 2006

Una patota de 40 personas, al grito de “la gloriosa JP”, interrumpieron la asamblea del personal del Hospital Francés. En el grupo había miembros de la barra brava de Chacarita, Argentinos Juniors, All Boys e integrantes de unidades básicas kirchneristas como la de Villa Órtuzar. Uno de los identificados como agresor fue Sergio Omar “Tuta” Muhamad, barra de Chacarita, quien tenía un puesto en el Ministerio de Descentralización del Gobierno de la Ciudad, y se desempeñó como seguridad del PJ porteño de Alberto Fernández. También era un colaborador “ad honorem” del interventor Salvatierra, hombre de Héctor Cappaccioli, que a su vez era un cuadro de Alberto Fernández.⁵³ Al día siguiente de la agresión, los interventores del hospital realizaron una conferencia de prensa, en la que la patota volvió a agredir a los trabajadores.⁵⁴

2 de octubre de 2007

Cerca de 30 trabajadores de la línea 60 se acercaron a solidarizarse con la lucha de la línea 102. Allí, recibieron una golpiza de parte de 50 delegados de la UTA.⁵⁵

52 *El Socialista*, 29-3-2006.

53 *Clarín*, 12-10-2006.

54 *La Nación*, 11-10-2006.

55 *La Verdad Obrera*, 18-10-2007.

Febrero/septiembre de 2007

El 5 de febrero de 2007 se elaboró el IPC, bajo la presencia de policías uniformados y personal de civil.⁵⁶ El 14 de septiembre, la patota amedrentaría a una movilización de los trabajadores por el despido de una compañera.⁵⁷ La patota era dirigida por Hernán Leonardo Brahim, ex puntero del Mercado Central, del que Guillermo Moreno fue padrino de bodas. En 2010 se lo designó como director de Legales del Área de Comercio Interior, dependiente de la Secretaría Legal y Administrativa del Ministerio.⁵⁸

Abril/mayo de 2007

Los docentes de Río Gallegos comenzaron una huelga a la que se sumarían estatales, judiciales y municipales, entre otros. El sábado 31 de mayo del 2007, se encontraban realizando una actividad para recaudar fondos para la lucha, cuando una bomba molotov rompió la ventana mientras era incendiado el auto del sindicato.⁵⁹ El 8 de abril, la patota ingresó a la casa del preceptor Carlos Mandatori,⁶⁰ y de los delegados Carlos Mansilla y Gladis Uribe. También, secuestrarían por una hora al hijo de la delegada Beatriz Constantino.⁶¹

Mayo/junio/noviembre de 2007

En mayo de 2007 Cristóbal López desembarcó en el casino de Puerto Madero, buscando reducir las condiciones laborales, reencuadrando en el SOMU a los 1.500 trabajadores

56 *Prensa Obrera*, 8-2-2007.

57 Reconstrucción realizada en base a Marcela Almeida, "No somos cómplices", Buenos Aires, CTA, 2014.

58 *La Nación*, 21-4-2010.

59 *Prensa Obrera*, 5-4-2007.

60 <<http://www.agenciawalsh.org/index.php/a/2007/04/12/p953#more953>> (consulta: 20-8-2015).

61 *Página/12*, 17-5-2007.

nucleados en ALEARA, dirigida por Daniel Amoroso (diputado del partido PRO).⁶² El SOMU, sindicato de marítimos, era dirigido por Omar “Caballo” Suárez, ligado a Néstor y Cristina Kirchner, que le entregaron la empresa Maruba, dedicada al transporte de soja.⁶³ El SOMU protagonizaría dos agresiones, una el 10 de junio⁶⁴ y otra el 9 de noviembre, ambas en el interior del Casino, a lo que debe sumársele una más en el Hipódromo de Palermo de los matones del Asociación Gremial de Empleados de los Hipódromos de Buenos Aires y San Isidro.⁶⁵

Los muertos

Sandra Cabrera en Rosario

El 27 de enero del 2004 asesinaron, en Rosario, a Sandra Cabrera, dirigente de la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR), con un disparo a quemarropa, en las cercanías de la terminal de ómnibus de Rosario. Sandra había denunciado la complicidad entre la policía y los proxenetas, el 10 de septiembre del 2003. Esa denuncia derivó en el descabezamiento de la sección Moralidad Pública de la policía provincial. Específicamente, había dado los nombres del jefe de la sección, Javier Pinatti, y Walter Miranda, subjefe, que hostigaban a las trabajadoras sexuales de las cercanías de la terminal de ómnibus de Rosario, para proteger a los prostíbulos de la zona. También, junto a sus compañeras, denunciaron a los jefes de calles que les pedían dinero. Cuatro días antes de su asesinato, Sandra había acompañado a Stella Maris Longoni a radicar la denuncia

62 Cfr. Damián Nabot, “Dueños del juego: Cristóbal López, la carta del poder K”, en *La Nación*, 1 de junio de 2008.

63 *Clarín*, 24-11-2014.

64 *La Nación*, 10-11-2007; *La Nación*, 12-6-2007.

65 *La Nación*, 3-1-2008.

por las amenazas sufridas por la policía unas horas antes. Doce años después de su muerte, el único que estuvo imputado fue Diego Víctor Parvluczyk, ex oficial de la Brigada antinarcóticos de la Policía Federal, pero en 2007 el juez Alfredo Ivaldi Artacho lo declaró sobreseído. Tres años después, la causa prescribió.⁶⁶

El “Oso” Cisneros, en La Boca

El 25 de junio del 2004, Martín “Oso” Cisneros, dirigente del comedor Los Pibes de La Boca, y miembro de la Federación Tierra y Vivienda, dirigida por Luis D’Elía, fue asesinado por varios disparos a quemarropa en su casa a manos de Juan Carlos Duarte, un sicario protegido por la policía de la comisaría 24. Según los compañeros de Cisneros, Duarte era un puntero, con varias causas en La Boca y el Dock Sud. Por este motivo, el “Oso” ya habían realizado denuncias al Ministerio de Justicia, a cargo de Gustavo Béliz. Entre ellas, la acusación por haber robado documentación y una computadora con información del comedor. Luego del crimen, Duarte fue arrestado y encarcelado y condenado a 18 años de prisión en julio del 2006. Sin embargo, salió en 2016, al cumplir poco más de la mitad de la pena, y se alojó en un edificio que queda a solo 200 metros del lugar del asesinato.⁶⁷ Ninguna autoridad nacional intentó investigar a la cúpula de la comisaría.

Jorge Julio López

El 18 de septiembre, en la ciudad de La Plata, desapareció Jorge Julio López, luego de salir de su casa con dirección a la audiencia de los alegatos en la causa contra Etchecolatz. En el marco del juicio, López, ex militante peronista, realizó

66 *Página/12*, 30-1-2004.

67 *Página/12*, 13-7-2006; *Los Andes*, 7-7-2006.

reconocimientos oculares de los lugares donde estuvo detenido, entre ellos, la comisaría quinta de La Plata y el Pozo de Arana. Sin embargo, nunca llegó al destino en cuestión. Esta segunda desaparición se produce en el barrio platense de Los Hornos, a los 77 años de edad. Aníbal Fernández sostuvo la hipótesis de que podía estar en la casa de algún familiar con algún “shock emocional”. La investigación por la desaparición de López fue llevada adelante por la Policía Bonaerense, la Policía Federal y la SIDE, pero contó con varias irregularidades. Por un lado, llevaron adelante procedimientos de pesquisa sin criterios o control judicial. Esto permitió que miembros de la fuerza de seguridad, sospechados de haber participado de la desaparición, tuvieran acceso a la causa. Por otro, muchas pistas no fueron profundizadas, como por ejemplo aquellas que apuntaban hacia ex represores.⁶⁸ Luego de diez años, no se ha llegado a ningún resultado concreto.⁶⁹

Hacia una sistematización

Teniendo en cuenta las salvedades que aclaramos al comienzo, podemos asignar al gobierno de Néstor Kirchner un mínimo de 70 acciones represivas paraestatales, con un promedio de 15,5 acciones por año. Estas cifras, aunque parezca increíble, no son mucho menores que el conflictivo periodo inmediatamente anterior, sino mayores. Los gobiernos de la Alianza y Duhalde suman un mínimo de 67 acciones, con un promedio de 15,4 acciones por año.

En cuanto al tipo de represión, como anticipamos, separamos aquellas que se refieren a una disputa por la conducción sindical, las que organizan elementos estatales contra acciones dirigidas al personal político y, por último, la que

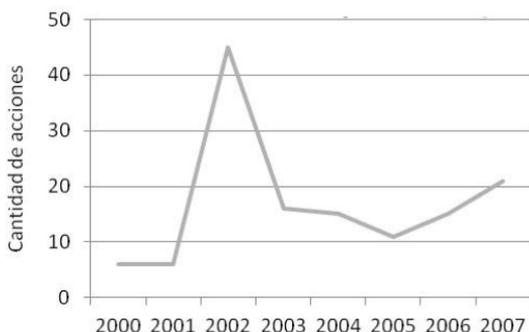
68 <<http://www.analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=208427>> (consulta: 20-8-2016).

69 *Infobae*, 18-9-2016.

está dirigida a algún elemento obrero dirigente. Las primeras reúnen 27 acciones, las segundas 29 y las terceras, 14. Es decir, hay un leve predominio de acciones montadas por elementos estatales. Detrás, las más estrictamente políticas. De estas, 7 son contra militantes de izquierda.

Se puede apreciar la evolución de la represión paraestatal por años en el Gráfico 9.5.

Gráfico 9.5. Cantidad de acciones paraestatales por año (2000-2007).

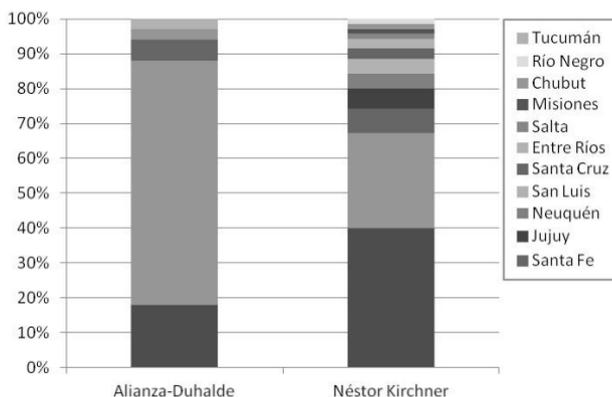


Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

Lo que podemos ver es un vertiginoso ascenso de las acciones paraestatales en 2002, para descender en 2003, pero a un nivel superior incluso al de 2001. Luego, a partir de 2005, la tendencia es hacia el aumento. Es decir, el “argentinazo” instala un fenómeno que no es nuevo en la política argentina (Juvenal, 1993), pero que adquiere niveles de creciente importancia. Recordemos siempre que se trata de niveles mínimos, de aquellos hechos que son denunciados y pudimos comprobar fehacientemente.

Se puede examinar el lugar donde se efectúa la represión en el Gráfico 9.6, donde también comparamos el período 1999-2002 con el 2003-2007.

Gráfico 9.6. Lugar de represión paraestatal según período.



Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

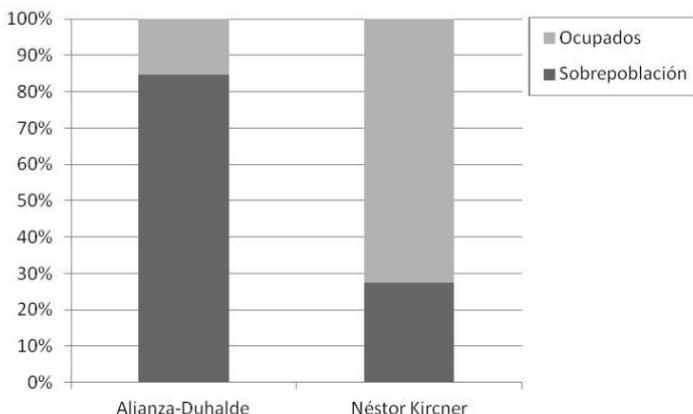
Como vemos, en ambos períodos las acciones en CABA y provincia de Buenos Aires son abrumadoras, llegando al 88% en 2000-2002 y al 67% en 2003-2007. Es de destacar que ocupan un lugar mucho más importante que en la represión legal, donde en ambos casos llegan a la mitad (*cfr.* Gráfico 2). Una hipótesis posible para esta diferencia está en la mayor capacidad de manejo del aparato político paraestatal en el centro del poder político y, en especial, en el conurbano, donde el PJ tiene su fuente de poder. Pero no hay que descuidar el hecho de que en esta región es mayor también la capacidad de denuncia de los hechos.

En cuanto a las diferencias, en el período 2000-2002 predominan claramente las acciones en la provincia de Buenos Aires, más precisamente en el conurbano. En cambio, en el período siguiente hay un predominio mayor de la CABA y una represión algo más repartida en el resto del territorio nacional. Esto puede explicarse por la necesidad que hubo en 2002 de desactivar el núcleo más duro y peligroso de la

fuerza social revolucionaria del “argentínazo”: la sobrepoblación relativa del conurbano.

Eso es lo que vemos en el Gráfico 9.7: el peso de la represión, según las fracciones de la clase obrera.

Gráfico 9.7. Porcentaje de fracciones que reciben represión paraestatal, según período (2000-2007).



Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

Aquí la diferencia es realmente para destacar. Mientras que la represión paraestatal 2000-2002 se concentra en la sobrepoblación relativa, la de Néstor Kirchner lo hace sobre la clase obrera ocupada. Esto puede estar relacionado con dos variables. La primera es que el ataque (y la cooptación) a la sobrepoblación relativa disminuyó la conflictividad de esta fracción. La segunda es que la inflación obligó a una mayor conflictividad de la clase obrera ocupada.

¿Quiénes reprimen? ¿Quiénes organizan a esos grupos irregulares? Bajo el gobierno de Néstor Kirchner, 37 acciones son organizadas por direcciones sindicales, 15 por

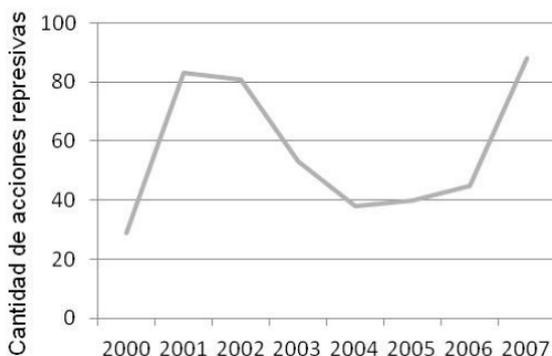
dirigentes del PJ, 12 por autoridades gubernamentales (miembros ligados al Estado central, a las gobernaciones o a las intendencias) y 6 por elementos parapoliciales. Vemos aquí el peso de la llamada “burocracia sindical” como un elemento de dirección burguesa, que opera en un plano más amplio que el sindical. No hay espacio aquí para desarrollar el problema, pero algunos datos pueden permitir abordarlo de manera más seria. La UOCRA, por ejemplo, en este período interviene para reprimir docentes en San Luis y en Neuquén. Luego vemos otro puntal importante de la estructura burguesa: el PJ, aún sin dirección clara y sin estructuración. Aún en plena crisis, sus elementos fragmentados operan para desarrollar una salida a la crisis orgánica.

Entonces, podemos observar que, bajo el gobierno de Néstor Kirchner, las tendencias al aumento de la acción paraestatal contra la clase obrera se mantienen, e incluso la tendencia es al aumento. Las diferencias entre una represión y otra son el producto de una complementariedad, no de una oposición. La política oscura, las formas que tiene la burguesía de reprimir a la clase obrera eludiendo las reglamentaciones se mantienen en pie. El mayor control del PJ por parte del kirchnerismo coincide, también, con el aumento de las acciones de esos grupos irregulares.

4. Resumiendo...

Es momento de recapitular y reunir toda la información. Entre diciembre de 1999 y diciembre de 2007 registramos un total de 457 acciones represivas, con un promedio de 52 acciones anuales. Como vimos, estas se reparten desigualmente en el tiempo. Tanto en la represión regular como en la irregular veíamos una aceleración muy importante en 2002, seguida por una meseta y una tendencia al ascenso, que no llegaba a los niveles de 2002. Sin embargo, si juntamos ambas acciones, los números son sorprendentes.

Gráfico 9.8. Cantidad de acciones represivas por año (2000-2007).



Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

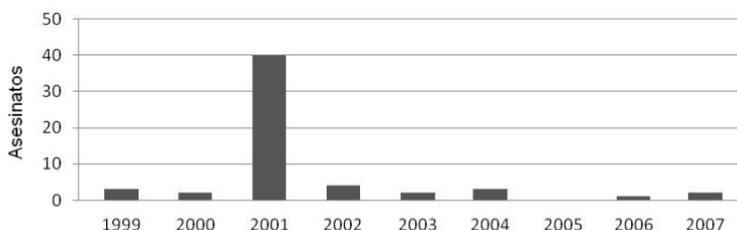
El Gráfico 9.8 permite realizar dos afirmaciones adicionales sobre las que ya establecimos. Primero, que el descenso de la represión durante los primeros años del gobierno de Néstor Kirchner se mantiene más alta que el piso del año 2000. Segundo, que la tendencia al aumento de la represión, que se registra ya a partir del año 2004 y que se acelera en 2006, llega a alcanzar el punto máximo del 2001-2002, con tendencia a superarlo. A esto hay que agregar que bajo el primer gobierno kirchnerista se mantiene el procesamiento de 2.148 militantes y esa cifra se incrementa en un 20% (AEDD *et al.*, 2012).

La idea liberal o de izquierda de que la represión se circunscribe a la izquierda no se verifica en los hechos. Si sumamos la represión a cualquier movilización obrera que no está alineada con el gobierno (sea de izquierda, peronista o autonomista) o con una notable participación de la izquierda (como el subterráneo), encontramos que son víctimas de 52 acciones estatales sobre 236 llevadas a cabo en el período. En otras palabras, la izquierda (y mucho más) representa el

22% de las víctimas. Si dejamos de lado la delirante teoría de que el kirchnerismo reprime solo a los revolucionarios, encontramos un hecho realmente interesante: la sobrerrepresentación de la izquierda en relación a su caudal electoral o al peso real en la clase obrera. En esos años, la izquierda oscila entre el 2% y el 2,44% en las elecciones. No obstante, muestra un peso mucho mayor en los enfrentamientos. Un fenómeno notable, si tomamos en cuenta el retroceso al que fue sometida.

¿Puede decirse entonces que la conflictividad tiene el mismo grado que en el período anterior? Por supuesto que no (*cfr.* Gráfico 9.9).

Gráfico 9.9. Asesinatos por parte de las fuerzas estatales o paraestatales por año (1999-2007).



Fuente: elaboración propia en base a relevamiento de diarios nacionales y provinciales, periódicos de izquierda e informes de CORREPI.

La diferencia es que, mientras la Alianza y Duhalde se llevan 49 muertos, Néstor Kirchner carga con 8. Seis veces menos. Otra vez, es un problema de intensidad. El gobierno de Néstor Kirchner iguala e incluso supera la cantidad de represión anterior, pero lo hace con menor fuerza. Este último dato es el único argumento que podrían esgrimir los diferentes intelectuales que, por izquierda o por derecha, han afirmado la tolerancia kirchnerista con la acción directa

de la clase obrera. No obstante, como vemos, la dinámica se mantiene intacta: la represión legal e ilegal continúa. Los aparatos de coacción regulares y las formas de reclutamiento irregular mantienen toda su vigencia y aumentan su poder de fuego. Los asesinatos tampoco cesan. Es un problema de grado, pero solo si lo comparamos con el 2001. Si comparamos los asesinatos del primer gobierno kirchnerista con otros años, la diferencia ya no es importante.

Con todo, ¿qué es lo que nos dicen los asesinatos? Simplemente, el grado de violencia necesaria y posible (material y políticamente) para poner fin a la acción de una fuerza. Esa intensidad no está determinada por las concepciones ideológicas de quien ostenta la dirección del Estado, sino por el nivel de desafío al mismo. En 2001, asistimos a un ciclo insurreccional que termina con un enfrentamiento con el poder político en la capital del país. Es lógico que la dosis de coacción estatal sea gigantesca y difícilmente se repita hasta tanto no se asista a un fenómeno similar.

Dicho en otras palabras, bajo el primer gobierno kirchnerista, el Estado sigue la misma línea que sus antecesores y reprime la acción de la clase obrera en forma sistemática, con la intensidad que juzga necesaria. Fue un elemento de la reconstrucción del Estado capitalista. Como balance, no obstante, deja un país sin una recomposición completa, que para sostener la dominación requiere dosis de represión estatal y paraestatal crecientes, que tienden a superar, en su frecuencia, a las más altas que haya registrado el régimen democrático restaurado en Argentina, y con una tendencia en ascenso.

Toda esa masa de recursos que el aparato kirchnerista puso en la construcción del consenso, sobre la base de fabulosos presupuestos fiscales, parece haber hecho un efecto más bien magro sobre el proletariado, teniendo en cuenta el peso de la coacción. En una perspectiva de largo plazo,

podemos decir que la plena hegemonía de la burguesía ha sufrido, desde 1983 hasta aquí, un deterioro muy significativo, a pesar de todos los esfuerzos puestos, de toda esa montaña de ideología, de los procesados, los heridos, los muertos...

Bibliografía

- AEDD, APEL, CORREPI, CEPRODH, CADEP y Liberpueblo (2016). *Informe sobre criminalización de la pobreza*. En línea: <http://www.anred.org/IMG/pdf/Informe_Criminalizacion_de_la_Protesta.pdf> (consulta: 26-09-2016).
- Baldioli, A. y Leiras, S. (2012). De Néstor C. Kirchner a Cristina Fernández de Kirchner: ¿Un cambio ideológico dentro de la continuidad? En Leiras, S. (comp.), *Democracia y estado de excepción. Argentina 1983-2008*. Buenos Aires, Prometeo.
- Barbieri, G. (2007). *Las huellas: la persistencia del peronismo en el kirchnerismo*.
- Biglieri, P. (2007). *El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea. Argentina en la era K*.
- Bruno, D. (2012). El régimen de la crisis permanente. Un balance de nuevo años de kirchnerismo. En *Hic Rhodus. Crisis capitalista, polémica y controversias*, núm. 12. Buenos Aires, Facultad de Ciencias Sociales (UBA), Instituto Gino Germani.
- Canoni, F. (2007). El pueblo kirchnerista performado por la memoria. En Biglieri, P. (2007), *El retorno del pueblo argentino: entre la autorización y la asamblea. Argentina en la era K*.
- Castillo, C. (2011). *La izquierda frente a la Argentina kirchnerista*. Buenos Aires, Planeta.
- Curi, C. (2011). *Néstor Kirchner: la construcción de poder 2003-2005*. Buenos Aires, Mesa.
- Etchemendy, S. (2011). El sindicalismo argentino en la era pos-liberal (2003-2011). En Malamud, A. y De Luca, M. (coords.), *La política en tiempos de los Kirchner*. Buenos Aires, Eudeba.
- Garriga Zucal, J. (2010). *Nosotros nos peleamos. Violencia e identidad de una hinchada de fútbol*. Buenos Aires, Prometeo.

- Godio, J. (2006). *El tiempo de Kirchner. El devenir de una "revolución desde arriba"*. Buenos Aires, Letra Grifa.
- González, H. (2011). *Kirchnerismo: una controversia cultural*. Buenos Aires, Colihue.
- Kabat, M. (2013). En nombre del pueblo. Populismo, socialismo y peronismo en la obra de Ernesto Laclau. En *Razón y Revolución*, núm. 26, segundo semestre.
- Laclau, E. (2005). *La razón populista*. Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica.
- _____. (2011). Entrevista a Ernesto Laclau. En AA.VV., *Qué es el kirchnerismo. Escritos desde una época de cambio*. Buenos Aires, Continente.
- Marticorena, C. (2013). Apuntes sobre la relación entre sindicalismo y kirchnerismo (2003-2013). En *XXIX Congreso ALAS, Crisis y emergencias sociales en América Latina*.
- Montero, A. y Vincent, L. (2013). Del "peronismo impuro" al "kirchnerismo puro": la construcción de una nueva identidad política durante la presidencia de Néstor Kirchner en Argentina (2003-2007). En *Post Data. Revista de reflexión y análisis política*, vol. 18, núm. 1.
- Novaro, M, Bonvecchi, A y Cherni, N. (2014). *Los límites de la voluntad. Los gobiernos de Duhalde, Néstor y Cristina Kirchner*. Buenos Aires, Ariel.
- Perelló, G. (comp.) (s/f). *En el nombre del pueblo. La emergencia del populismo kirchnerista*. Buenos Aires, UNSAM.
- Rinesi, E. (2011). ¿Qué es el kirchnerismo? En AA.VV., *Qué es el kirchnerismo. Escritos desde una época de cambio*. Buenos Aires, Continente.
- Salas Oroño, A. (2011). El kirchnerismo como proyecto y como socialización. En AA.VV., *Qué es el kirchnerismo. Escritos desde una época de cambio*. Buenos Aires, Continente.
- Sartelli, E. (2005). *La cajita infeliz*. Buenos Aires, RyR.
- _____. (2007). *La plaza es nuestra*. Buenos Aires, RyR.
- Svampa, M. (2008). El final del kirchnerismo. En *New Left Review*, num. 53, pp. 73-88.

Capítulo 10

El origen del “relato”

La ideología bonapartista del kirchnerismo como emergencia de un momento de la vida social argentina

Eduardo Sartelli

Entre las ilusiones liberales acerca del funcionamiento de la vida política, una de las más alejadas de la realidad es aquella que pretende que el gobierno es el punto de llegada de un “proyecto” elaborado a priori. Los “actores” del “juego” político organizan un discurso coherente que responde al “bien común”. Ese discurso brota de ciertas perspectivas “filosóficas”, de un conjunto de valores *ex ante*, cuyo origen no tiene explicación. Los actores se lanzan a la lucha con ese bagaje conceptual, llegando a la posición que habilita realizar esos valores, el gobierno, luego de una compulsa más o menos racional cuyo jurado es el cuerpo ciudadano, el “pueblo”.

Ese es el mito. La realidad es bien otra. De Maquiavelo a Marx sabemos perfectamente que la “política” es la actuación de intereses, no de valores. Que los intereses porten “valores” es otra discusión. Pero son aquellos y no estos los ejes en torno a los cuales se organiza el “discurso” ideológico. Existe, sin llegar a los extremos que plantean Laclau y Mouffe (1987), un cierto desplazamiento entre “ideología” e intereses, de modo tal que un conjunto determinado de

ellos puede servirse, alternativa o simultáneamente, de varias y hasta contradictorias formaciones ideológicas. Esas construcciones se organizan en el movimiento mismo, no lo preceden, sobre todo cuando hablamos de regímenes que se caracterizan por emerger en contextos de crisis del conjunto de la estructura política burguesa como es el bonapartismo. Pero esas organizaciones “momentáneas” trabajan con un material preexistente, lo que hace creer a muchos que el “programa” ya está antes del “momento” constitutivo. En este texto examinaremos precisamente eso: cómo emerge, en el marco del ascenso bonapartista, la formación ideológica que ha dado en llamarse “relato kirchnerista”, que no estaba prefigurado en un programa a priori, pero que se construye con materiales preexistentes.

El ascenso del bonapartismo kirchnerista

La crisis que alcanza su punto más alto en las jornadas de diciembre y enero de 2001-2002 da por tierra con todo un régimen político: la democracia burguesa instalada como salida de la dictadura militar. El conjunto de relaciones políticas que la organizaba, centrado en la alternancia de dos grandes partidos que ordenaban los intereses del conjunto de la población, la UCR y el peronismo, salta por los aires y da paso a una descomposición generalizada de tales relaciones. La crisis no llega a ser orgánica más que de modo incipiente y potencial, pero cumple con los criterios canónicos leninistas: los de arriba no pueden gobernar como venían haciéndolo; los de abajo, ya no soportan el yugo.

La escueta fórmula citada reúne las condiciones mínimas para el inicio de una crisis potencialmente revolucionaria y, en el caso que analizamos, tiene validez si insistimos en que la profundidad a la que llegó no perforó mucho más allá

del sistema político. En efecto, aunque la emergencia del movimiento piquetero, del movimiento de fábricas ocupadas, del club del trueque, de la crisis del sistema financiero y las protestas de ahorristas y fenómenos por el estilo, anunciaban que el proceso continuaba hacia abajo, afectando incipientemente al conjunto de las relaciones sociales más básicas, resulta claro que es sobre todo la superestructura la que recibe el impacto más fuerte. No soporta la emergencia de un conjunto de intereses que se expresan todos juntos en una consigna poderosa en apariencia, pero que oculta, en su vaguedad, fuerzas que empujan en sentido contrario: “Que se vayan todos”. Para evitar que se produzca en el interior de ese vasto conglomerado un proceso de concentración hegemónica con un potencial desestabilizador aun mayor, resulta imprescindible a la burguesía la recomposición de un sistema de relaciones políticas capaz de absorber y canalizar esas energías sociales, separar y aislar las más disruptivas, cooptar las compatibles con la reconstrucción del dominio burgués y configurar un centro estable en torno al cual asentar la nueva hegemonía. Que ello resulte “necesario” al conjunto de la burguesía no significa que no sea una fracción de ella misma la que tenga que imponérselo al resto contra su voluntad. Es decir, como resultado de una lucha en su interior.

Históricamente, la burguesía puede resolver una situación de este tipo de dos maneras: mediante un ataque frontal o mediante una maniobra dilatoria y absorbente. Para el primer tipo de solución se requiere de una unidad profunda de la clase hegemónica, ya sea mediante un acuerdo interno (normalmente, una dictadura) o por la imposición de una fuerza externa (el fascismo). El primero suele ser el resultado de la debilidad de las fuerzas “populares”. El segundo solo se impone en casos de extrema descomposición, ya no del sistema de relaciones políticas sino del Estado mismo.

Ciertas formas de emergencia social requieren intervenciones “consensuales” y se producen normalmente cuando las fuerzas sociales antagónicas ya han sido derrotadas. Así, la democracia burguesa aparece ante el fracaso de experiencias “extremas”, cuando estas ya han cumplido su función histórica de asegurar el dominio en su aspecto más represivo (como las dictaduras militares), o ante crisis políticas menores, que no llegan a conmover al conjunto del sistema político (como el Mayo del 68).

Hay situaciones, por otro lado, que se encuentran a mitad de camino. En ellas, la crisis no llega a ser la del Estado como tal, pero sí la del régimen político. Limitadas, esas crisis tienen, sin embargo, una potencialidad mayor, porque los intereses sociales de las fuerzas enfrentadas no pueden ser organizados bajo la hegemonía de la clase dominante. La emergente, por su parte, no ha logrado todavía desplegar toda su potencia. En este “empate” social, la política se reorganiza por medio de un régimen que, representando los intereses generales de la burguesía, debe reconocer en grado superlativo los más agudos intereses particulares del proletariado y sus aliados. Esta peculiaridad de origen le otorga al *bonapartismo* su carácter bifronte, pero también su autonomía frente a los protagonistas de ese empate (Marx, 1999). El bonapartista se eleva por encima de los contendientes, no depende estrictamente de ninguno de ellos y se apoya en unos para contener a los otros, en una danza interminable.

El personal político del bonapartismo expresa esta dualidad y autonomía: habiendo caído en desgracia el conjunto del personal político histórico, los bonapartistas provienen de los arrabales del sistema y del Estado, aventureros sin vínculos firmes con ningún agrupamiento social específico, con ideologías que en realidad son fragmentos recompuestos de las que caracterizan a las diferentes clases. Luis

Bonaparte, Juan Domingo Perón, Hugo Chávez, corporizan esas cualidades casi a la perfección.

Todos los bonapartismos nacen de una crisis de características revolucionarias. La autonomía del bonapartista depende mucho de la magnitud de la crisis. Obviamente, también de los recursos que tenga para enfrentar la crisis. Pero los recursos no crean el bonapartismo. Dicho de otra manera, la idea según la cual la renta agraria explica el peronismo es absurda. El peronismo se explica por la lucha de clases. La existencia o no de recursos es aleatorio, entre otras cosas porque ellos pueden aparecer con relativa facilidad para financiar una experiencia breve en un país de tamaño menor como la Argentina, por ejemplo, mediante el endeudamiento. Además, la magnitud de los recursos necesarios depende mucho del estado de conciencia de las masas movilizadas, es decir, contra qué miden ellas sus demandas: las del ciclo 2001 son indudablemente bastante más modestas que las del que abre el Cordobazo. Es decir, no existe una “magnitud” de recursos a priori que resulten necesarios para sostener una experiencia bonapartista. Por último, los recursos pueden aparecer *después* del comienzo de la experiencia bonapartista. De hecho, el alza de la soja, el principal soporte del kirchnerismo, recién adquiere su rol relevante dos o tres años después de iniciado el gobierno de Néstor Kirchner.

El proceso que dio lugar al kirchnerismo ya fue contado en otro lado (Sartelli, 2007), aquí lo resumiremos en poco más de un párrafo. La convertibilidad (1 peso = 1 dólar)¹ fue sostenida por una alianza social que tomó el nombre de “menemismo” y que se basaba en un incremento de la capacidad de consumo del proletariado en activo en blanco

1 Ley de Convertibilidad 23.928, iniciativa del Ministro de Economía Domingo Cavallo sancionada en marzo de 1991 por el Congreso argentino durante el primer gobierno de Carlos Menem.

perteneciente a los grandes sindicatos, la pequeña burguesía y las grandes empresas nacionales y extranjeras. El eje de la alianza fue la sobrevaluación del peso. En un comienzo la devaluación bajó los costos internos, sobre todo en términos de la fuerza de trabajo. La recesión inicial, comenzada a fines de 1988 y que se prolongó hasta 1992, creó el cuadro para la devaluación y la regimentación del movimiento obrero. Las privatizaciones y las inversiones extranjeras tuvieron el efecto de apurar la concentración de capital y aumentar la productividad interna, en particular en algunos sectores clave como comunicaciones y energía. El endeudamiento atizó el fuego del mercado interno permitiendo el despliegue inicial de muchas “pymes” y una recuperación del mercado de trabajo. Una vez que el efecto devaluatorio se perdió, la sobrevaluación del tipo de cambio, que contrastaba con una productividad que no lograba acortar distancias con la reinante en el mercado mundial, dio paso a una segunda etapa donde la capacidad de compra internacional del peso (transformado en dólar por la convertibilidad y abastecido por el ascenso de la deuda) abarató las importaciones. Tanto la concentración y centralización del capital operadas en relación o no con las privatizaciones, como la competencia de la mercadería importada, dieron paso a una caída brutal del empleo y a un proceso de quiebras masivas de pequeñas y medianas empresas, igual que a una creciente extranjerización de la economía. Quienes tienen empleo mantienen un poder de compra muy elevado; quienes caen en la desocupación, entran a la miseria más absoluta; las empresas que importan se enriquecen; las que producen se encuentran con problemas de competitividad creciente, sobre todo las más débiles del mercado interno.

Se va formando, de esta manera, una alianza anti-convertibilidad que va a darse como programa la devaluación, la recomposición del mercado interno y el subsidio

a la desocupación. Pero otros procesos confluyen con los económicos: la política sindical, sintetizada en el término “desregulación”; la de derechos humanos, concentrada en la amnistía; la descomposición de las relaciones políticas, expresada en la crisis del peronismo con las masas y en la corrupción política. Se completa así el programa con demandas que se formulan como “anti-neoliberalismo”, por el juicio y castigo al personal de la Dictadura y por la reforma de la Justicia, en particular de la Corte Suprema. Se trata de un programa que podríamos caracterizar como “republicano, nacional y popular”, acaudillado sobre todo por la burguesía mercado-internista más débil. Otro programa comienza a desarrollarse, aunque muy incipientemente, con características revolucionarias. Sus principales impulsores serán las fracciones más pauperizadas de la clase obrera, en particular, la capa de la población sobrante (“piquete”) y la pequeña burguesía (“cacerola”). La dirección inicial contra la convertibilidad recaerá primero en la gran burguesía local (incluyendo sus expresiones agrarias) y sectores del capital extranjero, para ir pasando hacia fines del 2001 a los sectores más movilizados (el “movimiento piquetero” en sus dos alas, la reformista y la revolucionaria). Gran ausente del proceso es la fracción en activo de la clase obrera, sólo presente por los docentes y, en menor medida, los estatales.

La lucha contra la “convertibilidad”, es decir, contra lo que ella representa, se mantiene en alza hasta bien entrado el 2002. No será hasta que el gobierno de Duhalde cree un nuevo cuadro económico, devaluación mediante, y social, con la expansión masiva de los diversos “planes”, la licuación de pasivos empresarios y la pesificación asimétrica, así como el rescate de los sectores más endeudados, que el movimiento tenderá a entrar en un reflujó relativo. Lo que Duhalde dejará sin hacer es la tarea que se extiende más

allá de lo económico. El kirchnerismo se armará, no tanto a partir de allí, basado en recursos todavía inexistentes a la escala que se verán más adelante, cuanto en relación a las otras “demandas”. La renovación de la Corte y la reapertura de los juicios de lesa humanidad, serán los sellos distintivos de los primeros momentos del bonapartismo en formación. El resto de los elementos (el nacionalismo, la política de medios, la ampliación del sistema de subsidios, etcétera) se irán agregando lentamente y no llegarán a coagular en un relato coherente sino después del conflicto con el campo, en 2008. Es en ese momento que los sectores intelectuales, que hasta allí acompañaban implícitamente la política en marcha, se lanzan a su defensa abierta y se estructuran como su expresión ideológica. El evento más importante en ese proceso es el surgimiento de Carta Abierta.² El “relato”, es decir, la ideología propia del bonapartismo, tomará fragmentos de los programas en lucha en la coyuntura anterior y se construirá sobre las debilidades ideológicas históricas de la izquierda argentina y las fortalezas de la vasta experiencia bonapartista de la burguesía “nacional”.

El arte, la cultura y la gestación del relato

Hemos visto que el bonapartismo es, básicamente, un dispositivo expropiador. Es decir, cumple una función conservadora. Lo peculiar de su intervención consiste en su emergencia “por izquierda”, como respuesta a las presiones de la crisis. Teniendo en cuenta que este es apenas un esbozo de un tema más vasto y que no podemos entrar en los detalles, nos concentraremos en algunos elementos del “relato K”.

2 En línea: <<http://www.cartaabierta.org.ar/>>.

1. La clase media y su necesidad de épica

La necesidad de un “vengador”, de una figura individual que encarne la rebeldía social, en un contexto de desestructuración política como la de los años noventa, surge como un tema ideológico recurrente y poderoso.³ Es el camino que va desde la canción *Matador*, de los Cadillacs (1993), hasta *Resistiré*, la telenovela protagonizada por los actores Celeste Cid y Pablo Echarri, pasando por *Bandidos rurales*, tema de León Gieco (2001). La “resistencia”, o su versión popular, el “aguante”, es el tópico dominante en esta ideología, muestra de un proceso político en el cual el conjunto de las fuerzas que se disputan la dirección del enfrentamiento contra la convertibilidad no parecen tener confianza en acciones ofensivas. Es síntoma de un estado de conciencia que privilegia las acciones defensivas. Quizás la muestra pictórica de Pablo Suárez, *El escaso margen*, de 2003, sea el último testimonio de una mirada desesperada acerca del futuro, donde los personajes se aferran dramáticamente al borde de un abismo sin esperanza.⁴

Sin embargo, el proceso ya ha producido para entonces dos figuras que, icónicamente, sintetizan el sentido que va tomando el proceso luego del 2001: la imagen de Maximiliano Kosteki, de Diana Dowek, expuesta en la muestra de 2005: *Artistas por Kosteki y Santillán*; y el éxito notable de la miniserie *Montecristo*, en 2006, protagonizada por Paola Krum y Pablo Echarri.⁵ En el primer caso, es la línea en la que va cerrándose la experiencia más importante del 2001, la del movimiento piquetero. El asesinato de Kosteki y Santillán marcó el fin del gobierno de

3 La aparición del “superhéroe” en contextos de este tipo ha sido ampliamente estudiada; cfr. Eco (1998).

4 Cfr. Sartelli (2004).

5 Sobre la muestra de Dowek, cfr. Sartelli (2005).

Duhalde y el inicio de la salida bonapartista. La pintura de Dowek muestra a Kosteki en situación de Cristo en la cruz, como el mártir de un movimiento que recién empieza, en tanto Maxi, muerto, muestra color en sus mejillas. Está vivo, pero para las futuras generaciones. El segundo caso es la inversión del primero, es decir, la declaración de la muerte del “argentino”, el nacimiento del bonapartismo que se impone.

En efecto, *Montecristo* resultó en un impacto de público inesperado, mostrando que algo en su historia reflejaba cierto consenso ideológico en el ambiente. Su protagonista, Echarri, devendría luego en actor “militante” del kirchnerismo. La historia es conocida: alguien vuelve para vengarse de una injusticia. En este caso, un “desaparecido”. Igual que en la idea original de Alejandro Dumas, este vengador no actúa por sí mismo, como el sanguinario Rodolfo de Gerolstein, de Eugenio Sue. Su máxima es “confiar y esperar”. Y es, finalmente, el Estado quien hace “justicia”, eliminando, con su intervención, toda la tensión dramática contenida en una violencia que nunca se desata. En efecto, el personaje de Echarri termina siendo un gesto impotente: amenaza pero no actúa, aprieta pero no ahorca. Esta nueva confianza en un sistema político asediado poco tiempo atrás por el “que se vayan todos”, es una muestra del avance del nuevo consenso bonapartista y su construcción “por izquierda”. Se clausura, con la cooptación de los organismos de derechos humanos, la épica de la lucha de HIJOS, Abuelas, Madres y tantos otros. El Estado ahora hará su tarea: la ESMA transformada en Centro Cultural dedicado a la “memoria”; Hebe de Bonafini, su universidad y sus “sueños compartidos”; el cuadro de Videla y la reapertura de los juicios, componen una estrategia que no necesita de recursos económicos y no se explica por ellos. Va a resultar, sin embargo, un

“capital” invaluable a la hora de armar un aparato cultural cuando el “conflicto del campo” ponga en entredicho la alianza bonapartista.

2. El conflicto con el campo y el nacimiento del aparato

El aparato cultural bonapartista no se despliega a pleno (y por lo tanto, el relato) hasta el conflicto que opuso al gobierno con las diversas fracciones agrarias en 2008. Es allí que nace el agrupamiento que va a sintetizar el “relato” y a darle “brillo” intelectual. Veamos cómo caracteriza la primera “Carta abierta” la naturaleza del hecho y las consecuencias que de allí se derivan, desde su óptica, para los intelectuales argentinos.

El conflicto es definido como un enfrentamiento entre el poder dominante y un gobierno que expresa a toda la “ciudadanía”:

Como en otras circunstancias de nuestra crónica contemporánea, hoy asistimos en nuestro país a una dura confrontación entre sectores económicos, políticos e ideológicos históricamente dominantes y un gobierno democrático que intenta determinadas reformas en la distribución de la renta y estrategias de intervención en la economía.⁶

Por supuesto, se vivía un “clima destituyente”, es decir, una tentativa de “golpismo”. Para Carta Abierta se buscaba clausurar, nuevamente, lo “político”. Es este “golpe” de nuevo tipo el que “ha movilizado a integrantes de los mundos políticos e intelectuales, preocupados por la suerte de una

6 Todas las citas a continuación pertenecen a la primera “Carta abierta”, en línea: <<https://www.pagina12.com.ar/diario/elpais/1-104188-2008-05-15.html>>.

democracia a la que aquellos sectores buscan limitar y domesticar”. En particular, destaca el *leitmotiv* que los intelectuales kirchneristas gustarán repetir de aquí en adelante, el “papel fundamental de los medios masivos de comunicación más concentrados”. Los “medios” estructuran “la realidad”, generan “el sentido y las interpretaciones” y definen “la verdad”. Dicho de otro modo, son todopoderosos. Se forja aquí un dispositivo clave en lo que más abajo llamaremos “autismo” del relato: dado que los medios siempre mienten, cualquier cosa que se diga que coincida con dichos medios es, automáticamente, mentira. De un modo un poco más sofisticado, se insistirá en el rol “político” de los medios y, por ende, interesado. La presencia de “interés” elimina la posibilidad de “verdad”. El “relato” se blindo al transformar la realidad en “espectáculo”. Se fija al mismo tiempo una agenda político-mediática: desarmar la concentración “mediática” enemiga y construir una estructura simétrica oficial, a fin de “librar, en sentido plenamente político, una batalla cultural al respecto”.

La primera “Carta abierta” es muy explícita, valga la paradoja, en su implícito llamado a cerrar filas con el gobierno. Digo implícita porque no se dice, todavía, “Cristina conducción”: la relación de los grandes grupos intelectuales con el kirchnerismo está recién empezando. O mejor dicho: como un amor clandestino, aprovecha un evento fortuito pero favorable, para preparar el terreno propicio para el anuncio de un matrimonio sorpresivo. Se recurre, entonces, al circunloquio, al eufemismo, al acercamiento sin contacto:

Es necesario crear nuevos lenguajes, abrir los espacios de actuación y de interpelación indispensables, discutir y participar en la lenta constitución de un nuevo y complejo sujeto político popular, a partir de concretas rupturas con el modelo neoliberal de país. La rela-

ción entre la realidad política y el mundo intelectual no ha sido especialmente alentada desde el gobierno nacional y las políticas estatales no han considerado la importancia, complejidad y carácter político que tiene la producción cultural. En una situación global de creciente autonomía de los actores del proceso de producción de símbolos sociales, ideas e ideologías, se producen abusivas lógicas massmediáticas que redefinen todos los aspectos de la vida social, así como las operaciones de las estéticas de masas reconvirtiendo y sojuzgando los mundos de lo social, de lo político, del arte, de los saberes y conocimientos. Son sociedades cuya complejidad política y cultural exige, en la defensa de posturas, creencias y proyectos democráticos y populares, una decisiva intervención intelectual, comunicacional, informativa y estética en el plano de los imaginarios sociales.

Dicho de otro modo, son los intelectuales los que están exigiendo su lugar en la “constelación K”. Ellos tienen algo para darle y enseñarle. También algo que reclamarle: la inclusión de “lo político emancipatorio”. Lo “emancipatorio” no es aquí esgrimido en relación al dominio social como tal, al capital como sistema, sino en contra de “la lógica neoliberal hegemónica durante los años noventa”.

En este sentido, Carta Abierta ejerce la crítica y el reproche:

Creemos indispensable señalar los límites y retrasos del gobierno en aplicar políticas redistributivas de clara reforma social. Pero al mismo tiempo reconocemos y destacamos su indiscutible responsabilidad y firmeza al instalar tales cuestiones redistributivas como núcleo de los debates y de la acción política des-

de el poder real que ejerce y conduce al país (no desde la mera teoría), situando tal tema como centro neu-rálgico del conflicto contra sectores concentrados del poder económico.

La primera carta será respondida rápidamente con la visita de Néstor a la asamblea de la flamante organización, hecho que formalizará la unión. La naturaleza “democrática” del discurso inicial, destinado a un agrupamiento amplio no partidario ni gubernamental, logró cooptar firmas que sucumbieron a esta primera versión del “relato”: el “golpe” del poder económico-mediático contra el gobierno democrático.⁷ La segunda carta ya es parte de la estrategia política kirchnerista que es, al mismo tiempo, la construcción del aparato material que va a servir como fuente de ingresos de las masas crecientes de “intelectuales” que acudirán en tropel a partir de la nueva realidad “laboral” creada por la Ley de Medios.⁸ Las siguientes cartas expresan el creciente nivel de subordinación de esos intelectuales que se proponían apoyar “críticamente” la experiencia política en marcha. Más largas, más barrocas, más confusas, más insustanciales, cada manifestación pública del colectivo traduce más que la capacidad crítica de quienes lo integran, la facilidad con la que han sido cooptados. Importante es, para lo que nos interesa aquí, destacar que esto no fue pensado *ex ante*. Es el resultado de la lucha de clases y de la larga e histórica subordinación de los intelectuales de “izquierda” o “progresistas” al peronismo.

7 Entre los firmantes que tal vez luego quisieron borrar su firma, se encontraba gente como Federico Andahazí o Eduardo Grüner.

8 En línea: <<http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/155000-159999/158649/norma.htm>>.

3. La muerte de Néstor como catalizador de la épica ausente

Si algo le faltaba al relato en formación era un mártir. Una figura que resumiera en su muerte el valor ideológico y propagandístico del “sacrificio”. El deceso de Néstor Kirchner vino a completar el círculo que empieza en el cálculo político, se proyecta en la construcción discursiva y se fija en la estructura de sentimientos de una época y una población dada. Que la canonización vino bastante después de la muerte y no en forma inmediata, se puede apreciar en un hecho fortuito pero significativo. Meses antes, el entierro de Sandro, el popular cantante enfermo y retirado, gestó, sin ninguna organización previa, una manifestación espontánea que superó por lejos la que acompañó el cortejo fúnebre del ex presidente. Es varios meses después de su muerte que su esposa logrará soldar la idea de que la “juventud” se había acercado a despedir a quien la había “convocado”, sacándola de la apatía política.

Esta asociación con la juventud tiene múltiples connotaciones y consecuencias: por un lado, permite reforzar la reconstrucción de la historia que el kirchnerismo promueve: la generación de los setenta, los “jóvenes” de entonces, estaban ahora en el poder (idea establecida desde el inicio de la gestión del presidente muerto como parte de la cooptación de los organismos de derechos humanos) y tendían un puente con la nueva generación “militante”. De Montoneros a La Campora, los “jóvenes” seran, a partir de aquı, la base ideologica necesaria para una estructura polıtica propia, separada del Partido Justicialista (PJ) y dirigida verticalmente, muy alejada de la perspectiva original de la “transversalidad”. La Campora sera el vınculo que el ahora “crisinismo” tejera mas estrechamente con la unica base no disputada ni por el PJ ni por la estructura sindical: la poblacion sobrante, el mundo de los planes sociales. Curiosamente, la menos autonoma, la mas estatal de

todas las estructuras políticas kirchneristas, aparecerá ideológicamente como la más “genuina” y “espontánea”.

En esta estrategia que consiste básicamente en invertir la historia (quienes se enriquecieron durante el Proceso militar son ahora la “juventud maravillosa” reaparecida), el kirchnerismo se presenta, Ernesto Laclau mediante, como el “empoderador” de la juventud y el “reconstructor” de la “política”. Néstor es, entonces, por la misma maniobra por la cual Juan Domingo Perón borraba setenta años de historia de luchas obreras y se erguía en el creador *ex nihilo* de los “derechos” obreros, el despertador de la Nación dormida. Que la “Nación” no dormía, se demuestra simplemente con evocar la intensa crisis política y la lucha consecuente de la clase obrera e incluso de la pequeña burguesía en los diez años previos a la llegada del nuevo “salvador”. Por el contrario, el “relato K” pretende que el 2001 no existió y que la lucha comenzó, en realidad, dos años después. Así, el expropiador de las energías políticas del “argentínazo” aparece como el “empoderador” de los débiles. Néstor como “súperhéroe”: aquello que Montecristo exigía, se corporiza en el *Nestornauta*.

Esta vinculación con una figura de los setenta es recurrente en todos los tópicos del “relato”: Cámpora-La Cámpora, Oesterheld-Néstor, Walsh-Carta Abierta. Faltaba que Néstor adquiriera ese plusvalor ideológico que da la ausencia: la foto icónica de su esposa sola ante el féretro lo transforma en “Él” y, por propiedad transitiva, a ella en “Ella”. El poder emotivo de las imágenes difícilmente pueda ser exagerado.

4. La estandarización del relato

La reconstrucción del conjunto de la historia argentina quedará, a partir de 2010, en manos de un personaje

particular, Zamba.⁹ El “dibujito” animado tendrá una función en extremo productiva: por empezar, expone un relato de la vida de la “patria” desde un ángulo nacionalista ingenuo; por otro lado, carece de toda reflexión seria sobre las luchas sociales y políticas. Es la historia vista desde un ángulo democrático burgués con un toque de progresismo muy al gusto kirchnerista, por más que uno de sus creadores, el historiador Gabriel Di Meglio, presencia habitual en los medios “K”, pretenda separarse de la construcción del “relato”.

Pensado para niños, Zamba formará parte del intento no completado de “kirchnerizar” la educación, proponiéndose como “alternativa” a la historiografía liberal de la cual, sin embargo, es deudora toda la pequeña burguesía intelectual que pobló los espacios creados por la Ley de Medios. Con la excusa de interesar “a los niños”, se explican los grandes procesos históricos por medio de simplificaciones extremas. Así, por dar un solo ejemplo, el Proceso Militar es el resultado de gente mala que quiere hacer el mal simplemente por hacerlo.

La historiografía “Zamba” no era, sin embargo, original. No solo exponía los pobres resultados de la historiografía académica de los últimos veinte años, sino que, en el fondo, no era más que una versión “dibujada” del “relato” histórico más popular del período, el de Felipe Pigna. Fue este el que preparó el terreno, el sentido común del “nacionalismo soft” y centro-izquierdista que el kirchnerismo supo aprovechar y potenciar. Y una vez más, no fue un resultado “pensado” *ex ante*: el bonapartismo lo creó a partir de lo que había en plaza. La extrema simplificación de Zamba fue la estandarización de aquello que ya se había expuesto en los best-sellers de Pigna.

9 Cfr. <<http://www.zamba.pakapaka.gob.ar/>>.

5. Las contradicciones del relato, entre la justificación y el autismo

Antes de terminar con esta filigrana, es importante mostrar los dispositivos con los cuales se clausuraban las obvias fisuras del relato kirchnerista. Podemos mencionar dos de ellos, sin excluir otros. El primero es la “justificación”. El mejor (y más triste) ejemplo es el conjunto de expresiones con los cuales los intelectuales afines al gobierno intentaron despegarlo de su obvia vinculación con el asesinato de Mariano Ferreyra. El segundo, el “autismo”, que expondremos aquí mediante el análisis de *Terrenal*, la obra de teatro de Mauricio Kartun.

La muerte de Mariano Ferreyra, el militante del Partido Obrero (PO) asesinado en medio de una protesta a favor de los trabajadores ferroviarios tercerizados, a manos de la estructura sindical defendida pocos días antes por la propia presidenta de la república, resultó ser un episodio político de primer nivel. Que esa estructura sindical y que esos personajes eran socios políticos del gobierno con más de una vinculación directa con el poder, no era nada que debiera probarse. Precisamente por eso, el caso golpeaba al kirchnerismo en su corazón ideológico: la burocracia sindical que participó de la Triple A, del Proceso Militar y del menemismo, esa misma estructura, mataba, en nombre de negocios propios, a militantes de izquierda. Peor aún, a jóvenes militantes. Esa fuga evidente de sentido del relato debía ser cerrada de alguna manera.¹⁰ La primera forma fue culpar a la víctima:

¿Se busca desestabilizar y perjudicar al gobierno? ¿Se busca sugestionar a las clases medias sobre el creciente

10 Reproducimos aquí en parte el análisis hecho en Sartelli (2010).

caos en que se transforma de modo paulatino la convivencia social? ¿Se busca quebrar la alianza estratégica entre gobierno y CGT? ¿Se busca todo eso junto? Se busca. En el relato de los medios monopólicos, el esquema primario sería algo así como “tanta crispación provoca sangre en las calles”. [...] Esos actores sociales con anclaje en lo popular y democrático, que pueden demandar reivindicaciones de intensidad más o menos razonable o atendible, son, no obstante, “mano de obra tercerizada” de sus reales enemigos de clase.¹¹

Mariano era, entonces, nada más y nada menos que un idiota útil de la “derecha” desestabilizadora. Eduardo de la Serna, del Movimiento de Sacerdotes en Opción por los Pobres agregó:

La izquierda, como siempre, grita, protesta, y se levanta, buscando muertos por los que después ‘llorar’ y reclamar levantando también ellos sus banderas. Obvio: “el muerto” queda allí, en el medio, mientras los impolutos reclaman justicia y exigen que se calme el dolor interminable de los muertos que ellos mismos —quizás— provocaron.¹²

Los jóvenes del PO, como Mariano, según este sinvergüenza, “juegan a la política, antes de tener su próxima tarjeta de American Express y ser gerentes de multinacionales”. No hacía más que repetir a su presidenta, que en uno de sus *tweets* acusó a los compañeros de Mariano de usar su muerte “para que los reincorporen” y, a su partido, de estar más preocupado por la prensa que por el joven asesinado.

11 Demetrio Iramain, en *Tiempo Argentino*, 23 de octubre de 2010.

12 *Tiempo Argentino*, 24 de octubre de 2010.

La idea de que Ferreyra no era un militante político consciente sino un pobre tonto manipulado, es un argumento compartido por casi todos los intelectuales kirchneristas que aquí examinamos. El tono de condescendencia paternalista con la que “gente grande” exculpa al “pobre chico engañado y/o inexperto” sólo le agrega más miseria a un argumento ya de por sí miserable.

Eduardo Anguita esbozó una segunda línea de defensa: Néstor y Cristina no están comprometidos con los asesinatos. Es más, defendió a Boudou y Sileoni por las fotos con Favale, descartándolas con el típico argumento menemista de la “casualidad”. Jorge Giles, por su parte, prefirió enfocarse en el uso político del cadáver por la oposición, mientras Eduardo Blaustein reprochaba a *Clarín* su silencio en relación al asesinato de Kosteki y Santillán, que contrastaba con sus “llamativos gritos” por el de Ferreyra. Como si la patota armada de un sindicato oficialista fuera en realidad un conjunto de transeúntes enojados, Luis Bruchstein, por su parte, acusaba a los medios opositores de ser responsables de azuzar contra los piqueteros que obstruyen el tránsito: “El hombre que esgrimíó la pistola sentía legitimado por ese discurso del odio que le hizo apretar el gatillo”. Alfredo Zaiat prefirió endilgarle el crimen a la herencia del menemismo. Ricardo Forster resumió en un solo párrafo este conjunto de ofensas a la inteligencia:

Sindicalistas canallas, empresarios explotadores, un sistema que perpetúa la precarización laboral, medios de comunicación que de una manera cínica presentan como héroes y virtuosos a aquellos que, ayer nomás, mostraban como violentos piqueteros que amenazaban la paz social y a los que había que poner un límite. Políticos de la oposición que buscan montarse sobre la muerte de Mariano para engrosar sus posibilidades

electorales apelando a una retórica impúdica e hipócrita. Marcas y señales de un momento difícil para la democracia, de un momento que nos recuerda la fragilidad de la que todavía no alcanzamos a salir pese a lo mucho que se viene haciendo desde 2003.¹³

Obviamente, los hechos debían ser reconstruidos para que calzaran con la perspectiva oficial: Cristina nunca se reunió con Pedraza, ni se puso la gorrita verde, ni elogió su modelo sindical; de ninguna manera se envió nunca la gendarmería contra nadie; ni mucho menos a los piqueteros de Santa Cruz; el video del entonces gobernador “pingüino” exhortando a sus militantes a pegarle a los manifestantes no existió jamás. El sociólogo Aritz Recalde, que defiende la “sociología del Tercer Mundo”, realizó una obra maestra de la reconstrucción del hecho: el crimen fue una maniobra contra el gobierno y la CGT, porque ambos defienden los ingresos de los trabajadores, son paladines de la democracia en América Latina y adalides de la lucha contra la patria financiera y los monopolios mediáticos. Recalde no se contenta con defender a Moyano, sino que en la defensa entra también Pedraza. ¿La prueba? Mariano Ferreyra no era nadie en la estructura del poder en la Unión Ferroviaria, por lo tanto, se trata más bien de una “acción política y psicológica” que de un “exceso”. Se le olvida que, si es así, tal “acción” partió del interior mismo de la CGT y de uno de los principales socios de Moyano y del gobierno, Pedraza. Para Recalde, el PO y otras organizaciones de izquierda son, otra vez, idiotas útiles de las grandes corporaciones, minúsculas y sin representatividad.

Otro defensor de la burocracia sindical, Julio Godio, sostuvo que la muerte de Mariano era “absurda y cruel”, pero

13 BAE, 26-10-2010.

que había “que tener la cabeza muy fría para no confundir las cosas. En la manifestación luego del asesinato, se gritó en la calle contra la burocracia sindical. Pero las relaciones con ese aparato sindical permitieron muchos cambios a partir del 2003”. Por supuesto, no había que “entrar en el juego en el que ciertos sectores quieren colocar al Gobierno o a la CGT como responsables de lo que pasó”. Para Godio fue “valiente” la actitud de Moyano de llamar a los trabajadores tercerizados por fuera de la Unión Ferroviaria. Está bien, “porque si no, estos trabajadores van a volver a protestar”. Y es mejor que se encargue Moyano del asunto porque si no, lo toma el PO, “interesado en fortalecerse”.¹⁴

Resulta difícil ver en esta secuencia de disparates, barbaridades y estupideces otra cosa que la voluntad consciente de evitar la lógica más elemental y de barrer bajo la alfombra los hechos reales. Resulta difícil entender esto como otra cosa que una maniobra consciente de confusión de la “opinión pública”, no muy diferente de la que se acusaba a los “medios hegemónicos”. Hay otra forma de hacer lo mismo, pero esta vez por la vía de ignorar la realidad misma.

En efecto, la actitud que observamos en *Terrenal* es lo que llamamos clausura por autismo.¹⁵ Mauricio Kartun, justamente celebrado autor teatral y fervoroso defensor del kirchnerismo, expone allí una recreación de la acumulación originaria en tono lafarguiano con desviaciones anarquistas. Como sea, el papel de Caín, el capital, no podría ser mejor definido ni desarrollado. Se esperaría del escritor una posición política furiosamente anti-capitalista, pero no. Aunque cierta confusión conceptual podría explicar las razones subyacentes, Kartun no es el único caso de intelectuales que se reivindican parte de una izquierda “anti-sistema”

14 Cfr. entrevista en *Newsweek*, 4-11-2010.

15 Cfr. el análisis de la obra que hace Giselle Vinokur en el segundo tomo de esta obra.

y terminan apoyando a un gobierno de un carácter burgués tan acusado como el kirchnerista. Se podría decir todavía más: dada la naturaleza bonapartista del kirchnerismo, su carácter aventurero y descompuesto que en un país en decadencia histórica como la Argentina no puede dar sino una lumpen-burguesía, su Caín es progresista en tanto agente del desarrollo de las fuerzas productivas. Dicho de otro modo: si Kartun no debiera, por la ideología que dice profesar, apoyar a ningún gobierno burgués, mucho menos a este, que está compuesto básicamente de pseudo-burgueses cuya capacidad de acumulación es nula y cuyo lugar en el proceso de acumulación es puramente parasitario y destructivo.

Una parte nada desdeñable del universo intelectual “K” padece de verdadero autismo político: por reacción a aquello que se odia (el menemismo, los grupos económicos, *Clarín*, la televisión, etcétera), todo lo que se le oponga es bueno. Y si eso que se les opone tiene la energía suficiente como para hacer *algo*, aunque ello no sea más que simbólico, tanto mejor. Estos intelectuales kirchneristas son los más perniciosos, porque son los que con más energía construyen la imagen izquierdista del bonapartismo. Contra ellos, por lo general, no valen argumentos “a lo Carrió”: Kartun no precisaba al kirchnerismo para revelarse como un autor consagrado ni para acumular fortunas que no tiene y no desea. Es su convencimiento genuino de la nobleza de la causa lo que más colabora en ennoblecer aquello que carece de toda nobleza: el bonapartismo pasa por revolución... No es en la conveniencia crematística ni en nada por el estilo donde hay que buscar la explicación a este fenómeno, sino en las debilidades políticas e intelectuales de la izquierda argentina, en particular de ese arco que va del Partido Comunista al anarquismo, que padece el “síndrome”

del 17 de octubre. Esa “enfermedad” contraída en 1945, obliga a muchos intelectuales temerosos de quedarse al margen de la “historia” a aceptar como buena una copia deforme, y a combatir como delirante al original, cuya realización exige mucho más templanza y dedicación. Buena parte de la izquierda intelectual kirchnerista se reclutó en estas filas. Para sostener lo insostenible conceptual y empíricamente, incapaz de mentir y buscar subterfugios, esta fracción intelectual mira para otro lado ante las contradicciones obvias e insiste con un discurso que no tiene ningún correlato con la vida real.

Relato y realidad: la autonomía de lo ideológico y el *momento* bonapartista

En este texto hemos tratado de mostrar que el “relato” no estaba antes del bonapartismo. En realidad, el kirchnerismo trabajó con materiales preexistentes. Su fortaleza sería inexplicable sin los resultados de la lucha de clases, su peculiar conjugación con las tradiciones políticas de la izquierda argentina y las condiciones culturales específicas de la pequeña burguesía en la coyuntura. Todo ello se conjuga en un *momento*, una situación específica en un punto concreto del tiempo social. El relato kirchnerista se construyó en un momento caracterizado por un empuje social, una crisis de la democracia burguesa y una relativa fortaleza del Estado capitalista, mientras emergía una fuerza con potencialidades revolucionarias, pero con profundas debilidades ideológicas históricas de cara a las estrategias burguesas de conciliación de clases. En ese momento, un personal ajeno al centro del sistema político organiza, con esos materiales, una formación ideológica (el “relato”) que toma todos los temas con los que

la izquierda argentina ha capitulado ante el peronismo, los adecúa a las emergencias de la lucha de clases reciente nacional e internacional y les da un soporte institucional.

Bibliografía

Eco, U. (1998). *El superhombre de masas*. Barcelona, Lumen.

Laclau, E. y Mouffe, Ch. (1987). *Hegemonía y estrategia socialista*. Madrid, Siglo XXI.

Marx, K. (1999). *El dieciocho brumario de Luis Bonaparte*. Buenos Aires, CS.

Sartelli, E. (2004). Arte, artista y devenir de la lucha de clases. A propósito de *El escaso margen*, de Pablo Suárez. En *Razón y Revolución*, núm. 13.

_____. (2005). Lo caliente, lo frío, lo tibio. A propósito de la muestra *Artistas por Santillán y Kosteki* y el *Salón Nacional 2005*. En *El Aromo*, núm. 24.

_____. (2007). *La plaza es nuestra*. Buenos Aires, RyR.

_____. (2010). La mala conciencia de las buenas personas. Los intelectuales kirchneristas y la muerte de Mariano Ferreyra. En *El Aromo*, núm. 57.

Los autores

Eduardo Sartelli

Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Docente titular de la asignatura Historia Argentina III B en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), también dicta clases en la Facultad de Ciencias Sociales de la misma casa de estudios y en la Universidad Nacional de La Plata. Autor de varios libros de investigación y de divulgación, entre ellos: *Patrones en la ruta. El conflicto agrario y los enfrentamientos en el seno de la burguesía* (Buenos Aires, RyR, 2008) y *La cajita infeliz: un viaje marxista a través del capitalismo* (varias ediciones). Ha sido director de distintos proyectos de investigación y ha formado un gran número de investigadores. Se encuentra actualmente terminando su libro *La sal de la tierra*, sobre los conflictos obreros en el agro pampeano a comienzos de siglo XX, producto de su investigación de doctorado.

Marina Kabat

Doctora en Ciencias Sociales, jefa de trabajos prácticos de la asignatura Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires). Es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), con lugar de trabajo en el Instituto Interdisciplinario de Estudios e Investigaciones de América Latina (INDEAL). Integra a su vez el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS) y se especializa en estudios del trabajo y

del movimiento obrero. Su última investigación se centra en el desarrollo del peronismo clásico, tema sobre el que ha publicado en forma reciente el libro *Peronleaks. Una relectura del peronismo a partir de sus documentos secretos, 1943-1955* (Buenos Aires, RyR, 2017).

Damián Bil

Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Autor del libro *Descalificados. Proceso de trabajo y clase obrera en la rama gráfica* (RyR, 2007). Investigador del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET), radicado en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Docente de la cátedra Historia Argentina III B (UBA). Es autor de diversos artículos de investigación y divulgación sobre historia de la industria en la Argentina. Actualmente, analiza los límites de la competitividad del sector automotriz en el país en perspectiva histórica, y dirige el Grupo de Investigación de Historia Económica Argentina del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Se encuentra finalizando un libro sobre los límites de la competitividad de la industria de maquinaria agrícola en el país, fruto de su investigación de doctorado.

Rosana López Rodríguez

Profesora y Licenciada en Letras (Universidad de Buenos Aires). Escribió un libro de cuentos, *La Herencia*, y actualmente está escribiendo su tesis de doctorado, "Amor y capitalismo. La literatura popular sentimental de circulación periódica bajo el primer gobierno de Yrigoyen". Publicó artículos en revistas especializadas sobre la literatura popular bajo el gobierno de Yrigoyen. Realizó las compilaciones y los estudios preliminares de la obra poética completa de Roberto Santoro y los cuentos completos de Humberto Costantini. Ha recibido distintas becas de PROTEATRO para la investigación y publicación de obras que exploran la lucha de clases en el teatro argentino.

Rocío Fernández

Profesora de Enseñanza Media y Superior en Historia (Universidad de Buenos Aires). Investigadora del grupo "Clase Obrera" del Centro de Estudios e Investigación en

Ciencias Sociales (CEICS). Actualmente es adscripta de la cátedra Historia Argentina III B. Se especializa en el estudio de los convenios colectivos de trabajo, desde el peronismo hasta el presente. Participó en varios eventos científicos y publicó en revistas académicas como *Mundos do Trabalho* y *Razón y Revolución*.

Blas Costes

Estudiante de Historia en la Universidad Nacional de Rosario. Investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS), estudia la estructura de la clase obrera en Rosario bajo el peronismo y en la actualidad.

Ianina Harari

Doctora en Historia (Universidad de Buenos Aires), docente de Historia Argentina III B e investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) radicada en el CEIL-PIETTE. Participó de numerosos congresos científicos y publicó trabajos en diversas revistas académicas. Ha publicado el libro *A media máquina. Procesos de trabajo, lucha de clases y competitividad en la industria automotriz argentina (1952-1976)*. Dirige actualmente el Grupo de Investigación sobre Clase Obrera Argentina del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).

Julia Egan

Licenciada y Profesora en Sociología (Universidad de Buenos Aires), adscripta de la cátedra Historia Argentina III B. Actualmente, es becaria doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el CEICS. Se encuentra realizando su tesis doctoral "Transformaciones en la industria de la confección de prendas de vestir: proceso de trabajo y trabajadores. Argentina, 1970-2010", en la Facultad de Filosofía y Letras (UBA), de la que ha publicado avances de investigación, además de varios artículos de opinión. Es miembro del Grupo de Investigación de la Clase Obrera Argentina del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).

Guido Lissandrello

Profesor de enseñanza media y superior en Historia (Universidad de Buenos Aires). Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras, en la materia *Métodos cuantitativos y computación aplicados a la historia*. Es becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET); su investigación se titula "La izquierda insurreccionalista en la Argentina (1969-1976)". Actualmente se encuentra concluyendo su tesis de licenciatura titulada "La fuerza social revolucionaria frente a la cuestión agraria en los '60 y '70". Fue adscripto de la cátedra Historia Argentina 3 B (UBA) en el período 2012-2014.

Gonzalo Sanz Cerbino

Doctor en Historia, docente de la cátedra Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires) e investigador asistente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con lugar de trabajo en el Centro de Estudios Urbanos y Regionales (CEUR). Integra a su vez el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). Se ha especializado en el estudio de la intervención política de la burguesía argentina y sus corporaciones, en la segunda mitad del siglo XX. Ha escrito números artículos sobre el tema y actualmente se encuentra terminando un libro sobre ese problema.

Jonathan Bastida Bellot

Profesor de Historia (Universidad de Buenos Aires). Adscripto de la cátedra Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Investigador del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales. Actualmente se especializa en los estudios del movimiento estudiantil argentino. Es autor de varios artículos y ponencias, entre ellos: "Rentabilidad financiera, tasa de ganancia industrial e intervención estatal durante la década kirchnerista (2003-2015)", y "Midiendo la rentabilidad de la industria argentina. Un ejercicio con las ramas autopartista y automotriz durante el período de sustitución (1948-1967)" (*Revista Ciclos en la Historia, la Economía y la Sociedad*).

Romina De Luca

Doctora en Historia (Universidad de Buenos Aires). Docente de la cátedra Historia Argentina III B (UBA). Dirige el Proyecto de Reconocimiento Institucional "El proceso de degradación educativa entre la 'Revolución Libertadora' y la Ley Nacional de Educación", radicado en la cátedra de Historia Argentina III B. Publicó numerosos artículos de investigación y divulgación sobre temas educativos. Autora de *Brutos y baratos. Descentralización y privatización en la educación argentina (1955-2001)*. Es responsable del grupo de educación en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS).

Roberto Muñoz

Licenciado en Sociología y Doctorando en Historia (Universidad de Buenos Aires). Adscripto de la cátedra Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Becario de doctorado del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) con sede de trabajo en el Instituto de Investigación en Humanidades y Ciencias Sociales (IdIHCS-UNLP-CONICET) e investigador en el Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). Actualmente se encuentra desarrollando su tesis de doctorado sobre las organizaciones político-sociales de la pequeña burguesía y la clase obrera rural en la provincia de Chaco, desde la descomposición de las Ligas Agrarias. También ha publicado artículos de divulgación científica acerca de las condiciones de trabajo en diferentes producciones agrarias extra-pampeanas, particularmente el caso de los cosecheros de yerba mate en Misiones y los trabajadores del arándano en Entre Ríos. Asimismo, ha participado en congresos y jornadas científicas nacionales e internacionales, donde han sido discutido sus trabajos sobre estas temáticas.

Fabián Harari

Doctor en Historia (Universidad de Buenos Aires). Se desempeña como docente en la Facultad de Filosofía y Letras en la cátedra Historia Argentina III B, en la Facultad de Ciencias Sociales en la carrera de Comunicación Social, como Profesor Adjunto en la Universidad Nacional de Luján y como docente concursado en la Universidad Nacional de San Luis. Es además docente de enseñanza media y terciaria. Ha escrito

los libros *La contra* (2006) y *Hacendados en armas* (2009), ambos referidos al proceso revolucionario de 1810. Asimismo, publicó en coautoría con otros miembros de la cátedra *Patrones en la ruta* (2008). Dirige los grupos de Investigación de Coyuntura Política Internacional y el Laboratorio de Análisis Político del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales.

Nadia Bustos

Licenciada en Sociología, miembro del Grupo de Análisis Internacional del Centro de Estudios e Investigación en Ciencias Sociales (CEICS). Es adscripta de la cátedra Historia Argentina III B, período 2015-2017 (Universidad de Buenos Aires). Actualmente investiga sobre política exterior argentina y sobre los conflictos en Medio Oriente.

Nicolás Grimaldi

Profesor y Licenciado en Sociología, egresado de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, y becario doctoral del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Trabaja temas vinculados con diferentes aspectos de la política latinoamericana de la última década. Participó en numerosos congresos científicos y publicó artículos en las revistas *Izquierdas* e *Illapa*, entre otras. Fue estudiante de la materia Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, donde actualmente se desempeña como adscripto.

Juan Flores

Doctorando, Licenciado y Profesor en Enseñanza Media y Superior en Historia (Universidad de Buenos Aires). Becario del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET). Integrante del Grupo de Investigación de la Revolución Burguesa del CEICS. Sus trabajos abordan la problemática agraria de Buenos Aires y su estructura de clases en la primera mitad del siglo XIX. Escribió artículos sobre el tema, tales como "Hacendados, cabildo y corraleros. El acceso de los hacendados al abasto de carne a partir del estudio de dos estancias de la campaña Sur de Buenos Aires (1785-1809)" (*Sociedades Precapitalistas*, núm. 4, 2014) y "¿Utilidad o

producción de valor? Trabajo y relaciones de producción en una estancia colonial rioplatense a partir del caso de Los Portugueses (1802-1809)" (*Temas Americanistas*, núm. 32, 2015). También ha participado de numerosos congresos nacionales e internacionales. Ha ejercido como ayudante en cursos de capacitación docente sobre la Revolución de Mayo y en el Nivel Secundario. Es adscripto de la cátedra Historia Argentina 3 B (UBA).

Melina Cazabat

Estudiante avanzada de la carrera de Historia, fue estudiante y es adscripta de la cátedra Historia Argentina III B de la Facultad de Filosofía y Letras (Universidad de Buenos Aires). Actualmente, trabaja en su tesis de licenciatura, que propone un recorrido historiográfico por la producción académica y ensayística sobre el PRT-ERP. Es, además, traductora de inglés titulada en la Universidad de Belgrano, en cuya calidad ha colaborado con diversas cátedras del departamento.

Lucila D'Auria

Profesora en Enseñanza Media y Superior de Historia (Universidad de Buenos Aires). Adscripta de la cátedra Historia Argentina III B (UBA). En el marco del Proyecto de Reconocimiento Institucional "El proceso de degradación educativa entre la 'Revolución Libertadora' y la Ley Nacional de Educación", radicado en la cátedra de Historia Argentina III B, investiga la convivencia en las escuelas secundarias y las condiciones de trabajo docente en la provincia de Buenos Aires del 2001 al 2009 (2015-2017).

Este libro se terminó de imprimir en el mes
de noviembre de 2017 en los talleres gráficos
de la Editorial de la Facultad de Filosofía y Letras, UBA.
Puan 480, CABA.